MEMORIA DE UN PAÍS EN GUERRA

Los Mil Días 1899-1902

Gonzalo Sánchez - Mario Aguilera
(Editores)



UNIJUS Planeta IEPRI

Los autores

Mario Aguilera Peña

Charles Bergquist

José David Cortés

Malcolm Deas

Ellie Anne Duque

Thomas Fischer

Beatriz González

Fernán González

Carlos Eduardo Jaramillo Castillo

Adolfo León Gómez

Aída Martínez Carreño

R. H. Moreno-Durán

Eduardo Posada Carbó

Gonzalo Sánchez G.

Rubén Sierra Mejía

Hermes Tovar Pinzón

MEMORIA DE UN PAÍS EN GUERRA
LOS MIL DÍAS: 1899-1902

GONZALO SÁNCHEZ G., MARIO AGUILERA P.
(EDITORES)

La Línea del Horizonte

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES
INTERNACIONALES - IEPRI

UNIDAD DE INVESTIGACIONES JURÍDICO-SOCIALES
GERARDO MOLINA - UNIJUS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

MEMORIA DE UN PAÍS EN GUERRA

LOS MIL DÍAS: 1899-1902

GONZALO SÁNCHEZ G. MARIO AGUILERA P.
(EDITORES)

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES
INTERNACIONALES - IEPRI

UNIDAD DE INVESTIGACIONES JURÍDICO-SOCIALES
GERARDO MOLINA - UNIJUS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



Colección: La Línea del Horizonte





Calle 21 No. 69-61, Bogotá, D. C.

Diseño de la colección: Joan Batallé

Diseño de cubierta: Editorial Planeta Colombiana, S. A.

Foto cubierta: *La guerre civile en Colombie, une chevaleresque*, P. H.,
cromolitografía impresa en *Le Petit Journal* del 19 de octubre de 1902.
Propiedad particular. Fotografía de Juan Camilo Segura.
Propiedad y cortesía del Ministerio de Cultura - Museo Nacional de Colombia

Primera edición: marzo de 2001

ISBN: 958-614-994-3

Armada electrónica: Editorial Planeta Colombiana, S. A.

Impresión y encuadernación: Quebecor Impreandes S.A.

Impreso en Colombia

Índice

LOS AUTORES 11

AGRADECIMIENTOS 17

INTRODUCCIÓN

Gonzalo Sánchez G., Mario Aguilera P. 19

PRIMERA PARTE: MODELO DE DESARROLLO, GUERRA
Y DESMEMBRACIÓN NACIONAL 31

Capítulo 1: Desarrollo hacia afuera y «revoluciones»
en Colombia, 1850-1910
Thomas Fischer 33

Capítulo 2: Las guerras civiles del siglo XIX en la América Hispánica
Eduardo Posada Carbó 59

Capítulo 3: De la guerra de los Mil Días a la pérdida de Panamá
Thomas Fischer 75

SEGUNDA PARTE: PROTAGONISTAS Y MIRADAS DE LA GUERRA 105

Capítulo 1: De la guerra regular de los «generales-caballeros» a la guerra
popular de los guerrilleros
Fernán González 107

Capítulo 2: Las memorias de los generales. Apuntes para una
historiografía de la guerra
Malcolm Deas 125

Capítulo 3: Tras las huellas del soldado Pablo
Hermes Tovar Pinzón 143

Capítulo 4: Clero, política y guerra
José David Cortés 173
Capítulo 5: Mujeres en pie de guerra
Aída Martínez Carreño 195
Capítulo 6: El intelectual contra la guerra
Rubén Sierra Mejía 211
Capítulo 7: Los presos políticos de la guerra
Adolfo León Gómez 225

TERCERA PARTE: EXPRESIONES ESTÉTICAS DE LA GUERRA 249
Capítulo 1: Música en tiempos de guerra
Allie Anne Duque 251
Capítulo 2: Ficción y realidad en la guerra de los Mil Días
R. H. Moreno-Durán 271
Capítulo 3: El último peregrino o el pintor de la guerra
Beatriz González 289

CUARTA PARTE: LEYES DE GUERRA Y TERMINACIÓN DEL CONFLICTO 299
Capítulo 1: El delincuente político y la legislación irregular
Mario Aguilera Peña 301
Capítulo 2: De amnistías, guerras y negociaciones
Gonzalo Sánchez G. 329

QUINTA PARTE: LA GUERRA DE AYER Y LA DE HOY 367
Capítulo 1: Fin de dos guerras, principio de dos siglos
Carlos Eduardo Jaramillo Castillo 369
Capítulo 2: Una comparación entre la guerra de los Mil Días
y la crisis contemporánea
Charles Bergquist 387

SEXTA PARTE: EL RITUAL JURÍDICO DE LA PAZ (ANEXO DOCUMENTAL) 403
Documento 1: Conversión de delincuentes políticos en delincuentes comunes.
Expropiación de los bienes de los desafectos del gobierno 405
Documento 2: Otorgamiento de indulto contra entrega de armas 407
Documento 3: Notas cruzadas entre los actores del conflicto sobre
beligerancia y regularización de la guerra 409
Documento 4: Capitulación suscrita entre los rebeldes victoriosos
y miembros del Ejército del gobierno, después del sitio
de Aguadulce 413

Documento 5: Tratado de Paz con el General Rafael Uribe Uribe
Tratado de Neerlandia 415
Documento 6: Tratado de paz con el General Benjamín Herrera
Tratado de Wisconsin 418
Documento 7: Perdón general para delitos políticos y comunes
cometidos en las últimas guerras civiles 421
Documento 8: Reconocimiento de los grados militares de los rebeldes
derrotados en las últimas guerras, oferta de tierras
y otras prerrogativas 422
Documento 9: Recompensa en dinero de acuerdo a su grado militar
a los excombatientes derrotados en las guerras civiles 424
CRONOLOGÍA (1898-1903) 425

LOS AUTORES

MARIO AGUILERA PEÑA

Magister en Historia en la Universidad Nacional de Colombia, abogado de la Universidad Libre y licenciado en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional. Actualmente es profesor del Departamento de Historia de la Universidad Nacional e investigador del Instituto de Estudios Políticos (IEPRI) de este centro académico. Es autor de *Insurgencia Urbana en Bogotá* (1997), obra ganadora del Premio Nacional de Historia Colcultura en 1996; *Los Comuneros: guerra social y lucha anticolonial* (1985), obra premiada en el concurso Bicentenario del Movimiento de los Comuneros. Es coautor de *Ideal democrático y revuelta popular* (1998), Premio Bicentenario de la Revolución Francesa; *Obreros, colonos y motilones* (1995); *Historia de Colombia* (1991).

CHARLES BERGQUIST

Ph.D., Stanford University. Fue profesor en Duke University y en la actualidad está vinculado a la Universidad de Washington. Coordinó la cátedra Harry Bridges en Estudios laborales y dirigió el Center for Labor Studies, como también el programa de Estudios Latinoamericanos en esta universidad. En dos ocasiones fue profesor visitante en Colombia con el programa Fulbright, y ha sido, además, profesor visitante en la Universidad Nacional de Colombia, donde ha sido nombrado profesor honorario. Sus publicaciones más destacadas son: *Café y conflicto en Colombia, 1886-1910* (1981); *Labor and the course of American Democracy: US History in Latin American Perspective* (1996); *Los trabajadores en la historia latinoamericana. Estudios comparativos de Chile, Argentina, Venezuela y Colombia* (1988).

JOSÉ DAVID CORTÉS

Licenciado en Sociales en la Universidad Pedagógica Nacional y magister en Historia en la Universidad Nacional de Colombia. Premio Nacional de Historia del Ministerio de Cultura en 1997. Ha sido profesor en la Universidad de los Andes, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Distrital. Actualmente se desempeña como docente en el Departamento de Historia de la Universidad Nacional. Es autor del libro *Curas y políticos* (1998), coautor de *Formación de investigadores. Estudios sociales y propuesta de futuro* (1998) y de varios artículos de historia de Colombia y formación profesional de docentes.

MALCOLM DEAS

Es profesor en St. Antony's College en la Universidad de Oxford, Inglaterra, donde ha enseñado historia y política de América Latina por casi cuatro décadas. Fue uno de los fundadores del Centro Latinoamericano en Oxford en la década del sesenta y ha sido su director en varias ocasiones. Su campo de trabajo es la historia de Colombia. Es autor de *Del poder y la gramática, Vida y opiniones de Mr. William Wills* e *Intercambios violentos*. En 1999 colaboró en la organización de la exposición sobre la guerra de los Mil Días en el Museo Nacional. Coeditor con María Victoria Llorente de *Reconocer la guerra para construir la paz* (1999).

ELLIE ANNE DUQUE

Musicóloga de las universidades de Indiana y California (UCLA). Es docente del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Investiga sobre la historia de la música colombiana de los siglos XIX y XX. Su labor académica ha sido reconocida con la designación de Maestra Universitaria, el otorgamiento de la Orden Gerardo Molina (1992) y dos premios por Docencia Excepcional en la Universidad Nacional. Es autora de diversos trabajos, entre los cuales se destacan: *La música en las publicaciones periódicas colombianas*; *El granadino* (CD); *Luis A. Calvo* (CD); *La historia de la música en Bogotá*; *Guillermo Uribe Holguín y sus 300 trozos en el sentimiento popular*; *Emilio Murillo* (CD); *Fin de siècle: Gonzalo Vidal* (CD) y *La cultura musical en Colombia, siglos XIX y XX*.

THOMAS FISCHER

Se graduó en Historia en la Universidad de Berna. Desde 1992 es asistente científico en la cátedra de Ciencias Internacionales en la Universidad de Erlangen-Nüernberg (Alemania). Actualmente trabaja sobre los comienzos del multilateralismo latinoamericano. Entre sus publicaciones se destacan: *Die verlorenen Dekaden. «Entwicklung nach aussen» und auslaendische Geschaefte in Kolumbien 1870-1914* (1997) [*Las décadas perdidas. «Desarrollo hacia afuera» y negocios extranjeros en Colombia 1870-1914*]; con Werner Altmann y Klaus Zimmermann (eds.): *Kolumbien heute. Politik - Wirtschaft - Kultur* (1997) [*Colombia hoy. Política - economía - cultura*]; con Michael Krennerich (ed.): *Politische Gewalt in Lateinamerika* (2000) [*Violencia política en América Latina*].

BEATRIZ GONZÁLEZ

Reconocida pintora colombiana, docente, crítica e historiadora del arte. Maestra en Bellas Artes de la Universidad de los Andes, y maestra Honoris Causa en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia. Ha publicado diversas obras sobre museología, historia del arte y caricatura. En la actualidad es curadora de las colecciones de arte e historia del Museo Nacional de Colombia, donde organizó la exposición «Cien años de los Mil Días», en octubre de 1999.

FERNÁN GONZÁLEZ

Licenciado en Filosofía y Letras en la Pontificia Universidad Javeriana, magister en Teología en esta misma universidad, magister en Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes y M. A. en Historia de América Latina en la Universidad de California (Berkeley). En la actualidad es director general del CINEP. Ha publicado *Partidos políticos y poder eclesiástico, Educación y Estado en la historia de Colombia, L'État inachevé* (con Fabio Zambrano), *Para leer la política*, y *Poderes enfrentados.*

CARLOS EDUARDO JARAMILLO CASTILLO

Licenciado en Sociología en la Universidad Nacional de Colombia, master en Ciencia Política en la Universidad de los Andes, diplomado en Estudios a Profundidad y doctorado en Sociología en la Universidad de París VII. Es autor de *Los guerrilleros del novecientos*; *El guerrillero de «El Paraíso», general Tulio Varón Perilla*; *Historia y luchas sociales: Ibagué, de principios de siglo al 9 de abril de 1948.* Ha colaborado en las siguientes publicaciones colectivas: *Estados y naciones en los Andes*; *Pasado y presente de la Violencia en Colombia*; *Colombia: Violencia y democracia*; *Televisión y violencia*; *Nueva historia de Colombia* (tomo I); *Enciclopedia temática colombiana* (tomo 2); *Las mujeres en la historia de Colombia.*

ADOLFO LEÓN GÓMEZ (1858-1927)

Abogado, dirigente liberal, parlamentario, diplomático y periodista. Miembro de la Sociedad Jurídica de la Universidad Nacional, presidente de la Sociedad Colombiana de Jurisprudencia y de la Academia Nacional de Historia. Colaborador de *Anales de Jurisprudencia* y del *Boletín de Historia y Antigüedades*. Fundador del periódico *Sur América.* Su obra más conocida, *Secretos del Panóptico* (1905), es un testimonio de su permanencia como preso político en la guerra de los Mil Días. Autor de numerosas obras de carácter jurídico y literario, entre las que se destacan *Diccionario de legislación y jurisprudencia de Colombia* (1897); *Prescripciones y términos legales* (1896); *El soldado* (1892); y *Poesías* (1890).

AÍDA MARTÍNEZ CARREÑO

Ha centrado sus trabajos de investigación histórica en Colombia durante el siglo XIX, destacando los asuntos relativos a la vida cotidiana y la mujer. Dentro de sus realizaciones se cuentan la fundación del Museo del Siglo XIX, del Fondo Cultural Cafetero, enti-

dad que dirigió durante quince años. Ha publicado: *Mesa y cocina en el siglo XIX* (1982), *La prisión del vestido* (1995), *Extravíos: el mundo de los criollos ilustrados* (1996), Premio Nacional de Historia en 1995, *Presencia femenina en la historia de Colombia* (1997), *La guerra de los Mil Días, testimonios de sus protagonistas* (1999). Actualmente se desempeña como editora y asesora de proyectos museográficos y de cine en los temas de su especialidad. Es miembro de número de la Academia Colombiana de Historia.

R.H. MORENO-DURÁN

Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Colombia. Su obra, originalmente publicada en Barcelona —ciudad donde residió durante quince años— ha sido reeditada en diversas oportunidades. Entre sus libros de ensayo se destacan: *De la barbarie a la imaginación, Taberna in Fábula, Denominación de origen, Como el halcón peregrino* y *El festín de los conjurados*. Su amplia obra de ficción ha merecido reconocimiento internacional. Sobresalen sus volúmenes de cuentos: *Metropolitanas, Cartas en el asunto, Pandora* y *El humor de la melancolía*. Así mismo, es autor de un amplio fresco narrativo conformado por títulos como *Los felinos del canciller* —finalista de los premios Nadal (Barcelona) y Rómulo Gallegos (Caracas)—, *El Caballero de La Invicta, Mambrú* y la trilogía *Femina suite*, considerada por la revista *Semana* como «una de las cinco novelas colombianas más importantes del siglo XX». Varias de sus obras han sido traducidas al inglés, francés, alemán, árabe y búlgaro. En 1987 obtuvo el Premio Nacional de Cuento y en 1998 el Premio Nacional de Literatura, en la modalidad de ensayo.

EDUARDO POSADA CARBÓ

Abogado con especialización en Ciencias Socioeconómicas en la Pontificia Universidad Javeriana; M. Phil. en Estudios Latinoamericanos y D. Phil. en Historia Moderna en la Universidad de Oxford. Ha enseñado en las universidades inglesas de Southampton, Cambridge y Londres, y ha sido profesor visitante en universidades en Colombia, Chile y España. Es autor de *El Caribe colombiano: una historia regional, 1870-1950* (1996), y editor de varios libros, entre ellos *Elections before Democracy: The history of Elections in Europe and Latin America* (1996), y *Wars, Parties and Nationalism: Essays on the Politics and Society of Nineteenth-Century Latin America* (1995).

GONZALO SÁNCHEZ G.

Historiador. Actualmente es investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado como profesor invitado en la Universidad de Duke, en la Escuela de Altos Estudios de París, en la Universidad de Texas y en University College de Londres. Ha sido distinguido con la orden Gerardo Molina de la Universidad Nacional de Colombia y con la Martin Diskin Memorial Lectureship otorgada por la Latin American Studies Association (Miami, 2000). Entre los libros que ha publicado se destacan: *Bandoleros, gamonales y campesinos* (coautora: Donny Meertens), 1983, traducido al inglés bajo el título de *Bandits, Pesants and Politics* (2001);

Guerra y política en la sociedad colombiana (1991), traducido al francés (1998). Fue editor de *Grandes potencias, el 9 de abril y la Violencia* (2000); compilador con María Emma Wills de *Museo, memoria y nación* (2000). Fue el coordinador del conocido informe de los «violentólogos»: *Colombia: Violencia y democracia* (1987). Coeditor, con Charles Bergquist y Ricardo Peñaranda, de *Violence in Colombia* (1984) y de *Waging War and Negotiating Peace: Violence in Colombia, 1900-2000* (2001).

RUBÉN SIERRA MEJÍA

Profesor emérito y profesor honorario de la Universidad Nacional de Colombia, doctor Honoris Causa de la Universidad del Valle. Autor de los siguientes libros: *Ensayos filosóficos* (1978), *La filosofía en Colombia* (1985), *La responsabilidad social del escritor* (1987), *Apreciación de la filosofía analítica* (1987), *Carlos Arturo Torres* (1989) y *La época de la crisis (conversaciones con Danilo Cruz Vélez)* (1996).

HERMES TOVAR PINZÓN

Doctorado en la Universidad de Oxford. Profesor Honorario de la Universidad Nacional de Colombia y profesor invitado en universidades de Estados Unidos y de Europa. Es autor de *Colombia: droga, economía, guerra y paz* (1999); *La estación del miedo o la desolación dispersa*, obra finalista en el Premio Planeta en 1996; *Que nos tengan en cuenta*, Premio Nacional de Colcultura en 1994; *Convocatoria al poder del número. Censos y estadísticas de la Nueva Granada, 1750-1830* (1995); *Hacienda colonial y formación social* (1988); *Formaciones sociales prehispánicas* (1990). Compilador de *Relaciones y visitas a los Andes* (1993, 1997).

AGRADECIMIENTOS

En la Universidad Nacional de Colombia, a las siguientes unidades académicas que de una u otra forma hicieron posible la culminación de la presente obra: al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) y su programa de investigación Democracia, Nación y Guerra; a la División de Extensión Cultural y en especial a su director, Rafael Malagón; al programa Semilleros de Investigación de la Universidad Nacional; al director de la Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina (UNIJUS), Dr. Fabián Acosta.

Al Ministerio de Cultura - Museo Nacional de Colombia por suministrar el material gráfico para este libro, el cual proviene de la investigación realizada con motivo de la exposición *Cien años de los Mil Días*, que tuvo lugar entre octubre de 1999 y enero de 2000, en las instalaciones del Museo Nacional de Colombia.

A Gloria León Gómez y Alberto León Gómez, descendientes de Adolfo León Gómez, por haber autorizado la reproducción de un fragmento de la obra *Secretos del Panóptico*.

A los estudiantes José Isaacs Torres Prada y William Mancera Sánchez, del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, quienes elaboraron la cronología y colaboraron en la identificación de los textos que conforman el anexo documental.

A Hilda Ariza, de UNIJUS, quien prestó eficaz ayuda en la labor de digitación de algunos de los textos.

INTRODUCCIÓN

Éste es un libro sobre la guerra de los Mil Días que se ha hecho pensando en la del día de hoy. Los grandes temas que aquí se evocan son: guerra y modelos de desarrollo económico; guerra y retos a la unidad nacional; heterogeneidad de miradas, de actores y de víctimas de la guerra; invocaciones normativas a la civilización de la guerra; registro literario, musical y pictórico de la época y del conflicto; estrategias de acción y de negociación; tareas aplazadas por la confrontación e inconclusas tareas de la paz; contenidos, contextos y dinámicas diferenciadoras entre las guerras de ayer y la de hoy. Todos estos campos temáticos son abordados en este libro de manera innovadora por los más notables estudiosos, nacionales y extranjeros, de la historia guerrera de Colombia.

Del mismo modo que toda la historia del país no se puede reducir a la historia de la guerra, tampoco la historia de la guerra se puede reducir a las dimensiones militares. Como se sabe, la guerra es una práctica social y cultural cuyas funciones (rituales, destructoras, innovadoras o civilizatorias) hay que definir históricamente. Ella es producto y productora de la política, y en la era moderna ha sido fundadora pero también desestructuradora de naciones e imperios. Contradictoriamente, ella se nutre de los discursos de la dominación y de las razones de la rebelión. A menudo su complejidad aumenta cuando se desarrolla dentro de los confines de un territorio nacional, es decir, cuando se vuelve civil.

Este libro se propone contribuir a desentrañar las complejidades de la que es considerada la prototípica guerra civil de la historia republicana de Colombia: la guerra de los Mil Días.

LOS MIL DÍAS: VIEJA Y NUEVA GUERRA

La guerra de los Mil Días fue una guerra masiva, sangrienta y nacional. Masiva por la magnitud no sólo de los hombres levantados en armas —más de 26 mil oficiales y suboficiales del Partido Liberal, considerando las acciones regulares e irregulares— sino también

por el amplio apoyo social brindado a los contendientes. Sangrienta, por el número de víctimas y la forma de eliminación de los adversarios, cuyo caso extremo es la batalla de Palonegro, donde tras dos semanas de enfrentamientos perecieron más de dos mil combatientes y quedaron tendidos en el campo de batalla centenares de heridos. Nacional en tanto que fue copando, durante sus tres largos años de duración, toda la geografía colombiana y puso en el centro del debate temas como territorio, fronteras, orden político, soberanía y articulación del país al orden internacional.

La guerra de los Mil Días es, pues, una guerra tan o más sangrienta y destructiva que las otras del siglo XIX, y en este sentido es la última de ese período. Con ella, la extrapolación de las dinámicas perversas de la guerra terminó creando un repudio generalizado al recurso bélico como instrumento legítimo de la política y con una invocación a la necesidad de fundar la política sobre nuevos parámetros.

La guerra de los Mil Días puede ser considerada también como la primera del siglo XX, en una doble perspectiva: en cuanto tiene eco en la dinámica bipartidista y sectaria de la Violencia de los años cincuenta, y en cuanto en ella se perfila, como uno de sus ejes centrales, el tema de la democratización política, sin desconocer desde luego sus diferenciados alcances en uno y otro momento. En los Mil Días la democratización política es enunciada como acercamiento al ideal formal de República, y en la era contemporánea es enunciada, desde la guerra misma, como tarea inseparable de la democratización de la sociedad.

LOS TRES ÓRDENES DE LA GUERRA Y DE LA POLÍTICA

Más allá de las peripecias de la guerra, de los argumentos partidistas y del sectarismo a menudo oscurecedor de los contenidos, en los Mil Días, como en ninguna otra de las guerras precedentes, estuvieron en juego elementos centrales del orden político y cultural. Señalemos con mayor detenimiento las relaciones de estos órdenes con la guerra.

GUERRA Y ORDEN POLÍTICO

Como lo señala uno de los más autorizados testimonios de la guerra[1], desde la Constitución de 1886 las conspiraciones civiles y militares contra el gobierno central tenían fundamento en «elementales reivindicaciones democráticas» que apuntaban a la restauración de la República y por ende al quiebre del autoritarismo y exclusivismo instaurado por la Regeneración, que se expresaba en hechos como el recorte de libertades civiles, incluida de manera notable la libertad de expresión; la anulación de la oposición en todas las esferas de la vida pública, el fraude electoral, la arbitrariedad en el manejo de las cargas fiscales y el control represivo del orden social. En su conjunto, estos recortes eran formas abiertas de bloqueo a la participación política por parte de un régimen caracterizable, según el mismo autor, no como una dictadura unipersonal sino como una «tiranía de partido».

La guerra de los Mil Días mostró que la victoria o la derrota no siempre se definen en el último enfrentamiento militar o en los temas que alcanzan a quedar consignados en una mesa de negociaciones. Los liberales perdieron la guerra en el campo de batalla, pero lo que aquí se subraya especialmente es que ganaron capacidad transformadora después de la guerra,

dado el impacto de la misma sobre la sociedad de comienzos de siglo. La guerra, en efecto, desencadenó los movimientos constituyentes de 1905 y 1910, que abrieron nuevos espacios a las minorías políticas y plasmaron una Constitución republicana «producto de las ideas comunes a la élite y a ambos partidos»[2].

GUERRA Y ORDEN CULTURAL

La Regeneración se cimentó sobre la idea de la «cristianización de la República», en forma tal que el orden político estaba subordinado a la hegemonía cultural de la Iglesia, control que se materializó en normas que regulaban tanto la vida pública como la privada: la afirmación constitucional de que la Iglesia católica era «esencial elemento del orden social»; la intromisión concordataria en el estado civil de las personas, y el férreo control clerical de la educación. La expresión más protuberante de la simbiosis entre lo político y lo religioso se pudo apreciar en la promoción de un imaginario de la unidad nacional anclada en un monarquismo religioso cuyos pilares eran el Corazón de Jesús o el llamado «reinado social de Jesucristo», sancionado por leyes y pastorales eclesiásticas. Tal monarquismo religioso tenía estrecha correspondencia con el unipartidismo y autoritarismo presidencial. Para la vida cotidiana esto significó cierre de periódicos, persecución a sociedades científicas y de librepensamiento, y estrechamiento de los horizontes del sistema educativo. Cuando los rebeldes buscaban democratizar el orden político apuntaban también, en el fondo, a la democratización del orden cultural. Dicho de otra manera, una demolición del orden político conllevaba de hecho el derrocamiento del orden cultural.

La derrota político-militar de los liberales implicó, por consiguiente y no obstante, ciertos signos embrionarios de resistencia, la continuidad de ese cuestionado orden cultural. Tal continuidad se hace evidente, entre otros factores, en la participación ostensible de la Iglesia en la política; en el rol todavía dominante de ésta en el aparato educativo; en la proliferación militante de sociedades de acción católica; en el contenido religioso que se le imprimió a las fiestas y conmemoraciones patrias (consagración de la Virgen de Chiquinquirá como Reina de Colombia) o el intento casi pintoresco de cambiar el nombre del departamento de Nariño, que evocaba «a ese hereje de los derechos del hombre», según el fraile Ezequiel Moreno, por el de departamento de la Inmaculada Concepción[3]. La continuidad cultural entre la Regeneración y la posguerra se aprecia también en las restricciones a la libertad sexual; en la censura al cine, la literatura, la indumentaria y finalmente, en el control de la opinión desde la prensa eclesiástica, los sermones y los confesionarios. Para dar una sola muestra, en 1913, por ejemplo, los obispos advertían a los sacerdotes que debían considerar como materia de confesión actividades públicas tales como:

«1. Tomar parte voluntariamente en las revoluciones para derrocar la autoridad legítima, y fomentar lo que tiende al desprestigio y desconocimiento de dicha autoridad; 2. Votar o comprometer a otros por candidatos hostiles a la Iglesia, o que no le den suficientes garantías y, con mayor razón, formar parte de los comités o juntas electorales que trabajan por dichos candidatos, y 3. Sostener, favorecer y difundir la mala prensa con escritos, auxilios pecuniarios, suscripciones, recomendaciones y de cualquier otra manera»[4].

Esto era ya un caso límite de la instrumentalización de las prácticas religiosas con fines partidistas.

GUERRA Y ORDEN SOCIAL

A diferencia de los órdenes anteriores, el orden social, en su naturaleza esencialmente conflictiva, no aparece todavía como tema explícito en la dinámica de la guerra ni en los enunciados discursivos de los contendientes. Dentro de la visión político-cultural dominante «la cuestión social» no se resolvía, en efecto, en el ámbito de lo político (y por consiguiente tampoco de lo bélico) sino a partir del ejercicio de la caridad cristiana. Pero si bien el tema social no figura en el primer plano de los debates de la guerra, los sectores populares sí hacen presencia en ella de múltiples maneras: a veces intervienen dentro de los parámetros de la tradicional política partidista, otras simplemente intervienen instrumentalizados por los caudillos guerreros, y finalmente, en no pocas oportunidades son ellos, los sectores populares, los que instrumentalizan sus adhesiones políticas. Véamos algunas rápidas ilustraciones:

Hay sectores que participan en la guerra buscando *reconocimiento social local o regional*. En ese sentido la guerra cumple un papel de *ciudadanización* similar al que cumplió la educación en el siglo XIX. Gentes sin prestancia social y económica, gracias al ejercicio del valor mostrado en las guerras, pudieron alcanzar la jerarquía de oficiales y se incorporaron a las aristocracias pueblerinas, gozando de todos sus privilegios, entre ellos el acceso a las burocracias locales y a un renovado poder de decisión sobre los elegidos y los electores.

Los artesanos, en particular, participaban renunciando a sus intereses gremiales y aceptando la invocación partidista como expresión dominante del conflicto y eventual plataforma de sus intereses.

La instrumentalización se hace más evidente en el caso de los indígenas. Éstos no se vinculan a la guerra por intereses propios sino a menudo por reclutamiento forzoso. Cambian constantemente de bando cumpliendo funciones de baquianos, de espías, cargueros, apoyando aquí y allá a las autoridades regionales o nacionales y a las fuerzas victoriosas, y en todo caso tratando de preservar a la larga la integridad de sus comunidades[5].

El tema del orden social sólo se vincula plenamente a la política, e incluso su transformación se realiza en razón de ésta, en las décadas posteriores a la guerra, con el surgimiento y expansión organizada de los núcleos obreros, campesinos y socialistas que constituyen el nervio de la nueva Colombia de la posguerra civil.

¿REUNIFICACIÓN GRANCOLOMBIANA O DESMEMBRACIÓN NACIONAL?

La guerra desata múltiples tensiones en la configuración del Estado-Nación. El ideal centralista y unitario de la Regeneración, en tanto había respondido por vía autoritaria y confesional a las exigencias de la expansión económica y del orden político interno, fue cuestionado *ab initio* por facciones liberales y conservadoras con argumentos que si bien no tenían como blanco la unidad de la nación, apuntaban a su democratización. En parte, en la guerra convergen estos propósitos. Pero la dinámica de la guerra transforma y amplía los

contenidos originales de su justificación. Esta separación entre origen y dinámica de la guerra fue planteada por Benjamín Herrera en estos términos: «las guerras en su curso van siendo alimentadas y sostenidas por nuevos reclamos o nuevas injusticias distintas de aquellas que las hacen germinar, al modo que los ríos llevan ya en su desembocadura muchísimas más ondas que aquellas con que salieron de su fuente»[6]. Por otro lado, en la guerra, a partir de cierto momento, la potencial pérdida de Panamá inhibió la acción de los ejércitos rebeldes y contribuyó a la negociación y formulación del definitivo tratado de paz, pero al mismo tiempo propició el ambiente para que se reactualizaran viejos proyectos bolivarianos de reconfiguración de las soberanías y los equilibrios políticos continentales. Sobre lo primero, sabemos que el corolario de la guerra fue la pérdida efectiva de Panamá, y en cuanto a lo segundo —el proyecto bolivariano— cabe recordar la audaz propuesta del jefe liberal Rafael Uribe Uribe al general Tomás Cipriano Castro (en ese entonces presidente de Venezuela) en torno a la necesidad de buscar fórmulas para revivir el proyecto de Simón Bolívar de reconstruir la Confederación de la Gran Colombia. Esta idea tuvo cierto eco en 1901 y fue acogida por la prensa oficial venezolana, que no descartó el ingreso de Perú y Bolivia a esa confederación, con lo cual se aspiraba a formar un gran país que llevaría el nombre de Estados Unidos de Suramérica. Por este mismo proyecto bolivariano parece haber luchado en el Ecuador el desterrado pintor colombiano Peregrino Rivera Arce. El propósito de dicha gran nación era contener el «águila imperialista» que amenazaba nuestras débiles nacionalidades y «el suelo sagrado que nos legaron nuestros padres»[7].

La separación de Panamá colocó en primer plano el tema de la unidad nacional. El síndrome de la desintegración nacional se reflejó en voces separatistas de regiones, particularmente las fronterizas, y en movimientos de opinión que impulsaron la reorganización administrativa y territorial, en los términos planteados por Rafael Uribe en la conmemoración del centenario de la República, es decir, democracia y fortalecimiento de la autonomía municipal. Estas preocupaciones, presentes en las reformas constitucionales de comienzos de siglo (1904 y 1905), morigeraron el centralismo y el presidencialismo. Pero hubo quienes quisieron ir más lejos y en 1916, con un pequeño ejército colombo-venezolano formado por ex combatientes de la guerra de los Mil Días y por perseguidos de la dictadura venezolana de Juan Vicente Gómez, llegaron a proclamar la fundación de la «República de Uribe» en Arauca, reivindicando el ideario del líder liberal y los emblemas de su partido, desafiando el abandono de la región por el gobierno central.

CONCLUSIÓN Y LEGADO DE LA GUERRA

Las partes tenían, cada cual por su lado, dificultades para persistir en la contienda. Para la insurgencia liberal contaban la escasez de recursos, la remota posibilidad de conseguir apoyo internacional, tantas veces anunciado —«ilusiones perdidas» los llama M. Deas—, y la desmotivación creciente de sus bases sociales. Para el gobierno, la evidente incapacidad de controlar el territorio y la agudización de sus divisiones internas.

Estas razones limitaban el entusiasmo por la guerra. Pero ¿qué llevó finalmente a la decisión política de ponerle término? En el horizonte de la guerra hubo factores comunes de

incertidumbre y de temor para las partes contendientes. El principal fue, desde luego, la potencial —que terminó siendo real— afectación de la soberanía nacional. Los órganos estructuradores de la opinión ya hablaban del «suicidio nacional». En segundo lugar, empezó a contar la percepción generalizada de los costos cada vez menos tolerables de la guerra para el conjunto de la sociedad, es decir, no sólo para los sectores populares sino también para las elites urbanas y rurales. En tercer lugar, la aceptación compartida por el gobierno y los rebeldes de que la dinámica de la confrontación estaba desbordando los parámetros de guerra de una nación «civilizada y cristiana», calificativos que en la época definían los criterios de pertenencia o exclusión de la comunidad internacional. En cuarto lugar, la atomización incontrolada de las fuerzas guerrilleras, que se volvieron una fuente de perturbación para la legitimidad de la rebelión liberal. En suma, a fines de 1902 eran muchas las razones comunes para terminar la guerra y prácticamente inexistentes los incentivos específicos de los contendientes para continuarla.

Pese a esto, resulta paradójico que las partes hayan tropezado con tantas dificultades para materializar la negociación. Entre ellas cabe destacar el exacerbado faccionalismo de las corrientes belicistas y, por lo tanto, la debilitada estructura partidista liberal que les quitaba eficacia a los acuerdos de la dirección militar de la guerra; la renuencia del gobierno a darle el carácter de guerra civil a la última fase del conflicto y a reconocerles carácter beligerante a las guerrillas liberales (véase cap. VI, documento 3); la conversión de los delincuentes políticos en comunes, que derivaba en la aplicación a aquéllos de la pena capital, quebrantando la legislación en vigor (véase cap. VI, documento 1). Con todo, en los hechos siempre se estuvo negociando bajo la forma de capitulaciones locales y regionales que daban aplicación a normas específicas del derecho de gentes, tales como trato a prisioneros, expedición de salvoconductos y otorgamiento de la libertad bajo la promesa de no volver a tomar las armas (véase cap. VI, documentos 4 y 2). La solemnización de la paz, sellada a través de los tratados de Neerlandia y de Wisconsin (véase cap. VI, documentos 5 y 6), fue la culminación de un proceso de negociaciones fraccionadas y de una repolitización del conflicto y de los actores.

En desarrollo de estos tratados hubo reformas inmediatas y conquistas posteriores, plasmadas, como queda dicho, en reformas constitucionales (1905 y 1910), en perdón general para delitos políticos comunes (1908), etc. Con todo, en el imaginario liberal, la resolución simbólica de la guerra tardó algo más de tres décadas y se produjo realmente con el reconocimiento de los grados militares de los rebeldes, el pago de compensaciones y el ofrecimiento de tierras y otras prerrogativas cuando el Partido Liberal, otrora vencido, se convirtió en poder y consolidó una hegemonía partidista que perduró hasta los albores de la Violencia (cap. VI, documento 8).

* * *

Esta obra se abre con textos de Thomas Fischer y Eduardo Posada Carbó que esbozan el contexto económico-político de las guerras civiles colombianas del siglo XIX y su impacto en el difícil camino de la construcción nacional. No se trataba necesariamente de relaciones de causalidad sino de convergencia de factores que alimentaban la guerra: escasa fortuna de

las élites en sus esfuerzos de integración al mercado mundial; acceso excluyente al control burocrático y a los limitados recursos estatales; virulencia de las contiendas y los ciclos electorales; politización de la cuestión religiosa, y fragmentación geográfica y desarrollo desigual de las regiones, con lo que ello implicaba en términos de desigual distribución de bienes y servicios, de costos de transporte, de dificultades para las exportaciones, de desestímulo a las inversiones extranjeras y de fermento de constantes rivalidades. Las guerras, advierten Fischer y Posada, fueron ciertamente un factor constitutivo de la identidad nacional no sólo para los países con querellas fronterizas, como Perú, Bolivia y Chile, sino para aquellos que, como Colombia, pasaron por tantas guerras internas, locales, regionales y nacionales. Las guerras también fueron un poderoso elemento de perturbación para el flujo interno de la mano de obra, paralizaron las rutas de exportación, provocaron severas contracciones en el consumo, absorbieron importantes recursos de estos países empobrecidos por las emisiones de papel moneda —una de las prácticas económicas más cuestionadas por el liberalismo durante la Regeneración, según lo muestra Bergquist—, estrategia con la que se pretendía financiar la guerra a costa del conjunto de la población; tales guerras debilitaron los aparatos institucionales en formación, y a la larga abonaron el terreno para la desmembración nacional. No es del caso tratar de armonizar o contraponer los textos en esta presentación. Más pertinente resulta subrayar un rasgo notorio en ambos autores: el énfasis en la heterogeneidad social de las guerras, la amplitud y diversidad de los reclutamientos y el impacto que ellas conllevaron, que en algunos casos se tradujo en estancamiento del desarrollo de la sociedad y en otros casos en dinámicas transformadoras y de movilidad social y política. En todo caso reclutar para la guerra, para la política y para la religión, eran a menudo tareas difíciles de diferenciar.

La segunda parte del libro se inicia con un texto de Fernán González que pone el acento en los grandes momentos de la guerra, en las hegemonías sociales de cada uno de ellos —la guerra de los caballeros y la de los guerrilleros—, y establece sugestivas conexiones entre estos procesos y los diferenciados escenarios geográficos y poblacionales de los mismos, resultantes de las distintas fases de colonización. Son diversidades que —como lo muestra Malcolm Deas—, se manifiestan en jerarquías culturales que transmiten la memoria de sus hazañas y sus derrotas, cada cual a su modo: los de los estratos bajos, iletrados, lo hacen preferentemente de manera oral, y los de rangos superiores, especialmente los generales, personajes a menudo de sorprendente nivel cultural, lo hacen bajo la forma de relatos escritos, memorias, que nos han legado una enorme masa documental a la cual los autores de este libro, con sus respectivas destrezas profesionales, les hacen enunciar, si se nos permite la expresión, totalidades parciales que sumadas y articuladas dibujan la compleja trama de la guerra. De esa trama hacen parte, quizás por primera vez, sectores menos protagónicos, pero no menos significativos: los anónimos soldados «sin regreso» y sin historia, personificados aquí en el «soldado Pablo», a los cuales con novedosos recursos heurísticos les da voz, y sobre todo sentido de vida, Hermes Tovar.

Invisibilizadas de otra manera en los procesos históricos, y especialmente en las guerras, han estado las mujeres. Aída Martínez se encarga de restablecerles el lugar que ganaron en uno de los espacios privilegiados de la masculinidad, trazando el itinerario de su

incorporación a la política y a las armas, desde el movimiento de los Comuneros hasta la guerra de los Mil días, mostrando cómo transgredieron los roles de la sociedad de su época.

Dentro del abanico de protagonistas examinados en esta parte, de ninguna manera exhaustivo, hay otras formas, no de crítica sino de producción del discurso de la guerra, por encima de las cuales se encuentra la legitimación religiosa. El caso extremo de intelectuales productores de legitimación del discurso gubernamental (de la represión, la censura y la confrontación) es el de los clérigos que cultivaban una imagen de la sociedad como campo de batalla entre dos ejércitos. Entre el discurso liberal de la tolerancia y el librepensamiento, por un lado, y el dirigismo eclesiástico ultramontano, por el otro, no había espacio para la negociación. Éste es el eje de las reflexiones de José David Cortés, quien muestra contundentemente cómo para el clero de entonces «la guerra además de ser una forma de hacer política, era una forma de hacer religión».

Con todo, estar en la guerra no es sólo pelear y legitimar. Estar en la guerra es también pensar la guerra, evaluarla en su significado, hacerle decir sus verdades y sus mentiras. El intelectual tiene, pues, un lugar en la guerra, incluso para deshacerle sus argumentos de plomo. Es lo que hace Rubén Sierra a partir del estudio del ensayista spenceriano Carlos Arturo Torres, autor de los afamados *Idola fori*. El evolucionismo social y político de Torres era incompatible con el dogmatismo, y por lo tanto con los sectarismos partidistas que servían de sustrato a las confrontaciones armadas. Como corolario de esto su defensa del periodismo y de la libertad de opinión lo ubicaron en el centro de los debates contra la Regeneración, pese a no ser un aliado de los guerreros, a quienes veía como simples herederos del caudillismo latinoamericano que en nombre de la libertad sembraban nuevas tiranías. En últimas, estaba más cerca de los ideólogos del movimiento republicano surgido en los años que siguieron a la guerra. Durante ésta fue crítico pero distante.

Más involucrado en ella, incluso como víctima de la represión gubernamental, estuvo otro intelectual y periodista, Adolfo León Gómez, a quien múltiples circunstancias colocaron del lado de los insurrectos, lo que le valió pasar tres veces por el Panóptico de Bogotá, donde hizo compañía a hombres de letras como el popular poeta Julio Flórez. De su vida como prisionero político nos dejó unas memorias sobrecogedoras, un fragmento de las cuales se reproducen en este libro.

Rompiendo los esquemas convencionales del análisis, se incluyen en la tercera parte del libro reflexiones sobre los ecos y las huellas de la guerra en la música, la pintura y las letras, realizadas por tres notables especialistas: Ellie Anne Duque, Beatriz Gonzáles y R. H. Moreno-Durán. En primer lugar, el sentido épico de la guerra quedó registrado en la sorprendentemente vasta producción musical que suscitó, productividad que contrasta con el cierre de publicaciones y centros de formación musical durante la guerra o con la prisión de grandes maestros como Emilio Murillo. Diez partituras ha localizado la musicóloga Ellie Anne Duque, algunas de las cuales —marchas fúnebres y militares alusivas a batallas como las de Peralonso y Palonegro, o a héroes como Próspero Pinzón y Zenón Figueredo, Uribe Uribe o Benjamín Herrera— hoy se pueden reconstruir sonoramente. Sobre la pintura hay noticia de muchas obras identificadas, alusivas a momentos, personajes o episodios de las

guerras civiles del siglo XIX, y las hay también sobre la guerra de los Mil Días, como el óleo de Marco Tobón Mejía sobre Palonegro. El caso paradigmático, rescatado y estudiado con fino pincel por Beatriz González es el de Peregrino Rivera Arce, el soldado y pintor de la guerra, el soldado-artista. Así como la guerra había provocado el cierre de la Academia Nacional de Música, causó el cierre de la Escuela de Bellas Artes, lo cual no hizo sino acentuar la conciencia política de los artistas de la época. Peregrino Rivera Arce se sumó a las filas de la rebelión liberal en Santander, con rango de coronel, y registró a su manera, con dibujos imperecederos, el transcurrir de la guerra.

Mezclando —como es su talante— ironía y erudición, R. H. Moreno-Durán completa el cuadro de las expresiones estéticas. Tras evocar el ambiente policivo e inquisitorial del orden cultural en la época, nos muestra a unos intelectuales literatos en actitud de repliegue frente a la crudeza de la guerra. Uno estaría tentado a pensar que se trata de una literatura evasiva, puesto que, según Moreno-Durán, en obras como *Pax,* de Lonrenzo Marroquín y Rivas Groot, o en *Diana cazadora* de Clímaco Soto Borda, la alcoba se antepone al país; la guerra está en el trasfondo. Tal vez sea simplemente, más que una forma de evasión, una manera de quitarle solemnidad a la guerra. O tal vez se pretenda mostrar la importancia de las pequeñas cosas de la vida cotidiana que siguen coexistiendo con la guerra y a menudo la opacan. En todo caso, la vida toda no se puede quedar enredada en la guerra, parecería ser el mensaje de los escritores —incluido Tomás Carrasquilla— que tomaron como motivos aquellos episodios o que, como en el caso del poeta Porfirio Barba Jacob, los vivieron. Es un aspecto. El otro sería que la guerra, aunque es asunto de batallas y de héroes, no puede ser reducida a eso. La guerra también trastoca las subjetividades, y eso cuenta. Evasivos unos, detractores de la guerra otros, y narradores de la misma algunos más, la confrontación tuvo una presencia y una ausencia muy visibles en los escritores de su tiempo, según lo establece Moreno-Durán.

En la sección cuarta, Mario Aguilera y Gonzalo Sánchez discuten varios problemas mayores de la dinámica de la guerra, en especial de las relaciones entre derecho y guerra. Aguilera avanza ideas sobre un buen número de tópicos, a saber: el tema del derecho como blanco de la guerra y el del derecho como necesidad de la guerra, bajo esa modalidad que llama provocadoramente «legislación irregular»; el de la legitimidad de las autoridades instituidas al calor del combate y la legalidad de sus pronunciamientos; el de las cargas impositivas a pobladores de zonas bajo el control de uno u otro bando; el de las regulaciones internas, disciplinarias, del mundo de los rebeldes, que en términos de conductas iban desde el control al consumo de alcohol hasta el control al pillaje o la deserción, y en términos de penas desde el azote hasta la pena de muerte; y finalmente, el tema de las normas de carácter punitivo que los rebeldes aplicaban a los civiles. El texto de Aguilera es, pues, una incursión profunda en la prácticas guerreras y en la mentalidad hiperjurídica de los contendientes durante el siglo XIX. La forma superior del acervo normativo de las guerras fue, obviamente, el derecho de gentes, que ponía de bulto no sólo las atrocidades que pretendía contrarrestar sino también los insospechados esfuerzos por politizar y dignificar las conflagraciones, con argumentos e instrumentos que sorprenderán tanto al lector como a los protagonistas de la guerra de hoy. Es un acervo normativo que apunta también a definir los entornos del delito político, es decir, de lo negociable y amnistiable en la guerras.

El texto de Gonzalo Sánchez, publicado originalmente en 1983, a raíz de la amnistía firmada por el presidente Belisario Betancur, avanza en esta misma dirección, esto es, en la perspectiva de relacionar la guerra y las violencias con el Derecho. Una misma dirección, pero con otra temporalidad, ya que parte de las guerras civiles del siglo XIX, y en especial de la guerra de los Mil Días, hasta llegar a las recientes. Sánchez destaca que en los conflictos del pasado y del presente no ha habido «victorias decisivas» entre los contendientes y que por ello no es extraño el ritual jurídico de las negociaciones que incluye por supuesto diversos tipos de amnistías. Éstas han tenido funciones históricas precisas, pues mientras en las guerras civiles fueron instrumento idóneo para generar las condiciones de renegociación de las elites en el poder, en la violencia bipartidista se convirtieron en el mecanismo jurídico para «amortiguar la crisis permanente» producida por la confrontación entre éstas y los grupos subalternos. El ensayo, a partir del examen puntual de la amnistía de 1953, nos muestra, además, una novedosa faceta de esos rituales. Se aprecia, en efecto, cómo la precaria organización del movimiento guerrillero y la habilidad del gobierno llevaron a la negociación fragmentada y a la diversidad de respuestas de las guerrillas liberales, lo que provocó a la larga su más grave derrota política. Excepcionalmente, algunas guerrillas comunistas optaron por la tregua y luego continuaron en la insurgencia, pero pasando eventualmente de la modalidad de la autodefensa a la de guerrilla móvil. Se iniciaba así, a decir de Gonzalo Sánchez, una nueva fase del conflicto colombiano en la que el objetivo de los rebeldes no era ya la incorporación al Estado sino la búsqueda de un nuevo orden político social.

En la quinta parte, Charles Bergquist y Carlos Eduardo Jaramillo, autores de dos de los más notables trabajos sobre la guerra de los Mil Días, y negociador a nombre del gobierno durante la administración Gaviria, el segundo, hacen un esfuerzo de comparación entre los momentos críticos de ambos procesos y entre el modo de gestación de los acuerdos que pusieron fin a la guerra de los Mil Días y el modo de construcción —todavía inconcluso— de la agenda actual con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

Jaramillo destaca cómo las relaciones gobierno-insurgencia han sido, desde luego, bien diferentes en la guerra de los Mil Días y en el momento actual: durante los Mil Días, argumenta, hubo confrontación permanente desde el inicio de las hostilidades, no sólo militar sino de propuestas para prolongarla o ponerle término, y ello de lado y lado. En la era contemporánea, por el contrario, la guerrilla se ha expandido ignorada y subvalorada por el gobierno, que la ha considerado marginal, y, como contrapartida, la guerrilla de hoy, engreída con su capacidad militar, desprecia la política y la organización cívica y sueña con el triunfo sin necesidad de negociar nada. Desde esta perspectiva, podría decirse que el país carece aún de un texto identificable de los desacuerdos, de un relato común de la discordia. Más aún, en buena medida carecen ambos, insurgencia y gobierno, no sólo de texto sino de sociedad para la negociación. Y ésta ha sido precisamente la más notoria limitante de las negociaciones parciales que se han realizado. Esto lleva a Jaramillo a sugerir que una guerra sólo puede ser bien negociada cuando ha llegado a su plena maduración, momento nada fácil de precisar, por supuesto, que puede ir en contravía de la otra tendencia, la de la deriva bandoleril en el caso de una excesiva prolongación. De hecho, y particularmente en la época contemporánea, la guerra ha perdido sus fronteras éticas y se expresa desnuda en su capacidad destruc-

tora y pragmática, no obstante la creciente regulación internacional de sus extravíos. Puede haber, desde luego, otra derivación, la autoritaria, pues como lo señaló Carlos Arturo Torres en su momento, la prolongación de la guerra «engendra el déspota armado».

Pero claro, la prolongación no sólo desgasta a los insurgentes: desgasta también a los gobiernos. Es lo que se desprende tanto del ensayo de Bergquist como del de Jaramillo. Es más, en la época presente, señala Jaramillo, mientras la insurgencia logra más y más unidad de mando, el gobierno y la sociedad se ven más y más divididos en su estrategias de negociación y combate, lo que presagia una catastrófica prolongación del conflicto.

Para Bergquist, por su parte, el punto de inflexión es la derrota liberal en Palonegro, que con su dantesca pirámide de muertos, descrita vigorosamente por Hermes Tovar, transformó la modalidad y la dinámica de la guerra e hizo cada vez más incontrolables los dispersos frentes guerrilleros en que había quedado convertida la rebelión liberal. En concepto de Bergquist, la guerra se convirtió a la larga en el mayor obstáculo para la realización de las reformas que la habían originado. Así lo entendieron los jefes de mayor amplitud de miras, como Benjamín Herrera y Uribe Uribe, temerosos de una intervención norteamericana, conscientes de una creciente desafección popular a la guerra y convencidos, además, de que no la podían ganar. Como señala contundentemente Bergquist, «los liberales, perdiendo la guerra, ganaron la paz». Estas reflexiones hacen eco en la guerra presente y constituyen casi una invitación a la insurgencia actual a negociar para evitar una creciente derechización del país y asaltos inesperados a la soberanía. Bergquist se aventura a especular sobre las posibilidades de cooperación entre los actores más disímiles, como la insurgencia y los Estados Unidos, en la búsqueda de fórmulas que permitan enfrentar el problema crucial de las últimas décadas, el de las drogas y la guerra. Asimismo, a la luz de las más importantes corrientes ideológicas mundiales contemporáneas, Bergquist hace un agudo balance de los límites, pero también de las enormes posibilidades de alcanzar un final honroso de la guerra y el establecimiento de duraderas y significativas reformas posconflicto. Al final lanza esta pregunta provocadora: «¿Será que en determinadas circunstancias la mejor manera de ganar una guerra es concluyéndola?».

A cien años de la guerra de los Mil Días y con otra contienda en curso, las reflexiones planteadas en este libro desde tan diferentes ángulos quizás nos ayuden a entender mejor las palabras del gran medievalista francés Georges Duby a propósito de la memorable batalla de Bouvines: «En realidad, la guerra nunca soluciona nada; los arreglos se producen gracias a las palabras y a los juramentos intercambiados después del pleito»[8].

GONZALO SÁNCHEZ G.
MARIO AGUILERA P.
Editores
Bogotá, febrero de 2001

NOTAS

1. Lucas Caballero, *Memorias de la guerra de los Mil Días*, Instituto Colombiano de Cultura, Editorial ABC, Bogotá, 1980, pp. 12-37.

2. Fernando Correa Uribe, *Republicanismo y reforma constitucional*, Universidad de Antioquia, 1996, p. 163.

3. *Mefistófeles*, Bogotá, No. 104 y 105, 7 de agosto de 1904.

4. *Conferencias episcopales de Colombia, 1908-1952*, tomo I, Bogotá, Editorial El Catolicismo, 1956, p. 141.

5. Isabel Convers González, *Problemática y lucha indígena en el siglo XIX: la guerra civil de 1899*, trabajo de grado, carrera de Antropología, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1987.

6. Circular de Benjamín Herrera, diciembre de 1901, en Lucas Caballero, *op. cit.*, p. 92.

7. Colombia conquistada. Hemeroteca Biblioteca Luis Ángel Arango, hojas sueltas y periódicos de los años 1899-1904.

8. Georges Duby, *El domingo de Bouvines*, Alianza Editorial, Madrid, 1988, p. 148.

PRIMERA PARTE

MODELO DE DESARROLLO, GUERRA Y DESMEMBRACIÓN NACIONAL

CAPÍTULO 1

DESARROLLO HACIA AFUERA Y «REVOLUCIONES» EN COLOMBIA, 1850-1910*

THOMAS FISCHER

En la literatura sobre Latinoamérica se ha atribuido un especial significado a la fase del «desarrollo hacia afuera» que marca la segunda mitad del siglo XIX. Muchos países del Nuevo Mundo entraron en una era de «modernas» economías, y así, en México, Argentina, Chile y Perú el éxito de la apertura económica fue tan rotundo que el producto interior bruto per cápita alcanzó porcentajes de crecimiento iguales a los de Gran Bretaña y EE. UU.[1]. Por ello la nueva historia económica denominó a esta época «siglo dorado»[2]. Colombia[3] se apartó considerablemente del *trend* seguido por estos países, pudiendo sólo alcanzar con dicho modelo un modesto crecimiento entre 1850 y 1910. Esta conducta especial del país andino ha animado conjuntamente a científicos colombianos (Álvaro Tirado Mejía, José Antonio Ocampo, Bernardo Tovar Zambrano), norteamericanos (Frank Safford, William P. McGreevey) y alemanes (Kurt-Peter Schütt) a realizar extensas investigaciones[4]. Mientras que algunos de estos estudios han caído en el olvido, las declaraciones de Safford y Ocampo resisten la crítica hasta hoy.

Según Ocampo, se produjeron oscilaciones en los precios del mercado internacional que hicieron que los productos colombianos se insertaran con precios altos y se retiraran posteriormente con márgenes mínimos de ganancia. Las coyunturas favorables se mantuvieron por poco tiempo, con excepción del café, sector en el que se observó un auge económico a mediados de los años ochenta del siglo pasado. De las frecuentes «frustraciones» externas, el economista colombiano concluye que las inversiones productivas llegaron a ser menos rentables que las formas de «producción-especulación»[5]. La exportación colombiana, al carecer de monopolios propios, no podía influir en los precios del mercado internacional. La

---

* Una versión previa de este artículo fue publicada en INNOVAR, revista de Ciencias Administrativas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia, Nº 10, 1997.

falta de productos «fuertes» impedía mejores resultados. Por lo tanto se puede hablar de una dependencia económica, ya que las vicisitudes del mercado internacional limitaron el desarrollo del país.

El flujo de bienes de importación, según Ocampo, estaba en correlación con las coyunturas de exportación. A diferencia de los productos de exportación, los costos comparativos de los productos importados cayeron durante la segunda mitad del siglo XIX, y por tal motivo la demanda de artículos del exterior alcanzó un nivel muy alto.

Al igual que las observaciones de Ocampo, resulta bastante convincente la tesis de Safford según la cual la topografía y el clima establecieron un gran obstáculo para la expansión rápida y continua de la exportación-importación colombiana. Para el historiador norteamericano, las exportaciones colombianas fueron a largo plazo poco competitivas a causa de los altos costos de transporte desde el interior hacia las costas, en comparación con aquéllas provenientes de países más accesibles. La construcción de ferrocarriles y amplias vías de comunicación habría mejorado las posibilidades de los productos colombianos, pero, según Safford, dicha moderna infraestructura de transportes era una cara y arriesgada empresa[6].

A continuación completaremos las tesis de Ocampo y Safford mediante un argumento sociopolítico[7]. Se planteará que las consecuencias de los obstáculos geográficos, así como los precios del mercado mundial, constituían sólo una parte de la explicación sobre la difícil posición de la economía de exportación colombiana en el mercado competitivo internacional. Tan responsable como las dificultades geográficas y los precios del mercado mundial fue la continua incapacidad de las élites colombianas para vencer estos obstáculos a través de inversiones para modernizar (y así abaratar) el transporte y mejorar la productividad[8] de las empresas en el país. Esto se puede observar tanto a nivel nacional (es decir, a nivel del Estado) como a nivel local (es decir, a nivel de las empresas). A nivel nacional cabe señalar que las élites no lograron perfeccionar el Estado (bien fuera federal o centralista) para que éste generara condiciones favorables a los empresarios nacionales o extranjeros tanto en el campo de la producción como en el del transporte; además, el Estado no promovió significativamente el uso de tecnología moderna en la producción y la comercialización. A nivel local salta a la vista que gran parte de las élites no pudo conseguir, quizá por falta de espíritu empresarial y —a menudo— por su preferencia política, establecer empresas modernas a gran escala.

Este punto de vista se refleja en el enfoque institucionalista. Desde la publicación del famoso ensayo de Ronald H. Coase, en 1937, se sabe que a nivel local la estructura institucional de una empresa debe contribuir a la racionalización para así minimizar los costos de transacción[9]. Durante todo el siglo XIX el tipo de empresa y su estructura organizacional fue especialmente importante a raíz de los mercados imperfectos. En el caso de Colombia, las empresas, aunque se adaptaron al marco sociopolítico del país y sirvieron para beneficiar a sus dueños, a nivel internacional rara vez fueron competitivas a largo plazo a causa de la falta de productividad y de los altos costos del transporte. En cuanto al nivel nacional se refiere, la teoría de Douglass C. North expuesta en varias de sus publicaciones subrayó la importancia de instituciones que contribuyeran a disminuir los costos de la definición, del seguro, del uso y de la transferencia de la propiedad individual y pública[10]. El mismo North define el término *institución* de la siguiente manera:

> Las instituciones son las reglas de juego de la sociedad, o más formalmente, son las coacciones humanamente diseñadas para estructurar la interacción humana. Están compuestas de reglas formales (leyes estatutarias, costumbres, regulaciones), coacciones informales (convenciones, normas de conducta, códigos de conducta autoimpuestos), y la obligatoriedad característica de ambas[11].

La diferenciación entre institutiones formales e informales nos parece muy útil, ya que la interacción entre estos dos componentes determina la efectividad (*performance*) tanto de las economías nacionales como de las empresas. En el caso de Colombia puede decirse que precisamente la contradicción entre las reglas formales tipo libre mercado y su interpretación contraria dentro de la sociedad fue una de las razones principales de la mala *performance* del modelo de «desarollo hacia afuera». La carencia de aptitud de las oligarquías para coordinar sus intereses, y así crear condiciones favorables para inversiones productivas, se manifestó sobre todo en los frecuentes conflictos internos que afectaron al país. La fuerza destructiva de los conflictos interiores para el desarrollo de la economía colombiana entre 1850 y 1910 la trataremos de ilustrar en los siguientes párrafos.

LA APERTURA ECONÓMICA EN LA MITAD DEL SIGLO XIX

Desde la guerra de Independencia, y asentado sobre la base de un creciente comercio de importación, se definió un grupo de comerciantes mayoristas e intermediarios —extranjeros y criollos— que mostraron un enorme interés por el libre comercio. Numéricamente, este grupo progresista era de poca importancia; sin embargo, forzó a que las autoridades tomaran una decisión en la cuestión básica de si el desarrollo debía fijarse sobre una economía agrícola de exportación o sobre la creación de una industria independiente con medidas protectoras contra la competencia externa[12].

A partir de 1830, los gobiernos de la Nueva Granada se apartaron del hasta entonces prevaleciente régimen proteccionista y adoptaron un sistema selectivo de privilegios. Los textiles, por ejemplo, fueron gravados con aranceles de aduana muy reducidos. Safford explica esto aduciendo a que las élites colombianas desistieron del desarrollo propio y autodeterminado de este sector que exigía tanta mano de obra. En cambio, en algunos sectores (tales como papel, hierro, vidrio, porcelana y textiles) se produjeron iniciativas empresariales, apoyadas por privilegios gubernamentales. Pero el éxito de estas manufacturas fue modesto y la necesidad de otras alternativas viables fue cada vez mayor[13]. A raíz de esto, a mediados de siglo se dieron las circunstancias objetivas que instaron a una transición hacia el modelo de «desarrollo hacia afuera», es decir, hacia una especialización en la exportación de productos agrarios e importación de productos acabados.

La apertura económica en sus fundamentos fue bien acogida por la mayoría de las clases altas del país. Cabe anotar que las élites intentaron conseguir de este modo un desarrollo sostenido, y al mismo tiempo mejorar las oportunidades para enriquecerse. El proceso de reforma jurídico-institucional duró hasta principios de la década de 1860 y posibilitó un campo de acción para este nuevo concepto de desarrollo. El general Tomás Cipriano de Mosquera jugó un papel crucial en el desmantelamiento de las antiguas estructuras, en la transformación del marco jurídico y en la desregularización de la burocracia mercantilista.

En 1847, bajo el impacto del intento fallido de industrialización y junto con un mercado mundial en expansión, inició los pasos determinantes hacia la fijación del principio de libre comercio, que estaría vigente como doctrina hasta principios de 1880. La nueva política asentada paulatinamente desde mediados de siglo se puede describir con las siguientes claves: reducción de impuestos en producción y venta, facilidades en la compraventa de tierras y transición hacia la propiedad individual, construcción de redes de carreteras, delegación de competencias estatales a distritos administrativos o a particulares, así como libertad de expresión y de credo.

Bajo el régimen de Mosquera, el transporte fluvial por el río Magdalena experimentó un notable avance y se apoyó la construcción de vías de comunicación, mejorándose paralelamente la formación profesional de ingenieros. En 1848 se liberalizó también el cultivo del tabaco. El sucesor de Mosquera, el general José Hilario López (1849-1853), adoptó igualmente la idea de libre comercio en su programa. En 1850, su administración abolió los impuestos del tabaco y al mismo tiempo liberalizó la exportación de oro en barra o en polvo[14]. Con estas medidas se intentó aumentar la competitividad de los productores colombianos en el mercado mundial[15]. Desde aquella época, los gastos del Estado central fueron compensados a través de los ingresos de aduana, resultantes de la creciente importación. Fueron abolidos los diezmos que gravaban la producción. También fue promovida la eliminación de los resguardos indígenas y acentuada la propiedad individual.[16] Ya en la Convención Granadina del año 1832, el gobierno había intentado abrir los resguardos indígenas a colonos mestizos y hacendados blancos. A través del cultivo intensivo, se esperaba un mayor aprovechamiento de la tierra. A esto se sumó que en 1850 el gobierno de la nación comenzó también con la entrega de «tierras baldías» a particulares[17]. Además, en 1851, los partidarios del liberalismo consiguieron la abolición de la esclavitud. Con esta medida también se esperó un aumento en la producción.

En el mismo año, en el istmo de Panamá, una empresa norteamericana comenzó la construcción del primer ferrocarril en territorio colombiano con la autorización pertinente[18]. Paralelamente, en Panamá se suprimió la oficina de aduanas y el tráfico comercial del istmo se liberó para siempre de los aranceles. El contacto de Colombia con las potencias mundiales del siglo XIX había comenzado en la década de 1820, cuando se firmaron tratados de amistad, comercio y navegación con EE. UU. (1824), Gran Bretaña (1825), los Países Bajos (1829) y Francia (1830)[19]. En estos tratados, renovados periódicamente, se consagraron las cláusulas de «nación más favorecida» y de «reciprocidad». Con ellos Colombia esperaba no solamente una mejor integración del país en el mercado mundial, sino también una mayor diversificación de sus mercados de venta. Para los hombres de negocios extranjeros en Colombia rigió el mismo ordenamiento jurídico-económico que para los ciudadanos colombianos. De esta manera los dirigentes del país consideraron traer capital humano de los países industrializados. Mientras que estos acuerdos se encargaron de regular las relaciones económicas con las nuevas potencias mundiales, el antiguo poder colonial español debió esperar hasta 1881, cuando un tratado similar normalizó las relaciones[20].

Otra medida importante que encontró el apoyo de las fuerzas liberales y conservadoras fue la sucesiva transformación, desde la década de 1850, hacia un Estado federal.

La política económica fue cedida en gran parte a los nueve «estados»: Panamá (fundado en 1855)[21], Bolívar (1858), Magdalena (1858), Tolima (Constitución de 1861), Cundinamarca (1858), Boyacá (1858), Santander (1868)[22], Antioquia (1855)[23] y Cauca (1858). En el marco de la descentralización se traspasó a estos estados un gran número de competencias fiscales y funciones administrativas. Así, en la Constitución de 1863 se permitió incluso a los estados de la federación mantener ejércitos propios, en tanto que, a la vez, era reducido drásticamente el conjunto de la Guardia Nacional.

En 1861 los liberales, de nuevo bajo el mando de Mosquera (1861-1864), iniciaron el proceso de desamortización, es decir, de transformación de la propiedad eclesiástica en privada[24]. Antes, en 1853, durante el gobierno del general José María Obando (1853-1854), ya se había arrebatado a la Iglesia el monopolio de la confesión única, y consagrado en la Constitución (art. 5) la libertad de culto y la separación de Iglesia y Estado. Cuando en 1870 los bancos privados abrieron sus puertas y comenzaron con el negocio de créditos, cayó otro de los tradicionales dominios de la Iglesia: el monopolio del crédito[25]. Para amortiguar la resistencia previsible, los radicales intentaron reforzar la idea de tolerancia promoviendo leyes de amnistía a favor de personas con planteamientos políticos disidentes.

A partir de 1860, pues, en Colombia estaba ya formado el ámbito jurídico para la adopción del libre comercio como base de desarrollo. El antiguo Estado colonial-mercantilista se había retirado de la economía, y durante la hegemonía del Partido Radical solamente se le asignó la función de vigilancia sobre los principios del libre comercio. No obstante, a pesar de que el marco jurídico reflejó el espíritu liberal, *de facto* no pudieron pasar inadvertidos los grandes obstáculos sociopolíticos que impidieron el mejor funcionamiento de la economía de exportación-importación. Constituye un punto muy importante el que los radicales llegaran a influir en el derecho positivo, aunque no tanto en su ejecución. Existió poca estabilidad institucional, no sólo durante las guerras civiles sino también en tiempos de paz, debido principalmente a la corrupción y carencia de profesionalismo dentro de la burocracia. En otras palabras: con frecuencia se produjeron enfrentamientos insalvables entre el derecho positivo nacional y la interpretación local —condiciones que limitaron considerablemente la creación de una nueva clase de empresarios modernos.

LA ECONOMÍA DE EXPORTACIÓN ENTRE 1850 Y 1910

Con la desregularización del sistema mercantilista, y a pesar de las dificultades mencionadas, el «desarrollo hacia afuera» se puso en marcha. Sin embargo, la cuantificación de las exportaciones e importaciones trajo consigo considerables tropiezos. En el libro de Ocampo, que ha estudiado en profundidad la información existente, se busca en vano un acopio de datos que reproduzca los valores de exportación anuales, ya que semejante estadística no existe. El hecho de que el material oficial de datos consista solamente en valores aproximativos se debe, en primer lugar, a que las estadísticas colombianas, por la falta de recaudación de tasas aduaneras, sólo se podían elaborar a través de las declaraciones de los exportadores. Sin embargo, muchas empresas rehusaron hacer declaraciones exactas sobre exportaciones[26].

Con toda la precaución que se debe emplear al trabajar con estos datos —por el escaso material estadístico existente y los numerosos relatos de cónsules extranjeros—, se pueden hacer deducciones sobre la marcha de las exportaciones colombianas desde la década de 1850[27]. Los ciclos de exportación se pueden clasificar en tres períodos:

El primero duró hasta 1882. Según Ocampo, comenzó en 1850, cuando la economía agraria y la procedente de la selva, de rápida expansión a pesar del estancamiento de la producción de oro, consiguió un incremento en los valores de exportación. En esta fase, aun con algunos retrocesos, se pudieron aumentar las exportaciones *per cápita*. La agricultura de exportación, que se basaba sobre todo en la producción de tabaco[28], obtuvo entre 1858 y 1873 un enorme incremento, a pesar de que los precios no se estabilizaron del todo. La crisis económica mundial de 1873, que condujo a una contracción del mercado internacional, produjo en la mayoría de los estados de la federación una recesión en el sector económico dedicado a la exportación. La depresión se agravaría aún más con la caída del sector tabacalero, cuyos precios en el mercado mundial disminuyeron considerablemente. El final de la crisis se perfiló hacia 1877, cuando se produjo un crecimiento algo más estable, hasta 1882. Este *boom* fue atribuido a la gran demanda de quina colombiana en el mercado mundial. Cuando en 1882, a raíz de la oferta competitiva proveniente de las plantaciones de Java, los precios para este producto se desmoronaron, Colombia dejó de exportarlo.

En la segunda etapa (1883-1898) se produjeron igualmente grandes variaciones en los valores conseguidos a través de las exportaciones. Sin embargo, a diferencia de la fase anterior, la tendencia del crecimiento *per cápita* desapareció. Desde 1883, y hasta finales de esa década, la economía de exportación entró en una gran crisis, a raíz del hundimiento de la producción de quina, ya que no existía ningún producto agrícola más que se pudiera exportar en grandes cantidades y con suficientes beneficios. En el Magdalena Medio y Bajo muchos hacendados se dedicaron a la cría de ganado, que era destinado sobre todo al mercado interior. La cantidad de reses exportadas hacia Cuba aumentó tanto como las exportaciones de pieles, las que a veces se utilizaron incluso para empacar productos agrarios de exportación. Pero estas exportaciones nunca alcanzaron un nivel alto[29]. En la primera mitad de la década de 1890 se produjo otra vez un auge, que se atribuyó sobre todo a los altos precios alcanzados por el café y el banano en el mercado mundial. También la exportación de oro se incrementó gracias al aumento de las inversiones extranjeras. Por consiguiente, el valor de los productos exportados en esta década casi se duplicó, según las estadísticas colombianas. El máximo resultado fue logrado en 1898[30]. Desde entonces la tendencia de las exportaciones se marcaría por la economía del café.

La tercera etapa comenzó en 1899. Los precios descendentes del café precipitaron la economía colombiana en una profunda crisis que se agudizó con el inicio de la guerra de los Mil Días, que debido a la disminución de la mano de obra y a la interrupción del transporte de mercancías, causó grandes problemas a la producción y a la exportación[31]. Después de esta guerra se demoró la replantación de los cafetales por la falta de capital, de dicha mano de obra y por los bajos precios en el mercado mundial. Sólo alrededor de 1906 la exportación estaba otra vez aproximadamente al nivel de 1890, aunque la verdadera recuperación de la economía colombiana se produjo después de 1910, cuando los precios del café volvieron a subir. No obstante, es discutible si el aumento de la exportación benefició a la

economía nacional colombiana o más bien si estas ganancias, conseguidas en su mayor parte por extranjeros, salieron al exterior[32].

La economía de exportación entre 1850 y 1910 puede ser caracterizada, por tanto, por los siguientes seis factores: primero, y al contrario de lo que ocurrió en la época colonial, se pudo diversificar la gama de producción destinada a la exportación. Esto se debió a la creciente demanda de productos primarios en los países industriales. Los mercados de venta para el tabaco, el café, el añil, el caucho y la piel eran competitivos y transparentes en gran medida. Los vendedores estaban muy bien informados por las casas de comisión de Hamburgo, Bremen, Le Havre, Burdeos, Londres, Manchester, Nueva Orleans y Nueva York a través de boletines mercantiles así como por revistas especializadas e informaciones puntuales de los cónsules colombianos en el extranjero. Los exportadores sólo tenían que ceñirse a las condiciones establecidas[33].

Sin embargo, y ésta fue la segunda característica, la composición de la exportación fue variable, es decir, pocos productos se exportaron con un volumen significativo durante un tiempo prolongado. Uno de ellos fue el oro (que ya había sido exportado en gran cantidad durante la fase colonial), el cual tuvo un efecto estabilizador sobre el desarrollo general. De esto se beneficiaron Antioquia, el centro de la producción de oro en Colombia, así como el norte del Tolima y la zona de Barbacoas. Al contrario de lo que ocurrió en las zonas auríferas, en las regiones agrarias y selváticas se intercalaron fases de crecimiento explosivo con años de estancamiento o de paralización absoluta. Además, los altibajos en los precios del mercado mundial ocasionaron que estas regiones se beneficiaran poco de los términos de intercambio favorables[34].

Como tercera característica se puede mencionar que la proporción de las mercancías en el conjunto de la exportación total varió con el transcurso del tiempo. La quina, el añil y el tabaco, por ejemplo, obtuvieron éxito sólo en algunas fases. Únicamente en el ramo del café, del cuero y del banano (desde 1892) se pudo conseguir un aumento continuo de los valores de exportación. Paralelamente, aumentó la importancia económica y política de las regiones que se especializaron en la exportación de estos productos.

Una cuarta característica la constituyó el hecho de que los tres productos más importantes marcaran la pauta de la exportación. Abarcaron, en proporciones variables, entre el 60% y el 75% de la exportación. De ahí que la economía colombiana fuera sensible a las variaciones en la venta de sus principales productos de exportación. Las capacidades innovadoras de los exportadores en el campo de la producción y en el transporte no eran suficientes para vencer las dificultades de la venta a través de una mejora de la competitividad. Este fenómeno se debía sobre todo a la inestabilidad política. Por ejemplo, en varias ocasiones, durante años de recesión (1875-1876, 1884-1885 y 1899-1902), se emplearon grandes fondos privados y públicos en acciones bélicas, en lugar de dirigirlos a inversiones productivas.

Una quinta característica fue la carga que supuso la continua balanza comercial negativa sobre el sector de exportación. La desproporción en la exportación fue especialmente pronunciada en la década de 1880, cuando en la Colombia central apenas se encontraban productos exportables disponibles que compensaran las importaciones.

La sexta característica la marcó la presencia extranjera en la economía de exportación. Sin embargo, ésta se reducía al ámbito de la comercialización. Las grandes plantacio-

nes se encontraban solamente de forma esporádica en manos extranjeras y eran gestionadas con poca eficacia. Únicamente en la extracción de oro se produjeron fuertes inversiones británicas, francesas y norteamericanas, pero en general no tuvieron éxito[35].

EL COMERCIO DE IMPORTACIÓN ENTRE 1850 Y 1910

En tanto que el sector orientado a la exportación no alcanzó un nivel de desarrollo sostenido, el consumo de productos exteriores acusó un comportamiento contrario. Pero el volumen del comercio de importación en la segunda mitad del siglo XIX, igual que el de exportación, no se puede calcular exactamente mediante las estadísticas oficiales. La deficiencia de estos datos se debe principalmente al contrabando. El reducido número de barreras aduaneras en Colombia, la escasa formación de la burocracia, su baja retribución y las frecuentes manipulaciones en las tasas arancelarias condujeron a que las importaciones clandestinas tuvieran prácticamente el mismo volumen que las oficiales[36].

Aunque es imposible dar cifras absolutas, sí se puede describir la evolución del comercio de importación. Entre 1850 y 1910 se pueden distinguir, igual que en el caso de la exportación, tres etapas[37]:

La primera fase comenzó en la década de 1850 y abarcó hasta el año 1882. En este lapso pudo ser superado el característico estancamiento del comercio de la primera mitad del siglo XIX. El fenómeno estuvo relacionado con el aumento de divisas procedentes del tabaco y posteriormente de la quina, con las cuales pudieron ser pagadas las importaciones. Hasta 1872-1873 pudo asegurarse una tendencia de crecimiento en el comercio de importación. Posteriormente se produjo una caída en el negocio de la importación en las zonas más pobladas de la Colombia central, por el descenso de esos beneficios provenientes de la venta de tabaco. Sin embargo, las zonas costeras quedaron orientadas al consumo de productos extranjeros; en gran parte del departamento de Santander y en las zonas altas del Cauca pudo mantenerse sin disminución la demanda de bienes de consumo gracias a la bonanza de quina hasta 1881-1882.

Los numerosos artesanos del país consiguieron pocos adelantos en calidad y reducciones de precios, mientras que los bienes importados —en especial los textiles— se abarataron aún más; de ahí que fueran importados más productos en los años setenta que en los sesenta, a pesar de las incipientes dificultades en el sector del tabaco y del añil[38].

La segunda fase comenzó en 1883 y duró hasta 1898. Se inició con un dramático descenso de las importaciones provocado por la disminución del poder adquisitivo de todos los grupos dedicados al sector de exportación. Se debió a la caída de la exportación de la quina y del añil porque, a excepción de los metales preciosos, no disponían de otros productos de exportación que aportasen divisas. El poder adquisitivo se empeoró nuevamente con la guerra civil de 1884-1885. Sólo a finales de los años ochenta se recuperó el comercio de importación. El crecimiento de las exportaciones de café en Santander y en Cundinamarca, y por otra parte, las inversiones mineras extranjeras (especialmente en el norte del Tolima) jugaron aquí un papel decisivo.

A finales del siglo XIX —tanto por la crisis económica como por el comienzo de la guerra de los Mil Días— hubo un descenso grave en las importaciones. Colombia entró en

una recesión que duró hasta 1910 (tercera fase). La política monetaria del gobierno nacional, basada en el aumento de la emisión de billetes, causó graves consecuencias para el comercio de importación. Así fue como se provocó una inflación que hizo prácticamente inaccesible la adquisición de productos de importación para el consumidor que tenía que pagar el valor de los productos extranjeros en oro. También se presentaron problemas en los negocios de importación —la mitad de los cuales estaban en manos extranjeras— por las vicisitudes en el cambio del curso de la moneda que dificultaban enormemente el cálculo, y por la falta de productos de exportación para el pago de las mercancías solicitadas[39]. De esta crisis el comercio de importación pudo recuperarse muy lentamente. Así, a principios de 1909, Francis Stronge, ministro plenipotenciario y *chargé d'affaires* británico en Bogotá, se quejó de que el poder adquisitivo de la población era claramente inferior al de los años del *boom* del café, a mediados de los años noventa[40]. A esta dificultad se sumó el hecho de que los gobiernos colombianos, para fomentar el proceso de sustitución de importaciones iniciado por los empresarios locales, entre 1903 y 1906, incrementaron en varias ocasiones los aranceles de importación[41]. Estas medidas se aplicaron al trigo, al azúcar y textiles, que podían ser producidos por la economía propia del país. Empresas europeas que exportaban a Colombia se opusieron sin éxito[42]. Los bienes imprescindibles como abonos, sustancias químicas y maquinaria siguieron teniendo unos impuestos bajos, en interés del país. Esta política arancelaria no consiguió llegar a ser un instrumento eficaz para el desarrollo económico nacional, ya que cuanto más aumentaron las tasas, más activaron el contrabando de importación.

¿Quiénes eran los compradores de productos extranjeros? Uno de los principales consumidores de las mercancías de importación fue la población costera, por su relativa cercanía a Europa y a los EE. UU. Los bienes del extranjero también eran consumidos en aglomeraciones urbanas del interior[43], pero su importancia en la literatura ha sido sobrevalorada ya que, durante todo el siglo XIX y principios del siguiente, Colombia estaba marcada por un carácter fuertemente rural. Así, en los sectores orientados a la exportación que se encontraban en las regiones rurales, como en los respectivos centros de comercialización, el número de consumidores aumentó aún más que en las zonas urbanas. Además, es de destacar que no solamente la clase alta formaba parte de este grupo de consumidores, sino también operarios de sectores dedicados a la exportación, así como medianos agricultores[44]. Los jornaleros y peones de las haciendas, obreros y empleados de minas, cosechadores de quina y de caucho, eran remunerados en parte con productos del extranjero. A pesar de que Jorge Orlando Melo y Marco Palacios parten de la base de que los trabajadores agrícolas, debido a su falta de poder adquisitivo, podían activar sólo insignificantemente el conjunto total del consumo[45], aquí se defiende una opinión similar a la de McGreevey: el consumo masivo de aguardiente, guarapo, chicha, tabaco, sal, cereales, ropa o tejido, calzado, machetes, recipientes de barro e incluso de porcelana en la población rural era considerable, y estimuló tanto la producción nacional como las importaciones[46]. Los tenedores tenían interés en que los trabajadores aparecieran en sus libros de deudas[47].

En conclusión, el comercio de importación entre la segunda mitad del siglo XIX y 1910 alcanzó un volumen mucho mayor del supuesto hasta ahora en la literatura[48]. McGreevey y Schütt proporcionan una explicación (no demostrada empíricamente). Parten de que la estructura de la demanda en Colombia variaba con mucha mayor rapidez que la situación

productiva[49]. Una declaración del *chargé d'affaires* inglés en Bogotá, Robert Bunch, apoya esta tesis. El británico constató en 1871 que en el transcurso de 15 años el costo de la vida en la capital colombiana había aumentado en 50%, lo que él atribuía al estilo de vida (más gastos para mobiliario e indumentaria)[50]. A su vez, el país sufrió diversas crisis políticas y económicas, lo que hacía parecer improbable el aumento continuo de los ingresos de la mayoría de la población. Sin embargo, una gran parte de colombianos y colombianas prefirieron vivir por encima de sus posibilidades en lugar de acomodarse a las restricciones de la vida cotidiana.

LA CONSTRUCCIÓN DE FERROCARRILES

La conexión de las zonas interiores del país con las grandes rutas marítimas del Atlántico fue de suma importancia para el éxito del concepto de «desarrollo hacia afuera». La construcción del ferrocarril sería acogida desde la década de 1870 como un objetivo principal en los programas de los gobiernos, porque sólo a través de la reducción del costo de los transportes, la exportación de los productos colombianos podría competir a largo plazo en el mercado mundial[51]. Pero en Colombia no se pudo conseguir el capital suficiente para la construcción de vías de transporte.

En vista de la poca credibilidad de que gozaba el Estado colombiano en el extranjero[52], únicamente le quedó como alternativa relacionarse con compañías constructoras de EE. UU. y de Europa que conseguían el dinero por sí mismas. Pero ninguna empresa europea o norteamericana estaba preparada para asumir esa actividad sin un respaldo económico considerable de las autoridades colombianas. Las garantías dadas por los gobiernos nacionales y algunas autoridades regionales a estas sociedades extranjeras fueron muy discutidas entre las élites del país, ya que se temía que las empresas extranjeras pudieran enriquecerse demasiado, sin «dar vuelta» al país. A menudo ocurrió, sin embargo, que los gobiernos colombianos no pudieron cumplir sus compromisos financieros. Esto trajo como consecuencia retrasos en la construcción del ferrocarril que se sumaron a los habidos durante las guerras civiles. Además, la creación rápida de una red de ferrocarriles fue obstaculizada porque en los presupuestos del Estado, los sectores militar y administrativo tenían preferencia[53]. Bajo estas condiciones de constante inseguridad, a las empresas extranjeras les era prácticamente imposible planificar las obras, liquidar los costos y cumplir con las obligaciones crediticias.

La inseguridad en el cálculo de costos fue la razón principal de que las sociedades ferroviarias extranjeras a menudo no empezaran las obras, o de que después de pequeños avances perdieran su solvencia y abandonaran el país. Por la falta de ofertas de empresas sólidas, los gobiernos nacionales admitieron a veces proyectos de empresas dudosas para la construcción de ferrocarriles, empresas que se propusieron obtener la mayor cantidad de subvenciones de apoyo sin cumplir las prestaciones acordadas. Los reclamos judiciales contra empresas extranjeras no solamente retrasaron las actividades en la construcción, sino que también condujeron, con frecuencia, a disputas interestatales. Como consecuencia del abuso de estas empresas, aumentó el rechazo generalizado contra la presencia extranjera, sobre todo entre políticos conservadores. Esto reforzó la reserva de las empresas constructoras extranjeras a invertir en proyectos en Colombia.

LOS CONFLICTOS INTERNOS COMO OBSTÁCULOS PARA LA MODERNIZACIÓN

Como han mostrado las declaraciones anteriores, los conflictos internos[54] acentuaron los problemas de modernización tanto de la estructura de la producción como del sistema de transportes. A causa de los enfrentamientos violentos entre los seguidores de la facción Radical dentro del Partido Liberal, de un lado, y los Partidos Conservador y Nacional, del otro, así como entre dirigentes de diferentes regiones, el «desarrollo hacia afuera» sufrió fuertes retrocesos.

Desde la Independencia, guerras civiles y motines —los contemporáneos solían hablar de «revoluciones»[55]— asolaron el país. Cada habitante del territorio colombiano vivía varias guerras y contiendas. Al parecer del científico y viajero alemán Otto Bürger, la gente relataba «si el momento de un nacimiento, una boda o un fallecimiento había sido antes o después de una revolución»[56]. En la conciencia de los ciudadanos colombianos estos eventos eran puntos de referencia más significativos que el calendario republicano. Con relación a los apuntes del político Jorge Holguín y de otros contemporáneos, Tirado Mejía calculó que desde las catastróficas guerras ocurridas entre 1810 y 1824 y las que tuvieron lugar hasta finales del siglo XIX, hubo nueve «guerras civiles generales» (en 1839-1841, 1851, 1854, 1859-1862, 1876-1877, 1884-1885, 1895, 1899-1902); catorce guerras civiles regionales, tres golpes de cuartel, una conspiración fallida y numerosas contiendas locales[57]. Las rebeliones alcanzaron su punto álgido después del abandono del concepto centralista-colonial, durante la fase federativa, en la que dominó el grupo Radical. Según Felipe Zapata, ministro del Interior y Relaciones Exteriores (1870-1871), entre 1858 y 1870 tuvieron lugar veinte «revoluciones locales», y diez gobiernos locales fueron suprimidos violentamente[58]. En los siguientes quince años tuvieron lugar nuevamente veinte levantamientos regionales.

Una razón para estos numerosos conflictos fue el hecho de que a través de los acentuados regionalismos se produjo un déficit de legitimidad de los gobiernos nacionales, que no fueron capaces de monopolizar la autoridad pública. El sistema federalista reflejó las divergencias interregionales; fue el menor denominador común de las élites regionales, que defendían sus esferas de influencia de manera obstinada[59]. A pesar de que en Bogotá un solo gobierno representó a la nación, según Iván Orozco Abad, la Constitución de 1863 constituyó una «cuasi-internacionalización de la política interior»[60]. La fragmentación de las competencias de poder llegó hasta tal punto que a los estados federales les era cedida la competencia de solucionar por sí mismos los conflictos dentro de sus territorios de soberanía. No obstante, como ha señalado Eduardo Posada Carbó, la violencia era parte integral del escenario electoral dentro de los estados. Durante el proceso electoral de diputados, concejales, senadores, representantes o procuradores generales, con frecuencia tenía lugar una movilización popular. A raíz del intenso calendario electoral, tanto el público como las autoridades vivían en permanente estado de alerta[61]. A ello se sumó el hecho de que gran parte de los ciudadanos tenía la impresión de que las elecciones eran manipuladas por los grupos en el poder[62].

Aun si el espíritu apasionado se convertía en violencia, los estados de la federación estaban obligados a mantener de forma estricta la neutralidad; en realidad, esta norma era poco respetada, y por consiguiente surgieron varias guerras interregionales. La Guardia Nacional (más tarde Guardia Colombiana) sólo podía intervenir si esto había sido aprobado

anteriormente por el Congreso, incluso cuando los rebeldes pudieron llegar a conseguir el poder en su estado. De este modo, la Constitución facilitaba rebeliones, sin conceder al Estado central los medios militares necesarios para acabar con ellas[63]. Cuanto más se provocó un desarrollo económico desigual en las regiones del país, tanto más se acentuó el potencial conflictivo en el país. Fue irónico que la fragilidad del sistema federalista, originalmente introducido para neutralizar las divergencias interregionales, condujera cada vez más al aumento de la violencia.

Otra razón de las guerras civiles eran las diferentes opiniones sobre el papel de la Iglesia dentro de la sociedad colombiana. La cuestión religiosa, y con ella la interpretación de autoridad y disciplina en la vida cotidiana, era el principal punto de discusión entre los seguidores del Partido Conservador y del grupo Radical[64]. Sin embargo, la idea de que la cuestión religiosa hubiese sido el principio de cualquier violencia política fue puesto en duda por Heinrich W. Krumwiede:

> Se haría injusticia a la élite del Partido Liberal compuesta en su mayoría por católicos practicantes y se sobrestimaría su exacerbado anticlericalismo (a menudo superficial y fuertemente impregnado de consideraciones partidistas), si se les quisiera atribuir que solamente aceptaron el riesgo de la guerra civil porque les parecían inaguantables los privilegios y el dominio de la Iglesia bajo el régimen conservador[65].

El argumento de Krumwiede, según el cual la cuestión religiosa no constituyó una verdadera lucha de principios, merece ser tomado en cuenta[66], pero también hay que subrayar el hecho de que los conflictos eclesiásticos fueron un estupendo vehículo de movilización de las masas de creyentes. Ellos se dejaron convencer sin gran esfuerzo por el clero para defender los privilegios tradicionales de la Iglesia.

Otro motivo importante de la violencia, aportado por las élites, emanó de sus aspiraciones de prestigio social o de posiciones en el gobierno y en la administración. Este fenómeno se debió a las pocas posibilidades para enriquecerse que ofrecía la sociedad colombiana[67]. Hay que tener en consideración que de la actividad administrativa se obtenían oportunidades de negocios lucrativos adicionales, por ejemplo, por medio de sobornos en los concursos estatales, negociaciones de concesiones en los campos de extracción de materias primas y apertura de nuevas líneas de transportes o en el reparto de títulos de propiedad en zonas de tierras baldías.

También el odio ciego y el ansia de venganza basados en experiencias personales o en pura tradición familiar, jugaron un papel en las rebeliones. El profesor universitario suizo Ernst Röthlisberger, que con motivo de un viaje navideño al Valle del Cauca intentó indagar los motivos de los dirigentes y de los soldados de los ejércitos en la guerra civil de 1884-1885, describió este fenómeno de la siguiente manera:

> No es por convicción por lo que la mayoría está afiliada en este o en el otro partido, sino porque en uno de ellos tienen que vengar algún hecho de atrocidad. A éste le han matado el padre, al de más allá se le llevaron un hermano, a un tercero le ultrajaron madre y hermanas; en la próxima revolución han de vengar las afrentas. Así ocurre que entre los conservadores encontramos gente librepensadora, y entre los liberales católicos fanáticos. Cada cual se rige por la ley de la venganza de sangre[68].

El ya mencionado Felipe Zapata juzgó de forma parecida las rebeliones locales: «No se ven sino intereses egoístas, antipatías personales y cuestioncillas que no valen una gota de sangre ni un movimiento de simpatía»[69].

La eliminación de la violencia como parte integral del proceso político fue el objetivo declarado del movimiento de reforma política, que bajo el mandato de Rafael Núñez, marcó la primera parte de la década de 1880. Cuando en esta época la facción de los radicales tuvo que ceder su poder a una coalición más abierta, dirigida por Rafael Núñez, los reformistas se propusieron erradicar las causas de los conflictos violentos. La seguridad, la tolerancia y la justicia tendrían que dirigir la política de allí en adelante[70].

Sin embargo, a pesar de que el Estado central, a partir de la derrota de los radicales en la guerra civil de 1885[71] y de la Constitución de 1886, que convirtió al país en una república unitaria, poseía oficialmente el control único sobre el Ejército y la Policía Nacional, y a pesar de que fue revalorizada la posición de la Iglesia dentro de la sociedad y de que fue subordinado el monopolio monetario al Banco Nacional, el potencial del conflicto no pudo reducirse de ninguna manera[72]. Puesto que el gobierno en Bogotá había llegado a ser una instancia de poder político únicamente sobre el papel, *de facto* no fue capaz de monopolizar la autoridad pública[73]. Las regiones se opusieron a la desmantelación de su capacidad de administrar recursos. Además, aunque los partidos políticos se organizaron también a nivel nacional[74], fueron poco más que una aglomeración de entramados regionales y locales que pugnaban entre sí por el control de los principales recursos. No resultó ningún partido con fuerza hegemónica dentro del territorio nacional, y la desintegración político-administrativa sólo pudo ser reducida de forma insignificante. Por consiguiente, después de 1886 también estallaron guerras civiles por parte de los núcleos de agitación regional que pretendían el cambio de la política nacional. Aquí se destacó la ineficacia de los rebeldes colombianos en comparación con el resto de Latinoamérica. Los liberales, durante los gobiernos de la fase de «regeneración» cuyo poder fue asegurado con medios cada vez más represivos, como la censura en la prensa, elecciones fraudulentas y la intervención de las Fuerzas Armadas contra manifestantes, no consiguieron con el uso de la violencia, ni en 1895 ni en 1899-1902, conquistar el control sobre el aparato estatal[75]. Por otra parte, era típico para el sistema colombiano que las guerras tampoco aclararan definitivamente las pautas de poder a favor de la alianza dirigente nacional-conservadora. Así quedó el país en una permanente situación de inestabilidad que obstaculizó la capacidad para gobernar.

Los efectos terribles de las guerras civiles para la economía y la sociedad fueron lamentados periódicamente por los miembros del gobierno en sus informes y memorias ante el Congreso[76]. Especialmente a través de largas confrontaciones, los portavoces políticos exigían una concertación nacional. Pero para ello faltaba la voluntad de las oligarquías regionales rivalizantes. Aunque en general las confrontaciones violentas finalizaron con la integración de las facciones opositoras al Estado a través de ofertas de amnistía, estas medidas específicas sólo tenían un carácter temporal, ya que en cuanto se acercaban las siguientes elecciones, los acuerdos de paz cesaban de nuevo. Después de un siglo marcado por una cadena de guerras civiles, el político liberal, publicista y negociante Santiago Pérez Triana (quien era forzado a pasar parte de su vida en el exterior) constató resignado que realmente la violencia política estaba vinculada con Colombia de manera fatal, «porque en Colombia

todos hemos sido revolucionarios en alguna época de nuestra vida»[77]. El espíritu bélico, sin embargo, no era un trato común de las élites, pues —como lo ha mostrado claramente Charles Bergquist en su análisis clásico ya mencionado de la guerra de los Mil Días— en cada partido hubo «guerreros» y«pacíficos». Solamente cuando ninguna de las partes salió vencedora en la guerra de los Mil Días, los grupos dirigentes del país decidieron acordar una fase con «más administración y menos política».

LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LAS GUERRAS

Las consecuencias económicas de las guerras civiles para la importación-exportación y para los grupos sociales relacionados con ese sector, aunque no se pueden detallar, es posible ilustrarlas con algunos ejemplos:

1. Durante las guerras, los recursos públicos y privados no previstos para este objetivo fueron utilizados en un sector totalmente improductivo[78]. Para el equipamiento de uniformes, armamento y alimentos de los soldados serían invertidas ingentes cantidades de dinero, la mayoría de las veces de forma precipitada y sin tener en cuenta la escasa capacidad de endeudamiento de los Presupuestos del Estado y los grupos sociales perjudicados con ello[79]. Entre 1830 y 1902 los gobiernos nacionales colombianos, según Jorge Holguín, dejaron de percibir 37,9 millones de pesos por las guerras civiles[80]. Los gastos resultantes de los conflictos violentos tuvieron como consecuencia, a corto y mediano plazo, que faltaran fondos en los Presupuestos de la nación, de los «estados» y de los departamentos, para promover activa y eficazmente la economía de importación-exportación. Los medios del Estado central para cubrir el déficit consistieron en subir los impuestos de importación, en emitir papel moneda y en imponer impuestos especiales para las clases propietarias.

Estas medidas limitaron no sólo la capacidad de consumo del pueblo, sino también la situación del comercio. Sin embargo, se puede excluir un grupo de comerciantes especializados en el suministro de armas y otros bienes cruciales, quienes se aprovecharon de la inestabilidad del momento[81].

2. En situaciones críticas los gobiernos de Bogotá consiguieron medios financieros a través de la emisión de papel moneda, es decir, poniendo en marcha la imprenta de billetes o de bonos. Después de que anteriormente ya se hubieran emitido obligaciones de deuda, se produjo una decisiva facilitación en la emisión de papel moneda desde la fundación del Banco Nacional en el año 1881. Además, a partir de 1886 se instauró el curso forzoso, y Colombia ingresó en el régimen de papel moneda inconvertible a metálico. Las consecuencias nefastas de la práctica de cubrir los gastos excesivos del Estado por medio de la emisión de billetes se pudieron apreciar sobre todo en las guerras de 1884-1885, 1895 y de 1899-1902. En estos años de crisis, el cambio del papel moneda sufrió una rápida devaluación a nivel internacional[82].

Por ello los comerciantes de importaciones y exportaciones, siempre que pudieron, evitaron los billetes del país, redujeron la concesión de créditos a los comerciantes locales y realizaron sus operaciones en moneda extranjera o en oro. Apareció un grupo de negociantes especializado en las oscilaciones del cambio. Los especuladores, junto con sus bancos, aca-

baron frecuentemente en la quiebra. Cuando en Medellín, en 1904, varios bancos tuvieron que cerrar al mismo tiempo, durante un año todo el comercio sufrió las consecuencias.

3. Las guerras obstaculizaron el flujo libre de mercancías, ya que los ejércitos enemigos interrumpieron los enlaces y bloquearon o destruyeron las rutas; esto produjo, por una parte, retrasos en la importación y exportación, y por otra, el encarecimiento de las mercancías por la escasez general. Las consecuencias más terribles se produjeron en la guerra de los Mil Días. Por ejemplo, en Cúcuta 100 mil sacos de café se encontraban a la espera de ser transportados, ya que por miedo a una expansión de las operaciones militares fueron interrumpidas las conexiones terrestres y cerrados durante mucho tiempo los pasos fronterizos por parte del gobierno venezolano[83]. Paralelamente, los almacenes estaban desbordados totalmente. En el distrito de Soto se paralizó todo el comercio exterior. Allí, a finales de la guerra, estaban almacenados unos 350 mil sacos de café y 50 mil pieles preparadas para ser exportadas[84]. En Antioquia, aunque no se encontraba implicada directamente en el escenario de la guerra, se vino abajo todo el comercio por no poderse llevar a cabo los urgentes y necesarios trabajos de reparación del recorrido ferroviario Caracolí-Puerto Berrío[85]. En Honda fueron bloqueados 100 mil contenedores de transporte con destino a Antioquia y Cundinamarca[86]. La conexión entre el Valle del Cauca y la costa pacífica fue rota, las carreteras y vías ferroviarias arruinadas porque no pudieron realizarse los trabajos de mantenimiento necesarios.

A causa de la interrupción del comercio exterior, también la comercialización de los bienes de consumo en el interior adoptó una nueva estructura. No solamente debido al alto riesgo de transporte sino también a la falta de confianza en la solvencia de sus clientes, los importadores limitaron sus pedidos al exterior[87]. Por eso, cuanto más duraron las guerras, más se beneficiaron los pequeños traficantes que hicieron sus negocios con base en moneda colombiana o productos del país. Estas empresas se consideraban especialmente arriesgadas y se basaban en alianzas políticas y sobornos. De ellas formaban parte especialmente oficiales del Ejército central de clase media (que chantajeaban a los puestos aduaneros y revendían las mercancías confiscadas por su propia cuenta), y un creciente número de inmigrantes procedentes de Oriente Medio (*turcos*)[88]. Estos últimos cooperaron en todos los bandos, y de esta manera mejoraron sus ingresos considerablemente.

4. Otro cambio en la economía de la guerra fue que algunos artesanos pudieron beneficiarse más que en tiempos de paz, debido a la escasez y al encarecimiento de las mercancías de importación[89]. Como no estaban conectados con el comercio exterior, les importaba poco si los clientes les pagaban con papel moneda. Sin embargo, como ya ha sido mencionado, en general los artesanos hicieron pocos progresos cualitativos y esto favoreció, desde comienzos del siglo XX, la sustitución de los productos artesanales y del *putting out system* por la incipiente industria autóctona. Recibieron poco respaldo de las élites que normalmente despreciaron el trabajo local.

5. La economía de exportación fue afectada no solamente por los obstáculos que existieron en el transporte sino también por la pérdida de mano de obra. Por eso subieron los salarios. A medida que se alargaba la guerra, más se lamentaban los dueños de grandes empresas. Cuando no se realizaron los trabajos de mantenimiento en minas o plantaciones de

banano, añil, caucho y café, las instalaciones se resintieron con daños irreparables. La guerra de los Mil Días causó la pérdida de unas 100 mil personas, en su mayoría hombres jóvenes[90]. Fue un enorme golpe para la economía colombiana del momento, que habría necesitado mano de obra barata para las plantaciones. Debido a esta situación muchos exportadores se vieron incapaces de pagar los intereses de los créditos que habían procurado en casas comerciales europeas. Así, un gran número de exportadores colombianos tuvo que ceder sus tierras más productivas a firmas extranjeras con sede en Londres o París.

6. El proceder de los empresarios de cualquier economía se basa en las experiencias y las expectativas. La experiencia de los hombres de negocios derivada de la guerra fue la pérdida de seguridad del respaldo legal de las propiedades, núcleo de cualquier orden social burgués-capitalista. José María Rojas, que investigó el «estado» del Cauca, especialmente conflictivo, expresó las razones destructivas de la guerra de la siguiente forma: «Quien perdía la guerra, perdía la hacienda»[91]. Sin duda, esta declaración es, tal como puede comprobarse en los documentos de archivo, de origen verídico, aun cuando resulta algo exagerada en sus radicales conjeturas. En el año 1903, el mayorista de café y cónsul alemán en el distrito de Soto (Santander), Gustav Volkmann, que vivió varias guerras, dio sobre el tema de la seguridad de la propiedad una interpretación muy parecida a la de Rojas:

> A partir del momento en que estalla una revolución, todos los lazos del orden se disuelven, y cada soldado y cada jefe solamente trata de enriquecerse, incluso a través de robos a sus parientes. Todas las mercancías de exportación y de importación que estaban en los afluentes son robadas, arrebatadas por fuerza armada y sin hacer trámites formales. Por tal motivo los propietarios no saben qué pasa con ellas, y es muy difícil averiguar las circunstancias precisas para reclamar ante el gobierno de Colombia. [...] Cualquier derecho de propiedad se acaba cuando empieza una guerra civil; tanto los partidarios del gobierno como los revolucionarios toman lo que necesitan sin preguntar y donde lo encuentran, pero lo que no necesitan también desaparece o acaba destruido y arruinado. Expropiaciones formales suceden rara vez y solamente en aglomeraciones grandes, mientras que en el campo cada jefe toma lo que le parece bien, sin dar recibo de lo confiscado[92].

La experiencia de que el derecho de propiedad perdiera su fuerza legal en las frecuentes confrontaciones políticas del momento, que incluso ponían en peligro la seguridad personal de los hombres de negocios, y la demora en las compensaciones, conllevó que los negociantes autóctonos y extranjeros no confiaran en inversiones a largo plazo en Colombia.

Mientras que a algunos no les resultaron provechosos sus negocios durante las guerras, hubo otros cuyas industrias florecieron bajo esas conflictivas circunstancias. Militares, alcaldes y gobernadores, especuladores, pequeños comerciantes y productores de manufacturas artesanales, fueron de hecho los beneficiarios de la guerra. Ellos eran los principales interesados en que las situaciones se mantuvieran inestables[93].

OBSERVACIONES FINALES

La razón más importante por la que muchas empresas —nacionales o extranjeras— desconfiaban de hacer grandes inversiones a largo plazo en Colombia, era la falta de seguri-

dad personal y de protección de la propiedad, o dicho en otros términos, el Estado, que debía garantizar el funcionamiento de las instituciones, no había podico desarrollarse suficientemente. Algunos políticos razonables en varias ocasiones habían exigido a las oligarquías rivalizantes que intercedieran para mantener la paz y restituir la capacidad estatal, y con ello poder crear condiciones para el establecimiento de una economía de importación-exportación. Uno de los documentos más impresionantes a este respecto lo constituye la *Memoria* de Antonio Roldán, ministro de Economía en Colombia en 1881:

> Los hombres laboriosos que buscan los bienes de fortuna honradamente, no aplican con entusiasmo sus esfuerzos a la obra de la producción sino cuando se consideran amparados contra la violencia i el despojo que surjen de las perturbaciones del orden; i asimismo los capitales, que son el complemento indispensable de aquellos esfuerzos para crear la riqueza, no se aclimatan donde los gobiernos, por debilidad o por indolencia, olvidan que su principal misión consiste en mantener la paz, i con ella el imperio de la ley, de la justicia y de la seguridad. Poco significa que un país tenga grandes elementos naturales de riqueza, de los cuales pueda servirse para adquirir prosperidad i engrandecimiento, si no hai seguridad para la industria, protección para el industrial i confianza para el capitalista. La inmigración i los capitales no tocarán a sus puertas; las riquezas naturales no podrán esplotarse; i la miseria será siempre el patrimonio de los ciudadanos i la impotencia el carácter de los gobiernos[94].

Las aspiraciones de los políticos como Roldán, perteneciente al movimiento de «regeneración», que abanderaba las proclamas de seguridad, paz y orden como objetivos por cumplir, fueron fenómenos coyunturales en la transición del poder de los radicales hacia la instauración de los nacionalistas y conservadores. Pero a lo largo del siglo XIX la intolerancia fue la tendencia predominante. La frecuencia de las confrontaciones bélicas tuvo como consecuencia a largo plazo que gran parte de la población colombiana interiorizara valores que se oponían a las conductas comerciales emprendedoras en el sentido de Schumpeter. Según constató Röthlisberger, «se hicieron tambalear fidelidad y creencia»; a menudo se produjeron sustracciones de fondos, robos a lo grande «y enriquecimientos fraudulentos y escandalosos de los políticos "profesionales"»[95]. En otras palabras, la discrepancia entre las instituciones formales, de un lado, y la actuación de hecho de gran parte de la población, de otro lado, llevó al estancamiento del modelo liberal.

En conclusión, la debilidad de las instituciones en Colombia fue la responsable de que los costos de transacción de gestiones comerciales sólidas fueran elevados y en muchos casos difíciles de calcular. El escaso nivel de desarrollo de la justicia y de la seguridad, como dijeron Röthlisberger y Roldán, junto a los precios del mercado mundial, según mencionó Ocampo, y los obstáculos geográficos, situados en primer plano en la interpretación de Safford, contribuyeron a que las empresas locales y extranjeras limitaran sus inversiones productivas al mínimo. El enfoque institucional aquí defendido podría aportar la explicación de *por qué* los círculos interesados en la dinamización de la economía colombiana por medio del *laissez faire* hicieron muy pocos esfuerzos para eliminar los obstáculos todavía existentes en la vida cotidiana. Debido a la falta de instituciones estables y a la carencia de iniciativas emprendedoras, Colombia obtuvo un escaso progreso con el modelo de «desarrollo hacia afuera» hasta 1910.

NOTAS

1. John H. Coatsworth, «Notes on the Comparative Economic History of Latin America and the United States». In: Wolfgang Reinhard/Peter Waldmann (eds.): *Nord und Süd in Amerika. Gegensätze - Gemeinsamkeiten - Europäischer Hintergrund.* T. II. Freiburg i. Br.: Rombach 1992, pp. 605-606. Los cálculos de Coatsworth se refieren al período que media entre 1850 y 1913. Datos sobre el crecimiento de las exportaciones *per cápita* se encuentran en Victor Bulmer-Thomas: *The Economic History of Latin America since Independence.* Cambridge (Inglaterra): University Press, 1994, p. 65.

2. Eliana Cardoso/Ann Hellwege: *Latin America's Economy: Diversity, Trends, and Conflicts.* Cambridge (EE. UU.), 1992, pp. 40-46. Véase también Bill Albert: *South America and the World Economy. From Independence to 1930.* London/Basingstoke: Macmillan, 1983, pp. 30-33.

3. De 1819 a 1830 Colombia formó parte de la República Gran Colombia que se dividió en los Estados de Ecuador, Nueva Granada y Venezuela. En la Constitución de 1863 el territorio de la Colombia de hoy recibió el nombre de Estados Unidos de Colombia, lo que subrayó el carácter federalista. En la Constitución de 1886, en la cual se reforzaron de nuevo las tendencias centralistas, se cambió otra vez el nombre por República de Colombia. En los siguientes párrafos el término *Colombia* se utilizará siempre que se haga referencia al territorio de la República de Colombia actual (incluyendo a Panamá).

4. Frank Safford, *Commerce and Enterprise in Central Colombia, 1821-1870.* Ph.D., Columbia University, 1965; Frank Safford: *Aspectos del siglo XIX en Colombia.* Medellín: Ediciones Hombre Nuevo, 1977; Frank Safford: *The Ideal of the Practical. Colombia's Struggle to Form a Technical Elite.* Austin: University of Texas Press, 1976; Álvaro Tirado Mejía: *Colombia en la repartición imperialista, 1870-1914.* Medellín: Ediciones Hombre Nuevo, 1976; William P. McGreevey: *An Economic History of Colombia. 1845-1930.* Cambridge (Mass.): University Press, 1971; Kurt-Peter Schütt: *Externe Abhängigkeit und periphere Entwicklung in Lateinamerika. Eine Studie am Beispiel der Entwicklung Kolumbiens von der Kolonialzeit bis 1930.* Frankfurt a. M.: Haag-Herchen 1980; José Antonio Ocampo: *Colombia y la economía mundial, 1830-1910.* Bogotá: Siglo XXI, 1984; Bernardo Tovar Zambrano: «La economía colombiana (1886-1922)». En *Nueva historia de Colombia* (NHC), t. V, Bogotá: Planeta, 1989, pp. 9-50.

5. Ocampo, Colombia..., *op. cit.*, p. 36. Los riesgos de malas cosechas y de caídas bruscas de los precios eran cargados en gran parte por los productores e intermediarios. Ellos estaban comprometidos con los exportadores por medio de avances.

6. Frank Safford, «Empresarios nacionales y extranjeros en Colombia durante el siglo XIX». En *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, vol. 4, 1969, pp. 87-111; Safford, *The Ideal... op. cit.*, pp. 19-26, 190.

7. Hace algún tiempo Jesús Antonio Bejarano Ávila exigía, en su revisión general de la historiografía económica de Colombia, la adaptación de esquemas analíticos que vincularan lo económico con lo no económico. El economista insiste en que «en los países subdesarrollados la influencia gravemente retardaria de un ambiente social e institucional generalmente atrasado es dolorosamente obvia...». (Jesús Antonio Bejarano Ávila: *Historia económica y desarrollo. La historiografía económica sobre los siglos XIX y XX en Colombia*. Santafé de Bogotá: CEREC, 1994, p. 29). Bejarano señala que en Colombia faltaba una «transformación en profundidad de todos los niveles de la estructura social». (*Ibid.*, p. 218).

8. En la ciencia económica, la productividad es la clave de la prosperidad de una nación: «The ability to do so depends not on the amorphous notion of «competitiveness» but on the productivity with which a nation's resources (labor and capital) are employed. Productivity is the value of the output produced by a unit of labor or capital. It depends on both the quality and features of products (which determine the prices they can command) and the efficency with which they are produced». (Michael Porter: *Competitive Advantage of Nations*. London/Basingstoke: Macmillan, 1990, p. 6).

9. Ronald H. Coase, «The Nature of a Firm». En *Economica*, No. 4, 1937, pp. 386-405.

10. Douglass North, *Structure and Change in Economic History*. New York: Norton, 1981.

11. Douglass North, «The New Institutional Economics an Third World Development». En John Harriss/Janet Hunter/Colin M. Lewis (eds.): *The New Instituional Economics and Third World Development*. London/New York: Routledge, 1995, p. 23.

12. Hans-Joachim König: «"Entwicklung nach außen". Voraussetzungen, Maßnahmen und Ergebnisse des Entwicklungskonzepts der Liberalen in Kolumbien in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts». En: Inge Buisson/Manfred Mols (eds.): *Entwicklungsstrategien in Lateinamerika in Vergangenheit und Gegenwart. Paderborn*: Schöningh, 1983, p. 67.

13. John Steuart, *Bogotá in 1836-1837. Being a Narrative of an Expedition to the Capital of New Granada, and a Residence there of Eleven Months*. New York, 1838, pp. 139-147; Safford, *Commerce...*, pp. 142-186; Fabio Puyo Vasco: *Historia de Bogotá*, t. III. Bogotá: Salvat-Villegas Editores, 1989, pp. 10-12, 20/21. Anthony McFarlane hace hincapié en que las élites colombianas se concentraron demasiado en el comercio de importación (Anthony McFarlane: «The Transition from Colonialism in Colombia, 1819-1875». En: Christopher Abel/Colin Lewis (eds.): *Latin America, Economic Imperialism and the State: The Political Economy of the External Connection from Independence to the Present*. London: Athlone Press, 1985, p. 109).

14. Hasta entonces, oficialmente, el oro sólo podía exportarse en forma de moneda. (*Geheimes Staatsarchiv*, *Preußischer Kulturbesitz* (Berlín), 2. 4. 1. II, No. 5.208, Informe de Miguel Samper, Guaduas, 16/11/1854, folio 36v.).

15. Desde esta época la acuñación de monedas disminuyó rápidamente. (Véanse estadísticas en *Preussisches Handelsarchiv* (PHA) 1873, t. II, Columbien. *Columbisches Münzwesen*, p. 205).

16. David Bushnell, *El régimen de Santander en la Gran Colombia*. Bogotá, 1984: El Áncora Editores, pp. 205-223; Óscar Rodríguez Salazar/Decsi Arévalo Hernández: «La historiografía económica del siglo XIX». En *La historia al final del milenio: ensayos de historiografía colombiana y latinoamericana*. Vol. 1. Santafé de Bogotá: Editorial Universidad Nacional, 1994, pp. 207s.; Frank Safford: «Race, Integration, and Progress: Elite Attitudes and the Indian in Colombia, 1750-1870». En: *Hispanic American Historical Review*, vol. 71, parte 1, 1991, pp. 12-21.

17. La política nacional de la adjudicación de «tierras baldías» la describe Catherine LeGrand en *Colonización y protesta campesina en Colombia. 1850-1950*. Bogotá: Centro Editorial Universidad Nacional de Colombia, 1988.

18. Germán Cavelier, *La política internacional de Colombia*. T. 2. Bogotá: Kelly, 1959, pp. 63-67; E. Tyler Parks: *Colombia and the United States 1765-1934*. New York: Greenwood Press, 1968 [reeditado], pp. 31-33; Gabriel Poveda Ramos: «Los ferrocarriles y la ingeniería. Primera parte». En *Revista de la Universidad de Antioquia*, vol. 34, No. 206, octubre/diciembre de 1986, pp. 8-9; Stephen J. Randall: *Colombia and the United States: Hegemony and Interdependence*. Athens/London: The University of Georgia Press, 1992, pp. 31-33.

19. Hunter Miller, *Treaties and Other International Acts of the United States of America. Washington, 1937*, pp. 138-140; Parliamentary Papers, Accounts and Papers (PP), vol. XXIX, 1826, pp. 1-10; Jorge W. Villacres Moscoso: *Historia diplomática de la República del Ecuador*. T. I. Guayaquil: Universidad de Guayaquil, 1967, pp. 310-316; *Moniteur Universel* No. 273, 1857.

20. Gloria Inés Ospina Sánchez, *España y Colombia en el siglo XIX. Los orígenes de las relaciones*. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica. Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1988.

21. Panamá se independizó de la República de Colombia en 1903.

22. Santander fue dividido en 1910 en los departamentos Norte de Santander y Santander.

23. Bajo el régimen de Rafael Reyes (1905-1909), Caldas fue separado del departamento de Antioquia.

24. Véase sobre todo el decreto del 9 de septiembre de 1861.

25. Adolfo Meisel R., «Los bancos comerciales en la era de la banca libre 1871-1923». En *El Banco de la República. Antecedentes, evolución y estructura*. Bogotá: Banco de la República, 1990, pp. 135-160.

26. Deutsches Handels-Archiv (DHA), t. II, 1889, *Columbien. Handelsbericht für das Jahr 1887*, p. 40. Otras reservas en Jorge Orlando Melo: *La evolución económica de Colombia, 1830-1900*. En NHC, t. II, Bogotá: Planeta, 1989, pp. 81-83; Ocampo, Colombia... *op. cit.*, pp. 437-439.

27. Las siguientes observaciones sobre los movimientos coyunturales se refieren sobre todo a Ocampo, *Colombia... op. cit.*, pp. 86-90 y pp. 105-119. Sin embargo, a diferencia de Ocampo, que defiende un enfoque economista, aquí se plantea la guerra de los Mil Días como hito crucial para el desarrollo del sistema de exportación-importación.

28. Durante la guerra Civil en EE. UU. se aumentó por poco tiempo la producción de algodón.

29. Cabe destacar que a nivel regional la exportación de reses fomentó una agricultura muy dinámica. Tal fue el caso en el departamento de Bolívar. Eduardo Posada-Carbó: *El Caribe colombiano. Una historia regional (1870-1950)*. Santafé de Bogotá, 1998: Banco de la República/El Áncora Editores, pp. 179-124. En cuanto a la cría destinada al mercado interno, véase *ibid.*, pp. 161-167; *Annual Series of Diplomatic and Consular Reports on Trade and Finance*, No. 370, Bogotá, 13. 4. 1893, *Report on the Agricultural-Products of Tolima*, pp. 3-5.

30. Ocampo, *Colombia... op. cit.*, p. 107. En efecto, el auge de las exportaciones hacia EE. UU. no disminuía significativamente por los aranceles prohibitivos de EE. UU. (MacKinley-Tariff). Colombia había rechazado una oferta de tratado comercial con EE. UU. bajo la condición de la nación más favorecida. (Marco Fidel Suárez, *Informe del subsecretario de Reaciones Exteriores dirigido para el Congreso.* Bogotá 1892, pp. 19-23; Marco Fidel Suárez, *Informe del ministro de Relaciones Exteriores para el Congreso.* Bogotá 1894, pp. XXXVI-XXXIX). Pero se firmaron contratos parecidos con Francia (1892), Italia (1893) y Alemania (1892). (*Informe del subsecretario... op. cit.*, 1892, pp. 4-6).

31. Ya en 1867, 1875, 1879, 1884-1885 y 1895 las recesiones en la economía de exportación habían estado acompañadas de conflictos interiores. Así pues, la guerra de los Mil Días fue la más sangrienta, con alrededor de 100 mil víctimas, la más larga y más devastadora para la economía a corto y a largo plazo. Sobre la guerra de los Mil Días y la devastación que produjo véase Charles W. Bergquist, *Café y conflicto en Colombia, 1886-1910. La guerra de los Mil Días: sus antecedentes y consecuencias.* Medellín: FAES 1981; Carlos Eduardo Jaramillo: *Los guerrilleros del novecientos.* Bogotá: CEREC, 1991.

32. Véase el informe del ministro residente de Alemania sobre los años 1908 y 1909. (DHA, t. II, 1910, *Columbien. Der Außenhandel Columbiens in den Jahren 1908 und 1909*, p. 654).

33. Casas de comisión que suministraban a los exportadores información comercial en español eran John Hart de Londres (años 1870 y 1880), Enrique Cortés de Londres (desde la década de 1880), H. H. Meier de Bremen (década de 1860 hasta 1890), Jorge Ribón de París (*Idem*) y Gruner & Rieke de Hamburg (desde la década de 1880). A veces estos informes se imprimían en gacetas oficiales y revistas especiales. Los boletines mercantiles de los cónsules colombianos se encuentran en el Archivo Nacional de Colombia (Bogotá), República, Consulados. Algunos eran publicados en el *Diario Oficial*. Periódicos para el comercio eran *The Shipping List* (desde la década de 1870, Barranquilla) y *El Anunciador* (década de 1890, Barranquilla, Gieseken & Held). Entre las revistas especiales con información comercial vale la pena mencionar *El Agricultor* (década de 1870, Bogotá), *La Industria* (desde 1883, Bogotá), *El Correo Mercantil* (desde 1883, Bogotá), *El Industrial* (desde 1884, Medellín) y *El Ferrocarril* (desde 1878, Cali). Cabe señalar que durante la Regeneración gran parte de esta prensa desapareció a causa de las restricciones a la libertad de prensa. Durante la Regeneración, la libertad de prensa fue restringida, así que gran parte de este tipo de publicidad, considerada liberal, desapareció.

34. Entre 1840 y 1898, según Ocampo, las exportaciones reales *per cápita* solamente crecieron en 150%; pero, como paralelamente también los términos de intercambio se desarrollaban a favor de Colombia, aumentó el poder de compra por habitante en 400%. Estas condiciones favorables para Colombia fueron contrarrestadas por los altibajos que sufrieron los precios de los productos selváticos y agrarios colombianos en el mercado mundial. (Ocampo, *Colombia... op. cit.*, pp. 94, 98).

35. Thomas Fischer, «Empresas extranjeras en el sector del oro y de la plata en Colombia, 1870-1914: la Free-Standing Company como modelo aplicado por inversionistas extranjeros». En *Boletín Cultural y Bibliográfico* (BCB), vol. XXXII, No. 39, 1995, pp. 60-84.

36. Thomas Fischer, *Die verlorenen Dekaden. «Entwicklung nach außen» und ausländische Geschäfte in Kolumbien, 1870-1914.* Frankfurt a. M.: Peter Lang, 1997, pp. 194-197.

37. En cuanto a lo siguiente, véase Ocampo, *Colombia... op. cit.*, pp. 143-145; véase además Fischer, *Die verlorenen Dekaden... op. cit.*, pp. 197-204.

38. Ocampo, *Colombia... op. cit.*, pp. 146/147. Thomas Fischer, «Craftsmen, Merchants, and Violence in Colombia. The *Sucesos de Bucaramanga* of 1879». En *Itinerario*, vol. XX, No. 1, 1996, p. 80.

39. Véase el informe sin fecha de un autor desconocido del Consulado General Británico en Bogotá: «A merchant would sell a large quantity of goods on a Monday. Bills in the market on that day standing at 2,000%, he would to guard himself, liquidate at 2,300%. On the Saturday following he wishes to convert his gains of a week into gold and finds that to buy drafts he has to pay at the rate of 2,700%. The result is that the transaction has been a loss instead of a gain. Matters have come to such a pass that merchants are beginning to refuse to sell except to such as are able and willing to pay them in gold». (*Public Record Office/Foreign Office*, London-Kew (PRO/FO) 135/258).

40. Stronge se refirió a una entrevista con un banquero de Bogotá que comentaba que los depósitos en su centro bancario durante la guerra se habían reducido al 50%. (PRO/FO 135/330, *General Report on Colombia for the Year 1908, Stronge a Grey*, Bogotá, 1/1/1908). Sin embargo, también en el comercio regional hubo diferencias significativas. El departamento de Antioquia se recuperó rápidamente a pesar de la crisis bancaria de 1904. En Medellín, a partir de 1905, se consiguieron fácilmente créditos a largo plazo. (DHA, t. II, 1908, Medellín (Columbia) [sic]. *Handelsbericht des Kaiserlichen Konsulats für das Jahr 1907*, p. 434).

41. PRO/FO 135/300, ministro plenipotenciario (MP) y *chargé d'affaires* (CA) Spencer S. Dickson a Edwin Grey, Bogotá, 16/2/1906; PRO/FO 135/322, Stronge a Grey, Bogotá, 13/3/1908.

42. Véase la petición de exportadores alemanes del 20 de marzo, 1905. (Zentrales Staatsarchiv, Potsdam (ZStAP) AA HA, *Die Handels- und Schiffahrtsverhältnisse mit der Republik Kolumbien*, vol. 22).

43. En cuanto a las costumbres urbanas de consumo en Colombia central véase Patricia Londoño, «La vida diaria: usos y costumbres». En Jorge Orlando Melo (ed.), *Historia de Antioquia*. Bogotá: Editorial Presencia, 1988, pp. 322-324; Thomas Fischer, «Lebensstile und "Distinktionen" in der städtischen Gesellschaft Bogotás des 19. Jahrhunderts. Zum Nutzen von Reiseberichten für die Sozialgeschichte Lateinamerikas». En: Walther L. Bernecker/Gertrud Krömer (eds.), *Die Wiederentdeckung Lateinamerikas. Die Erfahrung des Subkontinents in Reiseberichten des 19. Jahrhunderts*. Frankfurt a. M.: Vervuert 1997, pp. 191-238; Patricia Lara Betancourt: «La sala doméstica en Santa Fe de Bogotá, siglo XIX. El decorado de la sala romántica: gusto europeo y esnobismo». En *Anuario Colombiano Historia Social y de la Cultura*, vol. 25, 1998, pp. 109-134.

44. Paralelamente al desarrollado potencial de consumidores de la costa atlántica y de las regiones interiores dedicadas a la exportación, existían todavía extensos territorios no integrados, como la zona del Cauca, el sur del Tolima, así como gran parte de los Llanos Orientales y de la cuenca del Amazonas, cuya población se componía en su mayoría de indios, mestizos o negros. Los productos del extranjero en estas regiones eran consumidos sobre todo por la clase social baja. Las parcelas de la mayoría de la población, así como las tierras comunales destinadas al abastecimiento colectivo, bastaban en general para cubrir las necesidades con alimentos como la yuca, plátano, maíz, arroz, fríjol, azúcar, fruta, así como pescado y carne. Por consiguiente, la población de estas regiones no se sentía obligada a vender su mano de obra en el mercado para ser vinculados más fuertemente a la economía de consumo.

45. Melo sospecha que los trabajadores recibieron durante las bonanzas sueldos relativamente altos. Sin embargo, esto no les sirvió de mucho porque paralelamente los costos de alimentación aumentaron. Por consiguiente, según Melo, la renta, si resultaba de las bonanzas, habría sido consumida únicamente por los latifundistas tradicionales que importaban productos de lujo. (Melo, *La evolución económica... op. cit.*, pp. 77-78). Véase también Marco Palacios, *El café en*

Colombia, 1850-1970. Una historia económica, social y política. México: El Colegio de México, 1983, pp. 216-234.

46. McGreevey, *An Economic History... op. cit.*, p. 196.

47. Alfred Hettner, *Reisen in den Columbianischen Anden.* Leipzig: von Duncker und Humbolt, 1888, p. 207.

48. Por esto también la balanza comercial tuvo que ser más negativa de lo que se había supuesto durante largo tiempo en las investigaciones.

49. McGreevey, *An Economic History... op. cit.*, p. 98; Schütt, *Externe Abhängigkeit*, p. 188.

50. *Report by Consul-General Bunch*, Bogotá, 24/10/1871, pp. 156/157. Véase, en cuanto al cambio del estilo de vida iniciado por el proceso de refinamiento de los gustos y la compra de todo tipo de mercancías importadas, Fischer, Lebensstile, y Lara Betancourt, «La sala... *op. cit.*».

51. En cuanto a lo siguiente, véase Hernán Horna, *Transport Modernization and Enterpreneurship in Nineteenth Century Colombia. Cisneros & Friends.* Uppsala (=Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historica Upsaliensia, vol. 172) 1992; Poveda Ramos, *Los ferrocarriles... op. cit.*, pp. 5-35; Fischer, *Die verlorenen Dekaden... op. cit.*, p. 303-326.

52. Véase Roberto Junguito Bonnet, *La deuda externa en el siglo XIX. Cien años de incumplimiento.* Santafé de Bogotá: Tercer Mundo Editorial, pp. 125-176.

53. Tovar Zambrano, *La economía... op. cit.*, p. 24.

54. La investigación histórica de los conflictos está lejos de un consenso sobre la definición de su objeto. Nos referimos a la definición dada por Manfred Gailus: «Confrontación o conflicto significa divergencia y choque de derechos, intereses y expectativas entre dos (o más) grupos, entre un grupo e individuos o un grupo e instituciones. La consecuencia de estas constelaciones son potenciales de conflicto permanentes y cotidianos». (Manfred Gailus: *Straße und Brot. Sozialer Protest in den deutschen Staaten unter besonderer Berücksichtigung Preußens, 1847-1849.* Göttingen: Vandenhoek & Rupprecht, 1990, p. 35).

55. Puesto que las guerras civiles colombianas no contribuyeron a consolidar el dominio de ciertos grupos como dirigentes del país con una programática clara, ni a implantar estructuras administrativas aceptadas en todo el espacio nacional, preferimos usar el término analítico de «guerras civiles» en lugar de «revoluciones». Véase la crítica de William Lindsay Scruggs, *The Colombian and Venezuelan Republics.* London, p. 146.

56. Otto Bürger, *Reisen eines Naturforschers im tropischen Südamerika.* Leipzig: Dietrichsche Verlagsbuchhandlung, 1900, p. 167.

57. Álvaro Tirado Mejía, *Aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia.* Medellín: colección Autores Antioqueños, 1996, vol. 96, sobre todo p. 11; *idem*: «Las guerras civiles en Colombia». En *El nuevo pensamiento colombiano.* Bogotá, 1977, pp. 249-267; *idem*: «El Estado y la política en el siglo XIX». En *NHC*, t. II. Bogotá: Planeta, S. 155-183. Este texto también fue impreso en *idem*: *El Estado y la política*, Bogotá: El Áncora Editores, 1983 (reeditado), pp. 83-101.

58. *Memoria del secretario del Gobierno, 1885*, p. XLXIII.

59. Tirado Mejía, *El Estado... op. cit.*, p. 164.

60. Iván Orozco Abad, *Die Gestaltung des Ausnahmezustandes in Kolumbien im 19. Jahrhundert.* Saarbrücken/Fort Lauderdale: Breitenbach, 1988, p. 266.

61. Eduardo Posada Carbó, «Civilizar las urnas: conflicto y control en las elecciones colombianas, 1830-1930». En: BCB, vol. XXXII, No. 39, 1995, pp. 2-25.

62. Véase, por ejemplo, Manuel Briceño, *La revolución 1876-1877. Recuerdos para la historia*, t. II. Bogotá, 1878, p. 60.

63. Según Santiago Pérez, *Memoria del secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores al Congreso Nacional*. Bogotá, 1869, p. 4.

64. Con respecto a las diferencias entre conservadores y liberales véase Palacios, *El café... op. cit.*, p. 29; véase también Nola Reinhardt, «The Consolidation of the Import/Export Economy in the Nineteenth-Century Colombia». En *Latin American Perspectives*, vol. 13, No. 48, 1, Winter, 1986, pp. 78-79; Malcolm Deas, «The Role of the Church, the Army and the Police in Colombian Elections». En Eduardo Posada-Carbó, *Elections before Democracy: The History of Elections in Europe and Latin America*. London-New York, 1996, pp. 163-180. Con respecto a los partidos políticos en la mitad del siglo, véase Safford, *Commerce... op. cit.*, pp. 399-410.

65. Heinrich-W. Krumwiede, *Politik und katholische Kirche im gesellschaftlichen Modernisierungsprozeß. Tradition und Entwicklung in Kolumbien*. Hamburg: Hoffmann und Campe, 1980, p. 80.

66. Según David Bushnell, las contradicciones entre los partidos eran en gran parte ficticias. Los representantes de los partidos políticos sentían las diferencias ideológicas más grandes de lo que realmente eran. El único grupo consecuentemente seguidor de un partido (el Conservador) era la Iglesia católica. Ella no podía hacer política sin un aliado. (David Bushnell, «Política y partidos en el siglo XIX. Algunos antecedentes históricos». En Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda (eds.), *Pasado y presente de la Violencia en Colombia*. Bogotá: CEREC, 1986, pp. 35-38).

67. *Ibid.*, p. 38. Con respecto a la fascinación que por la política sentían los jóvenes colombianos de la clasa media y alta, véase Helen Delpar, *Red against Blue. The Liberal Party in Colombian Politics 1863-1899*. Alabama: University Press, 1981, p. 50.

68. Ernst Röthlisberger, *El Dorado. Reise- und Kulturbilder aus dem südamerikanischen Columbien*. Bern: Francke, 1898, p. 320).

69. Citado según Diógenes A. Arrieta, *Memoria del secretario del Gobierno... op. cit.*, Bogotá, 1885, p. LVII.

70. Según el secretario del Gobierno Diógenes A. Arrieta: «1. Que la bandera política dé sombra a todas las agrupaciones militantes; es decir: seguridad en el ejercicio del derecho y participación en las funciones del gobierno; 2. Que la justicia y la tolerancia presidan a las relaciones políticas, al debate de las ideas, al antagonismo de los intereses; 3. Que, como el medio más adecuado para asegurar el ejercicio de aquel derecho, la efectividad de aquella participación política y aquel imperio de tolerancia y justicia, se reformen las instituciones fundamentales en el sentido de estas generosas aspiraciones de innovación social y de acuerdo con las enseñanzas recogidas en veinte años de experiencias políticas». (Arrieta, *Memoria... op. cit.*, p. IX).

71. Véase al respecto Gonzalo España, *La guerra civil de 1885. Núñez y la derrota del radicalismo*. Bogotá: El Áncora Editores, 1985; Malcolm Deas, «Poverty, Civil Wars and Politics. Ricardo Gaitán Obeso and his Magdalena River Campaign in Colombia, 1885». En *Nova Americana*, No. 2, 1970, pp. 263-301.

72. Los intentos de instituir en la sociedad colombiana la autoridad del Estado central a partir de 1867 son descritos por Frédéric Martínez. La frustración de la construcción de un aparato eficaz centralista se debió, según el mismo autor, a la «inadecuación en el contexto nacional» de este modelo extanjero. A diferencia del de Martínez, nuestro punto de vista es que la creación de un Estado nacional también puede basarse en un proyecto federalista (Frédéric Martínez, «En

busca del Estado importado: de los radicales a la Regeración (1867-1889)». En *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, vol. 23, 1996, pp. 115-142).

73. Orozco Abad, *Die Gestaltung... op. cit.*, p. 188.

74. Delpar, *Red against Blue... op. cit.*, pp. 126-127. Mientras que anteriormente todas las elecciones tenían un carácter «estatal», desde 1886, con la introducción de elecciones presidenciales nacionales, los partidos tuvieron que hacer esfuerzos para organizarse en todo el país. Hasta 1886 los presidentes de los Estados Unidos de Colombia fueron elegidos por los delegados de los estados.

75. Bushnell, *Política... op. cit.*, pp. 16-17. Mario Aguilera Peña, *Insurgencia urbana en Bogotá. Motín, conspiración y guerra civil, 1893-1895*. Santafé de Bogotá: Colcultura, 1997, pp. 395-441.

76. Con respecto a la guerra civil de 1876-1877: Aquileo Parra, *Mensaje del Presidente de los Estados Unidos de Colombia al Congreso de 1878*, sobre todo p. 20; Januario Salgar, *Memoria del secretario de Hacienda i Fomento dirijida al Presidente de los Estados Unidos de Colombia para el Congreso*. Bogotá, 1877, pp. 5-8; con respecto a los conflictos de 1878 y 1879: Rafael Núñez: *Mensaje del Presidente Constitucional de los Estados Unidos de Colombia al Congreso Federal de 1882*, pp. 5-6; con respecto a la guerra de 1884-1885: Arrieta, *Memoria... op. cit.*, p. LVIII.

77. Santiago Pérez Triana: *Desde lejos. (Asuntos Colombianos)*. London, 1907, p. 20.

78. Tovar Zambrano, *La economía colombiana... op. cit.*, p. 33.

79. Salgar, *Memoria... op. cit.*, p. 4.

80. Tirado Mejía, *Aspectos... op. cit.*, pp. 84, 88.

81. Ocurrió, por ejemplo, que extranjeros ayudaron a gobiernos a conseguir armas y municiones. Así, el comerciante italiano Ernesto Cerruti proporcionó, en el año 1873, al gobierno radical del estado del Cauca armas y municiones provenientes de EE. UU. El negociante alemán Niklaus Krohne ayudó en 1885 al Ejército de la Regeneración a conseguir armas en el extranjero.

82. Adolfo Meisel Roca y Alejandro López Mejía, «Papel moneda, tasas de interés y revaluación durante la Regeneración». En *El Banco de la República*, pp. 68-76.

83. PRO/FO 135/259, cónsul (C) Charles E. Molineux a MP y CA George E. Welby, Cúcuta, 10/2/1901.

84. ZStAP AA PA Bucaramanga, No. 54.005, *Jahresbericht des Kaiserlich Deutschen Konsulats zu Bucaramanga, Departament Santander, Republik Columbien, fuer die Revolutionsjahre 1899 bis 1902*, C Gustav Volkmann a AA, Bucaramanga, 1/1/1903, folios 18 y 22.

85. ZStAP AA PA Medellín, No. 54.007, informe de C Carl Bimberg, 3/2/1902.

86. PRO/FO 135/239, carta de Gillies a Welby, Honda, 25/4/1901.

87. DHA, t. II, 1910, *Columbien. Der Außenhandel Columbiens in den Jahren 1908 und 1909*, p. 654. La reclamación de deudas por vía judicial fue declarada por Max Pasche, un representante de exportadores ingleses, como «almost interminable course in this country». (PRO/FO 135/261, carta de Pasche a Welby, Bogotá, 15/3/1901). Pasche era representante de Isaac & Samuel (Londres), Leisler, Bock Bros. & Co. (Manchester) y Greig & Co. (Glasgow).

88. Fischer, *Die verlorenen Dekaden... op. cit.*, pp. 252-253, 352-358.

89. David Sowell, *The Early Colombian Labor Movement. Philadelphia 1992*: Temple University Press, p. 159, defiende otro punto de vista. Según él, las guerras civiles tenían efectos

negativos para los artesanos, ya que perdieron órdenes. Además, el crédito era escaso y muchos tenían que luchar como soldados.

90. Bergquist, *Café y conflicto... op. cit.*, pp. 159-160.

91. José María Rojas, «Sociedad y economía en el Valle del Cauca». *Empresarios y tecnología en la formación del sector azucarero en Colombia, 1860-1980*. Bogotá: Banco Popular, 1983, p. 17.

92. ZStAP AA PA Bucaramanga, No. 54.005, *Jahresbericht des Kaiserlich Deutschen Konsulats zu Bucaramanga, Departament Santander, Republik Columbien, fuer die Revolutionsjahre 1899 bis 1902*, Volkmann a AA, Bucaramanga, 1/1/1903, folios 19-21 (traducción del alemán por el autor de este ensayo).

93. PRO/FO 135/251, Welby a Salisbury, Bogotá, 30/7/1900.

94. *Memoria del secretario de Hacienda dirigida al presidente de la Unión para el Congreso de 1881*. Bogotá, 1881, p. 11.

95. Röthlisberger, *El Dorado... op. cit.*, pp. 346-347.

CAPÍTULO 2

LAS GUERRAS CIVILES DEL SIGLO XIX EN LA AMÉRICA HISPÁNICA[1]

EDUARDO POSADA CARBÓ

INTRODUCCIÓN

En 1905 William Scruggs, un ex ministro de los Estados Unidos que en el pasado había estado a cargo de las legaciones de su país en Caracas y en Bogotá, reflexionaba sobre las «revoluciones» en la América Hispana[2]. Éstas, de acuerdo con Scruggs, tenían un significado peculiar, y se desarrollaban de manera diferente que en otras partes del mundo. «En otras partes del mundo», decía el exministro, «las revoluciones tienen su origen en las masas. Comienzan abajo y se extienden hacia arriba». Y añadía: «pero en Sur América, ellas casi siempre tienen su origen en una minoría: comienzan en la cúspide y se extienden hacia abajo». Mientras que en otros países las revoluciones desataban cambios fundamentales en las formas de gobierno, en Suramérica éstas si acaso servían para redistribuir los cargos públicos. Scruggs admitía algunas excepciones. Pero sus conclusiones generales no les reconocían grandes significados a las revoluciones de la América Hispana. Éstas eran apenas «conflictos violentos y desordenados entre políticos egoístas»; escasamente se disputaban allí temas de fondo; sólo involucraban a unas minorías; los ejércitos se formaban casi exclusivamente a base del reclutamiento forzoso[3]. Otros visitantes extranjeros, quizá sin las experiencias de Scruggs, también llegaban a conclusiones similares. Las revoluciones suramericanas, escribía Maturin M. Ballou en 1900, «buscan sólo promover las ambiciones personales; es el interés individual, no los principios, el principal motivo de estas luchas»[4]. Algunos, sin embargo, como Percy Martin, tras reconocer el carácter «crónico» de las revoluciones, admitían que el cuadro podía ser confuso a los ojos de un extranjero[5].

Estas confusiones, y el general desprecio que por el significado de dichas contiendas manifestaban los extranjeros —residentes o viajeros de ocasión—, aún dominan nuestra visión sobre las guerras civiles del siglo XIX en la América Latina. Hasta cierto punto, ésta

fue la visión que heredamos de una lectura superficial de los mismos contemporáneos. En su afán por dejar sin causas a los adversarios, sus denuncias les restaban mutuamente valor y significado a los conflictos. Por lo demás, el pesimismo que se apoderó de quienes a fines del siglo buscaron afincar el principio del orden, estimuló las perspectivas desoladoras del pasado. «Con la guerra civil permanente todo progreso es imposible... La guerra civil es la barbarie», escribía Rafael Núñez en 1891[6]. Las menciones contemporáneas a las guerras civiles eran así, con frecuencia, expresiones de vergüenza y anonadamiento, los reconocimientos del fracaso de los órdenes políticos que intentaron surgir tras la Independencia. «Piensen en ello», advertía Juan Espinosa en 1855, «y avergüéncense de dar al mundo el espectáculo de las guerras intestinas, cuando carecen de brazos para la labranza del territorio, que cae en manos extrañas por la insensatez de los naturales, su pereza, o la locura de defender con las armas lo que pide raciocinio y convicción»[7].

La historiografía moderna, sin embargo, ha hecho muy pocos esfuerzos por desentrañar la verdadera naturaleza de ese fenómeno que parece haber ejercido tanto dominio sobre la vida hispanoamericana: la guerra civil. Pareciera como si el tema estuviese todavía recubierto de esa vergüenza que sintieron los contemporáneos frente a un siglo de fracasos. El tema de la guerra en general, tanto externa como civil, ciertamente perdió atracción académica —identificado con una supuesta historia tradicional—, mientras ganaban interés las cuestiones económicas y sociales, como si la economía y las sociedades hubieren podido seguir sus cursos independientemente de las guerras. Ha habido excepciones. Y recientemente se observa un mayor interés en su estudio[8]. Pero sobrevive, sin embargo, el dominio de una perspectiva que no le atribuye mayor significado social a las guerras civiles. Según Gonzalo Sánchez, por ejemplo, las guerras civiles colombianas eran, como en la fórmula de Clausewitz, una prolongación de las relaciones políticas. Estas relaciones, no obstante, parecen vacías de ricos contenidos. Estaban en juego sí jefaturas políticas o candidaturas presidenciales, pero éstas no incidían en la forma del Estado ni en el cambio del sistema. Se trataba de definir —como lo había observado Scruggs—, «simplemente la participación burocrática». Sánchez acepta que no deben minimizarse los alcances de las guerras en áreas tan importantes como las relaciones entre la Iglesia y el Estado, o el problema del «pluralismo cultural». Y hasta admite que muchas veces estaban en juego derechos y libertades. Pero en su último análisis las guerras fueron un retrato casi estático de la sociedad, donde se replicaban sus jerarquías. Las «clases subalternas» iban a los campos de batalla «como simples clientelas», y «no como militantes de una causa propia». Más aún, las guerras no tuvieron en su sentir el carácter de «populares», aunque incorporan masas: «eran masivas pero fundamentalmente elitistas». Las guerras civiles, por lo menos las colombianas, en opinión de Sánchez, «no socavaron los cimientos de la... "república señorial"»[9].

Tal vez no debería sorprender que estas guerras, a las que se atribuyen tan pobres y hasta despreciativos significados, no hayan cautivado hasta ahora el interés de los historiadores. El contraste con la atención que han recibido otras guerras civiles puede ser ilustrativo. Piénsese, por ejemplo, en la guerra Inglesa de 1642, y el rico debate sobre su naturaleza. ¿Guerra civil?, ¿revolución?[10], o ¿rebelión?: tales son apenas algunos términos de referencia de una discusión que revela la búsqueda de múltiples significados al conflicto. Ninguna otra contienda civil, sin embargo, ha adquirido las características épicas de la Guerra Civil nor-

teamericana, la que «ha inspirado a algunos de los más distinguidos trabajos históricos del siglo XX». En un reciente libro sobre los orígenes de la guerra, Brian Holden Reid la califica como «el momento decisivo de la historia de América», con su «panteón de héroes», «símbolo de sabiduría e inspiración, que se invoca durante cualquier polémica, controversia o crisis nacional»[11]. «La prolongada herencia de la Guerra Civil es un reto sin fin», observó Bruce Catton hace ya varias décadas, en una serie de conferencias dedicadas a explorar el significado de esta guerra en la cultura norteamericana[12]. El doble y hasta contradictorio significado de la guerra —como triunfo y como tragedia—, aparece con claridad en la narración de Catton. Catton se sentía privilegiado por haber nacido en una generación que aún pudo conocer personalmente a veteranos de la guerra. De ellos, nos dice, aprendió a conocer el «patriotismo». De ellos escuchó historias de la guerra; y de ellos aprendió el significado de ciertos nombres que de una u otra forma identificaban el conflicto: Gettysburg, Chikamauga, Antietam, «eran mágicas palabras, rodeadas de un círculo, un ritmo de tambor bajo sus largas sílabas»[13].

No es mi intención, ni contaría con los elementos suficientes para hacer comparaciones apropiadas entre estas guerras y las que se sucedieron en Hispanoamérica. Ciertamente un examen sistemático de las diversas formas como los americanos del Norte y del Sur —me refiero aquí al sur del Río Grande—, han reflexionado sobre sus propias guerras sería quizá muy revelador de algunas de sus diversas características nacionales. Muchas de las observaciones de Catton parecerían familiares al panorama Hispanoamericano: los múltiples motivos de enrolamiento en los ejércitos o la preeminencia política de los héroes de la guerra; el eco de algunas palabras también fue «mágico» al oído de las generaciones que sucedieron a los combatientes de guerra —Caseros, Cepeda o Pavón en la Argentina, Palonegro, La Humareda, o Los Chancos, en Colombia. También sobresaldrían, por supuesto, los contrastes. Es oportuno, de cualquier manera, dejar constancia de la necesidad de incorporar una visión comparativa en el análisis de las guerras civiles. En esta ocasión, sin embargo, me limitaré al examen de la experiencia hispanoamericana.

Este ensayo tiene un doble propósito: explorar qué tanto ha avanzado la historiografía en el estudio de estos conflictos; y destacar de paso el significado de estas guerras en la formación política de las naciones del continente. «Orígenes, naturaleza y desarrollo»: el subtítulo quizá sea muy ambicioso, pero sugiere los propósitos de estas líneas, que aspiran abrir interrogantes sobre la clase de conflictos que se desataron, sus causas, y el rumbo que tomaron. En otras palabras, este ensayo pretende trazar el panorama de la que podría ser una ambiciosa agenda de investigación.

EL CONFLICTO Y SUS CAUSAS

Cualquier introducción al tema de las guerras civiles en Hispanoamérica tiene que comenzar obligatoriamente por describir una especie de mapa de estos conflictos: ¿dónde, cuándo y con qué intensidad tuvieron lugar? Un primer balance contable podría dejar nuestro propósito sin aliento en el punto de partida. En 1868, el senador Nicario Oroño advertía que en la sola década anterior Argentina había sufrido 117 revoluciones[14]. Y seguirían, por

lo menos, las de 1874, 1880, 1890 y 1893. De acuerdo con José Gil Fortoul, en Venezuela «los años de paz apenas excedían a los años de guerra» (sólo entre 1830 y 1859 contaba once revoluciones armadas)[15]. En Colombia el calendario de las guerras identifica siete conflictos de gran alcance nacional —la guerra de los Supremos (1839-1842), las guerras de 1860, 1875, 1876, 1885, 1895 y la guerra de los Mil Días (1899-1902)—, a los que se suman unas 59 revoluciones locales. Chile sobresale por ser el país donde ejemplarmente reinó el orden, después del régimen instaurado por Diego Portales. Pero antes de 1830, la situación fue bastante similar a la de sus vecinos; y los chilenos tampoco estuvieron libres de conflicto: las guerras de 1851, 1859 y 1891 fueron hitos en la historia chilena.

Frente a esta primera inflación de guerras y revoluciones, la tarea del historiador tendría que ser selectiva, a partir de criterios que le permitan definir la naturaleza y dimensión de todos esos conflictos. La tarea, en principio, no la facilita el uso indiscriminado que se hacía de los términos «revolución» o «guerra civil». Como lo denunciaba en 1855 Juan Espinosa en su *Diccionario para el pueblo*: «Por un abuso contra el sentido de la palabra, se ha llamado revolución a toda revuelta, todo alboroto, todo motín de pueblo o de cuartel, y para emplear una palabra americana, todo bochinche»[16]. El diccionario de Espinosa dedicaba entradas distintas a las expresiones «revoluciones» y «guerras civiles». Estas últimas, en la descripción de Espinosa, aparecen como conflictos donde predomina el fanatismo y la irracionalidad, donde se «enardecen... las pasiones iracundas», donde «el hermano combate contra el hermano y el hijo contra el padre», donde, en fin, «los horrores no tienen límites». Las «revoluciones», en cambio, definidas como «trastornos políticos o religiosos que cambian la faz de los Estados o el sistema de sus creencias», puede adquirir características de «santa, benéfica, necesaria»[17]. Se abusaba del término, como lo anotaba Espinosa. Y no siempre se le identificaba con una transformación progresista, sino que con frecuencia adquiría connotaciones conservadoras: «un retorno a los orígenes». Tal era el sentido que los radicales argentinos les dieron a sus revoluciones en la década de 1890, de acuerdo con Paula Alonso y Carlos Malamud[18]. Cualesquiera fuese el significado de los términos —y a pesar de la existencia de diccionarios que quisieran distinguirlos—, lo cierto es que los contemporáneos involucrados en los conflictos les llamaban indistintamente «guerras civiles» o «revoluciones», como si fuesen sinónimos. Así se desprende, por ejemplo, de la lectura del *Ensayo sobre las revoluciones políticas* de José María Samper, o de las memorias de Arturo Alessandri, *Revolución de 1891*[19].

Para el historiador, sin embargo, no deberían existir confusiones. Todos estos conflictos domésticos, como tales, fueron genérica y propiamente guerras civiles. Es importante subrayar esta dimensión doméstica. La guerra de Independencia hispanoamericana pudo haber sido en sus orígenes, como lo expresó Miguel Antonio Caro, «una *guerra civil* encaminada a emancipar [...] de la dominación de un gobierno central, vastos y lejanos territorios»[20]. Pero desembocó en una guerra anticolonial, de la cual surgieron varios Estados nacionales independientes. Muchos de estos conflictos estuvieron precisamente atados a los problemas de consolidación de los nuevos Estados, a la recomposición de sus respectivas autoridades legítimas. (Sobre estos puntos volveré más adelante). Esta dimensión doméstica no excluye que las guerras civiles tuviesen repercusiones internacionales, como sucedió en

el Río de la Plata, en el Alto Perú o en la frontera colombo-ecuatoriana. Por supuesto, no todos los conflictos domésticos —los golpes de cuartel, las asonadas o las conjuras— adquirían la gravedad de una guerra civil. Y, como también es lógico suponer, algunas guerras civiles tuvieron más alcance que otras, en su dimensión territorial o en sus efectos. Ahora bien, de país en país, las guerras civiles fueron de naturaleza variada, obedecieron a distintos motivos y tuvieron así mismo los más variados resultados. Por ejemplo, la guerra que lideró Sarmiento en San Juan contra las montoneras del Chacho en 1863, me parece, a primera vista, distinta de la que tuvo lugar en Buenos Aires tras la campaña presidencial de 1880[21]. Los historiadores querrán tal vez discutir cuáles de estas guerras civiles tuvieron un carácter «revolucionario», en sus motivaciones y efectos, lo que conduciría a un debate teórico que quisiera, por el momento, dejar a un lado. Me interesa, en cambio, explorar ahora el tema de las causas de las guerras civiles, un tema ciertamente complejo que no puede desvincularse del de las circunstancias que rodearon sus ocurrencias.

«Por falta de método», decía Juan Álvarez en su *Estudio sobre las guerras civiles argentinas*, publicado en 1914, dichos conflictos aparecían como un «confuso amontonamiento de violencias y desórdenes», y se creía que «millares de hombres lucharon y murieron en nuestros campos, por simple afección hacia determinado jefe y sin que causa alguna obrara hondamente sobre sus intereses, sus derechos o sus medios de vida habituales».

Las guerras civiles aparecían así «como resultado de la voluntad del caudillo»[22]. Los caudillos habían sido la preocupación central de la obra clásica del argentino Domingo F. Sarmiento, aunque no creo que Sarmiento le atribuyera a la voluntad individual de los caudillos la causa última de los movimientos sociales. Por el contrario, Facundo era apenas la «expresión fiel de una manera de ser de un pueblo», la «manifestación de la vida argentina». En 1904, Lucas Ayarragaray volvía sobre el tema del caudillismo, «la expresión clara de la anarquía argentina»[23]. Pero en el análisis de Ayarragaray predominaba el voluntarismo de los caudillos, herederos «del genio político castellano», portadores de una «tendencia congénita hacia el autoritarismo y la disociación autonómica o cantonalista»[24].

El *Estudio* de Álvarez fue un esfuerzo sistemático temprano de encontrarles una explicación económica a las guerras civiles, lejos del voluntarismo caudillista. Aspiraba, en sus propias palabras, «demostrar que las guerras civiles argentinas ofrecen un sentido suficientemente claro en cuanto se las relaciona con ciertos aspectos económicos de la vida nacional»[25]. Álvarez se ocupó entonces de examinar diversos problemas, donde podrían encontrarse, en su sentir, los orígenes de las guerras civiles: la oposición de los intereses regionales, las características del sector rural —particularmente de la industria ganadera—, la legislación fiscal, el movimiento de precios de los productos de exportación. Las revoluciones de 1890 y 1893, por ejemplo, fueron precedidas de bruscas bajas de los cueros, el maíz y las lanas[26]. Álvarez también observaba coincidencias entre «los años de guerra civil y el malestar producido por las plagas naturales»: hubo sequías en los años de 1817, 1819-1820, 1828-1831, y 1851, años de guerra, como también en los años de batallas famosas, Cepeda en 1859, y Pavón en 1861. Así mismo, la guerra de 1880, una de las más significativas de la segunda parte del siglo, estuvo precedida de una sequía «con pérdida total de la cosecha de trigo»[27]. En su introducción, Álvarez advertía que de ninguna manera quería

desconocer la existencia de otros móviles ajenos a los malestares económicos, ni intentaba ofrecer «una explicación total al fenómeno»[28]. Por lo demás, algunas de sus sugerencias, como la de establecer correlaciones directas entre bajas de precios o sequías y la ocurrencia de las guerras, pueden parecernos hoy muy simplistas. El valor de su contribución, no obstante, está en llamar la atención sobre las circunstancias económicas y sociales que rodearon el origen y desenvolvimiento de las guerras civiles, que la casualidad de éstas no se encontraba ni en el capricho de los caudillos ni en la herencia colonial del «genio castellano».

Apreciar en detalle todas estas circunstancias, bajo las cuales se sucedían las guerras, fue precisamente el objetivo del trabajo de Malcolm Deas sobre la guerra Civil de 1885 en Colombia, uno de los ensayos de historia moderna más sugerentes que tenemos sobre estos conflictos. Deas le hace eco al *Estudio* de Juan Álvarez: «En Colombia [...] las disminuciones en la demanda de las exportaciones producían crisis políticas que a menudo terminaban en guerra civil»[29].

El conflicto colombiano de 1885, en efecto, había sido precedido de la brusca caída de las exportaciones de quina, el producto que había liderado el comercio exterior colombiano tras la crisis del tabaco en la década anterior. Pero Deas va mucho más allá de explicar la guerra en función de una simple relación económica. La crisis exportadora, es cierto, tenía un efecto inmediato en las finanzas públicas, por su dependencia en las aduanas. En consecuencia, los gobiernos no podían pagar «los gastos más indispensables». Por su parte, los gobiernos locales, como la impopular administración de Solón Wilches en el estado de Santander —donde se detonó finalmente la guerra—, no estaban en condiciones de elevar impuestos. La crisis económica contribuyó así a debilitar un gobierno de por sí débil. Pero la dimensión económica no podría explicar por sí sola el origen ni el sentido del conflicto. Estaban también presentes otras circunstancias sociales, políticas e ideológicas, a las que Deas dedica aún mayor atención. El sistema político diseñado por la Constitución colombiana de 1863 impedía la formación de una efectiva autoridad central. Las posibilidades del gobierno de controlar a la sociedad eran limitadas, como eran limitadas las capacidades de la oposición de controlar sus mismas filas. Ricardo Gaitán Obeso, quien lideró la revuelta contra el gobierno de Rafael Núñez, era un liberal de origen humilde y de rango secundario dentro del partido, que había participado en anteriores levantamientos. Los partidos en disputa se demarcaban con claras líneas divisorias, que servían para identificar las diversas lealtades. Gracias a estas lealtades, Gaitán Obeso no tuvo dificultad en reclutar a la veintena de liberales, la «gente disponible» con la que inició la revolución. Las razones para unirse al torbellino de la guerra variaban, pero Deas advierte cómo no es cierto que sólo la fuerza o las ansias de rapiña explicaran el reclutamiento, que los niveles de movilización «espontánea» fueron más significativos que los aceptados por la historiografía.

Existía una dimensión ideológica —el discurso liberal, en el caso de Gaitán, y lo que aquél representaba para sus seguidores— sin la cual sería imposible apreciar el curso de la guerra. No es fácil comprender esta dimensión ideológica, tanto en Colombia como en los otros países latinoamericanos: cómo, en particular, las ideas determinaban comportamientos sociales que desembocaban en conflictos. Sólo recientemente los historiadores modernos han comenzado a interesarse por el contenido de tantas proclamas de guerra, consideradas por lo general como juegos retóricos desprovistos de significado[30]. «No hay realmente ideas

en juego», expresaba Ayarragaray, «en el fondo la contienda se reduce a la posesión del poder»[31]. Con seguridad que en la lucha por el poder, y lo que él traía consigo, pueden encontrárseles razón a muchas de las contiendas. Pero las constantes referencias ideológicas que acompañaban a la movilización de los ejércitos merecen más atención. El mismo Ayarragaray reconoció la presencia de elementos doctrinarios, aunque sólo para identificarlos con el fanatismo que se apoderaba de una masa ignorante. Sin embargo, aceptaba la existencia de «períodos de fanatismo político», cuando dominaba «la idea única en la multitud», en los que se producían «estallidos de pasión». «La idea de libertad», por ejemplo, «inculcó en el espíritu rudimentario de las colectividades inferiores la pasión oral por estados y organizaciones apenas comprendidas y nunca practicadas»[32]. Sarmiento también hacía alusión a las «masas ignorantes que se agitan sordamente en las campañas», mientras describía la atmósfera que sirvió de antesala al levantamiento de la montonera en 1863, una atmósfera dominada por «los rumores que corren, de algo que se siente y se ve»[33]. En este caso, los rumores entre le gente llana acusaban al gobierno de «masón», de atentar contra la Iglesia.

«Viva la religión», fue un «trueno» que había ya estallado en San Juan en la década de 1820, como lo había sido en Colombia en 1836 y en 1876, y en tantos otros lugares del continente a lo largo del siglo. El significado de este grito religioso ha sido relativamente despreciado por la historiografía moderna, inmersa, por lo general, en una visión secularizada del mundo contemporáneo. La cuestión religiosa, sin embargo, fue central a la dimensión ideológica de muchos de los conflictos del siglo XIX. Y lograba abarcar con frecuencia a buena parte del conglomerado social. Según Alberto Edwards, el conflicto religioso en Chile de mediados de siglo produjo una «"idea" política capaz de ser comprendida por la opinión vulgar». Edwards no creía que el debate doctrinario estuviese al alcance de la mayoría de los chilenos. Excepto en el frente religioso:

> ...un problema que a todos interesa en mayor o menor grado, y a los pequeños casi con la misma intensidad que a los grandes. En el orden religioso cada habitante del país estaba clasificado de antemano, porque aun la indiferencia o la tibieza eran ya una característica, *a los menos negativa*. El hecho de *no* comulgar con las ideas del catolicismo militante comenzó a imprimir carácter poco a poco; y, a medida que transcurrieron los años, esa negación se transformó en una afirmación de principios, base del sentimiento «liberal» del porvenir[34].

Por eso, por su capacidad de incorporar indiscriminadamente a todos los sectores sociales, «fue el aspecto religioso de la revolución de los tiempos modernos el primero en democratizarse» en Chile[35].

Esta razón, por la cual se «democratizó la política», como lo expresara Edwards, fue también motivo de polarizaciones extremas de los conflictos en otros países hispanoamericanos, y con mayor intensidad que en la experiencia chilena. Tales fueron los casos de la guerra de la Reforma en México, y de las ya mencionadas guerras colombianas de 1839 y 1876. La guerra colombiana de 1839, conocida igualmente como guerra de los Supremos, tuvo sus orígenes en las órdenes del gobierno central contra unos conventos de Pasto, aunque a la insurrección que se sucedió en casi todo el país se sumaron los más diversos motivos. El clero, sin embargo, tuvo una destacada y visible participación en la revuelta de Pasto,

donde la figura del padre Villota arengaba desde su caballo a las multitudes, en defensa de la religión. Los laicos, como Julio Arboleda, hacían causa común con el clero y hasta se confundían con sus atuendos: «vestido pobremente, con un Santo Cristo en la mano i cargado de cruces por todas partes [Arboleda] se subía sobre las piedras a predicar a los indios i pedirles con suspiros i sollozos la defensa de la relijión que los malditos rojos estaban destruyendo»[36]. En la guerra de 1876 se invocó también el tema religoso como causa del conflicto, esta vez adoptado además como principio de un partido. Los conservadores de Antioquia, al manifestar su descontento con el gobierno central, expresaron que considerarían *casus belli*, entre otros, «la expedición de una ley de tuición que comprendiera un ataque a las creencias católicas de la mayoría de la Nación»[37]. En efecto, una reforma educativa adelantada por los liberales, que le restaba poderes a la Iglesia católica, desató la contienda. La guerra alcanzó a calificarse de «revolución clerical», aunque el liderazgo lo tuviesen los laicos. De todas formas, las proclamas a los compañeros de armas, como la dirigida por el comandante Manuel Briceño al Ejército de Cundinamarca en septiembre de 1876, se abrían apelando a la «defensa de nuestras creencias religiosas» y de «nuestros derechos conculcados». «¿Por qué luchamos?», se preguntaba el periódico *La América*. Y respondía, «Luchamos por la Libertad, por la Religión y por la Patria»[38].

Que la guerra era una extensión de la política —para volver al lugar común de Clausewitz—, era aún más evidente cuando se trataba de elecciones. Con una frecuencia inusitada, poco apreciada por los historiadores, las contiendas electorales, sobre todo aquellas duramente competidas, desembocaban en guerras civiles. Las tres guerras civiles chilenas de 1851, 1859 y 1891, estuvieron acompañadas de contenciosas campañas electorales. Los orígenes de casi todas las siete guerras civiles colombianas que enumeré al comienzo de esta sección se confunden con el desarrollo de un proceso electoral en curso. En la Argentina, por lo menos las guerras de 1874 y 1880, deben entenderse en el contexto de las elecciones que tuvieron lugar en esos años. Incluso en países con tradiciones electorales más débiles, como Bolivia, Casimiro del Corral argumentaba en 1871 que «las revoluciones han nacido de las candidaturas impuestas, y de los escandalosos fraudes de las elecciones»[39]. En mi trabajo sobre la guerra civil de 1875 en Colombia intenté examinar precisamente cómo y por qué una campaña electoral —para la presidencia, en dicho caso— desembocaba en conflicto civil[40]. No uno sino varios factores deben tenerse en cuenta en la explicación de la campaña de 1875: la debilidad del sistema político, los intereses que se jugaban en las elecciones, la crisis fiscal, las pasiones partidistas, las contradicciones regionales y la política local, para citar algunos. Pero el tema electoral y sus relaciones con las guerras civiles sugiere también la necesidad de profundizar sobre los aspectos más sustanciales de la historia constitucional de estos países: las dificultades para reorganizar los patrones de la autoridad legítima, una vez rotos los vínculos con la Corona española.

GUERRA Y SOCIEDAD

He querido, hasta aquí, trazar un panorama general de las guerras civiles en Hispanoamérica y explorar diversas razones que podrían explicar su recurrencia. El cuadro es, por supuesto, incompleto. Observé cómo necesitamos aún un mapa más preciso de las guerras,

aunque logré identificar algunas de las más relevantes. Pero la sección anterior estuvo dedicada, sobre todo, al examen de sus causas. Tras una somera revisión de algunos trabajos históricos, y apoyado también en fuentes contemporáneas, creo haber mostrado cómo estos conflictos, lejos de ser fenómenos peculiares de la cultura hispana o producto de las voluntades caprichosas de los llamados caudillos, obedecieron a las más diversas causas —económicas, sociales, políticas e ideológicas. No creo que necesitemos «modelos» o «categorías» especiales para entender estos conflictos. Las circunstancias fueron ciertamente distintas a las de otras guerras civiles, en Europa o en los Estados Unidos. Pero también lo fueron entre los diferentes países y hasta regiones hispanoamericanas.

También he sugerido que estas guerras no fueron conflictos exclusivamente elitistas, que muchas de ellas incorporaron a amplios sectores de la población. En esta tercera sección quisiera ahondar un poco más en estos aspectos sociales de las guerras, los que propongo ilustrar a través de una somera mirada a las experiencias de Chile y Colombia. Las vivencias de la guerra fueron distintas en ambos países: como hemos visto, la sucesión de guerras civiles fue más intensa en Colombia que en Chile. Pero Chile sufrió serias guerras externas, sin paralelos en el caso colombiano: la guerra contra la confederación peruano-boliviana (1836-1839), la confrontación naval contra España (1864-66), y la guerra del Pacífico (1879-1883). De acuerdo con Mario Góngora, la guerra pasó a ser un «factor histórico capital» en la formación del Estado chileno durante el siglo XIX; la «chilenidad», o la conciencia nacional tiene raíces en las experiencias de la guerra[41]. A pesar de estas y otras diferencias, ambos países tuvieron similitudes en la evolución de sus respectivas culturas políticas. Una mirada comparativa sirve para ilustrar cómo en ambos países las guerras movilizaron de manera significativa a diversos sectores de sus respectivas sociedades.

No es fácil estimar con certeza el tamaño total de la población involucrada en las guerras civiles. Los tamaños de los ejércitos son un indicativo que hay que tener en cuenta, aunque, como veremos, los solos ejércitos no reflejan todo el universo social de la guerra. En las circunstancias del siglo XIX, como ya se ha anotado, unas pocas personas estaban en capacidad de darle rumbo a una revolución: en 1885, tras haber reclutado sólo 22 copartidarios en Subachoque, Ricardo Gaitán Obeso descendió con su pequeña banda el río Magdalena en Colombia, desatando así una destructiva guerra civil, mientras se expandía el tamaño del ejército liberal. Los relatos de las diversas guerras ofrecen alguna idea del tamaño de las fuerzas en combate. Obviamente que su número variaba. En la guerra de 1875, por ejemplo, los estimativos del número de combatientes en un momento y lugar determinados, oscilaba entre 50 y 700 personas. En las guerras más generalizadas se formaron ejércitos mayores. En la guerra de Supremos hay descripciones de ejércitos compuestos por 3.000 combatientes. La fuerza conservadora en la batalla de Los Chancos en 1876 sumaba 7.000 hombres. La situación en Chile era algo similar: se calcula que unas 7.000 personas lucharon en la batalla de loncomilla en 1851, y unas 3.000 se enfrentaron en Los Loros en 1859. Este año, Pedro León Gallo logró movilizar lo que se consideraba un extraordinario ejército: 5.042 personas en la infantería, 1.516 jinetes de a caballo y 534 artilleros. Más difícil sería calcular cuántas personas participaron del levantamiento del 20 de abril de 1851 en Santiago, cuando la ciudad misma se convirtió en un campo de batalla[42].

De cualquier forma, estas cifras sobre el tamaño de los ejércitos —en tiempos en que aún el tamaño de las ciudades era muy reducido—, son significativas. No dan, es cierto, la idea de movilizaciones masivas. Pero sí indican que la guerra no involucraba sólo a una selecta minoría. Más aún, incluso si su tamaño era pequeño, la acción de estos ejércitos no puede subvalorarse. Jenny White del Bal, una norteamericana casada con un panameño, describía así una revolución en Panamá en 1865:

> Aunque comparada con nuestra rebelión en los Estados Unidos, estas revoluciones parecen pequeñas, son en realidad como una masa ingobernable. El país es pequeño, y unos pocos cientos de hombres merodeando como salteadores pueden colocar a casi toda la comunidad en estado de alarma. Y entonces también todo se vuelve personal: provincia contra provincia, municipio contra municipio, e incluso familia contra familia[43].

Observaciones más precisas, aunque no del todo, pueden hacerse sobre la composición social de dichos ejércitos. Para comenzar, no es cierto que, como lo aseverara Gonzalo Sánchez, «la organización de la guerra era una réplica de las jerarquías de la sociedad en la cual se desenvolvía». En las guerras, los ejércitos desarrollaban su propia dinámica. No sólo las guerras no replicaban las jerarquías sociales sino que con frecuencia las modificaban. El francés Luis Striffler, quien fue testigo de la guerra de 1875 en Colombia, describió cómo ella estimuló cierta movilidad social: «...se comienza por el humilde grado de capitán, para correr al de coronel y ascender al de general, título que da posición social, que cualquier revuelta da, y que ninguna quita»[44].

Algunos de los comandantes más populares durante estas guerras fueron ciertamente de origen humilde: el ya mencionado Gaitán Obeso, el «negro» Marín, o David Peña. Juan Andrés Noguera, un ex exclavo recién manumitido, fue uno de los líderes de las guerrillas en Pasto en la guerra de Supremos. En Chile, la pequeña banda de revolucionarios que se apoderó de Talca en 1859, estaba dirigida por «un sujeto de modesta condición, don Ramón Antonio Vallejos, propietario de una corta heredad»[45]. En efecto, los sectores más acomodados a veces se ausentaban de estos conflictos. Como lo observó un cronista de la atmósfera política de Cali, Colombia, a mediados de siglo, tras la huida de los líderes conservadores cuando estalló una revuelta: «i es cosa demostrada que con hombres de bota i guante i que viven almidonados, no se puede contar para estos empeños»[46]. Sin embargo, no todos los acomodados se ausentaban siempre. El líder de la revolución Constituyente chilena en 1859 era Pedro León Gallo, miembro de una eminente familia de Copiapó con intereses en la minería. En Vallenar, Gallo recibió el apoyo de los «propietarios de fundo». Entre los comandantes de su ejército se encontraba «la más caracterizada sociedad copiapina»[47].

Desde casi cualquier ángulo, los ejércitos en disputa representaban por lo general a los diversos sectores sociales, ricos y pobres. La idea, profusamente difundida, de que éstos eran meros conflictos oligárquicos de escaso impacto social no encuentra respaldo en una somera revisión de los documentos contemporáneos. A veces tampoco en la lectura detallada de la evidencia de sus intérpretes. Alberto Edwards, por ejemplo, sostiene que durante la revolución de 1859, «el pueblo bajo, ignorante, escéptico y nada propenso a las quimeras, hubo de mantenerse entonces, como siempre en Chile, casi por completo extraño a las agitaciones que fermentaban dentro de la oligarquía». Sin embargo, en la medida en que se avan-

za en la lectura aparece claro que los sectores populares no fueron ajenos al conflicto. Edwards acepta que la propaganda había llegado con buen éxito a «ciertos reducidos círculos de la baja clase media». Pero más adelante se descubre que estos círculos no eran tan reducidos. La palabra «populacho» aparece con frecuencia en el texto. Un asalto a los cuarteles de la policía fue planeado por «un grupo de obreros». Otro asalto posterior en Talca involucraba a «un pequeño grupo de obreros que se reunían en un café de arrabales, y otro no mayor de campesinos». El ejército de Vallejo se describe como «en su mayor parte chusma indisciplinada o malhechores escapados de las cárceles». Los indígenas de la Alta Araucanía fueron movilizados por «Nicolás Tirapegui y otros individuos terribles por su carácter turbulento y por sus relaciones con los bárbaros». Y en Aconcagua, los ejércitos revolucionarios atraían el apoyo de «no pocos obreros endoctrinados desde 1851 en la Sociedad de la Igualdad»[48].

La participación social en las guerras no se restringía a la de aquellos que se enrolaban directamente en los ejércitos. Algunas personas se acercaban a las batallas por curiosidad, como el 20 de abril de 1851 en Santiago, cuando «el pueblo miraba con simpatía ese aparato de combate; pero desde lejos, sin mezclarse en nada, salvo unos 150 artesanos»[49]. Desde luego que participaban mujeres, y no sólo como espectadoras: «Las camaradas a quienes entonces llamaban *rabonas*, cargaban los fusiles de los caídos y los presentaban de repuesto a su hombre para no perder tiempo»[50]. Pero incluso si la participación directa en los combates se limitaba a los ejércitos, las victorias y las derrotas se convertían en grandes ocasiones sociales para la comunidad, cuya vida se veía afectada de una u otra manera. Quienes simpatizaban con los ejércitos victoriosos no se perdían de las festividades, como sucedió en La Serena en 1859:

> Reunida i ordenada la tropa, a las 4 de la tarde el Ejército Constituyente hizo su entrada triunfal en La Serena, en medio de los vítores i aclamaciones del pueblo entusiasmado.
>
> Precedió la marcha el general don Pedro León Gallo [...] En su tránsito fue aclamado por el pueblo con el más vivo entusiasmo.
>
> Desde los balcones de las casas, las hermosas señoritas serenenses le arrojaban flores acompañadas de gritos y salutación espresiva i jenerosa.
>
> Las tropas no fueron acojidas con menos regocijo.
>
> La muchedumbre, compuesta de hombres, mujeres i niños, corría presurosa a interceptarles el paso, ofreciéndoles frutas i dulces, victoreando a los soldados por su triunfo[51].

Algunas veces estas celebraciones daban lugar a desmanes y hasta saqueos, como en 1859, cuando el «populacho», tras unirse a las tropas de Copiapó para celebrar aquel triunfo, se apoderó de Caldera: «Embriagada la chusma, se amotinó en demanda de dinero y aguardiente [...] y se entregó en seguida al saqueo del pueblo». Acciones más organizadas de bandidaje también seguían a las guerras, como reflejo de la pérdida de control social. Tras el exitoso asalto a Talca, un grupo de bandidos aterrorizó las tierras vecinas: «los campos de las provincias entre el Cachapoal y el Itata comenzaron a cubrirse de partidas de montoneros, la mayor parte simples hordas de merodeadores, cuyas hazañas se limitaban al saqueo de las haciendas, sin atender al color político de sus propietarios»[52].

En estas circunstancias, el orden social tradicional era subvertido. En 1859, en Chile, «los propios caudillos de esas turbas delirantes», perdieron control sobre sus seguidores: Abdón Garín se vio obligado a abandonar La Serena bajo un disfraz, «para escapar del furor de la muchedumbre que los acusaba [a los líderes] de traidores»[53]. ¿Qué causa y a quiénes habían traicionado? El interrogante espera respuesta. Pero el ejemplo sirve para reiterar el punto: las guerras no replicaban fiel y estrictamente las jerarquías sociales, sino que con frecuencia las subvertían. Y aunque no es fácil discernir los múltiples motivos de los miles de soldados que se enrolaban en sus ejércitos, esa muchedumbre que se sentía traicionada, y que forzó a su líder a abandonar las celebraciones disfrazado, no estaba allí a la fuerza.

CONCLUSIÓN

En 1863, el ensayista colombiano José María Samper se quejaba de que los europeos juzgaran a Hispanoamérica «de un modo peculiar»:

> Sus revoluciones, para los europeos, no son las vacilaciones naturalmente desordenadas del infante, las agitaciones propias de la gestación del progreso en un mundo virgen, y de la transición social y política. No. Esas revoluciones no son miradas sino como crímenes característicos, como señales de una corrupción orgánica, como pruebas irrefragables de incapacidad, que hacen perder toda esperanza de nuestras repúblicas[54].

Samper escribía en una época cuando aún predominaba el optimismo de la independencia, todavía no sentía vergüenza por las señales del desorden político. Por el contrario, para él las guerras civiles eran señales de progreso, los necesarios combates contra el régimen de la colonia que se resistía a ser derrotado definitivamente. La guerra civil, decía Samper, «depura, vigoriza ciertas fuerzas y desembaraza el camino de la civilización».

No es necesario compartir el optimismo apologético de Samper que subvaloraba los desastrosos resultados —humanos, económicos, políticos y sociales—, de tales conflictos para nada civilizadores. Yo personalmente me ubico del lado de quienes se avergonzaron por su ocurrencia. Pero esta sensación de vergüenza no es buena ayuda para entender por qué se desataron estos conflictos, por qué fue tan difícil superar esa época de guerras internas. Y es que dichos conflictos, como este ensayo ha querido demostrar, fueron profundamente significativos para muchos de sus contemporáneos. Su significado varió, por supuesto, para los diferentes contendores, dentro de las mismas filas de los ejércitos, y para las sociedades en que dichas guerras se desarrollaron. Sólo estudios más detallados, e individualizados, de las numerosas guerras civiles podrán desentrañar sus diversos orígenes, naturaleza y desarrollo, que estas líneas apenas han esbozado. Por lo demás, hay que tener siempre en cuenta que las guerras generan su propia dinámica. Como lo observó Malcolm Deas, una guerra civil se origina en una serie de circunstancias y desemboca en otras».

NOTAS

1. Este ensayo fue originalmente escrito para las Décimas Jornadas de Estudios Históricos organizadas por el Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca, en Salamanca, en marzo de 1998. Agradezco a los profesores Ángel Vaca Lorenzo y Guillermo Lira por el estímulo. Una primera versión del ensayo apareció publicada en A. Vaca Lorenzo, ed., *La guerra en la historia*, Salamanca, 1999.

2. W. L. Scruggs, *The Colombian and Venezuelan Republics*, Boston, 1905, pp. 146-155.

3. *Ibidem*, p. 146.

4. M. M. Ballou, *Equatorial America*, Boston y Nueva York, 1900, p. 91.

5. P. Martin, *Through Five Republics of South America*, Londres, 1905, pp. 155-59, y 200.

6. R. Núñez, *La reforma política*, vol. 6, Bogotá, Editorial ABC, 1946, p. 37.

7. J. Espinosa, *Diccionario para el pueblo: republicano democrático, moral, político y filosófico*, Lima?, 1855, p. 548.

8. Mi interés inicial por una lectura social de las guerras civiles estuvo motivado por el ensayo pionero de Malcolm Deas, «Pobreza, guerra civil y política. Ricardo Gaitán Obeso y su campaña en el río Magdalena en Colombia, 1885», en *Nova Americana*, 2, Torino, 1979, recién reproducido en Deas, *Del poder y la gramática*, Bogotá, 1993. Véanse también los más recientes trabajos: Frank Safford, «The Problem of Political Order in Early Republican Spanish America», *Journal of Latin American Studies*, vol. 24, 1992; A. McFarlane y M. Wiesebron, eds., «Violencia social y conflicto civil: América Latina, siglos XVIII-XIX», en Ahila: *Cuadernos de Historia Latinoamericana*, No. 6, 1998; Museo Nacional de Colombia, ed., *Las guerras civiles desde 1830 y su proyección en el siglo XX*, Bogotá, 1998; y Rebecca Earle, ed., *Rumours of War. Civil conflict in Nineteenth-Century Latin America*, Londres, Institute of Latin American Studies, 2000.

9. G. Sánchez, *Guerra y política en la sociedad colombiana*, Bogotá, El Áncora, 1991, pp. 14-25.

10. Véanse, por ejemplo, Lawrence Stone, *The Causes of the English Revolution, 1529-1642*, Reading, 1982; y J.C.D. Clark, *Revolution and Rebellion. State and Society in England in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, Cambridge, 1986.

11. B. H. Reid, *The Origins of the American Civil War*, London y Nueva York, Longman, 1996, pp. xiii-11.

12. B. Catton, *America Goes to War. The Civil War and its Meaning in American Culture*, Hanover y Londres/Wesleyan University Press, 1986, primera edición 1958.

13. *Ibidem*, pp. 69, 70 y 126.

14. Citado en C. Malamud, «La restauración del orden. Represión y amnistía en las revoluciones argentinas de 1890 y 1893», en E. Posada Carbó, ed., *In Search of a New Order. Essays in the Politics and Society of Nineteenth-Century Latin America*, Londres, Institute of Latin American Studies, 1998.

15. J. Gil Fortoul, *Historia constitucional de Venezuela*, Berlín, Carl Hymann Editor, 1907, p. 414.

16. Espinosa, *Diccionario para el pueblo*, p. 818.

17. *Ibidem*, pp. 545-552 y 811-813.

18. Malamud, Carlos, y Paula Alonso, «La restauración del orden», tesis doctoral en la Universidad de Oxford. De cómo la revolución se entendió frecuentemente como «un retorno a los orígenes» en Inglaterra antes del siglo XIX, véase Clark, J. C. D., *Revolution and Rebellion, State and Society in England in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, pp. 3-4.

19. José María Samper, *Ensayo sobre las revoluciones políticas*, Bogotá, Editorial Incunables, 1984, primera ed., 1861, y Arturo Alessandri, *Revolución de 1891*, Santiago, Editorial Nascimento, 1950, pp. 84-85.

20. M. A. Caro, «Americanismo en el lenguaje», 1878, en *Obras completas*, vol. 5, Bogotá, 1928, p. 123. Caro hacía eco allí de unas opiniones de Andrés Bello. El argumento fue desarrollado años más tarde de manera más sistemática por el sociólogo venezolano Laureano Valenilla Lanz, en su obra ya clásica *Cesarismo democrático*, Caracas, Empresa El Cojo, 1919. Algo similar podría decirse sobre la guerra de Diez Años, 1868-1878 en Cuba. Véanse las observaciones de Antonio Carlo Gallenga, *The Pearl of the Antilles*, Londres, 1873, pp. 63-64.

21. Véanse D. Sarmiento, *Los caudillos*, Buenos Aires, El Ateneo, 1928, y Lía E.M. Sanucci, *La renovación presidencial de 1880*, Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, 1955.

22. J. Álvarez, *Estudio sobre las guerras civiles argentinas*, Buenos Aires, El Ateneo, 1914, pp. 6-7.

23. D. Sarmiento, *Facundo*, Buenos Aires, 1976, p. 20.

24. Lucas Ayarragaray, *La anarquía y el caudillismo.*, Buenos Aires, Félix Lajounane y Cia. Editores, 1904, pp. 2-3.

25. Álvarez, *Estudio sobre las guerras*, p. 11.

26. *Ibidem*, p. 150.

27. *Ibidem*, pp. 154-155.

28. *Ibidem*, pp. 11-12.

29. M. Deas, «Pobreza, guerra civil y política. Ricardo Gaitán Obeso y su campaña en el río Magdanela en Colombia, 1885», en *Del poder y la gramática*, Bogotá, Tercer Mundo, 1993, p. 121. Este ensayo apareció antes en *Nova Americana*, 2, Torino, 1979, pp. 262-303. Otro trabajo donde también se enfatiza el efecto de las crisis del sector externo en las guerras civiles es Charles W. Bergquist, *Coffee and Conflict in Colombia, 1886-1910*, Durham, Duke University Press, 1978.

30. Véase, por ejemplo, John Chasteen, «Fighting Words: The Discourse of Insurgency in Latin American History», *Latin American Research Review*, 28:3, 1993.

31. Ayarragaray, *La anarquía argentina*, p. 116.

32. *Ibidem*, pp. 123-124.

33. Sarmiento, *Los caudillos*, p. 121.

34. A. Edwards, *La fronda aristocrática*, Santiago, Editorial Universitaria, 1991, primera ed., 1928, pp. 116-117.

35. *Ibidem*, p. 134.

36. Para una descripción de los eventos, véase Fernán E. González, «La guerra de los supremos», en *Gran enciclopedia de Colombia*, pp. 335-366. Un examen de las diversas causas de esta guerra están en el ensayo de Rebecca Earle, en Earle, ed., *Rumours of War*.

37. Manuel Briceño, *La revolución, 1876-1877*. Bogotá, Imprenta Nueva, 1878.

38. *Ibidem*, pp. 105 y 289.

39. *Memoria del Secretario Jeneral del Estado Dr. Casimiro del Corral que presenta a la Asamblea Constitucional de 1871*, Sucre, 1871.

40. Publicado en el *Journal of Latin American Studies*, octubre de 1984.

41. M. Góngora, *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX*, Santiago, Editorial Universitaria, 1992, pp. 29-38.

42. Véanse: Daniel Riquelme, *La revolución del 20 de abril de 1851*, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1966; Ricardo Donoso, *Las ideas políticas en Chile*, México, Fondo de Cultura Económica, 1946, p. 408; Alberto Edwards, *El gobierno de don Manuel Montt, 1851-1861*, Santiago, 1932, p. 308.

43. Carta a sus padres, Santiago, septiembre 29 de 1865, en Rhoda E. White, ed., *Memoirs and Letters of Jenny C. White del Bal*, Dublín, 1885, p. 295.

44. L. Striffler, *El río Cesar*, fotocopia sin fecha, posiblemente 1882.

45. Edwards, Alberto, *El gobierno de don Manuel Montt 1851-1861*, Santiago, Editorial Nascimento, 1932, p. 271.

46. *Reseña histórica de los principales acontecimientos políticos de la ciudad de Cali, desde el año de 1848 hasta el de 1855 inclusive*, fotocopia sin fecha, 1855?.

47. Pedro Pablo Figueroa, *Historia de la revolución constituyente, 1858-1859*. Santiago, Imprenta Victoria, 1889, pp. 357-358.

48. Edwards, *El gobierno de don Manuel Montt*, pp. 253, 254, 262-265, 267, 271, 273, 277, y 280.

49. Riquelme, *La revolución del 20 de abril*, p. 78.

50. *Ibidem*, p. 151.

51. Figueroa, *Historia de la revolución*, p. 386.

52. Edwards, *El gobierno de Manuel Montt*, p. 315.

53. *Ibidem*.

54. Samper, *Ensayo...*, p. 11.

CAPÍTULO 3

DE LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS A LA PÉRDIDA DE PANAMÁ

THOMAS FISCHER

NACIÓN EN CRISIS, REGIÓN DESESTABILIZADA, E INTERESES EXTRANJEROS

Los contemporáneos de finales del siglo XIX eran conscientes de vivir en un período de transición, que llevaba en su seno profundas contradicciones, sin saber qué les depararía el nuevo siglo. Así pues, se sentían los hombres que hacían historia al final del siglo antepasado en Colombia, cuando en 1899 empezó una guerra civil, la llamada guerra de los Mil Días. Este enfrentamiento significó la culminación de una serie de guerras civiles que marcaron el siglo XIX. Aunque el conflicto armado entre liberales y conservadores no afectó a todos los departamentos de la misma manera, dividió a la población más que nunca. Fue quizás la guerra más desastrosa, tanto en lo referente a los daños ocasionados en la economía nacional como en lo referente a las bajas humanas registradas. Un año después del final de la guerra se separó el departamento de Panamá. Esto se debió a la fragilidad del sistema político poco apto para responder a la negociación del problema más urgente de la agenda internacional del país: la transacción de los derechos para excavar y construir por territorio colombiano un canal que uniría el océano Atlántico con el Pacífico en favor de los Estados Unidos. Con la ocupación de Cuba y Puerto Rico, esta potencia se había establecido como poder hegemónico en la región, desplazando a las potencias europeas. No cabe lugar a dudas de que la crisis que atravesó Colombia marcó un cambio fundamental en la conciencia nacional.

En este ensayo el análisis se centrará en la llamada guerra de los Mil Días y su relación con la pérdida de Panamá. Para ello se adoptará un enfoque que considera tanto la dimensión nacional de la crisis como los factores regionales determinantes y la actuación de los poderes extranjeros. Empezando con una interpretación de los antecedentes de la guerra,

se añadirá un resumen de las etapas de la confrontación armada y un balance crítico sobre sus repercusiones. Seguidamente se estudiará el papel jugado por los otros países latinoamericanos, las potencias europeas y finalmente los EE. UU.

En la primera parte, que trata sobre las causas y el transcurso de la guerra, se recurre sobre todo a la rica literatura secundaria, pero la evaluación de la dimensión internacional del conflicto armado entre liberales y conservadores, poco investigada hasta ahora, se basa principalmente en el estudio de fuentes primarias. De hecho, exceptuando el trabajo de Patricia Pizzurno Gelos[1], rara vez se conceptualiza adecuadamente el contexto internacional, el cual fue determinado por la «coyuntura liberal», la guerra de Independencia de Cuba, el panamericanismo, el intervencionismo imperialista *yankee* y la indiferencia europea (con la importante excepción de Francia). Los apartados sobre la negociación del Canal y la separación de Panamá también se basan tanto en la bibliografía científica como en el estudio de las fuentes primarias.

LOS ANTECEDENTES DEL CONFLICTO ARMADO: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS

Desde la aparición del estudio ya clásico de Charles Bergquist titulado *Café y conflicto en Colombia*, la opinión según la cual los factores que provocaron este conflicto armado tienen origen en el sistema de la llamada Regeneración lograba cada vez más aceptación[2]. Esta fase de dominio conservador empezó en los años ochenta del siglo XIX con el movimiento disidente liberal de los independientes dirigido por Rafael Núñez (presidente, con interrupciones, entre 1880 y 1888). Después del triunfo de los independientes y conservadores contra los radicales en la guerra civil de 1884-1885, fue constituida una coalición gubernamental nacionalista-conservadora[3]. Las instituciones centrales se fortalecieron mediante la creación del monopolio estatal de emisión de papel moneda y la fijación de su curso forzoso, la restauración de la autoridad de la Iglesia católica dentro de la sociedad, la introducción de la censura de la prensa y el restablecimiento de un Ejército nacional. Pero la mayor reforma fue, quizás, la proclamación de Colombia como república unitaria. En la Constitución de 1886 se estableció que ya no existirían presidentes elegidos en el plano regional sino que se nombrarían gobernadores por el mismo Presidente de la República. Además, el jefe del Estado y del gobierno nombraría a los magistrados de la Corte Suprema y de los tribunales regionales. La elección presidencial cobró, pues, a partir de este momento, una enorme importancia[4]. Sin embargo, el proceder para seleccionar los representantes políticos se parecía normalmente poco a lo que hoy en día se llaman *elecciones libres*. El sistema político y las prácticas electorales manipuladoras adoptadas, favorecían al Ejecutivo (entre 1888 y 1904 no fue nombrado ningún liberal para el Senado)[5]. Según Mario Aguilera Peña éste fue un gran asunto de discusión interna en el Partido Liberal. Dentro del partido «Se juzgaba que de nada servía que el derecho electoral estuviera consagrado en las normas constitucionales cuando el gobierno carecía de honradez, formaba las listas electorales, mantenía un cuerpo sumiso de funcionarios y luego reprimía las protestas contra los abusos[6]». Si bien es probable que los resultados electorales no se basaran en un engaño sistemático[7], tampoco cabe

duda de la gran ventaja institucional que tenían los grupos gubernamentales en el proceso electoral. La esfera política, dominada por los conservadores y los nacionalistas, tenía entonces una apariencia no solamente centralista sino también autoritaria. Valga señalar que los políticos de la Regeneración no gozaron de los medios militares, administrativos y fiscales para compensar efectiva y duraderamente las deficiencias de legitimidad[8].

Sorprendentemente, este sistema, que excluyó a un importante sector de las élites económicas, resultó estable durante una década entera. Al éxito de la hegemonía conservadora no solamente contribuyó la unidad a nivel nacional y la debilidad del liberalismo en aquellos años, sino también la coincidencia de estos factores con el auge cafetero[9]. El incremento de la economía de Colombia central recompensaba notablemente a los caudillos liberales por haber sido excluidos del poder político.

A mediados de los años noventa salieron claramente a la luz las profundas diferencias ideológicas y económicas de las clases dirigentes, hecho que obstaculizó la reforma del sistema político a través de medios legislativos y electorales. La oposición liberal, vinculada con el comercio de exportación e importación, exigía una moneda fuerte, es decir, el regreso al patrón oro, tarifas arancelarias bajas y atención a la deuda externa; por otro lado, los nacionalistas, que representaban los intereses de la burocracia, la Iglesia y la agricultura tradicional, no querían abandonar sus ideas. Pero cuanto más se expandía el sector cafetero y se reforzaba la necesidad de modernizar el diseño de la política económica, más perdía la coalición gubernamental el apoyo de los desilusionados conservadores históricos. Las fuerzas antigubernamentales (es decir, aquellas que estaban en contra de los conservadores nacionalistas en el poder) estaban entonces formadas por los liberales expulsados de la participación política, los caciques regionales limitados en su poder por la administración central de los recursos y los conservadores históricos en desacuerdo con la dirección de Hacienda y la política monetaria. A ello se sumó la insurgencia de sectores populares en la capital durante los años 1893-1894 que exigían la intervención estatal para que aumentara su nivel de vida[10]. Sin embargo, no existía ningún consenso entre los diferentes grupos opositores cuando, en 1895, algunos liberales tomaron las armas por primera vez. Por consiguiente, la mal preparada rebelión contra el controvertido gobierno de Miguel Antonio Caro (1892-1898) fracasó en el término de pocos días[11].

Después de la victoria del ejército gubernamental, aumentó el resentimiento contra la política nacional-conservadora. Un factor bastante debilitador del poder central fue la elección, en 1898, del presidente Manuel Antonio Sanclemente, de 84 años de edad, oriundo de Buga y abogado de larga carrera política[12]. Por su senilidad progresiva dejó gobernar a su vicepresidente, José Manuel Marroquín, antiguo rector del Colegio del Rosario en Bogotá, conservador histórico y buen católico, que nunca había salido de la sabana de Bogotá. Marroquín era un poco más joven, pero también tenía más de 70 años. La crisis de gobernabilidad se vio agravada por la caída de los precios del café en el mercado mundial a partir de 1896.

A medida que la corriente pacifista dentro del Partido Liberal perdía la esperanza de poder cambiar la situación a través de medios democráticos, se vio reforzada la postura de la facción belicista bajo el mando del paisa Rafael Uribe Uribe, abogado, publicista, político y

hombre de negocios que había luchado por la causa liberal en las guerras de 1876, 1885 y 1895. Aunque la aparente polarización política se debía a condiciones históricas determinadas, el conflicto de fin de siglo también se incorporó a la tradición de guerras civiles. Todos los conflictos armados colombianos del siglo XIX estallaron en el contexto de instituciones estatales poco consolidadas. De hecho, el concepto del Estado nacional fue estremecido en repetidas ocasiones por opiniones polarizadas en torno a los fundamentos de la organización nacional de los ciudadanos colombianos. Los temas que separaron más a la población fueron el grado de la representación de las regiones (o su grado de autonomía administrativa), el rol de la Iglesia católica en la sociedad, el modelo de desarrollo económico y el acceso de grupos particulares a los recursos nacionales[13]. En términos generales, puede concluirse que Colombia estaba en una casi permanente crisis nacional[14].

Finalmente, el ánimo de confrontación de los liberales se vio respaldado por factores externos. En primer lugar por el hecho de que, coetáneamente predominaban gobiernos liberales en países vecinos, como Ecuador y Venezuela, al igual que en México y Nicaragua. Aparte de esto, había estallado en 1895 la guerra de Independencia de Cuba, también bajo los signos del liberalismo. Si bien a raíz de la intervención de los EE. UU. la situación de los revolucionarios en el Caribe se complicaba, este conflicto contribuyó bastante a la movilización de los liberales en la región, aunque la discusión al respecto tuviera un carácter restringido[15], ya que la prensa liberal en su mayoría había sido cerrada. Quizás resulte exagerado hablar de una «Internacional Liberal»[16] —ya que este movimiento incorporaba corrientes ideológicas, grupos sociales e intereses económicos muy diversos y carecía de una estructura supranacional— pero no puede negarse que los notables liberales de Colombia gozaron de la simpatía de los políticos liberales en América Latina. El concepto de la Regeneración colombiana les parecía, pues, un anacronismo para entrar en el nuevo siglo. Fue entonces, el 17 de octubre de 1899, cuando estalló la guerra de los Mil Días.

DE LA CONFRONTACIÓN ARMADA EN COLOMBIA CENTRAL A LA GUERRA EN EL ISTMO

Este conflicto armado se puede dividir en tres etapas: la primera fase es conocida como «la guerra de los caballeros» (1), la segunda, por su carácter desesperado, «guerra guerrillera» (2), y la tercera como «confrontación liberal-conservadora en el departamento de Panamá»(3)[17].

1. Al comienzo, la rebeldía liberal tenía su epicentro en el bastión del radicalismo colombiano, situado en el norte del departamento de Santander. Allí se reclutaron cerca de 5.000 rebeldes, principalmente jóvenes artesanos, peones y jornaleros de las haciendas cafetaleras y minas de oro, que a causa de la crisis económica apoyaron a sus patrones liberales, e indígenas que, al igual que los trabajadores mestizos, negros y mulatos, no sabían leer ni escribir. Muchos soldados fueron acompañados por sus «juanas», que prestaban sus servicios como lavanderas, cocineras, enfermeras e incluso como amantes. Algunos de los jefes liberales gozaban de una larga experiencia a causa de su participación en contiendas anteriores o en la revolución cubana.

El Ejército nacional, con seguidores en Colombia central, Antioquia, el norte del Cauca y el sur del Tolima, contaba con 9.000 soldados relativamente bien armados y formados. Los cuadros se habían forjado en su mayoría en guerras civiles anteriores. Aparte de estos *self made men*, había también algunos oficiales instruidos en la Escuela Militar. Cuando la guerra estalló, los cuadros fueron reforzados con generales y coroneles de ocasión, los llamados «generales políticos»[18]. También el Ejército gubernamental llenó sus filas con las «clases bajas», principalmente del sector de la construcción, de la red de transporte, de las haciendas y de las minas; pero, a diferencia de los liberales, éste tenía que reclutarlos a la fuerza, ya que entre las capas bajas era bien conocida la falta de respeto de los oficiales hacia los soldados, a quienes sacrificaban como corderos. La única alternativa al reclutamiento forzoso era la huida. Por esto las selvas colombianas empezaron a poblarse de pequeños productores y trabajadores acompañados de sus familias. Otra medida de los conservadores para debilitar la rebelión liberal fue la detención de los oficiales rebeldes capturados y los civiles simpatizantes con la insurrección en la cárcel moderna de Bogotá (el Panóptico, hoy Museo Nacional) y otras prisiones.

En tanto que los rebeldes tenían que abastecerse a través del comercio clandestino (principalmente efectuado por las vías de Maracaibo-Cúcuta, Orinoco o la costa atlántica)[19], el equipamiento del Ejército gubernamental en cuanto a armas, municiones, mulas, caballos, reses, panela, maíz y textiles, fue satisfactoria. Un factor crucial fue que el puerto atlántico de Barranquilla quedó siempre en manos de las tropas gubernamentales, quienes también lograron controlar el río Magdalena hasta Honda para abastecer a la Colombia central. Es así como, tan solo en 1900, pasaron por las aduanas de Barranquilla las siguientes cantidades de material bélico:

> 230.577 kilos de plomo; 9.987 kilos de municiones; 25.336 kilos de chapas de acero y de hierros; 79.200 kilos de fusiles; 129.021 kilos de balas; 9.987 kilos de municiones de plomo; 42.519 kilos de cápsulas de revólver; 9.987 kilos de machetes; 1.290 kilos de cuchillos; 8.171 kilos de sombreros militares[20].

El transporte de este material bélico desde Honda a Bogotá tardaba más de dos meses, y eran necesarias unas 3.500 mulas[21].

Para financiar al Ejército gubernamental fueron incrementados la renta de licores, el impuesto derivado de la posesión inmobiliaria y el impuesto nacional de degüello; se imprimió papel moneda, se recaudaron (principalmente entre los enemigos del gobierno) contribuciones extraordinarias, y fueron gravadas las exportaciones del principal producto de exportación, el café, con un impuesto especial. Otra medida fiscalista fue la prórroga de la concesión de la construcción del Canal de Panamá a la compañía francesa The New Panama Comp. por seis años contados a partir de 1904. El nuevo contrato con la decaída firma francesa garantizaba al gobierno cierto crédito en el exterior.

Con sus recursos, el control estratégico sobre las importantes vías de transporte (que garantizaba el aprovisionamiento continuo de armas, municiones y víveres) y la mejor preparación para la guerra, el Ejército gubernamental gozaba de enormes ventajas. Esta superioridad logística y material fue decisiva en la gran batalla que tendría lugar el 11 de mayo de 1900 en Palonegro (después de la derrota sufrida en el primer enfrentamiento el 15 de di-

ciembre de 1899, en Peralonso). Los conservadores bajo el comando del general Próspero Pinzón, quien ya había salido victorioso en la rebelión liberal de 1895, con sus 12 mil y 18 mil soldados, destruyeron al ejército liberal que contaba con sólo 8.000 soldados. Con aproximadamente 3.000 muertos y heridos, las ambiciones liberales sufrieron un duro revés; pero este enfrentamiento no significaría el final absoluto de la guerra civil.

2. El 31 de julio de 1900 fue derrocado Sanclemente, y llegó al poder Marroquín[22]. Sin embargo, el hecho de ceder el poder definitivamente a los conservadores históricos no fue suficiente para convencer a los liberales alzados en armas y a sus simpatizantes de terminar con la rebelión y entrar en negociaciones. Ellos, después de la derrota de Palonegro, replantearon su estrategia y reestructuraron su cuerpo armado restante. Buscaron respaldo en el exterior, principalmente en Venezuela, Ecuador y Centroamérica, y adoptaron la táctica guerrillera. A partir de este momento, sus ataques se centraron en las montañas y colinas de Cundinamarca y el Magdalena Medio, en las zonas de colonización cafeteras de Sumapaz, Tequendama, la Palma, en el distrito minero de Mariquita, en los Llanos Orientales, en la costa atlántica y el Istmo de Panamá. Por otro lado, en Bogotá el gobierno reaccionó endureciendo las penas y, en general, el tratamiento al enemigo.

Los efectos económicos de la guerra guerrillera fueron terribles[23]: se produjeron interrupciones en las exportaciones, no solamente por falta de trabajadores en las haciendas sino también por las interrupciones en el transporte, los robos y las confiscaciones de mercancías, reses y mulas. Además, a raíz de la emisión masiva de billetes, la moneda colombiana decayó cada vez más en el mercado exterior. Nadie podía predecir cuánto valdría realmente, y esto propició el surgimiento de un grupo de financieros especializados en la especulación de la moneda. Si ya los hechos económicos les parecían graves a los dirigentes de ambos partidos, más les alarmaría la pérdida del control sobre las clases populares. La guerra, efectivamente, se legitimaba a sí misma, autogenerando sus propias razones para prolongarse. Aprovechando la desaparición de la jerarquía social, los oficiales y las autoridades locales hicieron sus «negocios» por cuenta propia; grupos de soldados se organizaron en pandillas bandoleras aprovechándose en demasía de la inseguridad general. El miedo y la corrupción se adueñaron de la situación.

Por este motivo, el gobierno promulgó el 12 de junio de 1902 un decreto y ofreció a todo rebelde una amnistía y amplias garantías personales para quien se entregase antes del primero de julio del mismo año. Pero pocos se rindieron.

3. El tercer acto de la guerra tuvo lugar en el istmo de Panamá, donde el oficial liberal caleño Benjamín Herrera, de larga trayectoria militar durante la hegemonía liberal, logró formar, después de algunos fracasos, un ejército numeroso, bien armado y disciplinado a partir de la Navidad de 1901[24]. Su estrategia consistía en conservar el territorio occidental y permanecer allí hasta que las tropas gubernamentales se acercasen. El Istmo estaba predestinado a ser escenario de actividades militares de los liberales de Colombia central, ya que la mayoría de la población era liberal y la marcha desde la provincia de Chiriquí hacia Ciudad de Panamá, iniciada a mediados de 1900 por Belisario Porras, oriundo de la provincia de Los Santos, había preparado el terreno. Hay que recordar que los istmeños sufrieron bajo los ejércitos del gobierno, principalmente por el abuso de sus oficiales. Carl Otto We-

ber, un científico alemán, describió al Ejército gubernamental estacionado en Colón, de la siguiente manera:

> Realmente debería ser difícil encontrar en otra parte del mundo tal colección de depravados. En lugar de representar al poder armado de un gobierno, estas tropas causan más bien la impresión de ser una pandilla de ladrones constituida en gran parte por jóvenes entre 14 y 18 años. Cada tren que parte de Colón a Panamá está acompañado por un destacamento de estos individuos como medida de protección, pero, según dicen, estos soldados se negaron repetidas veces a bajar del tren para atacar a tropas de la insurrección que se reunían a lo largo de la vía férrea[25].

Herrera concentró sus tropas en David y Aguadulce, a unos 100 kilómetros al norte de Panamá y cerca de la costa pacífica, donde esperó al Ejército gubernamental. En poco tiempo los liberales se impusieron en el frente marítimo, impidiendo que llegaran soldados, armas y municiones para apoyar a las tropas gubernamentales desde el departamento del Cauca. La derrota del ejército conservador en Aguadulce era entonces inevitable[26].

Mientras Herrera avanzaba con sus columnas, Uribe Uribe, después de haber regresado a tierras colombianas en septiembre de 1902 para dedicarse a organizar mejor las unidades de combate en el departamento de Magdalena, no hizo progresos y decidió rendirse. El 24 de octubre de 1902 el «alma de la rebelión liberal» (Bergquist) firmó el llamado Tratado de Neerlandia. Esto les significaría a los rebeldes en el Istmo la falta de aliados, ya que las tropas conservadoras de la costa atlántica se trasladarían allí. Por tal motivo Herrera puso también fin a la guerra el 21 de noviembre del mismo año, aceptando una propuesta de paz de los representantes del gobierno. Esta propuesta no solamente incluía disposiciones concernientes a sus tropas en Panamá sino también válidas para todo el país. El famoso contrato mediante el cual fue terminada esta guerra civil fue firmado a bordo del barco de guerra estadounidense *Wisconsin*, bajo el auspicio de los representantes militares y consulares estadounidenses en el Istmo, por los generales Víctor M. Salazar y Alfredo Vásquez Cobo en representación del gobierno, y por el general Lucas Caballero y Eusebio A. Morales en representación de los rebeldes.

En dicho documento se estipularon los siguientes puntos: 1) liberación de los prisioneros políticos; 2) amnistía para todos los «revolucionarios» que aceptaran los términos; 3) cancelación de las deudas de los liberales en Centroamérica por el gobierno nacional; 4) convocatoria del Congreso para resolver el futuro del Canal, la reforma política y el problema monetario. Este documento aseguraba una salida honrosa para ambas partes y puso punto final a la guerra entre liberales y conservadores.

LAS CONSECUENCIAS: CONVIVENCIA, ESTADO DÉBIL Y ECONOMÍA EXHAUSTA

Después de la guerra y sus catastróficas consecuencias económicas para todas las capas sociales, y de la muerte de aproximadamente 100 mil personas[27], el sistema político no podía permanecer como antes. Aunque es posible constatar que el conservadurismo, a

raíz de la debilidad de los liberales y del empleo de métodos poco democráticos, recuperó su hegemonía, hay que tener en cuenta que el sectarismo y la guerra, como instrumentos políticos, quedaron desacreditados por mucho tiempo. El nuevo ambiente político durante el quinquenio del conservador histórico Rafael Reyes (1904-1909) adquiría visos palpables de una especie de era de convivencia. El hecho de que, bajo el régimen del nuevo «hombre fuerte» a nivel nacional, de regreso después de una larga ausencia como ministro plenipotenciario y *chargé d'affaires* en París, los políticos de ambos partidos tradicionales y sus respectivas facciones persiguiesen los mismos objetivos económicos, se puso, por ejemplo, de manifiesto en la ayuda prestada por algunos liberales con buenas relaciones internacionales para la liquidación de la deuda externa del país. También se puso fin a otra práctica fuertemente criticada por los liberales: la emisión de papel moneda sin control público. Aparte de esto, los miembros liberales contribuyeron como particulares en la modernización de la economía del país. Algunos de ellos incluso aceptaron trabajar en los gabinetes dominados por los conservadores. Finalmente, el mismo Uribe Uribe, quien había sido el abogado más ferviente de la rebelión armada, prestó sus servicios como representante colombiano en Santiago de Chile para contratar una misión militar chilena, con el fin de reformar el decaído y poco efectivo Ejército gubernamental. Cabe destacar que el Estado colombiano todavía era muy débil y se basaba sólo en un frágil consenso entre las élites. La gran masa colombiana no se sentía representada en la política nacional. Además, a nadie escapaba que la economía en decadencia necesitaría mucho tiempo para recuperarse. En total, concordamos con la interpretación de Marco Palacios: «Si bien después de 1902 los jefes políticos rechazaron la apelación a las armas, ésta nunca desapareció del todo de la vida local, como tampoco el recelo de las élites sociales frente al Ejército»[28].

La separación del departamento de Panamá, el 3 de noviembre 1903, casi un año después de la conclusión formal de la lucha armada entre los partidos en conflicto, no estaba vinculada directamente con los hechos de la guerra de los Mil Días. Sin embargo, y como se verá, no se puede negar una estrecha causalidad con esta guerra, ya que el conflicto armado reflejaba la incapacidad total de la clase política de construir un Estado central con una administración racional, en el cual —aparte de los partidos— pudiesen confiar tanto los panameños como los EE. UU. Como consecuencia de esta debilidad política en Colombia, les fue servido a ambos el Istmo en «bandeja de plata»[29].

EL PAPEL DEL LIBERALISMO LATINOAMERICANO

Si bien en la dinámica de la guerra de los Mil Días predominaron fundamentalmente factores interiores, es necesario tener en cuenta la dimensión internacional del conflicto. A este respecto cabe destacar el respaldo que recibieron los liberales desde el exterior. Ya antes de la guerra habían empezado a establecer contactos externos. Esta red de vinculaciones fue uno de sus principales recursos durante todo el conflicto y no logró ser desactivada por el gobierno, aislado en la región[30]. Sin la ayuda de otros gobiernos y muchas destacadas familias latinoamericanas en el campo material, logístico, de recursos humanos y moral, para los rebeldes no habría sido posible mantener una guerra tan prolongada e intensa. Éstos se vieron realmente favorecidos por la «coyuntura liberal» en el exterior:

El gobierno del país vecino Venezuela, sin motivación para cerrar las fronteras e incapaz de hacerlo, dejaba pasar libremente a las tropas liberales colombianas cuando éstas querían. Aunque el gobierno conservador de Colombia protestó formalmente en Caracas, el dictador Cipriano Castro (1899-1908), quien jugaba con la idea de restablecer el territorio de la antigua Gran Colombia, toleraba que la primera expedición de colombianos y venezolanos bajo el mando de Uribe Uribe se preparara en Maracaibo y, acto seguido, armada con rifles Mauser y Marlincher, e incluso con un cañón, penetrara desde allí al territorio santandereano. En 1900 y 1901 fueron importados tan sólo desde Alemania a Venezuela más de 20 mil fusiles Mauser, destinados principalmente a la guerra que se libraba en el país vecino[31]. Maracaibo fue el punto de partida de una primera expedición hacia la Guajira que luego se dirigiría hacia el río Magdalena. Esta campaña, bajo el mando del caudillo santandereano Justo L. Durán, empezó en febrero de 1900. Cuando, a pesar de la ayuda venezolana, el ejército liberal colombiano fue derrotado en la batalla de Palonegro, algunos jefes sobrevivientes disolvieron sus tropas para reforzar las operaciones en la costa atlántica. Frustrado también este proyecto, se trasladaron otra vez a territorio venezolano, donde nuevamente fueron hospedados[32].

Uribe Uribe organizó las tropas liberales restantes que habían huido a Táchira y que se habían multiplicado con soldados venezolanos y reforzado materialmente gracias a los arsenales de Castro. Desde ahí, los rebeldes intentaron invadir de nuevo el territorio santandereano y los Llanos Orientales colombianos. A mediados de 1901 tuvieron lugar varios combates con el ejército conservador colombiano en territorio venezolano. En Táchira estaba estacionado el hermano del dictador venezolano, Celestino Castro, con sus tropas, listo para intervenir en el conflicto. Pero éste tardó en enviar sus columnas, poco motivadas y mal equipadas, a territorio colombiano, donde todavía esperaban los numerosos soldados colombianos conservadores. Éstos estaban provistos en abundancia de armas y se encontraban favorecidos por la topografía[33]. Además, los liberales colombianos fueron apoyados por tropas venezolanas que desembarcaron en Riohacha para unirse al ejército liberal bajo el mando del general Castillo. Sin embargo, esta invasión tampoco tuvo éxito. Siendo tan manifiesto el intento de Venezuela de influir en la política interior de Colombia, el 16 de noviembre de 1901, el vicepresidente Marroquín declaró interrumpidas las relaciones diplomáticas con dicha nación[34].

Por lo tanto, la aportación venezolana en cuanto a los preparativos, el suministro de material bélico y de soldados, así como la disposición del territorio nacional para las tropas liberales que se retiraban, eran factores muy valiosos en favor de la causa liberal, aunque no decisivos, a raíz de la postura vacilante de Castro. En 1902, cuando empezó la tercera fase de la guerra civil, la ayuda venezolana a los liberales se redujo drásticamente, ya que el país entró en una crisis político-económica. El régimen de Castro fue entonces acosado por rebeldes anticastristas provenientes de la zona fronteriza venezolano-colombiana, quienes estaban apoyados por los conservadores colombianos. Además, el dictador venezolano estaba cada vez más aislado, ya que los países extranjeros aumentaron sus presiones, a raíz de sus reclamaciones rechazadas por la confiscación de propiedades extranjeras.

Cuanto más se redujo la ayuda brindada por Venezuela, más se reforzó el apoyo del dictador constitucional ecuatoriano Eloy Alfaro (de 1895 a 1912, con interrupciones). Desde

un principio, el dictador ecuatoriano acogió favorablemente a los rebeldes liberales y les ofreció su colaboración, proporcionándo dinero, reclutando milicianos y aprovisionándolos con fusiles Marlincher, los cartuchos respectivos y dos cañones Krupp[35]. Gracias a este político de visibles tendencias modernizadoras, las tropas de la insurrección en la costa pacífica del departamento istmeño pudieron mantener durante el año 1900 su campaña militar. Mediante las armas y municiones proporcionadas por el pías vecino, los liberales se recuperaron también en el sur de Colombia y en toda la costa pacífica. Herrera logró equipar un barco e invadir Tumaco. Con la ayuda del «hombre fuerte» del Ecuador fue equipada otra fuerza invasora que llegó al oeste del departamento del Cauca, donde se unió con el resto del ejército liberal tolimense para, a continuación, invadir Colombia central.

Frustrados también estos intentos en el Cauca, Herrera se embarcó de nuevo en la lucha, trasladándose a Panamá, donde finalmente el caudillo encontró el apoyo necesario entre las élites locales para alcanzar el éxito. Hasta aquel momento la resistencia panameña había sido apoyada principalmente por el gobierno nicaragüense de José Santos Zelaya (1893-1903), quien en 1900 aprovisionó a la expedición rebelde de Porras, que desembarcó en Chiriquí con 600 fusiles Remington y 129 mil cartuchos[36]. En septiembre de 1901, otro barco nicaragüense con armas y municiones partió del puerto de San Juan del Sur hacia las posiciones de los rebeldes liberales colombianos[37]. Estas acciones —a diferencia de las expediciones apoyadas por Alfaro y Castro, que nunca disimularon su simpatía por los rebeldes liberales— se desarrollaban discretamente; el dictador nicaragüense, quien tenía un compromiso con EE. UU. respecto a la construcción de un canal a través del territorio de su país, no quiso provocar un enfrentamiento directo con esta potencia.

En resumen, puede decirse que el Partido Liberal recibió amplio apoyo logístico y moral de los países vecinos y otros Estados de América Latina. Pero, a pesar de estos servicios sustanciales, lo cierto es que finalmente éstos no bastaron para obtener la victoria. La falta de continuidad y de coordinación entre los simpatizantes de la causa liberal a nivel internacional se tradujo en que los liberales no tuviesen en ningún momento posibilidad alguna de alcanzar el control absoluto en todo el territorio nacional. La ayuda desde afuera bastaba para mantener temporalmente la supremacía militar en algunas regiones fronterizas y de las costas atlántica y pacífica, y también para iniciar una guerra de guerrillas muy efectiva en algunas partes de Colombia central, donde se contaba con el apoyo de la población local. Sin embargo, dicha ayuda no fue suficiente para desestabilizar decisivamente la hegemonía conservadora en los departamentos más poblados de Colombia central: Antioquia y el Cauca. El gobierno en Bogotá, a pesar de estar aislado dentro del contexto látinoamericano, logró mantener el ingreso de armas y municiones compradas en los mercados internacionales y pagadas con los recursos nacionales.

LOS INTENTOS DE MEDIACIÓN INTERNACIONAL

No solamente en el mencionado punto final de la guerra a borde del buque *Wisconsin*, sino también en varias otras ocasiones, los EE. UU. y, adicionalmente, Gran Bretaña, Alemania y Francia ofrecieron sus servicios para acordar la paz. Los representantes de estos países industrializados también ejercieron presión sobre los partidos en conflicto para evitar

el ataque de determinados objetos estratégicos. Si bien cada potencia mundial tenía sus intereses particulares, convergían en dos aspectos: en que el comercio a través del Istmo fuese mantenido, y en que la propiedad de extranjeros no fuese atacada o confiscada forzosamente. Sin embargo, los resultados de las intervenciones de los representantes extranjeros fueron ambivalentes.

A finales de noviembre de 1901, cuando el navío gubernamental *Próspero Pinzón* iba a atacar y bombardear la ciudad de Colón, ocupada por los rebeldes, los cónsules francés, británico y estadounidense, que tenían relaciones con ambas partes bélicas, lograron, en una acción concertada junto con los comandantes de algunos navíos extranjeros presentes, que el combate tuviera lugar fuera de la concentración urbana[38]. Una batalla en Colón habría causado fuertes daños a las grandes inversiones extranjeras en esta ciudad portuaria. Tanto los liberales como las tropas del *Próspero Pinzón* tenían que aceptar las reglas del juego, determinadas por los representantes extranjeros, si no querían arriesgar serias represalias por parte de las fuerzas marítimas de las potencias mundiales. De la misma manera, pero cinco meses más tarde, amenazó el capitán del buque de guerra estadounidense *Macchias*, en acuerdo con el cónsul alemán, al *Próspero Pinzón*, para que éste se abstuviera de proseguir el cañoneo sobre las agencias y almacenes estadounidenses y alemanes en Bocas del Toro, ciudad bananera ocupada por las tropas liberales[39].

A los navíos liberales —que dominaban en el océano Pacífico— también se les prohibió atacar los puertos importantes para el comercio internacional, en los cuales imperaba el capital extranjero. Asimismo, en agosto de 1902, el comandante del cañonero estadounidense *Ranger*, alarmado por la atemorizada colonia foránea, impidió a los liberales cañonear Ciudad de Panamá[40]. En las ciudades portuarias de Santa Marta y Colón intervinieron de manera similar buques estadounidenses para evitar daños a la propiedad extranjera[41].

Mientras que el intervencionismo en el istmo de Panamá daba los resultados esperados por las potencias extranjeras, los esfuerzos de reconciliación en el conflicto fronterizo con Venezuela fueron menos exitosos. La presión diplomática que ejercía desde Washington el secretario de Estado, John Hay, a fin de evitar una guerra abierta entre los ejércitos de los gobiernos de Colombia y de Venezuela, resultó poco alentador. Este prestigioso político estaba preocupado por la creciente pérdida de estabilidad en la región y por las dificultades que se generaban en vísperas de la Segunda Conferencia Interamericana sobre la solución pacífica de los conflictos en América, que se celebraría del 22 de octubre de 1901 al 31 de enero de 1902 en Ciudad de México. Por estos motivos ofreció, en agosto de 1901, sus servicios como mediador para restablecer la armonía entre los dos países vecinos. El dictador venezolano le volvió la espalda durante este proceso[42]. Además, el gobierno conservador colombiano, en apuros, invitaba a los representantes de Alemania y Francia en Caracas a presionar a Castro y a aceptar una solución política[43]. De esta acción no pudieron resultar efectos positivos, ya que entonces los representantes de Europa en Venezuela, como ya hemos mencionado, habían perdido su confianza en los canales diplomáticos[44]. Una iniciativa sudamericana, en la cual se juntaron los países del subcontinente que no estaban involucrados directamente en el conflicto colombiano, tampoco resultó exitosa. Los delegados de estos países apoyaron durante la Conferencia Interamericana una resolución para buscar una

salida pacífica[45]. Si bien este esfuerzo fue celebrado en la prensa de los EE. UU.[46], el dictador venezolano lo desechó[47]. Chile, que estaba igual de aislado en la región que el gobierno conservador de Colombia, presentó en la misma conferencia otra resolución que fuera, por su carácter global, aplicable al conflicto colombo-venezolano. En negociaciones con el gobierno de Marroquín, los dos países habían convenido en presentar este proyecto para la instalación de una corte arbitral internacional permanente, con el fin de evitar guerras entre países de América Latina[48]. Sin embargo, la mayoría de los delegados sudamericanos desestimó esta resolución —esta vez debido a su carácter táctico y no retroactivo[49]. Chile también ofreció sus buenos oficios para mediar entre los gobiernos de Marroquín y Castro a través de Francisco J. Herboso, el enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Bogotá[50]. Esta propuesta tampoco resultó fructífera. —Después del fracaso de todos los intentos por obtener una salida pacífica, Marroquín tuvo que declarar interrumpidas las relaciones con el país vecino, como ha sido mencionado.

En el norte del Tolima, representantes extranjeros también ofrecieron a los beligerantes sus buenos oficios como intermediarios o actuando sin mandato para conseguir acuerdos a nivel regional. Tras la derrota liberal de Palonegro, los guerrilleros rebeldes habían situado su principal centro de acción en estas zonas, saqueando las haciendas de los conservadores y bloqueando el transporte entre Bogotá y el río Magdalena. El jefe máximo de los guerrilleros en esta región fue el comandante Ramón Marín, mulato y antiguo empleado en las minas de la compañía inglesa The Western Andes Comp. Ltd. en Marmato y Frías.

Siendo idóneo como comandante y gracias a sus amigos dentro de la población local —y especialmente en las minas de oro—, Marín impidió que los conservadores pudieran llevar a cabo un golpe decisivo contra los guerrilleros. El vicecónsul de Gran Bretaña y comerciante John Gillies escribió lo siguiente sobre Marín en una de sus cartas confidenciales al ministro plenipotenciario de su país en Bogotá:

> Un fiel empleado durante muchos años de una compañía minera inglesa se vio arrastrado por incomodidades de la guerra, a tomar las armas, y se convirtió en el jefe de unos cuantos miles de hombres. Con esta fuerza desplegó una maravillosa habilidad a lo largo de la campaña, arrebatando armas y munición en suficientes cantidades como para satisfacer sus demandas al respecto, y lo que hay que reconocerle, ha mostrado gallardía con los vencidos, un rasgo raramente visible en este conflicto que se ha desarrollado de una manera inmisericorde y bárbara[51].

Cuando el legendario «Negro» Marín concentró en las cercanías de Honda alrededor de 2.000 soldados, Gillies, así como el representante francés, Paul Richoux, ofrecieron a Marroquín sus buenos oficios como mediadores. Con este fin se reunieron el 3 de abril de 1902 en la casa de John Russell, el director de las minas de Frías, Gillies, Richoux, el comerciante inglés John Owen, por una parte, y Marín, su secretario Virgilio Leiva y otros liberales por otra[52]. El gobierno en Bogotá había enviado como delegado a su subsecretario de Guerra, quien, según el informe de Gillies, no se encontraba. Los rebeldes dieron a entender en esta reunión que ya estaban cansados de la guerra. No obstante, pidieron el apoyo extranjero a la hora de rendir sus armas, ya que las concesiones verbales del gobierno no les inspiraban demasiada confianza. Además y como condición previa para entrar en negociaciones de paz,

pidieron ser reconocidos como beligerantes, ya que no querían ser tratados como «cuadrillas de malhechores»[53]. A esto se sumó que no querían rendirse antes de consultar al Directorio del Partido Liberal.

Sin embargo, el gobierno no cooperó en la búsqueda de un acuerdo para finalizar la guerra, ya que abusó del armisticio unilateral, declarado por parte de los guerrilleros, para transportar una gran cantidad de municiones de Honda a Bogotá. Marín había puesto sus ojos desde hacía tiempo en este convoy gubernamental[54].

Aunque, por el momento, la reconciliación no fue alcanzada, estos contactos informales facilitaron el acercamiento de los partidos armados; Marín y sus tropas se rindieron a finales de septiembre, cuando ya no vieron posibilidad alguna de alzarse con la victoria, aceptando finalmente la oferta de amnistía.

LAS DIFERENTES POSTURAS DE LOS PAÍSES EUROPEOS

Si bien las potencias europeas y los EE. UU. tenían opiniones muy similares en cuanto a la necesidad de terminar esta guerra y mediar entre los partidos (dado que querían evitar daños a la propiedad individual de sus compatriotas), también tenían intereses muy distintos. Esto se reflejaba principalmente en sus diferentes posturas frente a la Regeneración:

Los gobiernos conservadores tenían un fiel aliado en el gobierno de Francia. Esto se debía ante todo a la actitud empresarial francesa en el Istmo. De hecho, en el Ministère des Affaires Etrangères, la construcción del Canal fue tratada como asunto nacional a pesar de su naturaleza privada. En 1880, la Compagnie Universelle du Canal Interocéanique de Panama inició las obras para la construcción del Canal; pero ya en 1888 se veía forzada a declararse en quiebra. En 1894 se constituyó la Compagnie Nouvelle, que estaba limitada a realizar trabajos de reparaciones para, así, conservar los derechos y poder venderlos más tarde a los EE. UU. Cuando, en 1898, empezaron las negociaciones sobre la prórroga de los derechos para construir el Canal entre la Compagnie Nouvelle y el gobierno de Colombia, la empresa francesa, de la cual todo el mundo sabía que nunca sería capaz de terminar la obra empezada, siguió una táctica bastante reservada. Fingiendo estar poco interesado en una solución rápida, el representante de la compañía francesa en Bogotá, el ágil ex diplomático y gran conocedor de la política colombiana, Alexandre Mancini, trató de bajar la remuneración en el valor de 30 millones de francos franceses (equivalente a 6 millones de pesos de oro) pedida por Colombia. En efecto, Sanclemente adjudicó el 23 de abril de 1900, en una situación desesperada para el gobierno, la concesión de construcción de 1904 hasta 1910 a los hombres de negocios franceses por la irrisoria cantidad de 5 millones de francos franceses (equivalentes a 1 millón de pesos de oro)[55]. Si bien las divisas recientes que ingresaron fueron pocas, hay que tener en cuenta que el gobierno podía contar a partir de este momento con un aliado bien adinerado, aprovisionado y con una red de amigos influyentes en Nueva York y Washington. A continuación, la empresa francesa se convirtió en el mejor agente del gobierno de Colombia para despertar el interés de los políticos estadounidenses hacia la ruta panameña[56].

Francia prestaba sus servicios al gobierno conservador no solamente mediante la inyección de capital y credibilidad internacional, sino también a través del *institution building* en relación con las Fuerzas Armadas. A partir de 1891, y hasta su renuncia en 1898, un francés ejerció como director de la Policía Nacional[57]. Este funcionario ratificó su lealtad hacia los conservadores en el año 1893, cuando puso fin a la protesta de artesanos bogotanos con el uso de las armas[58]. También a nivel militar, Francia estaba presente en misión oficial. La delegación de instructores de este país fue contratada en 1897 con el fin de reorganizar al Ejército e implantar el espíritu profesional en el cuerpo de oficiales[59]. A esto se sumó el hecho de que los contactos político-militares con Francia facilitaron al gobierno de Colombia la compra de armas antes y durante la guerra. Por ejemplo, poco después de estallar la guerra, el gobierno en Bogotá pidió a Francia 9 mil fusiles Grass, los cuales eran pesados pero apreciados por su velocidad y durabilidad[60].

Por lo tanto, podemos decir que Francia mantuvo estrechas relaciones político-militares y económicas con los gobiernos de la Regeneración. La preferencia que daba el *Ministère des Affaires Etrangères* a los contactos oficiales llegó a tal punto que, durante la guerra de los Mil Días, intentó influir en las grandes casas francesas de exportación e importación con el fin de que éstas se abstuvieran de negociar con los liberales. El *Quai d'Orsay* en París instruyó al enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Bogotá, Hugues Boulard-Pouqueville, para que actuase con mucha prudencia en casos de reclamaciones contra el gobierno y evitase cualquier impresión de ofensa:

> La cordialidad de las relaciones que hemos mantenido con Colombia, la simpatía que este país nos ha manifestado notablemente invitando misiones militares francesas, la naturaleza y la importancia de nuestros intereses comprometidos en Panamá, nos exigen actuar en Bogotá con finos miramientos[61].

Mientras que la postura del gobierno francés era indudablemente progubernamental, la posición oficial de Gran Bretaña ante el gobierno conservador de Colombia se puede calificar de «semifría». Esto se debía principalmente al hecho de que muchas empresas inglesas (sobre todo de minería y de ferrocarriles) estaban establecidas en regiones dominadas por los seguidores del Partido Liberal. Durante los tiempos de guerra civil, estas regiones se convirtieron automáticamente en zonas de conflicto armado. Muchos hombres de negocios británicos simpatizaron abiertamente con los liberales, y con frecuencia sus empresas fueron víctimas de robos, de confiscaciones de mercancía y del reclutamiento forzoso de trabajadores por parte de las autoridades conservadoras. En el Public Record Office en Londres se encuentran al respecto numerosas quejas formuladas por el ministro plenipotenciario, George E. Welby, y el *chargé d'affaires* británico *ad interim*, Claude Mallet, al Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano. Otro hecho que dio mucho trabajo a los representantes ingleses en Bogotá y causó descontento en el Foreign Office en Londres, fue la requisa forzosa del navío británico *Taboga* por parte del Gobernador y comandante de las tropas conservadoras en el Istmo, el general boyacense Carlos Albán. El militar confiscaba este buque de la empresa británica para transportar soldados desde Panamá a Buenaventura y Tumaco[62]. Esto fue considerado en el Foreign Office como «unjustifiable act»[63].

Otras quejas dirigidas por el representante de Gran Bretaña al gobierno de Colombia tuvieron su origen en el mal trato dado a los jamaiquinos. A raíz de su preferencia liberal, su color de piel y su idioma, distinto del español, estos inmigrantes negros en el Istmo sufrieron a menudo detenciones arbitrarias, lesiones corporales y robos cometidos por los soldados mestizos del Ejército gubernamental, así como de las autoridades[64].

La sentencia de un tribunal suizo, en octubre de 1899, en referencia a la reclamación de la compañía de construcción de ferrocarriles Punchard, Lowther McTaggart contra el gobierno de Colombia, contribuyó a tensionar la relación entre el gobierno de Su Majestad y los conservadores colombianos en el poder. El tribunal suizo condenó al Estado de Colombia a pagar una compensación por pérdidas[65]. La prensa de la *City of London* calificó esta sentencia como lección para una nación que no había aprendido a respetar la propiedad individual extranjera[66]. Todo esto llevó a que las relaciones oficiales con Gran Bretaña se deteriorasen visiblemente.

Alemania, la tercera potencia europea, optó oficialmente por un comportamiento neutral. El ministro residente Johannes Lührsen trató, al parecer, de evitar intervenciones en la política interior del país. El intento de aparentar un bajo perfil se debió principalmente a los importantes negocios que tenían las casas comerciales alemanas establecidas en Colombia[67]. Pero, al igual que en el caso de Gran Bretaña, la defensa de los intereses del comercio alemán fue un asunto bastante delicado, ya que los establecimientos hanseáticos tenían una posición monopolista en la comercialización del café santandereano (y de Táchira) y un puesto destacado en los campos de la importación/exportación y de la navegación a vapor en la ciudad portuaria de Barranquilla. En estas regiones, al igual que en las zonas donde se habían efectuado las inversiones inglesas, el liberalismo imperaba dentro de las élites locales. Durante la guerra de los Mil Días los ejércitos liberal y conservador lucharon allí también por el control de los recursos y los medios de transporte. Alemania había firmado en 1895 un tratado de comercio, formalizando así sus relaciones diplomáticas con base en la igualdad de los respectivos ciudadanos y el tratamiento de la nación más favorecida en materia de comercio con el país andino[68]. El ministro residente de Alemania, igual su colega francés, se comportaba de forma bastante prudente en el tratamiento de las reclamaciones de sus compatriotas contra el gobierno, optando por esperar hasta el final de la guerra para iniciar el difícil proceso de reclamos[69]. Se abstuvo de intervenir diplomáticamente para compensar la propiedad alemana mientras el Estado colombiano no estuviese dispuesto a cancelar sus deudas. Puesto que la situación de guerra civil era conocida en el mundo entero, el ministro residente era de la opinión de que, en aquellos casos, las pérdidas corrieran a cuenta del riesgo empresarial (y no del gobierno)[70].

Aparte de la propiedad, otro aspecto que influyó en la diplomacia alemana, tanto en el *Auswärtiges Amt* en Berlín como en la Legación en Bogotá, fue la rivalidad geoestratégica del *Reich* con los EE. UU. Mientras que en el ámbito comercial las relaciones entre Alemania y Colombia se formalizaron a través del mencionado tratado de comercio, el Imperio Alemán, a pesar de su intención expansionista en el istmo de Centroamérica, todavía no se atrevía a exigir ventajas preferenciales. Esto se debía a que Alemania carecía de instrumentos de legitimación —instrumentos que sí poseían los EE. UU. tales como la (unilateral)

doctrina Monroe de 1823, el (bilateral) tratado Mallarino-Bidlack de 1846 o la «misión civilizadora» (a la cual se apeló para justificar la invasión en y la ocupación de Cuba en 1898). Si bien la Marina alemana había intervenido en 1895 en Nicaragua y estaba preparando una acción militar contra Venezuela desde 1901, el Imperio Alemán no cuestionó explícitamente la doctrina Monroe[71]. Lo cierto es que tanto en el *Auswärtiges Amt* como en la prensa todos los cambios en favor de los EE. UU. fueron observados con recelo[72].

EL INTERVENCIONISMO DE LOS EE. UU.

La presencia económica de los EE. UU. se limitó al Panama Railroad (la mayoría de las acciones estaba, sin embargo, en manos de la Compagnie Nouvelle), las plantaciones bananeras en el *hinterland* de Santa Marta y en Bocas del Toro, el ferrocarril de Cartagena, el tranvía de Bogotá, la red telefónica en Barranquilla y algunas minas de oro en el Chocó. Las empresas estadounidenses se concentraban en pocas zonas geográficas, lo cual facilitaba su protección desde el exterior. No obstante, el apoyo que brindaban los representantes estadounidenses a sus ciudadanos residentes en Colombia fue subordinado a la pieza clave de la política estadounidense en la región, o sea el Canal. Esto se demostró por primera vez en la rebelión de 1885, durante la cual fue incendiada la ciudad de Colón cuando se retiraban los rebeldes liberales. Las reclamaciones de los hombres de negocios estadounidenses y del ferrocarril de Panamá, que habían perdido mercancías e inmuebles por un valor considerable, no fueron respaldadas enérgicamente por la Legación en Bogotá y el State Department. Esto se debía a que los funcionarios estadounidenses temían el deterioro de la postura de los EE. UU. en las negociaciones por el Canal[73]. Cuanto más evidente era la necesidad para este país de tener acceso a un canal interoceánico y asegurar de este modo el paso de sus flotas[74], más intensificaba el «coloso del Norte» sus esfuerzos por resolver este asunto «por grado o por fuerza, tal como lo había hecho con éxito en Cuba»[75].

Aunque al estallar la guerra civil en 1899, los EE. UU. no tomaron partido abiertamente, puede decirse que simpatizaban con el gobierno colombiano. Esta parcialidad se debía a los informes brindados al Secretariado de Estado en Washington por el pragmático ministro Charles Burdett Hart en Bogotá, quien no creía en los liberales. Como en Estados Unidos no se pensó que los liberales pudiesen conquistar el poder mediante las armas, el gobierno en Bogotá fue apoyado con material bélico. Apenas estallado el conflicto, fue aprobado el suministro de 10 mil fusiles Remington por parte del gobierno americano, medida similar a la que había adoptado Francia[76].

En referencia a la realización de las metas estratégicas norteamericanas en el Istmo mediante negociaciones bilaterales, el secretario de Estado presentó dos peticiones: primero, reclamó el establecimiento de estaciones de carbón sobre las islas de Bahía de Panamá bajo el exclusivo control de la US Navy, y, segundo, exigió los derechos para terminar la construcción del Canal[77].

No obstante, los EE. UU. se equivocaron totalmente al pensar que la debilidad institucional llevaría a los políticos colombianos a hacer mayores concesiones[78]. A la vista de tan alta división política en el país, la gran mayoría de la población (con excepción de Panamá) coincidía en dos puntos: la soberanía formal del Estado de Colombia en el Istmo debía

ser respetada, y los derechos para terminar la construcción del Canal debían ser buen negocio para el país. Aparte de la oposición interna frente a la venta de los derechos para terminar el Canal bajo la influencia de un solo país extranjero, otros obstáculos impidieron la transacción del Canal, entre los cuales cabe destacar la inseguridad sobre el precio que tenían que pagar los EE. UU. a la Compagnie Nouvelle por sus labores realizadas, sus equipos y sus derechos; la preferencia del Congreso de los EE. UU. hacia el proyecto nicaragüense; y el contrato Clayton-Bulwer entre Gran Bretaña y EE. UU. vigente desde 1850, el cual impedía el privilegio exclusivo de una de las dos potencias tanto en la construcción como en el uso del Canal.

Cuando el *lobby* de accionistas y de administradores de la Compañía Nueva, encabezada por William Nelson Cromwell, empezó a organizarse de una forma más efectiva en Washington, y cuando ya habían transcurrido las elecciones presidenciales de 1900, se intensificaron las acciones estadounidenses tendientes a conseguir los derechos en el istmo colombiano[79]. Al mismo tiempo, Marroquín envió al ministro más capacitado de su gabinete, el jefe de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez Silva, con amplios poderes para negociar con los políticos de Washington. A finales de marzo de 1901, el apoderado colombiano entregó al Departamento de Estado un documento preliminar, en el cual esbozó las condiciones para que los EE. UU. pudiesen terminar la construcción del Canal por sí mismos. Pero el gobierno en Bogotá desautorizó el propósito de su propio enviado especial y limitó la prórroga de la concesión a 99 años[80]. A partir de julio se suspendieron las negociaciones a raíz de diferencias entre Martínez Silva y Marroquín.

En diciembre, Marroquín privó formalmente a este político de su mandato y lo sustituyó por su ministro de Guerra, José Vicente Concha, «que desconocía el terreno que pisaba, y ni siquiera hablaba inglés»[81]. Mientras que Martínez Silva se trasladó a México junto con Rafael Reyes para representar a su país en la Segunda Conferencia Interamericana, Concha elaboró en marzo de 1902 un memorándum[82]. Este documento, muy parecido al de Martínez Silva, fue calificado por el Secretariado de Estado como viable para una futura negociación[83]. En el artículo 2 se consagró lo siguiente: «Los Estados Unidos tendrán derecho exclusivo para excavar, construir, conservar, explotar, vigilar (control) y proteger un canal marítimo del Atlántico al Pacífico».

Pero el gobierno colombiano en Bogotá descalificó una vez más la labor de su propio representante e hizo público otro memorándum. Éste fue comunicado a Concha con el fin de someterlo también al State Department. En lo concerniente a los puntos claves para Colombia, o sea la garantía de la neutralidad en el Istmo, la soberanía territorial y la compensación, este propósito divergía bastante de los anteriores, perseguidos por Martínez Silva y Concha. En otras palabras, la base para negociar cambió fundamentalmente, y esto hizo también inverosímil la misión de Concha ante el gobierno de los EE. UU.

Fue así como el ministro estadounidense en Bogotá tenía cada vez más clara la impresión de que en Colombia la opinión pública era por principio hostil a la actitud de los EE. UU. La clase política del país sudamericano temía que, cuando se cediera a los EE. UU. el «control» sobre una faja de varias millas donde se terminaba la excavación del Canal, esto significaría en realidad el dominio eterno de una autoridad extranjera[84]. Los críticos en Co-

lombia alegaban que nadie podía garantizar a esta república que no volvería a ser una colonia semiformal del «coloso del Norte», igual que la «Perla de las Antillas»[85]. Además, la administración Marroquín no buscaba un acuerdo rápido, sino que utilizaba las negociaciones para reforzar su propia legitimidad tanto en el interior como en el exterior[86]. Finalmente, como expuso Felipe F. Paúl, ministro de Relaciones Exteriores, en varias entrevistas con Hart: para tomar una decisión tan importante sería indispensable la convocatoria del Congreso —cosa que era imposible durante la guerra[87]. En lo que concernía a este argumento, los EE. UU. no podían objetar nada desde el punto de vista legal, ya que la práctica de someter los contratos internacionales al Parlamento *ad referendum* era análoga a los trámites usuales del sistema político norteamericano.

Mientras que las relaciones entre EE. UU. y el gobierno de Colombia se encontraban en un punto muerto, las negociaciones entre Washington y Londres progresaban. Después de haber sido frustrada la aprobación de un primer tratado por el Senado de los EE. UU, negociado en 1900 por Hay y el embajador británico en la capital estadounidense, Julian Pauncefote, el 18 de noviembre de 1901, las gestiones entre Gran Bretaña y EE. UU. resultaron fructíferas[88]. Las dos potencias se pusieron entonces de acuerdo sobre la revisión del contrato Clayton-Bulwer. Gran Bretaña, concentrada en la defensa de sus intereses en Sudáfrica, se comprometió a ceder sus privilegios y contentarse con el acceso para todos. «... se convino que el Canal podía ser construido bajo los auspicios del gobierno de los Estados Unidos, quien tendría el derecho exclusivo de reglamentarlo y administrarlo, y se adoptaron como base de neutralización del Canal las relativas al de Suez»[89]. El 28 de junio de 1902 la ley Spooner (nombre debido a su autor, el senador estadounidense John C. Spooner), que autorizó al gobierno de EE. UU. a negociar con Colombia los términos definitivos para el control eterno norteamericano del Canal, pasó el Congreso de los EE. UU. A partir de este momento, los Estados Unidos aumentaron sus presiones para finalizar rápidamente las negociaciones, no estando, por consiguiente, el aplazamiento de la solución en las manos del gobierno conservador de Colombia.

Uno de los instrumentos más poderosos de los EE. UU. fue la amenaza de alcanzar su meta a través del uso de la fuerza militar. El intervencionismo de los EE. UU. en el Istmo se basaba en dos pilares legales: primero, en la doctrina Monroe, que solamente podía aplicarse en el caso de una eventual agresión europea; y segundo, en el artículo 35 del tratado colombo-estadounidense Mallarino-Bidlack. Este artículo permitía al «coloso del Norte» invadir en cualquier momento el Istmo de Panamá con sus tropas con el objetivo de asegurar el libre tránsito[90]. En ello y en el pretexto de proteger la propiedad estadounidense se basaba la permanente presencia de los buques de guerra de esta potencia en las costas pacífica y atlántica.

El 5 de agosto de 1901 el cónsul general de EE. UU. en Panamá, Hermann August Gudger, advirtió a David J. Hill, secretario asistente de Estado, que las tropas de los alzados en armas estaban a punto de acercarse y atacar Panamá y Colón. Esto, sin lugar a dudas, significaba grandes pérdidas en la propiedad extranjera y la interrupción del tránsito ístmico:

> Es sabido que los liberales atribuyen su derrota de hace un año al escrupuloso respeto que le dieron a la Panama R. R. Co. Dicen que si hubieran arrancado los rieles, incendiado los

puentes y cortado los cables telegráficos hubieran triunfado. Con tales sentimientos ¿qué harán hoy día? Quisiera enfatizar también el hecho de que cualquier enfrentamiento en Ciudad de Panamá interrumpe necesariamente el tránsito: los paquetes de correo al igual que los pasajeros inevitablemente tienen que atravesar Panamá[91].

La situación se agudizó, ya que a principios de octubre de 1901 los liberales concentraron cerca de 1.500 soldados armados entre Panamá y Colón[92]. Fue entonces cuando la prensa de EE. UU., histérica por la presión que ejercían Alemania, Gran Bretaña e Italia sobre Venezuela, insistió en que únicamente los EE. UU. estuviesen legitimados para intervenir en el Istmo[93]. El 20 de noviembre los insurgentes liberales entraron en la ciudad de Colón en vagones del ferrocarril y ocuparon de inmediato los puntos estratégicos. La ciudad portuaria quedó sin comunicación con el exterior, porque los rebeldes habían cortado los cables telegráficos[94]. En varias ocasiones paraban los trenes que comunicaban Colón con Panamá. Fue entonces cuando el mismo Gudger vio que «había llegado el horrible momento en que debíamos adoptar una posición firme y decidida»[95]. El telegrama del cónsul estadounidense fue interpretado en el State Department como clave para invadir el Istmo. De inmediato se transmitió al comandante Perry, del buque *Iowa*, la orden de desembarcar soldados tan pronto como Gudger lo pidiera[96].

Cuando el primer contingente de marineros desembarcó en Colón el 25 de noviembre, la reacción de los rebeldes fue mínima. Pero los políticos conservadores, que habían acogido favorablemente la intervención de los EE. UU. en 1885[97], mostraron esta vez su indignación por la presencia extranjera. A través de la intervención, los EE. UU. no solamente habían evitado la confrontación directa de las tropas conservadoras con las liberales, sino que también habían desacreditado al gobierno, el cual era incapaz de asegurar el transporte sobre el Istmo. No obstante, Marroquín, consciente de su dependencia de los EE. UU., se abstuvo de elevar una protesta formal. Después de haberse retirado los 250 marineros estadounidenses al buque *Iowa*, el 3 de diciembre de 1901, Gudger mantuvo la esperanza de que los ejércitos respetaran la línea de Panamá-Colón.[98]

En un artículo publicado hacia mitad del año 1902 en el periódico cartagenero *El Porvenir*, que puede calificarse como semioficial a causa de la libertad limitada, se rechazó enfáticamente cualquier intervención de los EE. UU. El autor hizo un llamamiento a la resistencia unida de Latinoamérica contra el imperialismo yanqui[99]. Los liberales, por su parte, también preferían a los marineros extranjeros fuera del país. Esto se puede deducir de la propuesta hecha por Herrera el 3 de febrero de 1902. Puntualizó: «Neutralicemos de la contienda las ciudades de Colón y Panamá y la línea del ferrocarril, haciéndolas para uno y otro intocables»[100]. Si bien esta propuesta gozaba de cierta simpatía dentro de la colonia extranjera, fue, sin embargo, inaceptable para los jefes civiles y militares gubernamentales.

El 17 de septiembre de 1902, a causa de la inminente derrota de las tropas gubernamentales en Aguadulce y su retirada hacia Panamá y Colón para defender estas dos ciudades estratégicas, desembarcaron una vez más los marineros norteamericanos. Cada tren fue custodiado por 40 ó 50 soldados, y 200 marineros permanecieron estacionados en Panamá.

Los militares conservadores condenaron fuertemente la presencia de los marineros del buque *Cincinnati*[101], y manifestaron poder —con sus 3 mil soldados restantes—, garantizar el tránsito contra los ataques de las tropas liberales (4 mil soldados)[102].

Concha, el ministro de Colombia en Washington, también protestó enérgicamente contra la «intervención armada». En una carta del 3 de octubre, dirigida al State Department, dijo: «El jefe de las Fuerzas Armadas americanas ha asumido de hecho la autoridad superior en la región del Istmo que no está en poder de los rebeldes...»[103]. Aparte de ello, la prensa de algunos países de Centroamérica acusó a los EE. UU. de no haber respetado la soberanía del territorio de América Latina[104]. El comandante Thomas C. McLean, poco impresionable por estas expresiones de disgusto, prohibió, además, a los dirigentes conservadores transportar tropas y municiones que llegasen desde Cartagena[105]. Al mismo tiempo, el *secretary of State* impidió la salida de dos buques solicitados por los conservadores desde San Francisco[106]. Mientras en Washington se argumentó que este acto tenía carácter transitorio y servía únicamente para evitar confrontaciones bélicas que obstaculizaran el tránsito istmeño, el gobierno colombiano guardaba rencor por presunta parcialidad e impedimento de la victoria decisiva. En un informe dirigido al *Auswärtiges Amt*, el cónsul de Alemania describió la situación después de la invasión estadounidense de la siguiente manera:

> Mientras que el comportamiento enérgico del comandante ha dado a los extranjeros y a los comerciantes autóctonos gran satisfacción, el sentimiento de los colombianos conservadores es amargo e incluso hostil a raíz de la humillación experimentada. Es de suponer que este resentimiento estallará recién, cuando desaparezcan los barcos estadounidenses. El Partido Conservador nunca ha despertado grandes simpatías hacia los extranjeros. Los liberales viven la intervención estadounidense experimentando sentimientos ambivalentes, ya que se sienten privados de los frutos de su victoria en Aguadulce[107].

Una generación de historiadores ha gastado tinta para revelar un *master plan* detrás de la expansión imperialista de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico. Según esta interpretación determinista, el departamento de Panamá tenía que ser anexionado más temprano que tarde por el «coloso del Norte»[108]. Pero las fuentes diplomáticas y consulares estadounidenses no dan evidencias de que esta potencia estuviese interesada en aquel momento en una ocupación duradera: primero, porque prefería seguir en el camino de la negociación, y segundo —este argumento fue clave—, porque no fue conveniente efectuar tal agresión unilateral antes, durante y después de que las repúblicas independientes de América Latina se reunieran en México para adoptar soluciones pacíficas sobre los conflictos internacionales[109]. Sin embargo, los *marines* ocuparían el Istmo hasta la pacificación[110].

Así fue como el gobierno colombiano cedió, paso a paso, la soberanía sobre la región istmeña a los EE. UU. También los liberales se sintieron frustrados por la intervención de la marina estadounidense, ya que ellos, como mencionamos anteriormente, se vieron privados de la cosecha de los frutos de su victoria en Aguadulce. En esta situación, inútil para ambos lados, se mejoraron los términos para que ellos buscaran un convenio de paz. Este tratado fue confeccionado entre los partidos bélicos, presionados por el anfitrión, el *rear almiral* Silas Casey, *commander in chief* de la US Navy, quién había reemplazado a McLean, a borde del buque *Wisconsin* durante los días comprendidos entre el 18 y 21 de noviembre de 1902. El asunto del Canal fue uno de los puntos más importantes del acuerdo[111].

LA PÉRDIDA DE PANAMÁ Y SUS CONSECUENCIAS PARA LA CONCIENCIA NACIONAL

Las expectativas de una solución definitiva con respecto al Canal aumentaron cuando los *marines* se retiraron después del tratado de paz. En esta situación, el gobierno de Colombia, legitimado por la reconciliación, ya no tenía ningún argumento para retardar la negociación. Ésta, por lo menos, fue la opinión de Hay. Así lo dio a entender a Tomás Herrán, el secretario de la Legación colombiana en Washington, diplomático de carrera educado en EE. UU. quien había reemplazado como *chargé d'affaires* al inflexible Concha, en un ultimátum del 18 de noviembre de 1902:

> Tengo orden del Presidente para decir a usted que el tiempo razonable que el Estatuto le concede para concluir negociaciones con Colombia para la excavación de un canal en el Istmo ha expirado y no puede prorrogarse, y me ha autorizado para firmar con usted el Tratado del cual tuve el honor de dar a usted un borrador, con la modificación de que la suma de $100.000 que allí se fija como pago anual se aumente a $250.000. No tengo autorización para considerar ni discutir otro cambio[112].

La amenaza tuvo el efecto esperado, y el 24 de enero de 1903 Herrán firmó el documento ansiado con impaciencia por la administración Roosevelt. El ominoso artículo 2 del proyecto de Concha permaneció sin mayores cambios en este convenio. Debido a la transferencia de la concesión francesa a los EE. UU., estos últimos se comprometieron a pagar a Colombia la suma global de 10 millones de dólares. Además, iba a recompensar durante 99 años al Estado colombiano con una renta anual de 250.000 dólares[113].

Pero este contrato tampoco contó con la aprobación pública colombiana, ya que los políticos más influyentes, el ministro de Gobierno Aristides Fernández, y Rafael Reyes, de regreso de su misión diplomática en Francia, permitieron la discusión pública del asunto, manteniendo la ilusión de que el país tendría otras alternativas, incluso la del rechazo total o la de la posibilidad de mejorar los términos. En realidad, tal y como surgió el debate, la clase política se permitió un lujo que tuvo repercusiones monstruosas. En poco tiempo se sabría que el Congreso no ratificaría el traspaso de los derechos para terminar la construcción del Canal tal como lo había previsto el Tratado Hay-Herrán[114]. La única personalidad de prestigio en Bogotá (fuera de algunos panameños) que públicamente tomó parte a favor del pacto negociado por Herrán, fue el comerciante y político liberal Enrique Cortés. El resto de la clase política siguió temiendo la pérdida de soberanía en su propio territorio nacional. Pero el argumento crucial para modificar el tratado era que se exigiera una compensación más alta que la ofrecida por los EE. UU.

Cuando este asunto estaba ya en debate en el Congreso colombiano, Hay consideró conveniente mandar un telegrama a Arthur M. Beaupré, secretario de la Legación, quien había reemplazado a Hart. En la carta amenazó con duras consecuencias si no se aprobaba el convenio tal como era:

> El gobierno colombiano aparentemente no pesa la gravedad de la situación. [...] En caso de que Colombia rechace ahora el tratado o dilate indebidamente su ratificación, la amistosa comprensión entre estos dos países se vería tan seriamente amenazada que en el

próximo invierno el Congreso adopataría medidas que todos los amigos de Colombia lamentarían[115].

Este telegrama fue entregado por Beaupré a Luis Carlos Rico, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, que lo dejó pasar al Congreso[116]. Si bien tal ultimátum expresaba la intención de que en Colombia se ratificase rápidamente el tratado Hay-Herrán, los diputados del Senado consideraron en su mayoría que esta vez no se dejarían extorsionar. Después de otro intento de presionar a Rico, en el que Beaupré negaba la opción de modificar algo en el tratado negociado[117], el Senado desaprobó el convenio Hay-Herrán. Los diputados, bajo la influencia del dogmatismo de Caro, votaron en contra de la recomendación vicepresidencial por razones nacionalistas y, quizás, también por venganza a raíz del golpe contra Sanclemente.

Fue en este momento que los EE. UU. optaron por la separación del departamento de Panamá[118]. Consideraron que la forma más efectiva de ejercer el control en el Istmo era a través del reconocimiento inmediato de la nueva nación de Panamá.

Este *fait accompli* tuvo dos graves repercusiones para los ciudadanos colombianos en lo que quedó del territorio nacional: por una parte, apenas terminada la guerra civil más larga desde la Independencia, los colombianos, ya tradicionalmente divididos, tenían que reflexionar de nuevo sobre las metas de la nación. En Colombia central la pérdida de Panamá fue percibida como «robo» (por parte de los EE. UU.) o como «traición» (por parte de los panameños) ante la actuación débil del gobierno nacional, casi paralizado por las constantes contiendas internas. En efecto, por primera vez la clase política pretendió sentir «dolor» por algo que había pasado en el Istmo. Sin embargo, ello no se debía tanto al amor por la patria sino más bien a la preocupación por el estado de desintegración e ingobernabilidad. Un editorial publicado en el *Nuevo Tiempo* convocó a los ciudadanos a dejar de lado los odios, los intereses particulares y las diferencias políticas: «Las pérdidas territoriales son nada cuando ellas hacen levantar indignada, unificada y vibrante el *alma nacional* que lleva a todos los sacrificios y a todas las abnegaciones»[119]. En efecto, este artículo resume muy bien el barómetro de la opinión de las clases dirigentes.

Por otra parte, quisieran o no las élites, tenían que conformarse con el hecho de que los Estados Unidos se habían establecido irreversiblemente como poder hegemónico sin enemigos en la región. Incluso los mayores Estados latinoamericanos se sometieron a las nuevas reglas de juego cuando reconocieron el nuevo Estado de Panamá[120]. Aunque actos de frustración por parte de sectores populares contra instalaciones estadounidenses fueron frecuentes durante un buen tiempo[121], la administración Reyes también perseguía por razón de Estado una «política de acomodamiento a los EE. UU.»[122]. Los intelectuales del país secundaron la *realpolitik* mediante la construcción de una nueva identidad nacional. Muchos de ellos se hicieron eco del enfoque compensatorio que había planteado en 1900 el urugayo José Enrique Rodó en su obra *Ariel*[123]. Según esta línea de interpretación, el continente de América estaba dividido en dos esferas culturales con destinos adversos: por un lado el norte con su espíritu materialista y su ambición expansionista, y por otro las naciones que conformaron el sur, caracterizados por valores idealistas y pacifistas. Ante el «desastre», gran parte de los colombianos pensaba que ése era el camino por seguir.

NOTAS

1. Patricia Pizzurno Gelos, *Antecedentes, hechos y consecuencias de la guerra de los Mil Días en el istmo de Panamá*, Ediciones Fomato 16/GECU/Extensión Universitaria/Universidad de Panamá, Ciudad de Panamá, 1990.

2. Charles Bergquist, *Café y conflicto en Colombia, 1886-1910. La guerra de los Mil Días: sus antecedentes y consecuencias*, Fondo de Publicaciones FAES, Medellín, 1981, pp. 23-114. Véase, además, Marco Palacios*: Entre legitimidad y violencia. Colombia 1875-1994*, Editorial Norma, Bogotá, 1995, pp. 47-65; Jorge Orlando Melo: la república conservadora. En *Idem* (ed.). *Colombia hoy*, Siglo XXI Editores, Santafé de Bogotá, 1996, pp. 50-56; Carlos Eduardo Jaramillo*: Los guerrilleros del novecientos*, Editorial CEREC, Bogotá 1991, pp. 21-43; Guillermo Plazas Olarte*: La guerra civil de los Mil Días*, Biblioteca de la Academia de Historia de Boyacá, Tunja, 1985, pp. 15-27.

3. Dentro del Partido Conservador hubo dos facciones: la económicamente moderna de Antioquia (históricos) y los tradicionalistas del resto del país.

4. El Presidente no fue escogido directamente en una votación nacional sino por electores elegidos. Solamente los ciudadanos que sabían leer y escribir y podían probar ciertos ingresos tenían el derecho de participar en la elección de los electores. Aparte de ello, a nivel local y regional, fueron elegidos los consejeros municipales y diputados departamentales. Los diputados, por su lado, nombraron a los senadores. (Eduardo Posada-Carbó, «Limits of Power: Elections under the Conservative Hegemony in Colombia, 1886-1930». En *Hispanic American Historical Review*, vol. 77, parte 2, 1997, p. 257).

5. Melo, «La república conservadora», *op. cit.*, p. 52; Julio H. Palacio, *Historia de mi vida*, Editorial Antena, Bogotá 1984 (reeditado), pp. 105-129; Ernst Röthlisberger, *El Dorado. Reise- und Kulturbilder aus dem südamerikanischen Kolumbien*, Bern, Franke, 1898, p. 112; John Lindsay Scruggs, *The Colombian and Venezuelan Republics. With Notes on Other Parts of Central and South America*, Sampson Low, Marston & Co., Ltd., London, 1900, pp. 147-149.

6. Mario Aguilera Peña: *Insurgencia urbana en Bogotá. Motín, conspiración y guerra civil, 1893-1895*, Instituto Colombiano de Cultura, Santafé de Bogotá, 1997, p. 37.

7. Posada Carbó insiste en que las elecciones fueron competitivas. Según este autor, las elecciones en su mayoría no han sido manipuladas decisivamente a través de las prácticas adoptadas como el fraude electoral, la coerción y el patronaje. (Posada Carbó, «Limits...» *op. cit.*, pp. 262-272).

8. Palacios, *Entre la legitimidad...*, *op. cit.*, p. 49 y ss.

9. En cuanto al auge cafetero, véase Marco Palacios, *El café en Colombia, 1850-1970. Una historia económica, social y política*, El Áncora Editores/El Colegio de México, Bogotá/México 1983; José Antonio Ocampo, *Colombia y la economía mundial, 1830-1910*, Siglo XXI Editores/Fedesarrollo, Bogotá, 1984, pp. 301-346; Thomas Fischer: *Die verlorenen Dekaden. «Entwicklung nach außen» und ausländische Geschäfte in Kolumbien, 1870-1914*, Peter Lang, Bern/Frankfurt a. M./New York ,1997, pp. 129-149.

10. Véase el trabajo de Mario Aguilera Peña, *Insurgencia urbana en Bogotá. Motín, conspiración y guerra civil, 1893-1895*, Instituto Colombiano de Cultura, Santafé de Bogotá, 1996. Véase, además, David Sowell: «The 1893 Bogotazo: Artisans and Public Violence in Late Nineteenth Century Bogotá». En *Journal of Latin American Studies*, vol. 21, parte 2, 1989, pp. 267-282.

11. Aparte de Bergquist, Café... *op. cit.*, véase Aguilera Peña, *Insurgencia... op. cit.*, pp. 395-441.

12. Sanclemente abandonó Bogotá y se trasladó primero a Anapoima, luego a Villeta, desde donde «gobernaba» influido por su ministro de Gobierno, Rafael María Palacio.

13. Gonzalo Sánchez, *Guerre et politique en Colombie*, L'Hartmattan, Paris, 1998, pp. 17-30; David Bushnell, Politics and Violence in Nineteenth-Century Colombia. En Charles Bergquist, Ricardo Peñaranda y Gonzalo Sánchez (eds.), *The Contemporary Crisis in Historical Perspective*, Scholarly Ressources Inc., Wilmington, 1992, pp. 11-30; Thomas Fischer, «"Kultur der Gewalt" im nördlichen Südamerika. Was die Reiseschriftsteller des 19. Jahrhunderts sahen». En *Ibero-Amerikanisches Archiv*, vol. 25, partes 3-4, 1999, pp. 325-349; Eduardo Posada Carbó: «Civilizar las urnas: conflicto y control en las elecciones colombianas, 1830-1930. En BCB, vol. 32, N° 39, 1995, pp. 2-25; Álvaro Tirado Mejía, *Aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia*, Colcultura, Bogotá, 1976.

14. La construcción de naciones fue en toda América Latina (así como en otras regiones del mundo) un proceso marcado por sucesos violentos. (Véase Dirk Kruijt/Kees Koonings, «Introduction: Violence and Fear in Latin America». En Ids. (eds.): *Societies of Fear. The Legacy of Civil War, Violence and Terror in Latin America*, Zed Books, London/New York, 1999, pp. 4-8) Pero, a diferencia de otros países de la región, en Colombia, la violencia no fue transitoria sino que perduró durante todo el siglo XIX.

15. Aún no existe un estudio crítico sobre este tema.

16. Jaramillo, *Los guerrilleros...*, *op. cit.*, p. 280.

17. Para lo que sigue véase sobre todo Bergquist, *Café y conflicto... op. cit.*, pp. 117-224. Véase, además, Plazas Olarte, *La guerra... op. cit.*, Jorge Villegas y José Yunis, *La guerra de los Mil Días*, Carlos Valencia Editores, Bogotá, 1979, pp. 51-86; Joaquín Tamayo, *La revolución de 1899*, Biblioteca Banco Popular, Bogotá, 1975, pp. 39-84.

18. Plaza Olarte, *La guerra civil... op. cit.*, p. 32.

19. Jaramillo, *Los guerrilleros...*, pp. 197, 205-208.

20. *Deutsches Handelsarchiv*, t. II, 1902, Barranquilla (Columbien). Handelsbericht des Kaiserlichen Konsulats für das Jahr 1900, pp. 895-897.

21. Despatches from United States Ministers to Colombia (DUS) T33 Roll 57, Arthur M. Beaupré al secretario de Estado, John Hay, Bogotá, 10. 11. 1900.

22. Bergquist, *Café y conflicto...*, pp. 38-42; Tamayo, *La Revolución...*, pp. 85-142.

23. Jaramillo, *Los guerrilleros...*, pp. 130-142. En cuanto a las pérdidas de las empresas extranjeras establecidas en Colombia véanse los párrafos correspondientes en Fischer, *Die verlorenen Dekaden...*, pp. 370-389.

24. Véase sobre todo Pizzurno Gelos, *Antecedentes...*, pp. 94-98, 141-181.

25. Gummi-Zeitung No. 50, 12. 9. 1902, p. 995 (traducido del alemán por el autor de este ensayo). Véase también Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (Bonn) (AAPA), R16698, Informe del comandante del buque S.M.S. Stein, Bachem, al Emperador de Alemania, Charlotte Amalie (Santo Tomás), 18. 12. 1901 (confidencial).

26. AAPA R16.699, Carta del cónsul Arthur Köhpke al Auswärtiges Amt, Colón, 5/10/1902.

27. Es decir, la quinta parte de la población masculina entre 18 y 30 años. (Bergquist, *Café...*, p. 153; Palacios, *Entre la legitimidad...*, p. 67).

28. Palacios, *Entre la legitimidad...*, p. 71.

29. Eduardo Lemaitre, «1903: Panamá se separa de Colombia». En *Nueva historia de Colombia*, t. I, Editorial Planeta, Bogotá 1986, p. 113.

30. En cuanto a los contactos de los liberales con Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Curaçao y Ecuador véase por ejemplo Lucas Caballero: *Memorias de la guerra de los Mil Días*, Colcultura, Bogotá, 1980 (reeditado), pp. 56-66.

31. Ragnhild Fiebig-von Hase: *Lateinamerika als Konfliktherd der deutsch-amerikanischen Beziehungen 1890-1903. Vom Beginn der Panamerikapolitik bis zur Venezuelakrise von 1902/03*, t. II, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1986, p. 969.

32. Pizzurno Gelos, *Antecedentes...*, pp. 108-110; Jaramillo, *Los guerrilleros...*, p. 198 y ss.; 291-295; Plazas Olarte, *La guerra civil...*, pp. 40; 98-100.

33. AAPA R16698, Chargé d'Affaires Gisbert von Pilgrim-Baltazzi al canciller del Imperio Alemán, Bernhard von Bülow, Caracas, 28/9/1901.

34. Véase la documentación publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia: *Interrupción de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela*. Bogotá, 1901.

35. Pizzurno Gelos, *Antecedentes...*, pp. 103-106, 160; Jaramillo, *Los guerrilleros...*, p. 197 y ss., 289-292.

36. Pizzurno Gelos, *Antecedentes...*, pp. 106-108; Jaramillo, *Los guerrilleros...*, p. 199 y ss., 297-300.

37. AAPA 16.698, Carta del cónsul alemán a von Bülow, Guatemala, 4/10/1901 (copia).

38. Pizzurno Gelos, *Antecedentes...*, p. 117 y ss.

39. AAPA 16.699, Heuer al Auswärtiges Amt, Colón, 20/5/1902.

40. AAPA 16.699, Informe de Köhpke para el Auswärtiges Amt, Colón, 28/8/1902.

41. Stephen J. Randall, *Colombia and the United States. Hegemony and Interdependence*, The University of Georgia Press, 1991, p. 79. Hay versión castellana: *Aliados y distantes, historia de las relaciones entre Colombia y EE.UU.*, Tercer Mundo Editores/Ediciones Uniandes/CEI, Bogotá, 1992.

42. Mr. Hay intervened. En *New York Tribune*, 4/8/1901.

43. Ministère des Affaires Etrangères, Paris (AMAEP) NS Colombie, t. 3, Carta del ministro de Relaciones Exteriores, Antonio José Uribe, a Hugues Boulard Pouqueville, Bogotá, 21/7/1901, f. 29D r. (copia).

44. Fiebig-von Haase, *Lateinamerika... op. cit.,*, pp. 850-880.

45. Véase el informe detallado del ministro residente alemán en México. (Hepking a Von Bülow, México, 28/10/1901 [copia]).

46. AAPA 16.698, Carta del ministro residente Quadt a Von Bülow, Washington, 25/10/1901 (copia).

47. «Conflicto colombo-venezolano». En *El Tiempo*, 30/10/1901.

48. Véase los documentos impresos posteriormente en el *Panamá Star & Herald*, 29/10/1902.

49. Chile, a causa de la expansión forzosa de su territorio a costa de sus vecinos Perú y Bolivia, había condicionado su participación en esta Conferencia a la no retroactividad de cualquier arbitraje sobre conflictos fronterizos. Véase a este respecto A. Curtis Wilgus, «The Second International Conference at Mexico City». En *Hispanic American Historical Review*, vol. 11, 1931, pp. 33-44. El interés de Chile también consistía en asegurarse el acceso a un futuro Canal de Panamá.

50. *La Opinión*, 21/11/1901.

51. Public Record Office, London-Kew (PRO/FO) 135/264, Ministro plenipotenciario George E. Welby a Lord Lansdowne, Bogotá, 5/7/1902.

52. PRO/FO 135/267, Gillies a Welby, Honda, 12/4/1902. Las legaciones en Bogotá y el canciller de Gran Bretaña estaban al corriente.

53. Según un decreto promulgado por el ministro de Guerra, Domingo Ospina Camacho, a comienzos de 1901, los guerrilleros fueron considerados como «autores de robos cometidos en cuadrillas de malhechores». (Pizzurno Gelos, *Antecedentes...*, p. 79).

54. DUS T33 Roll 58, Beaupré a Hay, Bogotá, 8/6/1902.

55. James M. Skinner: *France and Panama. The Unknown Years*, 1894-1908, Peter Lang, Bern/Frankfurt a. M./New York, 1989, pp. 155-163.

56. Los artículos 21 y 22 del convenio Salgar-Wyse de 1880 impidieron a los franceses el traspaso del privilegio a los EE. UU. sin haber sido aprobado por el gobierno de Bogotá.

57. Frédérique Martínez: «En busca del Estado importado: de los radicales a la Regeneración (1867-1889)». En *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, N° 23, 1996, pp. 135-140.

58. Véase la literatura bibliográfica en la referencia 8. A partir de este momento la Policía Nacional tendrá fama de ser un puro instrumento político para oprimir a los liberales y a la «clase baja».

59. Estaba previsto instruir a los altos oficiales en la Academia Militar en relación a los métodos modernos de artillería, infantería e ingeniería. Pero, a raíz de todo tipo de obstrucciones por parte de los militares colombianos, la Academia fue cerrada y los intentos de reforma se concentraron a partir de ese momento en la fundación de un batallón politécnico. (Jaramillo, *Los guerrilleros...*, p. 35). Ello tampoco resultó totalmente satisfactorio, ya que uno de los frustrados oficiales franceses simpatizaba abiertamente con la causa de los liberales, mientras que otro cayó del caballo y falleció.

60. DUS T33 R56, Ministro Charles Burdett Hart a Hay, Bogotá, 13/11/1899. Compárese la correspondencia al respecto en AMAEP NS Colombie, t. 10; Plazas Olarte, *La guerra civil...*, p. 35.

61. AMAEP NS Colombie, t. 3, Ministère des Affaires Etrangères, Note, 13/8/1901, f. 55.

62. Pizzurno Gelos, *Antecedentes...*, p. 124 y ss.

63. PRO/FO 135/253, Draft Memorandum, The *Taboga* Case.

64. Véase, por ejemplo, la lista de pleitos en PRO/FO 135/267, Panamá, 6/12/1902 (confidencial).

65. *Diario Oficial*, N° 11.462, 13/3/1901, pp. 189-192.

66. «The Colombian Arbitration». En *The Financial News*, 30/10/1900.

67. En cuanto a los negocios de los alemanes en Colombia, véase, Thomas Fischer, «Deutsche Handelshäuser und Import-/Exportwirtschaft in Kolumbien, 1850-1914». En Boris Barth/ Jochen Meissner (eds.): *Grenzenlose Märkte? Die deutsch-lateinamerikanischen Wirtschaftsbeziehungen vom Zeitalter des Imperialismus bis zur Weltwirtschaftskrise*, LIT, Münster, 1995, pp. 63-86.

68. Informe del subsecretario de Relaciones Exteriores dirigido al Congreso. Bogotá, 1892, pp. 4-6, 51-59. En cuanto a la negociación del tratado desde el punto de vista del comercio y de los industriales alemanes, véase Fiebig-Von Hase, *Lateinamerika...*, t. I, pp. 275-278.

69. Con respecto a la posición alemana, véase por ejemplo la correspondencia entre el ministro residente Johannes Lührsen y el ministro de Relaciones Exteriores colombiano, Felipe F. Paúl. (AAPA R16.698, Informe de Lührsen para von Bülow, Bogotá, 6/12/1901).

70. AAPA R16.698, Lührsen a Von Bülow, Bogotá, 11/2/1902.

71. En cuanto a una visión global sobre el imperialismo alemán en América Latina véase el aparte de la obra mencionada de Fiebig-Von Hase- Walther L. Bernecker/Thomas Fischer, «Alemania y América Latina en la época del imperialismo, 1871-1914». En *Revista de Historia*, N° 33, 1996 (la edición se finalizó en 1998), pp. 9-45.

72. Véase con respecto a la guerra de 1898 entre España y EE. UU. el análisis de Markus M. Hugo: «"Uncle Sam I Cannot Stand, for Spain I have no Sympathy": An Analysis of Discourse about the Spanish-American War in Imperial Germany, 1898-1899». En Sylvia L. Hilton/Steve J. S. Ickringill (eds.): *European Perceptions of the Spanish-American War of 1898*, Peter Lang, Bern/Frankfurt a. M./New York, 1999, pp. 71-93. Véase, además, Nancy Mitchell, *The Danger of Dreams. German and American Imperialism in Latin America, The University of North Carolina Press*, Chapel Hill/London, 1999, pp. 21-31.

73. E. Tyler Parks, *Colombia and the United States, 1765-1934*, Greenwood Press, Publishers, New York, 1968 (reeditado), pp. 312-317.

74. Sobre el contexto global véase Lester D. Langley, *America and the Americas, The United States in the Western Hemisphere*, The University of Georgia Press, Athens, 1989, pp. 93-103.

75. Germán Cavelier, *La política internacional de Colombia*, t. II, Editorial Iqueima, Bogotá, 1959, p. 263.

76. DUS T33 Roll 56, Hart a Hay, Bogotá, 13/11/1899.

77. DUS T33 Roll 57, Beaupré a Hay, 7/1/1901.

78. Las relaciones bilaterales ya se habían deteriorado antes de la guerra por varios motivos: primero, porque el gobierno de Colombia no cedió a las presiones de entrar en la unión aduanera con reciprocidad comercial propuesta por los EE. UU. entre 1892 y 1894. El gravamen a la importación de cueros y café colombianos resultó poco fructífero. (Marco Fidel Suárez: Informe del subsecretario de Relaciones exteriores para el Congreso. Bogotá, 1892, pp. 19-23; *Idem*: Informe del ministro de Relaciones Exteriores para el Congreso. Bogotá, 1894, pp. XXVI-XXXIX). Segun-

do, en una sentencia de 1896 respecto a un conflicto entre Italia y el gobierno de Colombia, el presidente Grover Cleveland (1885-1889, 1893-1897) había condenado al Estado de Colombia a recompensar a los acreedores del ciudadano italiano Ernesto Cerruti. La propiedad de Cerruti había sido confiscada por las autoridades del Estado del Cauca en el año 1884. El gobierno de Colombia no aceptó esta sentencia e insistió en que Cleveland se había equivocado. (Thomas Fischer, «El caso Cerruti. Eine Fallstudie zum Verhältnis von staatlicher Autorität und ausländischer Einflußnahme in Kolumbien im ausgehenden Jahrhundert. En *idem* y Ute Guthunz (eds.): *Lateinamerika zwischen Europa und den USA. Wechselwirkungen, Wahrnehmungen und Transformationsprozesse in Politik, Ökonomie und Kultur*, Vervuert, Frankfurt a. M., 1995, pp. 75-77). El tercer aspecto que enturbió las relaciones colombo-estadounidenses fue la guerra entre España y los EE. UU. por Cuba. El gobierno de Colombia no aceptó las peticiones de reconocimiento de beligerancia de los revolucionarios de aquel país y se declaró neutral, mientras que los liberales se pronunciaron a favor del reconocimiento oficial de los revolucionarios y de una intervención estadounidense. (Cavelier, *La política...*, p. 263). Cuarto: a esto se sumó que desde Cuba regresaron algunos revolucionarios colombianos y cubanos (que a partir de 1898 gozaron de la protección estadounidense) para exportar la «revolución cubana» a Colombia.

79. Véase sobre todo Skinner, *France and Panama...*, pp. 127-153, 163-180.

80. Mensaje que el vicepresidente de la República encargado del poder Ejecutivo, dirige al Congreso Nacional en sus sesiones ordinarias de 1904. En Antonio Uribe (ed.), *Anales diplomáticos y consulares de Colombia*. Bogotá, 1914, p. 806.

81. Lemaitre, «1903...», p. 130.

82. DUS 51 Roll T11.

83. DUA 51 Roll 11, Segundo asistente de Estado Alvey A. Adee, Washington, 1/4/1902.

84. Véase, por ejemplo, el panfleto de Justiniano Cañón, El Tratado sobre el Canal de Panamá, publicado en 1903.

85. El 27 de febrero de 1901 el Senado estadounidense aprobó la Enmienda Platt (según su autor, el senador Orville H. Platt) que fue implantada en la Constitución cubana. Se estipuló que los EE. UU. tenían el derecho de intervenir militarmente en esta isla caribeña cuando ellos consideraran perturbado el orden público.

86. DUS T33 Roll 58, Hart a Hay, Bogotá, 3/2/1902.

87. DUS T33 Roll 58, Hart a Hay, Bogotá, 6/3/1902 (confidencial).

88. Sobre el contexto global y la relación de estos Estados véase Lionel Morris Gelber, *The Rise of Anglo-American Friendship: A Study in World Politics 1898-1906*, Oxford University Press, London 1938; Alec Emslie Campbell, *Great Britain and the United States, 1895-1903*, Longman, London, 1960; Charles Soutter Campbell, *Anglo-American Understanding, 1898-1903*, Johns Hopkins Press, Baltimore, 1957. Con respecto a la opinión pública en Gran Bretaña véase Geoffrey Seed, «British Reactions to American Imperialism Reflected in Journals of Opinion, 1898-1900». En *Political Science Quarterly*, vol. 73, N° 2, 1958, pp. 254-272.

89. Cavelier, *La política...*, p. 276; Tyler-Parks, *Colombia...*, p. 385 y ss.

90. John Major: *Prize Possession. The United States and the Panama Canal. 1903-1979*, Cambridge University Press, Cambridge (Mass.), 1993, pp. 17-24.

91. DUS N°139 Roll 24, Gudger a Hill, Panamá, 5/8/1901.

92. DUS N° 139 Roll 24, Gudger a Hill, Panamá, 7/10/1901.

93. «The United States must forestall any European Intervention in Central America». En *The New York Herald*, 9/8/1901; «Washington is determined to protect the Isthmus». En *New York Herald* 12/8/1901; «A Stick in Time Saves Nine». En *The New York Herald*, 14/8/1901.

94. AAPA R16.699, Carta del cónsul Heuer al Auswärtiges Amt, Colón, 5/10/1902.

95. DUS N° 139 Roll 24, Gudger a Hill, Panamá, 24/11/1901.

96. DUS N° 139 Roll 24, Telegrama de Hill a Gudger, Washington, 30/11/1901.

97. Álvaro Tirado Mejía: *Colombia en la repartición imperialista (1870-1914)*, Editorial Lealon, Medellín, 1976, pp. 49-59.

98. AAPA R16.698, Informe del comandante del buque S.M.S. Stein, Bachem, al Emperador de Alemania, Charlotte Amalie, 18/12/1901 (confidencial).

99. *El Porvenir*, 27/6/1902.

100. Caballero, *Memorias...*, p. 106. Véase también Helen Delpar, «Colombia. Troubled Friendship». En Thomas M. Leonhard (ed.), *United States-Latin American Relations, 1850-1903. Establishing a Relationship*, University of Alabama Press, Tuscaloosa/London, 1999, p. 76.

101. DUS N° 139 Roll 24, Arístides Arjona al vicecónsul Felix Ehrmann, Panamá, 20/9/1902 (copia).

102. PRO/FO 135/267, Carta de Hudson a Hay, Panamá, 27/9/1902.

103. Mensaje al vicepresidente, p. 827.

104. En cuanto a México, véase AAPA R16.699, Carta del cónsul alemán a Von Bülow, 25/10/1902. Con respecto a la postura global de México y los otros regímenes liberales de Centroamérica frente al intervencionismo de los EE. UU. y la doctrina Monroe, véase Jürgen Buchenau: *In the Shadow of the Giant. The Making of Mexico's Central America Policy, 1876-1930*, University of Alabama Press, Tuscaloosa/London, 1996, pp. 44-57.

105. DUS N° 139 Roll 24, Ehrmann a Hill, Panamá, 29/9/1902. Esta actuación estaba en contra de la concesión de la Panama Railroad Comp. que estaba obligada a transportar tropas del gobierno durante períodos de guerra.

106. DUS T33 Roll 58, Telegrama de Hay a Hart, Washington, 7/10/1902.

107. AAPA R16.699, Informe de Heuer para el Auswärtiges Amt, Colón, 5/10/1902 (traducción del alemán por el autor).

108. Véase, por ejemplo, Walter LaFeber, *The Panama Canal: The Crisis in Historical Perspective*, Oxford University Press, New York, 1971; Thomas Schoonhover, *The United States in Central America, 1860-1911. Episodes of Social Imperialism and Imperial Rivalry in the World System*, Duke University Press, Durham/London, 1991, pp. 97-110.

109. No obstante, muy pronto el presidente estadounidense, Theodore Roosevelt (1901-1909) quien sustituyó al presidente asesinado McKinley (1897-1901), elaboraría *la big stick policy*, cuya base radicaba en la pretensión de los EE. UU. de actuar como los policías internacionales de América.

110. PRO/FO 135/267, Informe del cónsul Howard F. Hudson a Lansdowne, Panamá, 27/9/1902.

111. Caballero, *Memorias...*, pp. 194-203. En cuanto a las instrucciones de Hay para la delegación estadounidense en México véase Curtis Wilgus, *The Second International Conference*, p. 45 y ss.

112. Cavelier, *La política...*, p. 295 y ss.

113. Tyler Parks, *Colombia...*, pp. 388-391; Lemaitre, *1903...*, pp. 127-134; Cavelier, *La política...*, pp. 293-300; Senate, 57th Congress, 2d Session, Message from the President of the US.

114. DUS T33 Roll 59, Beaupré a Hay, Bogotá, 30/3/1903; Beaupré a Hay, Bogotá, 15/4/1903.

115. DUS T33 Roll 59, Hay a Beaupré, Washington, 9/6/1903.

116. Un día después, Beaupré insistió, en una larga carta dirigida a Rico, que su gobierno ya no consentiría otros cambios: «The Government of Colombia initiated the negotiations and it cannot be conceived that it should now disclaim its own propositions, nor can my Government acquiesce in such a course». (Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Bogotá, Legación de los Estados Unidos en Colombia, 1887 a 1903).

117. DUS T33 Roll 60, Beaupré a Rico, Bogotá, 5/8/1903.

118. Véase detalladamente Skinner, *France and Panama...*, pp. 187-218; Cavelier, *La política...*, pp. 300-311. En cuanto al mensaje de Marroquín, véase el mensaje que el vicepresidente de la República encargado del poder Ejecutivo dirige al Congreso Nacional en sus sesiones extraordinarias de 1903. Bogotá, 1903.

119. 19/11/1903. Más información sobra la reacción en Colombia se consigue en Joseph L. Arbena: «Colombian Reactions to the Independence of Panama, 1903-1904». En *The Americas*, vol. 33, parte 1, 1976, pp. 130-148.

120. E. Bradford Burns, «The Recognition of Panama by the Mayor Latin American States». En *The Americas*, vol. 26, 1969-1970, pp. 3-14.

121. Randall, *Colombia...*, p. 91.

122. Delpar, *Colombia...*, p. 79.

123. Dagmar Kusche, «Buscar el alma de nuestra nacionalidad». *Nationale Identität und Massenmedien. Zum Beitrag der Presse im Prozeß nationaler Identitätsbildung in Kolumbien*, 1900-1930. Diss. Eichstätt, 1995, p. 150.

SEGUNDA PARTE

PROTAGONISTAS Y MIRADAS DE LA GUERRA

CAPÍTULO 1

DE LA GUERRA REGULAR DE LOS «GENERALES-CABALLEROS» A LA GUERRA POPULAR DE LOS GUERRILLEROS

FERNÁN GONZÁLEZ

La llamada guerra de los Mil Días (1899-1902) evidencia las dificultades que la realidad social y geográfica oponía al modelo de sociedad nacional integrada, impuesto por la Regeneración. Según Marco Palacios, el proyecto político centralizador de la Regeneración no tuvo viabilidad política sino a partir de la conclusión de la guerra, después de 1904-1905, por carencia de respaldo de amplios sectores de la población, ya que muchas de sus disposiciones estaban diseñadas para la exclusión de buena parte de la población, incluso de buena parte de la llamada clase dirigente. La unificación política desde arriba, que restringía severamente la participación política de las masas, era solamente apoyada por una red de algunos caciques regionales y locales: para ellos representaba, paradójicamente, la consolidación de su poder en su propio ámbito frente a adversarios igualmente locales.

Pero los cimientos del proyecto centralizador eran muy endebles, pues las nuevas funciones de intervención económica directa y de control político, que la ideología de la Regeneración le atribuía al Estado, no eran posibles sin una mejor coyuntura económica y, sobre todo, sin una mayor integración interna de las clases dominantes. Concluye entonces Palacios que la fórmula de la República unitaria, que se enfrentaba a los particularismos de la República federal, estuvo lejos de consumarse. Este proyecto unificador y centralizante no lograba neutralizar los focos poderosos de poder donde «se atrincheraban las oligarquías provinciales que no querían pagar ningún precio —ni siquiera el precio fiscal— por conseguir la centralización política y el reforzamiento de un Estado central que eventualmente estaría dominado, según los dirigentes de la coalición *liberal-histórica*, por burócratas y profesionales de la política y manipulado en los niveles locales por los caciques regeneradores»[1].

Este fracaso es evidenciado por la guerra de los Tres Años, que muestra, con toda su crudeza, tanto la precariedad del Estado como la fragmentación del poder en múltiples ins-

tancias regionales y locales, débilmente compensadas por las articulaciones logradas por las organizaciones de los dos partidos tradicionales. Esta precariedad y fragmentación se hacen manifiestas en las dificultades del gobierno regenerador, en manos del vicepresidente Miguel Antonio Caro.

Caro había ido mucho más allá de las restricciones legales de la Constitución de 1886 hasta crear, mediante el uso de la legislación transitoria, un aparato legal y electoral que excluía, en la práctica, a los miembros del Partido Liberal de toda participación en la vida política por medio de las restricciones a la libertad de prensa y la manipulación de la organización electoral. Pero, además de la oposición liberal, Caro afrontaba la reacción de los comerciantes de exportación e importación y de los banqueros, que habían perdido el monopolio del crédito con el cambio del patrón oro por el papel moneda. También numerosos caciques regionales veían el centralismo de la Regeneración como un límite a su autonomía en los ámbitos locales y regionales del poder.

Por otra parte, tampoco el Partido Conservador cerraba filas en torno al proyecto excluyente de Caro. La falta de consenso entre las cúpulas del Partido Conservador en torno a la política económica y social, lo mismo que a la conducta frente a los tradicionales adversarios, se hace evidente en la división en *nacionalistas*, partidarios de la exclusión de los liberales de la vida pública y defensores de las políticas monetarias de la Regeneración, e *históricos*, partidarios del acercamiento a los liberales y del retorno a las políticas monetaristas más ortodoxas. Además, el sector ultracatólico y militarista del Partido Conservador va a ver en la guerra civil la ocasión para eliminar de raíz al Partido Liberal.

Los conservadores históricos proponían, entre otras cosas, una mayor descentralización administrativa, que vigorizara la vida de departamentos y municipios; un mayor incremento en las obras públicas; responsabilidad del Ejecutivo, freno a la corrupción administrativa, eliminación del papel moneda y reformas tanto a la ley de prensa como a la legislación electoral, para permitir un normal desarrollo de la actividad política del Partido Liberal y una representación en los cuerpos colegiados proporcional a la distribución política real de la población[2]. Además, los históricos reclamaban también algo más pragmático: el acceso al botín burocrático y al reparto del gasto público.

Por su parte, los liberales estaban de acuerdo con los conservadores históricos en materia económica, pero se dividían respecto a la manera de confrontar al gobierno conservador: la vieja guardia del Olimpo Radical, protagonista de la vida política de la segunda mitad del siglo, era partidaria de las vías pacíficas para lograr la reforma del régimen político, sobre todo en materia electoral. En cambio, la juventud liberal defendía el recurso a la lucha armada para desplazar al régimen conservador; para ello, primero tenía que desplazar de la jefatura del partido a los dirigentes tradicionales, por entonces bastante pacifistas. En ese sentido, la guerra civil servía como mecanismo de ascenso y de relevo generacional en el interior del Partido Liberal, pero las divisiones internas surgidas en los combates acabarían por marcar definitivamente la lucha política interna en el seno del Partido Liberal durante los años siguientes.

Igualmente, los enfrentamientos entre regiones, localidades y familias, junto con los desmanes y retaliaciones ocurridos durante y después de la guerra, sembrarían un clima

de resentimiento y un ambiente de «venganza de sangre» entre poblaciones, grupos y familias rivales, que darían frutos de violencia en los conflictos de los años treinta y cincuenta. La memoria de los sucesos de la guerra de los Mil Días dejaría un recuerdo indeleble en el imaginario de la violencia posterior.

Además, el tipo de poblamiento influiría en la guerra y en los conflictos agrarios posteriores a ella: en las zonas de las vertientes cordilleranas, colonizadas tardíamente (a partir de la segunda mitad del siglo XVIII) y de una manera bastante espontánea, se habían formado unas sociedades bastante marginadas de los controles sociales, familiares, religiosos y políticos que caracterizaban a los núcleos poblacionales originales. Pero en esas áreas también se haría presente, más tarde, la colonización empresarial de grandes terratenientes, que aprovecharían las adjudicaciones de baldíos para consolidar verdaderos latifundios en esas zonas de frontera.

El contraste entre la colonización tardía y la previa se reflejará en las dos etapas de la guerra de los Mil Días y en sus respectivos escenarios: los ejércitos más o menos organizados, al mando de *generales-caballeros*, se enfrentarán en batallas en las zonas centrales del país, de poblamiento más tradicional y orgánico, mientras que la lucha de guerrillas, comandadas por caudillos populares *espontáneos* se desarrollará básicamente en las zonas de vertiente, de poblamiento aluvional e inorgánico. Este último es el caso del occidente de Cundinamarca y de la zona montañosa del centro-norte del actual Tolima. En estas zonas también se hará más evidente la tendencia a la degeneración del conflicto político hacia formas de bandolerización, guerra sucia y limpieza social. También será obvia la desconfianza de la dirigencia liberal de carácter nacional frente a la guerra de guerrillas, por basarse en una movilización popular relativamente autónoma y semianárquica, que en cualquier momento podría salirse de madre. Esto hacía que los jefes liberales toleraran pero no apreciaran la lucha y organización espontáneas de los grupos guerrilleros.

En este «miedo al pueblo» coinciden los jefes tradicionales del Olimpo Radical con los jóvenes dirigentes, partidarios de la opción armada. Por eso, sostiene Carlos Eduardo Jaramillo, la lucha guerrillera se impuso en el liberalismo por encima de la voluntad de sus grandes jefes, como Gabriel Vargas Santos, Foción Soto, Benjamín Herrera, Rafael Uribe Uribe y Justo L. Durán, que abogaban «por la constitución de fuerzas regulares y de verdaderos ejércitos liberales». Pero esto era casi imposible por el aislamiento de las regiones del país, el control del gobierno sobre las ciudades, trenes y el río Magdalena, junto con la fragmentación del poder, representada por «la elevada autonomía de generales, jefes, patronos y caudillos locales y la marcada propensión de éstos a disputarse entre sí»[3].

DESENCADENAMIENTO DEL CONFLICTO: COMBINACIÓN DE CRISIS

El conflicto se desencadena cuando se combinan las crisis internas de los partidos y de las nuevas poblaciones con una crisis de orden nacional, que se produce cuando fracasan los intentos pacíficos de reforma política y se imponen las tendencias militaristas de ambos partidos tradicionales. Además, el intento de Miguel Antonio Caro de perpetuarse en el po-

der a través del presidente Sanclemente y del vicepresidente Marroquín produce como resultado un clima de desgobierno y de falta de administración bastante favorable al levantamiento armado de los liberales. Por otra parte, la caída de los precios del café en el mercado internacional suponía tanto un descenso de los precarios ingresos del fisco nacional (y consiguientemente, una mayor debilidad del Estado central), como un declive en las condiciones de vida de la población de las regiones cafeteras.

El vicepresidente Marroquín asume la Presidencia en agosto de 1898 pero pronto empieza a apartarse del estilo de Caro, acercándose a liberales e históricos: suspende el impuesto a la exportación de café y lleva al Congreso leyes reformatorias de la ley de prensa y de la legislación electoral, con el fin de dar participación a las minorías, lo mismo que la derogación de la llamada *ley de los caballos*. Para bloquear este intento de apertura, Caro hace que el octogenario presidente Sanclemente asuma el mando para dar marcha atrás a las reformas. Con esto, Sanclemente empuja a los históricos al acercamiento al liberalismo y fortifica los sectores belicistas de ambos partidos: el conservatismo histórico se declara desligado de todo vínculo con el gobierno nacionalista, al que no se siente obligado a defender. De hecho, algunos pocos conservadores históricos apoyarían al liberalismo en armas o se declararían neutrales, pero el grueso de ellos terminaría, gradualmente, por cerrar filas en torno de la defensa del gobierno conservador.

Por su parte, el sector guerrerista del liberalismo aprovecha la situación para desbancar al pacifista Aquileo Parra de la dirección del partido, aunque no logra imponerse del todo en ella. Para algunos, la división entre pacifistas y belicistas produjo como resultado inmediato el desconcierto de muchos jefes locales, que impidió la adecuada coordinación del movimiento, lo mismo que la información fantasiosa de muchos belicistas con respecto a recursos de personas y armas, que llevó a muchos a lanzarse a luchar en notoria inferioridad de recursos[4].

Pero tampoco los ejércitos conservadores eran modelo de unidad y coordinación, pues reflejaban la división de tendencias nacionales y la fragmentación del poder característica de nuestra vida política, a pesar de los intentos de los gobiernos de la Regeneración para formar un ejército verdaderamente profesional. Como muestra Carlos E. Jaramillo, la guerra encuentra al Ejército nacional en condiciones deplorables, constituido mayoritariamente por oficiales salidos de las anteriores guerras civiles, carentes de formación y con hábitos de ociosidad y embriaguez, dedicados a la componenda y al padrinazgo políticos como medio de obtener ascensos. Por otra parte, la politización del Ejército era total, de modo que la fidelidad partidista era preferible a la buena formación y capacidad militares[5].

La división del Partido Conservador en nacionalistas e históricos se evidencia en la pugna entre los altos jefes militares, acrecentadas por las ambiciones personales de mando. Había demasiados generales y tantas ambiciones como generales. Por ejemplo, en vísperas de la batalla de Peralonso, se encargó del mando al general Vicente Villamizar, menos prestigioso que sus rivales Casabianca, Luján, Holguín y Cuervo Márquez, pero que gozaba de la confianza política del ministro de Guerra, José Santos[6].

El descontento entre conservadores históricos y nacionalistas por el desprestigio e ineficiencia de la administración Sanclemente y la renuencia de éste a las negociaciones de

paz propuestas por algunos jefes liberales como Rafael Uribe Uribe (después de su triunfo en Peralonso, el 12 de diciembre de 1899) llevaron al golpe de Estado del 31 de julio de 1900. Se esperaba que su reemplazo, el vicepresidente Marroquín, adoptara una posición más pacifista y tolerante, pero los sectores guerreristas del Partido Conservador, liderados por el general Aristides Fernández, jefe de la Policía, lograron consolidarse dentro de los aparatos del Estado. Fernández, en contra de lo conversado previamente con el jefe liberal Aquileo Parra, es nombrado gobernador de Cundinamarca con el fin de fortalecer la política represiva contra las guerrillas liberales del departamento. Por su parte, Marroquín desautoriza las conversaciones de paz que adelantaban varios de los que entonces eran sus ministros, como Carlos Martínez Silva, Miguel Abadía Méndez y Guillermo Quintero Calderón. La guerra se hace más cruel que nunca.

LA GUERRA REGULAR DE LOS «GENERALES-CABALLEROS»

La guerra regular se había iniciado en Santander, departamento de tradición guerrera y de mayoría liberal, bastante golpeado por la crisis económica, cuya cercanía a Venezuela favorecía el ingreso de armas, que se esperaba serían proveídas por el gobierno amigo de Cipriano Castro. Pero no se logra constituir allí un ejército unificado sino una abigarrada concentración de soldados y generales rivales entre sí, con celos e inquinas, unos de vieja data y otros nacidos de la rivalidad actual de ambiciones individuales, fomentados por la ausencia del jefe supremo del liberalismo y de la guerra, el anciano general Gabriel Vargas Santos. Las tensiones se fueron polarizando por encima de los intereses individuales hasta constituir tres ejércitos, no muy cohesionados entre sí, en torno a tres personalidades: Benjamín Herrera, Justo L. Durán y Rafael Uribe Uribe.

Los liberales de Uribe Uribe son derrotados en Piedecuesta primero, y en Bucaramanga después, pero las rivalidades entre los generales conservadores Isaías Luján, Manuel Casabianca y Vicente Villamizar impiden consolidar la victoria conservadora. La fragmentación interna de los conservadores hace retirar del mando a Casabianca, lo que facilita la inexplicable —desde el punto de vista militar— derrota de los conservadores en el puente sobre el río Peralonso (16 de noviembre de 1899), que consagra el prestigio de Uribe Uribe como caudillo. La derrota conservadora ha sido atribuida al deseo del conservatismo nacionalista de prolongar la guerra, que representaba una oportunidad para salir de la crisis económica y para liquidar del todo a su oponente liberal.

Pero los liberales no aprovechan la oportunidad de marchar hacia Bogotá, a pesar de la desbandada del ejército conservador y de los abundantes pertrechos tomados a éste, sino que se dedican a reorganizar sus fuerzas y esperar más pertrechos de Venezuela. Entre tanto, los conservadores unifican el mando de sus operaciones bajo Casabianca, como ministro de Guerra, y Próspero Pinzón como jefe del Ejército, que empieza a cercar a los ejércitos liberales. A finales de enero y principios de febrero de 1900, Herrera y Uribe deciden resistir al cerco y logran dos victorias en Gramalote y Terán. Finalmente, en abril, el general Vargas Santos decide avanzar con todas las fuerzas reunidas hacia el interior del país hasta encontrarse, el 11 de mayo de 1900, con las fuerzas conservadoras del general Próspe-

ro Pinzón en Palonegro, donde se combate hasta el 26 del mismo mes. Fue un combate de grandes proporciones, sin mucha táctica, donde no se emprendió ninguna acción de envergadura sino una serie de escaramuzas, en una extensa acción de desgaste, donde el ejército conservador se impuso por su superioridad en hombres y recursos. Los sobrevivientes liberales se retiraron por una ruta selvática, cuya insalubridad, fiebres y fieras casi terminaron con lo poco que se salvó de Palonegro. Uribe Uribe se dirigió a las sabanas de Bolívar mientras Vargas Santos y Herrera se retiraban a Riohacha: la caída de Cúcuta en agosto de 1900 señaló el fin de la guerra regular en Santander[7].

Por otra parte, la derrota de los liberales en Los Obispos, cerca de Gamarra, en el río Magdalena, desde el 24 de octubre de 1899, había producido el aislamiento de los liberales del interior, que no podían recibir pertrechos del exterior ni realizar acciones conjuntas en los departamentos de Bolívar y Magdalena, que para entonces comprendían casi toda la costa atlántica. En la zona de Riohacha, único puerto marítimo en poder de los liberales, los generales Justo L. Durán y Siervo Sarmiento habían logrado algunos éxitos iniciales, pero Sarmiento murió de fiebre amarilla y Durán fracasó en su intento de tomarse a Santa Marta. Uribe Uribe trató entonces de reorganizar las fuerzas liberales en Bolívar, donde logró la toma de Corozal, pero fue derrotado en Ciénaga de Oro, a manos de Pedro Nel Ospina. Uribe se reúnió en Riohacha con los demás jefes derrotados en Santander. Como la guerra de guerrillas en las difíciles condiciones de la costa no atraía a estos generales, que preferían las operaciones regulares, ellos se trasladaron al extranjero.

A su regreso al país, Uribe fracasa en sus nuevos intentos de campaña en los Llanos Orientales y Cundinamarca, desde donde regresa para asumir el mando de las fuerzas de la costa, que habían logrado el control de las provincias de Padilla y Valledupar. Uribe ataca a Ciénaga pero es nuevamente derrotado. Las sucesivas derrotas a manos del general Florentino Manjarrés llevan a Uribe a buscar la paz, que se firma el 25 de octubre de 1902 en la finca «Neerlandia»[8]. Por su parte, Benjamín Herrera decide firmar la paz el 21 de noviembre de 1902 en el acorazado *Wisconsin*, de la Armada norteamericana, a pesar de que había logrado realizar una campaña victoriosa en Panamá, pero que fue bloqueada en su avance ulterior por la intervención de las tropas norteamericanas. Herrera había recibido auxilios de amigos del liberalismo en Centroamérica, lo mismo que Uribe Uribe.

Desde mediados de abril de 1901, Uribe Uribe ya había intentado poner fin a la contienda con un alegato en favor de la paz, que señalaba la imposibilidad liberal de ganar la guerra, a la vez que desautorizaba la lucha guerrillera. Este alegato se debió en parte al influjo de Carlos Martínez Silva y en parte a la aversión de Uribe a la guerra de guerrillas, unidas a su incapacidad de conseguir más recursos en otros países hispanoamericanos para organizar otro ejército. Pero su propuesta fue entonces rechazada por ambos bandos. Para Bergquist, este rechazo muestra tanto la intransigencia de los jefes revolucionarios como el grado en que los acontecimientos terminaron por escapar del control de los dirigentes[9]. Este mismo autor señala que la guerra de guerrillas socavaba el control político de la clase alta sobre la población campesina independiente, lo que condujo a los dirigentes a buscar una salida negociada por la amenaza de una movilización popular autónoma. Por otra parte, la guerra de guerrillas empeoraba los efectos de la depresión del café y estimulaba la emisión

de más papel moneda; además, políticamente contribuía a fortalecer el poder de los sectores más intransigentes y antirreformistas del Partido Conservador[10].

En el sur y occidente del país, los liberales habían iniciado la guerra con mucho entusiasmo, confiados en el apoyo del presidente ecuatoriano Eloy Alfaro, que les proporcionó hombres, pertrechos y raciones. Pero fueron rápidamente derrotados en Simancas y Rumichaca: los conservadores colombianos unidos a los ecuatorianos llevaron la guerra a Tulcán, donde fueron derrotados por los liberales de los dos países al mando de González Carró. Éste trató de consolidarse en el territorio colombiano, pero fue derrotado cerca de Ipiales por los generales Lucio Velasco y Gustavo Guerrero, lo que obligó su retiro al territorio ecuatoriano. Esta acción fue completada en la costa pacífica por el general Carlos Albán, que derrotó a los liberales en Buenaventura, las selvas de Anchicayá y Tumaco, ciudad tomada el 3 de diciembre de 1900.

EL ESCENARIO GEOGRÁFICO DE LA GUERRA DE GUERRILLAS

Estas derrotas redujeron la actividad militar a una guerra de guerrillas en el centro del departamento del Cauca, donde se formaron grupos desde el valle del Patía hasta el actual Quindío, en sus límites con el Tolima, aprovechando el hecho de que la población de estas áreas se caracterizaba por estar menos sujeta a los mecanismos tradicionales de control social, económico y religioso. Esta lucha guerrillera arrastró consigo a la población indígena, especialmente a paeces y guambianos, que repartieron sus adhesiones entre los dos partidos[11].

La región del Patía fue zona de refugio para cimarrones y libertos en la época colonial, por lo cual desde entonces fue considerada área de «bandidismo social»; bajo la Primera República, fue centro de reclutamiento y de actividad de las guerrillas realistas que bloqueaban el paso de las tropas patriotas. Finalmente, en las primeras guerras civiles desempeñó también un importante papel como centro de reclutamiento de los guerrilleros del general Obando.

Por su parte, la zona del Quindío fue el lugar de choque entre las avanzadas de la colonización antioqueña y los antiguos pobladores caucanos. Desde finales del siglo XIX, la colonización pobre de campesinos independientes, provenientes de Antioquia pero no vinculados a las colonias de poblamiento ni a las áreas de la colonización «oficial», empieza a expandirse por el Quindío. Este avance se refleja en distintos tipos de conflicto, analizados por Marco Palacios en su obra sobre el café. Para Palacios, esos conflictos en torno a la apropiación y distribución de la tierra sugieren una base muy amplia, quizá mayoritaria, de colonos que no aparecen en los registros oficiales, lo mismo que la importancia del control del poder local para esa apropiación. En todos estos conflictos, señala Palacios, está presente la violencia en forma de desalojos, incendios y homicidios:

> La competencia por surgir en una sociedad de fronteras en donde todas las instituciones son endebles e imprecisas y las relaciones sociales estaban cargadas de ambigüedad, pavimentaba el camino a un tipo de violencia individual registrada en los índices de criminalidad y en las crónicas de algunos fundadores[12].

En esa misma línea, Jaime Arocha sugiere que la violencia quindiana de mediados del siglo XIX representa una magnificación de una criminalidad ya presente en las etapas iniciales de la colonización[13]. Esta criminalidad está asociada, según Palacios, a la atmósfera de incertidumbre producida por el problema central de las sociedades de frontera: la inseguridad de la titulación jurídica que dejaba a los colonos pobres a merced de gamonales y fonderos locales[14].

Uno de los casos estudiados por Palacios, el de las pugnas entre Soledad (actual Herveo) y Fresno, se localiza en el actual Tolima y sirve para ilustrar las componendas utilizadas por los agrimensores y los «notables» que controlaban las juntas repartidoras, para aprovechar «el patriotismo municipal» en las disputas sobre los límites intermunicipales, que afectaban la distribución de la tierra. Estos arreglos permitían a los notables repartir la mejor tierra entre sus clientelas, familiares y amigos, y desviar contra el municipio vecino la impopularidad generada por la desigualdad en el reparto. Palacios señala lúcidamente que éste es el origen de muchas rencillas y odios locales, que se engranarían luego en la lucha bipartidista para desembocar en la futura violencia política y en el cacicazgo que la implementa[15].

Este autor concluye que el gran colono capitalista o el terrateniente tradicional de las colonizaciones de Sonsón y del centro de Caldas está ausente en las regiones quindianas y del noroeste del Tolima, al otro lado de la cordillera Central. Allí la tierra es el medio de ascenso económico y social de hombres que parten más desde abajo, pues carecen de relaciones familiares con las elites ya establecidas: ellos poseen gran influencia local pero son desconocidos en las capitales provinciales hasta que sus favores electorales y políticos llegan a ser imprescindibles para los notables[16].

En estas zonas, sobre todo en el Tolima, la confluencia conflictiva de los movimientos colonizadores provenientes de Antioquia, Cundinamarca y Boyacá también se va a expresar frecuentemente en las adscripciones y enfrentamientos bipartidistas. Las migraciones antioqueñas se expandieron por la montaña, desde el extremo norte del departamento hasta frente a Ibagué: entre 1848 y 1895 adquirieron importancia la actual Casabianca (antes Santo Domingo), Fresno, Herveo, Líbano, Villahermosa, Anaime, Santa Isabel y Anzoátegui. Según París Lozano, en los comienzos del siglo XX disminuye el flujo de antioqueños y se presenta el de cundinamarqueses y boyacenses, que prefieren las partes más altas de las tierras frías.

Para otros autores, como Palacios, la colonización cundinamarquesa y boyacense se hace presente en el occidente de Cundinamarca, desde los finales del siglo XIX, así que es probable que la migración del altiplano haya penetrado desde entonces en la región vecina del Tolima. Este autor presume que hacia 1880 el centro de Boyacá y el valle de Tenza habían llegado a una situación de saturación demográfica, que expulsaba migrantes hacia las haciendas cafeteras: las zonas de Sumapaz y Tequendama se poblaron con campesinos migrantes de Fómeque y Cáqueza, y del valle de Tenza, respectivamente[17]. Medófilo Medina señala que Viotá fue sitio de encuentro de campesinos boyacenses y cundinamarqueses con los campesinos que provenían de Ambalema, desplazados por la crisis tabacalera de mediados de la década de 1870[18].

Esto sucedía a pesar de la desconfianza que tenían los hacendados de Bogotá por los jornaleros del tabaco de esa región y los campesinos de «tierra caliente». Palacios señala esta especie de darwinismo social, que llevaba a los hacendados a no contratar en gran escala a la población nativa o a la subocupada de la planicie del Magdalena, que eran consideradas «más como una raza degenerada que como una clase social oprimida». Parece ser que el sistema interno de la hacienda era más compatible con la familia campesina tradicional, «no contaminada», del altiplano, que con las de la zona tabacalera, que habían pasado por la experiencia de una economía monetizada y de una cierta agitación política radical. Concluye entonces Palacios que la garantía que ofrecían los migrantes boyacenses para los hacendados bogotanos era «su personalidad servil, lentamente formada tras siglos de encomiendas, resguardos y catolicismo tradicional»[19].

Pero este contraste entre tipos de sociedad y de poblamiento tenía que ser el origen de muchos conflictos en esta región, que aparecen señalados por Darío Fajardo en su obra sobre la violencia posterior en la misma región, para el caso de Murillo, cuyas veredas de las tierras altas serían foco de atracción para migrantes boyacenses[20]. Malcolm Deas señala que los hacendados de Cundinamarca no previeron los conflictos que surgirían de transplantar el sistema productivo de la sabana a una región que había experimentado otros procesos económicos y demográficos[21].

Por su parte, el historiador quindiano Jaime Lopera Gutiérrez asegura que, desde tres años después de haber sido fundada Calarcá (acontecimiento que el mismo Lopera fecha en 1886), sus vecinos estaban ya enfrentados entre antiguos y nuevos pobladores,

> ...viéndose invadidos además por anaimunos y cundinamarqueses que traían costumbres muy diferentes de las que se conocían por virtud del ancestro antioqueño [...] Un período de migraciones de destaca entonces: la irrupción de los tolimenses y de los cundinamarqueses coexiste con los primeros años de las fundaciones quindianas y mal puede decirse que ellos solamente llegan a principios del siglo XX [...] desde los orígenes de Calarcá y Armenia encontramos de fundadores a los llamados "orientales"[22].

Según París Lozano, en la vertiente tolimense de la cordillera oriental se ve más claramente la masiva migración de cundinamarqueses y boyacenses, que se juntaron a las gentes de «vieja cepa tolimense», que vivían bastante aislados: en esta zona hubo pocos antioqueños. A esta área llegaron los colonizadores primero en busca de quina y luego los «prohombres bogotanos» a formar las haciendas cafeteras. Posteriormente, las crisis de los años veinte y treinta empujaron hacia allá a numerosos contingentes de hombres «que fueron a buscar en la explotación de la tierra refugio contra la inseguridad del trabajo en las ciudades».

París Lozano subraya la transformación que se opera en los boyacenses cuando se instalan allá, que puede influir en los conflictos posteriores de la región:

> Llega encorvado, con la vista baja, caminando al trotecito y quitándose de para atrás el sombrero al saludar. No es miseria, porque en el bolsillo lleva con qué emprender trabajos. Aguárdese que recolecte las dos primeras cosechas, que compre caballo y se ponga machete al cinto; y entonces, ¡ábranle paso! Al contacto con otras tierras, otros soles y

otras gentes, sacude el peso de todos los agobios ancestrales, y a menudo se va entonces al lado opuesto, pasando a ser agresivo[23].

Para José Antonio Ocampo, el desarrollo de los movimientos guerrilleros de la guerra de los Mil Días en estas zonas cafeteras de Cundinamarca y Tolima puede ser visto como un indicio del grado de independencia adquirido por los trabajadores permanentes de las haciendas. Ésta les permitía visualizar nuevas fronteras de lucha política y constituirse en «población disponible» para el reclutamiento de los caudillos guerrilleros. Esta independencia parece vinculada, según Ocampo, a la tendencia señalada por Marco Palacios hacia la diferenciación interna de la mano de obra de las haciendas cafeteras del occidente de Cundinamarca, donde hay información que pone de presente la existencia de economías campesinas en el interior de las haciendas. Estas economías encontraban lógicamente muchas trabas en las reglamentaciones de las haciendas: «estaban cercadas por costumbres y legislaciones que las convertían en unidades agrarias relativamente prósperas pero jurídicamente dependientes de la hacienda».

Ocampo sostiene que las condiciones del desarrollo de la hacienda cafetera de estas zonas no eran nada propicias para que se diera en ellas un proceso de «enfeudamiento», a pesar de los elementos «semiserviles» y los mecanismos de «coerción extraeconómica» que se presentaban allí. La penuria permanente de mano de obra generaba, sobre todo en la época de cosecha, un ambiente de indisciplina casi permanente de los arrendatarios, que se constituía en una dificultad a la hora de exigirles que cumplieran sus obligaciones y de restringir la venta de los productos de sus propias parcelas[24].

La descripción de esta situación es tomada de Palacios, que critica el tono moralista de quienes insisten en la «feudalización» de las haciendas cafeteras. El hecho de que los ingresos de las economías campesinas de los arrendatarios fueran mayores que los ingresos salariales como «obligacioneros» y de que los arrendatarios pudieran subcontratar peones, subraya su grado de independencia. Palacios subraya que estamos en el extremo opuesto de la servidumbre, cuya base institucional es el poder del señor que logra impedir la movilidad física de la mano de obra: «La hacienda no retiene institucionalmente a los arrendatarios [...] son éstos quienes buscan quedarse»[25].

LA GUERRA POPULAR DE LOS GUERRILLEROS

Muchos de los conflictos entre poblaciones y grupos en ascenso se reflejarían en las luchas de guerrillas de nuestras guerras civiles. Por eso, no es de extrañar que, desde la derrota liberal en Santander, la mayoría de las acciones de la guerra de los tres años sean producto de la actividad guerrillera en el centro del país, especialmente en el valle del Magdalena, desde Honda hasta Neiva, con las vertientes cordilleranas que lo circundan, llegando por el Oriente hasta el piedemonte llanero y por el Occidente hasta las cercanías de Popayán. Estas regiones también se caracterizan generalmente por el poblamiento tardío y la colonización de tipo aluvional, que producen sociedades con poca cohesión y control sociales, donde la presencia del Estado es tradicionalmente precaria y el avance de los latifundios de frontera produce innumerables conflictos con los primeros colonos.

De entre estas áreas se destacan los llanos de Ambalema y la región quebrada del occidente de Cundinamarca como escenarios naturales de la acción guerrillera. Ambalema era considerada como «una bandera roja levantada a orillas del Magdalena, semillero de aguerridos combatientes y de fervientes luchadoras», centro de operaciones y lugar de reposo del célebre guerrillero, el «Negro» Ramón Marín[26]. El norte del Tolima es también el escenario de las acciones de Tulio Varón, uno de los jefes guerrilleros más característicos de este tipo de lucha. Sus hombres son «calentanos», reclutados en Doima, Coello, El Espinal, Ambalema, Ibagué y Piedras[27], y su centro de operaciones era su población nativa, Doima (corregimiento de Piedras), desde donde podía poner en jaque a las fuerzas conservadoras hostigando las vías estratégicas que daban acceso a El Espinal, Ambalema, Girardot, Coello, San Lorenzo e Ibagué. Estos caminos significaban la comunicación con el Quindío y la capital de la República, y la fácil llegada al río Magdalena[28].

En Cundinamarca, los focos principales de la actividad guerrillera fueron las provincias de Sumapaz y Tequendama en el Suroeste y de La Palma en el Noroeste. En estas regiones de la vertiente occidental de la cordillera Oriental, la gran propiedad territorial, conseguida por la adjudicación de baldíos, coexiste necesariamente con fincas medianas y parcelas campesinas, exceptuando algunos municipios como Viotá, El Colegio, Anapoima y Tibacuy. La colonización del Tequendama era una zona de

> ...latifundio de frontera: en cambio, el Sumapaz también reproduce el latifundio pero su situación era más compleja, sobre todo en la periferia, pues las colonizaciones quineras y tabacaleras del siglo XVIII y de mediados del XIX habían dejado en la selva pequeños bolsones de campesinos, muy aislados, con títulos de propiedad en las notarías. Esta coexistencia de estructuras de propiedad se evidencia en la existencia de una población susceptible de ser reclutada por las guerrillas de los Mil Días y desembocará luego en los conflictos de los años veinte[29].

En estas áreas se destaca Viotá, importante centro cafetero controlado por fuerzas liberales durante casi toda la guerra, como el sitio de refugio adonde se retiraban las guerrillas liberales cuando eran derrotadas en las zonas dominadas por el gobierno: allí se reabastecían y recuperaban sus fuerzas gracias al apoyo del hacendado liberal Aurelio Masuera y Masuera. Éste, empresario cafetero oriundo de Fusagasugá, usó sus habilidades de organizador para conformar una fuerza guerrillera efectiva y establecer un gobierno rudimentario en la población, que permitiera recaudar impuestos locales para apoyar a la guerrilla, mantener los caminos y establecer un servicio permanente de correos y telégrafos. En Viotá surge el célebre guerrillero Cesáreo Pulido, comerciante y hacendado nacido en La Mesa, que inició su guerrilla con una docena de hombres «reunidos entre los peones de su hacienda y dos o tres amigos», pero que llegó a comandar varios centenares de hombres[30].

Las guerrillas fueron constituidas principalmente por iletrados del campo, campesinos sin tierra, pequeños propietarios y colonos, trabajadores independientes, negros de las dos costas, indios de la Guajira, sur del Tolima, del Cauca y Panamá. En menor número, también por artesanos, desocupados y empleados domésticos, así como por unos pocos estudiantes, comerciantes y empleados, pues la mayoría de ellos prefería alistarse en las tropas regulares del liberalismo. Muchos de los guerrilleros iban movidos por el poder de los te-

rratenientes sobre los hombres vinculados a su propiedad, otros por sus lazos de clientela con los caudillos locales; los menos, por espíritu aventurero, afán de venganza o sectarismo político[31].

Además, en estas zonas el descentralismo, prohijado por los Estados Federales Soberanos, no hacía sino consagrar institucionalmente la fragmentación y privatización del poder, que se manifestaba en la proliferación de los poderes regionales y locales de caudillos y jefes. Éstos se nombraban comandantes de sus propias fuerzas y se resistían a aceptar órdenes de jefes superiores. Esta fragmentación de fuerzas tenía ventajas tácticas en cuanto a la movilidad e «invisibilidad» de las tropas, pero producían anarquía, crónica indisciplina, individualismo exagerado, cuyo resultado se hizo evidente en derrotas como las de La Mesa, Girardot, Piedras, Ibagué y Soacha. Pero la movilidad, astucia y conocimiento del terreno llevaron a las guerrillas a varias victorias como las de Ambato (Tolima) el 7 de mayo de 1900, y Sibaté, el 24 de agosto de 1900, que mostraban su control de las regiones de Viotá, La Quinta y Fusagasugá. Pero la celebración de la victoria de Sibaté hizo descuidarse a las fuerzas liberales, que fueron destrozadas posteriormente en Tibacuy (Cundinamarca) el 27 de agosto de 1900[32].

Para contrarrestar a estas guerrillas del occidente de Cundinamarca y norte del Tolima, el gobierno envió a generales hábiles, también conocedores de la región, la mayoría de ellos oriundos del sur del Tolima (actual Huila), como Nicolás Perdomo, Pompilio Gutiérrez y los hermanos Napoleón y Toribio Rivera. La mano dura de estos generales y la ferocidad de la violencia guerrillera llevó la lucha a extremos de crueldad y sevicia en ambos lados de la contienda.

En 1901 se realiza una gran ofensiva del gobierno contra las guerrillas del Tolima y Cundinamarca, que se ven cercadas y forzadas a acciones desesperadas como las masacres del batallón Pagola, de soldados antioqueños, ejecutada en el alto de Gualanday la noche del Viernes Santo, y de La Rusia (cerca de Doima), el 31 de agosto, realizadas por el grupo de Tulio Varón. Pero Tulio Varón muere poco después en las calles de Ibagué, el 21 de noviembre, cuando trataba de tomar esta ciudad, en un ataque suicida, impulsado por el efecto del aguardiente tomado al enemigo.

Pero el conocimiento del terreno y la adaptación al medio geográfico y climático permite a estas fuerzas irregulares sobrevivir e incluso crecer. Así, pueden reunir un poderoso contingente en las goteras orientales de Bogotá, cuando Uribe Uribe regresa con recursos de Venezuela. Pero la indisciplina de los jefes guerrilleros se hace evidente en la derrota de Juan MacAllister en Soacha, que impide la estrategia de lanzar un ataque frontal contra la capital. Las derrotas posteriores de Uribe Uribe en El Guavio y El Amoladero (Cundinamarca), en marzo de 1902, conducen a la atomización de las fuerzas liberales, que marchan unas a los Llanos y Venezuela y otras al valle del Magdalena.

REPRESIÓN OFICIAL Y DEGENERACIÓN DEL CONFLICTO

La represión conservadora se concentró en estas últimas al final de la contienda, lo que hizo que muchos grupos guerrilleros prolongaran la guerra, que se mezcló con delincuencia común, hasta bien avanzado el año 1903. Varios jefes prisioneros, como Cesáreo

Pulido y Gabriel Calderón, fueron fusilados en El Espinal; Aristóbulo Ibáñez fue descuartizado en Boyacá y Ramón Chaves con cinco compañeros fue fusilado dos días después de haberse firmado la paz de Wisconsin[33]. Otros jefes guerrilleros también muerieron después de haber finalizado la guerra, unos víctimas de la represión oficial, como el caudillo indígena Victoriano Lorenzo, jefe guerrillero en Panamá, y otros víctimas de la guerra sucia de las retaliaciones después de la guerra, o de la limpieza social ejecutada por enemigos o antiguos compañeros.

Como muestra Carlos Eduardo Jaramillo en otra de sus obras[34], la intolerancia de los conservadores recalcitrantes, como el ministro de Guerra Aristides Fernández, dificultó la entrega de muchos guerrilleros, desde antes de la firma de la paz. Los ultraconservadores y ultracatólicos veían en la guerra «la oportunidad más propicia para acabar definitivamente con su oponente político por la vía del exterminio físico». Esta actitud, reflejada en la intensiva aplicación de la pena de muerte y la tolerancia frente a los que ignoraban pasaportes y salvoconductos, alargó la guerra más de la cuenta: sólo se aceptaba la rendición incondicional.

Este grupo conservador de línea dura, compuesto por algunos generales como Aristides Fernández, Nicolás Perdomo, Pompilio Gutiérrez y Toribio y Napoleón Rivera, consideraba que en el norte del Tolima y el occidente de Cundinamarca se concentraba lo más maligno del peligro liberal, que había que erradicar. En palabras de Jaramillo, en esta región se vivió «una verdadera guerra a muerte contra los liberales»: desde el alto mando se presionó de tal modo a los oficiales del gobierno que no sabían ya si había que respetar los salvoconductos del gobierno o si ellos no eran sino un engaño para sus poseedores. Algunos oficiales incluso llegaron a pedir permiso anticipado para fusilar a guerrilleros, odiados por ellos, que presentían iban a entregarse. Así, fueron fusilados varios jefes antes de cumplirse el plazo para acogerse al indulto o después de haberse firmado la paz, mientras que algunos prisioneros eran simplemente asesinados, sin fórmula de juicio. Se dio el caso de anularse un consejo de guerra que había absuelto a algunos jefes guerrilleros, por haber sido «mal recibido por la oficialidad», para convocar un nuevo juicio que concluyera con el fusilamiento de los acusados. No faltaron los oficiales que tomaron justicia por mano propia contra prisioneros, así estuvieran amparados por salvoconductos del gobierno[35].

Otra de las causas que dificultaba la conclusión de las hostilidades era la falsa información que suministraban los clubes revolucionarios de la capital sobre la situación general del país, que evitó que algunos jefes se acogieran al indulto del gobierno. Estos clubes revolucionarios actuaban en la capital y otras ciudades, donde terminaron por asumir la dirección del liberalismo para prolongar la guerra de manera irresponsable, cuando en el país circulaban los rumores de las entregas de numerosos grupos guerrilleros. Pero, para entonces, la autoridad de las directivas del partido estaba ya muy menguada y eran pocos los combatientes que acataban órdenes de fuentes diferentes a sus jefes inmediatos. Así,

> ...la fuerza combatiente del liberalismo no pasaba de ser una constelación de grupos autónomos. Esto mismo acontecía con la cúpula militar donde, desde los mismos inicios de la guerra, los odios entre los grandes generales eran frecuentes, por lo que ya para este momento, lo que en principio había sido una confrontación soterrada, había asumido el carácter de un combate abierto con libros, cartas y panfletos, en los que el generalato

liberal se acusaba de todas las perversiones imaginables. Por esto, las órdenes de mantenerse en armas después de conocerse el texto del decreto de indulto del gobierno, no contaron con mayor audiencia. La desbandada militar sólo fue contenida por la brutalidad con que el gobierno acogió a muchos de los indultados[36].

Por lo demás, los pactos de caballeros entre jefes regionales y locales y los respectivos salvoconductos, que seguían a la entrega de grupos guerrilleros, con frecuencia sólo tenían vigencia local, dada la fragmentación del poder existente también en las fuerzas del gobierno. Fuera de la zona controlada por el respectivo jefe, nadie podía garantizar la eficacia del salvoconducto, dada la incomunicación, la indisciplina y el desorden que reinaba en las fuerzas del gobierno. Por eso, muchos jefes guerrilleros terminaban por retomar las armas o simplemente desactivaban sus fuerzas, marginándose de la contienda y perdiéndose en el monte.

Además, el decreto de indulto del 12 de junio de 1902 no otorgaba garantías generales sino que dejaba amplio espacio para la interpretación subjetiva, que permitía al gobierno exceptuar de él a quien quisiera, para fusilarlo. La amañada aplicación de los decretos facilitó al gobierno el acoso a muchos de los indultados, obligándoles a negociar su vida a cambio de delaciones y entrega de otros compañeros, que eran ordinariamente fusilados. Estas delaciones eran facilitadas por la descomposición de muchas de las guerrillas liberales, que terminaban por comportarse como «bandas de asaltantes sin partido»: muchos guerrilleros descompuestos cambiaban fácilmente de bando y se ponían al servicio del gobierno, algunos por amenazas de muerte y otros por dinero, para «cazar a sus antiguos compañeros sin remordimientos»[37]. Por otra parte, señala Jaramillo, la guerra había «brutalizado y descompuesto a muchos jefes que habían convertido a sus hombres en grupos de pandilleros y salteadores que hacían caso omiso de las órdenes superiores»[38].

Por todo ello, en el Tolima y occidente de Cundinamarca, la terminación de la guerra revistió tal brutalidad y crueldad, que los intentos de aclimatar la paz resultaron precarios. En esta región, la reacción de muchos fue «hacerse fieras y extender la lucha por muchos años», como concluye Jaramillo en su libro, hecho que preludia la reanudación de la violencia:

> Así, cuando en la década de 1910 el resto del país tenía sus campos en calma, en esta región se oían los tiros y las bandas asolaban los campos al mando de muchos de los hombres que habían llevado banderas liberales en la guerra, como el legendario Elí Villanueva. Estos hombres, obligados a seguir con el machete al cinto para conservar la vida, continuaron una guerra torcida que los hizo asaltantes de caminos, debiendo algunos ser ejecutados por sus antiguos compañeros de guerrilla, como aconteció en Doima con la apuesta figura del coronel Vidal Acosta.
>
> En el Tolima, más que en ninguna parte, quedaron grupos armados que depredaban regiones y poco se distinguían de los forajidos que actuaron a la sombra de la guerra y que después continuaron la ruta del bandidaje. A la acción de esta amalgama de hombres brutalizados y perseguidos se unieron las venganzas desatadas por tantos crímenes tramposos cometidos al amparo de la paz y por los infinitos abusos de los vencedores[39].

Gonzalo París Lozano, de las lecciones que saca de esta guerra, subraya, en los resultados no previstos de la dinámica de la guerra: «Todo movimiento revolucionario pierde, en la

tragedia en que se desenvuelve, una gran parte de su contenido ideal; destroza él mismo mucho del lastre de sus conceptos políticos; se desvía del norte de sus propósitos, y lleva generalmente a resultados que no son los que buscan quienes desencadenan la borrasca»[40]. Por su parte, como conclusión de su libro, Jorge Villagas y José Yunis anuncian la continuación latente de «esta infinita espiral de odios crecientes», que «afloran en toda su brutalidad»... «a la menor coyuntura». Y, «en el futuro próximo, abundarán las coyunturas»[41].

NOTAS

1. Palacios, Marco, *El café en Colombia, 1850-1970. Una historia económica, social y política,* coedición El Áncora-El Colegio de México, 1983, p. 56.

2. Jaramillo, Carlos Eduardo, «Antecedentes generales de la guerra de los Mil Días y golpe de Estado del 31 de julio de 1900», en *Nueva historia de Colombia,* Ed. Planeta Colombiana, 1989, p. 67.

3. Jaramillo, Carlos Eduardo, «La guerra de los Mil Días, 1899-1902», en *Nueva historia de Colombia,* Ed. Planeta Colombiana, 1989, pp. 89-90.

4. Jaramillo, Carlos Eduardo, «Antecedentes generales...», *op. cit.*, p. 76.

5. *Ibid.,* pp. 78-79.

6. Villegas, Jorge y José Yunis, *La guerra de los Mil Días,* Bogotá, Carlos Valencia editores, 1979, p. 56, cita de Leonidas Flores Álvarez, *Historia militar de Colombia. Campaña en Santander 1899-1900,* tomo I, publicada en la Imprenta del Estado Mayor General del Ejército en 1938.

7. Jaramillo, Carlos Eduardo, «La guerra...», en *op. cit.*, pp. 93-97.

8. *Idem*, pp. 104-107.

9. Bergquist, Charles, *Café y Conflicto en Colombia, 1886-1910, La guerra de los Mil Días: sus antecedentes y consecuencias,* Medellín, Fondo de Publicaciones FAES, 1981, pp. 201-202. Cfr. también a Villegas, Jorge y José Yunis, *La guerra de los Mil Días,* pp. 71-72.

10. Bergquist, Charles, *Café y conflicto...*, p. 183.

11. Jaramillo, Carlos Eduardo, «La guerra...», en *op. cit.*, pp. 107-109.

12. Palacios, Marco, *El café en Colombia...*, pp. 326-327.

13. Arocha, Jaime, *La violencia en el Quindío: determinantes ecológicos y económicos en un municipio caficultor*, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1979.

14. Palacios, Marco, *El café en Colombia...*, p. 296.

15. *Ibid.,* p. 326.

16. *Ibid.*, p. 327-328.

17. *Ibid.*, p. 172.

18. Medina, Medófilo, *Historia del Partido Comunista de Colombia,* Bogotá, CEIS (Centro de Estudios e Investigaciones Sociales), 1980, tomo I, p. 174.

19. Palacios, Marco, *El café en Colombia...*, pp. 174-175.

20. Fajardo, Darío, *Violencia y desarrollo (transformaciones sociales en tres regiones cafetaleras del Tolima, 1936-70),* Bogotá, Ed. Suramericana, 1979, p. 78.

21. Deas, Malcolm, «Una hacienda cafetera en Cundinamarca: Santa Bárbara (1870-1912)», en *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura,* Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1976, N° 8, p. 89.

22. Lopera Gutiérrez, Jaime, *La Colonización del Quindío. Apuntes para una monografía del Quindío y Calarcá,* Bogotá, Banco de la República, 1986, pp. 115-116.

23. París Lozano, Gonzalo,*Geografía económica de Colombia, tomo VII-Tolima,*Bogotá, Contraloría General de la República,1946. p. 83.

24. Ocampo, José Antonio, *Colombia y la economía mundial, 1830-1910,* Bogotá, Ed. Siglo XXI, 1984, pp. 339-340.

25. Palacios, Marco, *El café en Colombia...*, pp. 353-355.

26. Jaramillo, Carlos Eduardo, *El guerrillero de «El Paraíso». General Tulio Varón Perilla, 1860-1901,* Ibagué, Fondo Rotatorio de Publicaciones y Cultura de la Contraloría del Tolima, 1987.

27. *Ibid.*, p. 14. Cfr. también a París Lozano, Gonzalo, *Guerrilleros del Tolima*, Bogotá, El Áncora Editores, 1984, p. 60.

28. Jaramillo, Carlos Eduardo, *op. cit.*, p. 68, y París Lozano, Gonzalo, *op. cit.*, p. 65.

29. Palacios, Marco, *op. cit.*, pp. 156-157.

30. Bergquist, Charles, *Café y conflicto en Colombia, 1886-1910, La guerra de los Mil Días: sus antecedentes y consecuencias,* Medellín, Fondo de Publicaciones FAES, 1981, pp. 186-188.

31. Jaramillo, Carlos Eduardo, *Los guerrilleros del novecientos,* Bogotá, Ed. CEREC, 1991, p. 44.

32. Jaramillo, Carlos Eduardo, «La guerra...», en *op. cit.,* pp. 98-100.

33. *Ibidem,* pp. 98-102

34. Jaramillo, Carlos Eduardo, *Los guerrilleros del novecientos,* Bogotá, Ed. CEREC, 1991, p. 339.

35. *Ibidem,* pp. 359-365.

36. *Ibidem,* pp. 349-350.

37. *Ibid.,* pp. 347-348.

38. *Ibid.,* p.340.

39. *Ibid.,* p. 368.

40. París Lozano, Gonzalo, *Guerrilleros del Tolima...*, p. 149.

41. Villegas, Jorge y José Yunis, *La guerra de los Mil Días*, p. 127.

CAPÍTULO 2

LAS MEMORIAS DE LOS GENERALES.
APUNTES PARA UNA HISTORIOGRAFÍA DE LA GUERRA

MALCOLM DEAS

Sobre la guerra de los Mil Días en años recientes se han escrito obras importantes[1]. También hay obras menos recientes que todavía son indispensables para su estudio[2]. Hay ya accesible un gran acervo documental en el Archivo General de la Nación, que incluye papeles importantes del general Próspero Pinzón y del Ministerio de Guerra, y las carpetas de los 26.032 combatientes que de 1937 en adelante comprobaron sus méritos en busca de una pequeña recompensa por sus esfuerzos, y un lugar en la historia. Ha habido una gran exposición, *Cien años de los Mil Días*, en el Museo Nacional, la primera que se ha hecho en la historia de la República sobre una epopeya de la historia republicana, y va a surgir una historiografía nueva.

Cuando sale un libro nuevo, según un viejo dicho, es buena ocasión para leer un libro viejo, y el viejo dicho no ha perdido toda su validez frente a la nueva historiografía. La guerra de los Mil Días produjo cierto número de memorias formales, escritas por protagonistas, algunos de ellos figuras prominentes a nivel nacional, otros participantes con menos pretensiones. No han sido muy estudiadas. Las contribuciones venezolanas y panameñas, por ejemplo, son muy poco conocidas en nuestro medio[3].

No todas fueron escritas en fechas tan cercanas a la guerra. Algunas fueron producto del renacimiento del liberalismo de 1930, y tienen un tono de reivindicación y rectitud poco verosímil; otras, como las hojas de servicio de los ex combatientes acopiadas a finales de los años treinta, adolecen de claras faltas de memoria[4]. La mayoría, como suele ser el caso de las memorias militares en cualquier parte, tienen la tendencia a atenuar la confusión de la guerra, a presentar estrategias ponderadas, escalafones bien enumerados, maniobras más o menos racionales. Se trata desde luego de la eterna y necesaria vanidad profesional, sin la cual nadie hace el esfuerzo, en primer lugar, de guerrear, y luego de historiar la guerra. Hay en ellas temas básicos —salud, logística cotidiana— que reciben solamente un trata-

miento muy somero. En contraste, siempre presentan largos listados de olvidados camaradas inolvidables.

La imparcialidad no es común, aunque eso no excluye toda nota de respeto para el enemigo. Hay mucho relato difícil de leer, y sin mapas aún mas difícil de entender. No hay, escrita sobre esta guerra, ninguna obra que en su totalidad merezca ser calificada de obra clásica; ninguna narración tan buena en su calidad literaria que pueda equipararse a *Cómo se evapora un ejército*, el relato de Ángel Cuervo sobre la caída de Mariano Ospina Rodríguez[5].

Sin embargo, son testimonios de protagonistas: el historiador debe recordar que con todas sus limitaciones ellos sí estaban presentes, y él no. Sus mentes son mentes de la época, su modo de expresarse, la selectividad de sus recuerdos, lo que ellos enfatizan y lo que no les llama la atención, son parte de la historia. Entre estas memorias hay libros que valen la pena, documentos históricos importantes, y libros que contienen materiales que difícilmente se encuentran, o van a ser encontrados, en otras partes. Sobre ciertos temas son evidencia de primer orden.

Los temas que me han llamado especialmente la atención son: las rivalidades entre los jefes; la diplomacia de la guerra y la búsqueda de apoyos internacionales; la «guerra a la colombiana»; la curiosa historia de las fuerzas navales; la fabricación de héroes y la contemporánea celebración de hazañas. Sobre estos aspectos de la guerra me parece que las memorias tienen un valor imprescindible.

LA RIVALIDAD ENTRE LOS GENERALES

Las memorias son una fuente abundante de material sobre las emulaciones y odios entre los mandos, particularmente entre los jefes de la rebelión[6].

La emulación y la rivalidad entre comandantes es una constante de la historia militar, pero llegó a un grado inaudito de bajeza entre los liberales de los Mil Días. Su escenario clásico fue la guerra en Santander y en la Costa, y sus protagonistas Rafael Uribe Uribe, Benjamín Herrera, Justo L. Durán y el omnipresente, viejo y poco vigoroso Gabriel Vargas Santos. Los textos básicos para estos aspectos de la guerra son los *Documentos políticos y militares referentes a la campaña del general Rafael Uribe Uribe*, compilados por su yerno Carlos Arturo Urueta y dados a la imprenta con visible apuro en 1904, y *La revolución del 99*, del general Justo L. Durán (Cúcuta, 1920), la respuesta más completa a Uribe Uribe, aunque lejos de ser la única. Dicho sea de paso, en este libro reposa una carta de enero de 1905 del general en jefe liberal Vargas Santos, ya de regreso a su tierra llanera «El Limbo», en la cual cuenta cómo ha tenido que tomar dinero prestado al 5% mensual para comprar algunos caballos para reorganizar el hato, y veinte pesos oro más para publicar en Bogotá el panfleto *La razón de mi dicho*, su réplica a Uribe Uribe[7].

La distancia suavizó las diferencias, y es común encontrar entre liberales de los años treinta autores que escriben como si estos personajes hubieran sido una banda de hermanos, pero las memorias más auténticas no los muestran así; las memorias son fácilmente identificables por su lealtad a su jefe predilecto, cuando no son escritas por el jefe predilecto mismo. Lucas Caballero —autor de *Memorias de la guerra de los Mil Días*, el relato de primera mano mejor conocido— es el fiel seguidor de Benjamín Herrera; Caballero fue su

jefe de Estado Mayor, su secretario principal[8]. Max Grillo fue seguidor de Uribe Uribe, y escribió en su defensa[9]. Sabas S. Socarrás formó en las filas de Durán, Bernardo Rodríguez y Ramón Lamus G. lo hicieron en las de Uribe Uribe[10].

Estas narraciones muestran la existencia del lado de la rebelión de ejércitos, en plural, fuertemente identificados con sus respectivos jefes, muchas veces reacios a la plena colaboración. En parte se trata de la afirmación de su distinta identidad lugareña, resistente a las fusiones que de vez en cuando sus mandos tratan de imponer, pero indudablemente deriva también de los celos y odios profundos de esos mismos mandos. La distancia entre Uribe Uribe y Herrera fue notoria, y se transmitía a sus subordinados. De estas memorias uno se hace a la idea de que tales jefes casi no se podían ver. Y en efecto, su enemistad perduró hasta el asesinato del primero. En el archivo de Uribe Uribe hay una carpeta llena de munición para enfilar baterías en contra de Herrera. En sus respectivas maneras ninguno de los dos fue una persona fácil de tratar, pero Uribe Uribe aparece desde bien antes del estallido de la rebelión como un colega particularmente difícil: indisciplinado, impaciente, ávido de gloria. El lector actual se sorprenderá por la encendida polémica que generó la temeraria iniciativa de Uribe Uribe de cruzar el puente de Las Lajas en la batalla de Peralonso, bajo los fuegos del enemigo. ¿Por qué tanto debate en torno a esa acción? Hazañas dan fama, y fama da poder.

Las disputas entre otros líderes liberales aparecen muy bien descritas y analizadas en otro texto poco conocido en el país, *Memorias de las campañas del Istmo.1900*, de Belisario Porras, jefe de la primera campaña en Panamá —por cierto, una campaña olvidada en Colombia, país en donde la literatura se concentra sobre la segunda campaña de Benjamín Herrera—; Porras, liberal antiseparatista, fue posteriormente Presidente de la República de Panamá[11]. Jefe civil de la insurrección, relata en detalle sus diferencias con otro Herrera, el general Emiliano J. Herrera. Releyendo lo que había escrito en fecha muy cercana de los acontecimientos, veinte años después, Porras todavía encontraba justificado el levantamiento armado en contra de la Regeneración en decadencia, pero censuró fuertemente las divisiones en su liderazgo:

> ...fueron incesantes las divergencias en el mismo seno de la revolución, especialmente entre los miembros de la oficialidad, divergencias motivadas en todos los casos por rivalidades o deseos de mando de parte de quienes se olvidaban que éramos hermanos colombianos y miembros del gran Partido Liberal [...] A esas divergencias se debió indudablemente el fracaso de la revolución en el Istmo; a los celos, a la envidia y a la injusticia de algunos de mis compañeros de armas se debió el que el triunfo no nos hubiera acompañado no sólo en Panamá, sino en toda Colombia, pues de haber alcanzado la victoria aquí, el Partido Liberal fácilmente habría dominado la situación allá igualmente, y se habrían desarrollado entonces acontecimientos bien distintos a los que hemos presenciado en el primer cuarto de este siglo[12].

Las *Memorias* muestran a Porras como un hombre bien leído en la historia clásica, excelente observador de la sociedad del Istmo, conocedor de la índole de su gente y de las artes particulares necesarias para conducirlos en la guerra, artes poco entendidas por los jefes del interior: «Todavía en el Istmo ocurre la necesidad de llevarle tropas del interior de

la República para la guarnición de sus propios cuarteles, porque no hay nadie que quiera sentar plaza de soldado, y en tiempo de guerra o conmoción interior el reclutamiento es infructuoso». El voluntario istmeño fue muy reacio a la disciplina, muy lugareño y muy pronto a desertar.

El libro contiene muchos detalles singulares, desde el papel de la Iglesia y de sus curas en esas tierras poco creyentes; y la tendencia de la tropa a perder las baquetas de sus rifles —«...sabido es que el soldado lo primero que bota o inutiliza es la baqueta, empleándola frecuentemente de bastón o asador de carne—, hasta la relacionada cuestión de los méritos relativos a la dieta vegetariana o carnívora en campaña.

Trata con experiencia de primera mano dos temas importantes: la ayuda de gobiernos vecinos a la revolución liberal y la guerra en los dos océanos[13].

LOS APOYOS INTERNACIONALES

Porras es una fuente importante de información sobre las relaciones de los liberales con los gobiernos centroamericanos y con Eloy Alfaro en el Ecuador, y hace también observaciones pertinentes sobre las limitaciones del apoyo de Cipriano Castro desde Venezuela, así como sobre los esfuerzos de varios emisarios liberales en Nueva York[14]. Es un cuadro de ilusiones perdidas.

Quien aparece en estas páginas como más sincero y consistente es Eloy Alfaro[15]. Porras lo compara con Cipriano Castro: «Más convencido, más resuelto, más eficaz en su apoyo, fue el general Eloy Alfaro [...] hubo más franqueza y más energía en su actitud; lo animó más fe y hubiera hecho más si hubiese sido secundado con más sinceridad por los que él consideraba sus aliados»[16].

Sin embargo, el apoyo de Alfaro fue bastante limitado. Su propio poder en el Ecuador fue amenazado por rivalidades dentro del liberalismo ecuatoriano, y por supuesto por los conservadores:

> Sabíamos, además, que en el Ecuador los conservadores tienen en la prensa voceros respetables que armarían lo de Dios es Cristo cuando supieran que el *Cotopaxi* [buque de guerra ecuatoriano] andaba en operaciones revolucionarias contra un gobierno extranjero y que si por desgracia perecía ese buque, iba a ser ese hecho motivo de justo y popular enojo contra el general Alfaro[17].

Según Porras, la personalidad de Alfaro dominaba al presidente de Nicaragua José Santos Zelaya, figura vacilante y poco confiable, quien debe haber servido como canal de comunicación y de ayudas de Alfaro al liberalismo bélico colombiano, «pero de meras simpatías no pasaba: [...] Colombia es grande y aguerrida; nosotros somos muy pobres y chiquitos; no podemos meternos en esa guerra"»[18]. Las sumas enviadas por Alfaro a sus correligionarios colombianos menguaron en su tránsito por manos nicaragüenses. Los emisarios liberales pasaron meses haciendo antesala. Particularmente siniestra y frustrante era hacer antesala en Guatemala, esperando al dictador Manuel Estrada Cabrera, en un ambiente de intrigas y de espionajes intensos. Alfaro había arreglado la compra para los liberales colombianos de un armamento a su antecesor, el recién asesinado presidente Reina Barrios,

y Estrada Cabrera prometió su entrega. El armamento nunca apareció: el dictador necesitaba tener esas armas en casa.

Aunque acostumbrado a las demoras de la conspiración —una carta de Zelaya en el archivo de Uribe Uribe cita el viejo refrán «En palacio, todo va despacio»—, Porras califica lo tortuoso de las lentitudes centroamericanas con el veredicto «Nada hay tan parecido a las repúblicas italianas de la Edad Media, como las repúblicas centroamericanas»[19]. Al fin, Zelaya proporcionó 600 rifles viejos, 120.000 tiros, un cañón con 150 balas, y a regañadientes y temeroso prestó los servicios del buque *Momotombo* para llevar a la expedición a Chiriquí. Embarcaron a las cuatro de la tarde, a plena luz del día, a la mirada del USS *Philadelphia*[20].

Decepcionante también fue la ayuda prometida por Venezuela. La buena disposición del presidente Crespo —en un momento había prometido a Modesto Garcés 15.000 rifles, un millón de cápsulas, cañones y un barco— cedió a la prudencia después del incidente diplomático alrededor de las actividades de Díaz Guerra[21]. La muerte de Crespo en campaña en 1898 puso fin a las perspectivas de los liberales colombianos de obtener ayuda venezolana, hasta la victoria de Cipriano Castro en octubre 1899.

Porras enfatiza, y ciertamente exagera, la deuda de Castro con sus aliados colombianos:

> Escaso de armas y de brazos, se puso de acuerdo, por medio de comisionados que envió al efecto, con ciertos jefes liberales de Colombia, quienes no sólo le facilitaron los necesarios elementos, sino que alistaron bajo la bandera del caudillo venezolano centenares de soldados. Éste, en cambio del servicio que se le prestaba, se comprometió solemnemente, en caso de triunfo —de un triunfo que de antemano estaba asegurado— a devolver aumentado ese parque y a prestar toda clase de facilidades al liberalismo de Colombia para la empresa armada que iba a acometer.
>
> De este modo se explica que el ejército que llevó a Castro desde la frontera venezolana hasta las goteras de Caracas, fuese formado en su mayor parte por oficiales y soldados colombianos. La suerte de las armas le fue propicia: pocas semanas de campaña y dos o tres combates de escasa importancia, bastaron al general Castro para ponerse en aptitud de proclamarse Jefe del Poder Ejecutivo de Venezuela[22].

El entusiasmo de Castro se enfrió con la batalla de Palonegro, que puso fin a cualquier esperanza de una rápida victoria liberal. Castro se volvió más evasivo frente a sus promesas, y más prudente; incluso durante un buen tiempo embargó los buques de la revolución, la pequeña armada liberal de la costa atlántica. Además, tuvo que enfrentar una creciente oposición interna.

GUERRA A LA COLOMBIANA Y GUERRA A LA VENEZOLANA

Según atinada observación de Porras, Cipriano Castro nunca entendió la diferencia entre una guerra civil venezolana y una guerra colombiana:

> Tentado se siente uno a imaginar que el Presidente de Venezuela no tenía idea bastante precisa de la naturaleza de las guerras civiles en Colombia, y suponía que la llegada de las huestes liberales a Bogotá debería verificarse del mismo expedito y rápido modo con que

él tuvo la suerte de presentarse a las puertas de la Casa Amarilla, en Caracas. Aspiró a medir las enormes dificultades de la campaña en Colombia por las ningunas que le ofreció la que en Venezuela llevó a cabo en muy pocos días, contando para ello con un gobierno que no se defendía, con ejércitos traidores a ese gobierno y con un pueblo cansado y empobrecido que aceptaba cualquier cosa a trueque de disfrutar de unas horas de paz[23].

Topográfica y logísticamente, nunca fue fácil en Colombia conseguir una victoria en provincia y luego coronar con un pronto avance sobre la capital del país. La capital política del país aparece como un fortín protegido en las alturas por su posición central, rodeada por el grueso de una población reclutable, y sede de un gobierno que pese a todas sus debilidades fue por lo común más recursivo que sus contendores. Después de las guerras de la Independencia, la capital no cayó sino dos veces, la primera cuando todo el mundo se fue encima del general Melo, y la segunda cuando Tomás Cipriano de Mosquera tumbó a Mariano Ospina Rodríguez[24]. En la guerra de los Mil Días, esta sabiduría geopolítica se resumió en el dicho de que «Victoria obtenida allende el Chicamocha por ejército que se dirija al centro del País no es definitiva»[25].

Aunque Cipriano Castro nunca fue capaz de enviar ayuda en gran escala a los liberales colombianos, las relaciones entre las dos repúblicas llegaron a un alto grado de subversión mutua, y finalmente a un rompimiento de relaciones[26].

Sobre estas complicaciones, las invasiones y contrainvasiones de venezolanos disidentes con apoyo colombiano y liberales colombianos con apoyo venezolano, hay información en los libros de Durán y de Socarrás, y también un relato personal tardío pero extraordinario, *Vísperas y comienzos de la revolución de Cipriano Castro*, del telegrafista tachirense Nemecio Parada[27]. Parada empezó muy joven como telegrafista, en esa carrera abierta a los talentos e ideal para el observador de los acontecimientos —llegó más tarde a ser telegrafista presidencial en el Palacio de Miraflores. Por las dotes de escritor nato de su autor, por su falta de teoría o de sesgo, ningún texto que yo conozca comunica mejor la atmósfera de confusión, improvisación y susto de la frontera en esa confrontación. Merece un par de citas para dar idea de su sabor.

Parada describe la irrupción de Rangel Garbiras, rival de Castro en el Táchira. Garbiras actuaba con el apoyo no tan discreto del gobierno colombiano, y de «los gramaloteros» desde el otro lado de la frontera. Parada fue hecho preso por los invasores, y sufrió las «atenciones» de los colombianos en carne propia:

> ...Ya en la casa de corredores, imprudentemente dije al paisa que me quitó el revólver y la plata [paisa, guate o reinoso decían al colombiano central], «Mire: ya que me robó el revólver déme esa correa que tiene sobrante para sujetarme los calzones». Y, rápidamente desde la cabalgadura me contestó: «Allí le va su correa», ¡y me disparó a quemarropa un tiro! Pero al verle yo la intención al mal hombre, hice un veloz esguince y casi me metí debajo del caballo, escapando milagrosamente de que el bandido diera en el blanco. Santo Dios: ¡qué susto tan grande sentí! Quedé medio sordo y atribulado. Ahora bien: como algunas veces no falta lo bueno al lado de lo perverso, otro paisa que presenció la escena dijo al malvado: «Nosía usté tan bandido y muérgano: ¿cómo va a matar a ese niño?». Lo de «niño» tiene su explicación. Era pequeño de estatura y no crecía a pesar de mi edad. En mi casa, cariñosamente me llamaban «Matica», diminutivo de mata... La tropa de

> línea que vi no tenía de línea sino el nombre. Desde los jefes hasta los soldados, llevaban una indumentaria deplorable. Cote y Conde, de los primeros, aunque en buenas cabalgaduras, deslucían su apostura bélica, llevando cobija puesta, sombrero de jipijapa de copa alta con ancha divisa azul, zamarros de cuero, ruidosas espuelas y descomunal peinilla terciada. El soldado se conocía porque portaba fusil y pertrechos, por el rosario, escapularios y otras reliquias colgados al cuello. No miento. No exagero ni denigro. Eran las cosas naturales de la época y del momento que se vivía. Así las vi muy de cerca hace 62 años cuando ocurrió aquella desgraciada emergencia bélica[28].

Entre los de la otra banda, el autor recuerda a Rafael Uribe Uribe:

> Era el general Uribe Uribe hombre de talla alta y erguida, blanco de color, ojos grandes negros, barba densa y redondeada, vestía sencilla y pulcramente, usaba fino sombrero panamá con el ala un poco hacia adelante, muñecas velludas, manos bien cuidadas; lucía en el anular derecho anillo con hermosa piedra verde, acaso una esmeralda. Hablaba despacio, con claridad y con ese acento típico del colombiano culto que pronuncia tan bien, sin comerse el final de las palabras ni las «elles».
>
> ¿Cómo conozco estos detalles acerca de este eminente personaje, entonces jefe del Partido Liberal Colombiano, ahora huésped obligado de nuestra Táchira? Sencillamente. Al llegar él a la taquilla del Despacho, previo afable y cortés saludo, pedía recado de escribir. Yo le observaba curiosamente del lado interior, aunque sin ánimo de hacerle inventario, a la vez que pensaba en lo mucho que valía y representaba este gran jefe liberal, y así me di cuenta de lo que dejo dicho[29].

LAS FUERZAS FLUVIALES Y NAVALES

La guerra en el río Magdalena ha recibido poca atención: se sabe que la batalla de Los Obispos aseguró el dominio del río para el gobierno, dominio que nunca perdió, y que fue de gran valor estratégico y logístico[30]. La guerra en los dos océanos ha atraído aún menos interés, y el lector de memorias queda sorprendido por el grado de preocupación de algunos autores sobre el tema.

Sus obsesiones son parque y buques. Sería posible escribir toda una monografía sobre el parque, las escasas armas en vísperas de la guerra robadas o compradas de las guarniciones, los nuevos armamentos añorados, las dificultades financieras, diplomáticas y prácticas que demoraron sus llegadas a las filas de la revolución. (Una nota de pie de texto sería sobre ortografía: las dificultades que tuvieron los autores en escribir correctamente los nombres de los rifles, Gras, Mannlicher, Klopacher, Krag-Jorgensen, Winchester, Peabody, Mauser, Sharps... aunque van mejor con el Remington, tal vez por su familiaridad con las máquinas de escribir).

Ese interés por el relato en torno a parque y armamento es fácil de entender. En cambio, la importancia de la historia propiamente naval es menos conocida. El presidente Zelaya, como hemos anotado, no quiso exponer su buque *Momotombo* sino por el mínimo tiempo necesario para llevar a Porras y su mal armada gente a Chiriquí. El peligro era el poderoso barco del gobierno colombiano, el *Boyacá,* suficientemente poderoso al menos como para hundir el *Momotombo.*

Esta faceta de la guerra ha sido olvidada en parte por la ínfima escala de las flotillas. El libro ya citado de Justo L. Durán, *La Revolución del 99*, contiene una fotografía de los barcos liberales frente a Ríohacha[31]. Allí están el *Gaitán* (bautizado en homenaje a Gaitán Obeso, héroe radical de 1885), el *Peralonso*, y el «vapor blindado y artillado *María Hanaberg*, después *Sarmiento* [en honor de Siervo Sarmiento, general liberal recién fallecido de fiebre[32]], tomado al gobierno en las bocas del Sinú a fuego y sangre».

Aunque con grandes nombres, son barcos muy pequeños, su grado de blindaje es muy relativo y su artillería escasa. Durán los describe. El *Gaitán* era un remolcador, alquilado en Maracaibo por 500 bolívares quincenales, muy lento, con un consumo de 10 toneladas de carbón diarias; portaba un precario cañón. El *Peralonso*

> ...era un vapor largo, sumamente angosto, desprovisto de todo blindaje y aún de barandas para impedir que sus tripulantes fueran al agua; no tenía capacidad ni para cargar el carbón que consumía, el cual eran cinco toneladas diarias [...] podía contener apenas quince hombres que asistían mareados por que el barco daba bandazos hasta en aguas tranquilas, siendo arropado constantemente por las olas; tenía un cañón automático en la proa que alcanzaba sólo 1.000 yardas y requería para cada disparo una operación preliminar de matemáticas que, unida al movimiento permanente, hacía imposible dar en el blanco, a pesar de estar servida la pieza por un artillero americano contratado por el Gral. Sarmiento a razón de 500 dollars mensuales. [La compra del carbón para la revolución fue difícil]: las naciones temen comprometer su neutralidad. [Fue necesario traerlo de Curaçao] a 15 dollars tonelada, fuera del transporte[33].

Con tal flota no debe sorprender que la revolución nunca lograra la capacidad de hacer movimientos estratégicos por la costa atlántica. Era otra limitación logística que ayuda a explicar la inercia y bajo nivel táctico y estratégico que fue tan característico de esta guerra. No hubo con qué pelear mejor[34].

También en el Istmo y en el océano Pacífico, a los liberales les faltaban buques, aunque allá el liberalismo ganó una victoria famosa pero no decisiva, el hundimiento del barco del gobierno *Lautaro*, con el general Albán a bordo, por el *Almirante Padilla*[35]. El gobierno restauró su predominio naval con la compra del crucero *Bogotá* en California: «...cuando vino el *Bogotá* y se anunció con sus cañones en las costas de Aguadulce y Tonosí, el *Padilla* huyó velozmente a ocultarse en el estero de David, en donde fue entregado por el general Herrera»[36].

La historia de la guerra naval le recuerda a uno que la fuerza es una categoría relativa, que en el país de los ciegos el tuerto es rey, y que para juzgar bien los esfuerzos de los hombres y de los gobiernos es menester conocer a fondo el medio y las circunstancias en los cuales tienen que actuar. Comprar y armar el pequeño *Bogotá* debe haber costado al gobierno de la capital proporcionalmente mucho más que lo que costó al gobierno de Washington mantener en aguas panameñas el *Philadelphia* y el *Wisconsin*, grandes acorazados auténticos.

MOTIVOS, HÉROES Y CELEBRACIONES

En las memorias se busca lo personal y lo telúrico, las motivaciones de sus autores, sus emociones, las escenas que ellos recuerdan. La cosecha a veces es muy mediocre.

Porras, por ejemplo, tan sutil en muchas de sus observaciones, es corto y acartonado en cuanto a sus motivos para participar en la lucha. No fue nada pacifista: aunque abogado, parece que había peleado en dos duelos. Durán elabora en su libro su propio listado de héroes del partido —Robles, Rojas Garrido, Murillo Toro, Hilario López, Rudas, Acosta, Francisco Álvarez, César Conto, Santiago y Felipe Pérez, Vargas Santos y Nicolás Esguerra— y añade que los liberales, seguidores de Jesucristo como los demás, tienen «iguales derechos al banquete de la vida». Había peleado en 1876, 1884,1885 y 1895.

Max Grillo tampoco dice mucho sobre sus motivos, pero en cambio describe con finura cómo fue su salida de Bogotá para entrar en el levantamiento[37]. Jesús Cock, el antioqueño «coronel recluta», escribe muchos años después este párrafo, que por lo sugerente vale la pena citar en extenso:

> ...a los campamentos godos me llevó, desde los once años, lo que reconoció Echandía ante el Senado al discutirse la reforma del Concordato por él negociada, el haber levantado la bandera antirreligiosa el Partido Liberal durante la última mitad del siglo diez y nueve; y esto nos ha mantenido a muchos bajo la bandera azul y blanco, con todas las fuerzas de los más íntimos afectos y las más firmes creencias. Y era yo capaz a los once años de apreciar estas cosas, porque en esos tiempos los muchachos buscábamos y coleccionábamos los retratos de los hombres notables de Colombia, que venían en las cajetillas de cigarrillos, con el afán con que los de hoy coleccionan los de las estrellas de cine que en toda forma se publican, y las madres inteligentes e ilustradas, como lo fue la mía, se aprovechaban de esas figuras proceras para enseñarnos la historia de la Patria, eclipsada hoy por lo que brilla en la pantalla; y entonces se quería a la Patria, como hoy se aman los placeres y lo extraño[38].

Éste era un país ensimismado, con sus propios héroes y sus propias jerarquías políticas y sociales. En casi todas las memorias los autores relatan la muerte de una u otra «persona interesante», joven prometedor o de buena familia, u hombre destacado, porque en todas las sociedades unos son más «interesantes» que otros[39].

País también con sus propios rituales de guerra. Hay, por ejemplo, la gramática formal, complicada, pomposa, vanagloriosa, de los partes de batalla y de campaña:

> Señor Comandante en Jefe General D. Víctor M. Salazar. - Presente.
> He debido, porque así lo ordenasteis y porque me correspondía hacerlo, daros, separadamente, parte detallado del glorioso hecho de armas habido el 20 del pasado mes de febrero en Marialabaja, pueblo de este departamento...

Sus memorias muestran que el general Salazar tuvo un gusto pronunciado por este estilo de prosa. También su libro es una fuente rica para otro ritual, el regreso a casa de la tropa triunfante. Los lectores tal vez recordarán las fotografías de los arcos triunfales erigidos en Bogotá en 1895 para celebrar las victorias del general Rafael Reyes, otro catador de la pompa marcial[40].

Salazar dedica dos capítulos de su obra a «nuestro regreso a la patria chica, en donde nos esperaban, después de tantos días de sufrimientos y de luchas, la lumbre de nuestros hogares, el amor de nuestras familias, el encanto de nuestro cielo y el ambiente tonificante de nuestras montañas azules». Es probable que en Antioquia, que sólo sufrió en esta

guerra no más que una breve y poco sangrienta campaña de un mes, se celebraran las hazañas de sus hijos con gran entusiasmo, pero en Bogotá también se festejó a Próspero Pinzón después de Palonegro; Grillo, poeta, describe así la entrada de Uribe Uribe en Cúcuta después de Peralonso:

> La multitud lo victoreaba y también a sus dignos compañeros Herrera, Durán, Rodríguez, Hernández, Albornoz, Soler, Amaya, Ardila; las hermosas les ofrecían ramos de mirtos y de flores acabados de cortar por sus manos; las cigarreras, las vendedoras de frutas, al paso de Uribe rompían frascos con aguas olorosas; el regocijo atronaba el espacio;
> «Y la más hermosa sonríe al mas fiero de los vencedores»[41].

¿Mirtos? ¿Frascos con aguas olorosas? Remito al lector incrédulo a los partes que da el general Salazar sobre la recepción de la División Antioquia y de la Columna Antioqueña en Medellín, y sobre la subsiguiente recepción del Batallón Salamina en esa ciudad, entre abril y mayo de 1901. No sólo da cuenta de la retórica de la época, sino también de lo elaborado de esas ocasiones.

El comunicado de Medellín lleva «Lista de las señoras y señoritas designadas por la Jefatura Civil y Militar para el recibimiento de la División "Antioquia" y de la Columna "Antioqueña": señora doña Ana Rosa P. de Ospina, Amalia M. de Márquez, Filomena V. de Velásquez, María T. de Gutiérrez, señoritas Concha Ospina, Amalia Escobar, Magdalena Uribe G. y Soledad Botero»[42].

Sí, las hermosas ofrecieron sus ramos. La tropa de Salamina procedió a su ciudad de origen:

> Su paso por las poblaciones de tránsito fué un paseo triunfal. En todas partes era recibido bajo una lluvia de flores. A nuestra entrada a Salamina, el entusiasmo traspasó los límites del delirio. Había mucha alegría, pero también hondas tristezas. Nuestra felicidad era nublada por el luto de muchos hogares que lloraban la eterna desaparición de seres queridos, cuyo recuerdo golpeaba en los corazones, pero cuyos restos mortales habían quedado en lejanas tierras al abrigo de la cruz. Cuando marchábamos por una de las calles principales de la ciudad, un hecho de aparente sencillez vino a emocionarnos hondamente: en una modesta casa se levantaba una bandera blanca, en cuyo fondo se destacaban con grandes caracteres negros estas tres cifras: 33, 65 y 30. Para los profanos en cuestiones militares, el rígido mutismo de aquellas cifras era incomprensible. Para nosotros era el recuerdo emocionante de aquella voz de mando con que en Marialabaja, en una noche memorable, habíamos coronado el triunfo de nuestras armas: «¡Atención, armar a la bayoneta y paso de carga!».
>
> Para no extendernos demasiado en detalles que carecen de importancia para muchos de nuestros lectores, aunque sí pueden tenerla para Salamina y para un gran número de los sobrevivientes de aquella época lejana, transcribiremos sólo algunos de los documentos que atestiguan el júbilo que en la sociedad salamineña causó nuestro retorno.

Transcribe el general Salazar doce páginas y media de letra menuda: prólogo, orden del desfile, señoritas con escarapelas y coronas, arcos, templete, oradores de la juventud y del pueblo, balcones, comida para la tropa, banquete para los jefes y oficiales, bandas, retreta, madres de los jefes y sargentos fallecidos, letreros, más discursos largos, «misa solemní-

sima con Te Deum»...

> ...el joven héroe, general Salazar, recibió de manos de las señoritas una hermosa corona de laurel, adornada con una cinta blanca, en la cual se leía, en letras doradas: «General Víctor M. Salazar», y con otra azul en que decía: «Panamá, Corozal, Marialabaja». Le colocaron sobre el pecho un escudo primorosamente trabajado por la señorita Inés Isaza, bajo la dirección de las hermanas de la caridad. [...]
>
> Entre las inscripciones que llevaban los arcos triunfales, construidos para abrir paso de honor a los ínclitos guerreros, se leía ésta: «Marialabaja es la admiración del mundo entero». Aunque la imaginación popular suele a veces, en sus entusiasmos patrióticos, extraviar el criterio sereno e imparcial del historiador, ora respecto de hechos importantes, o ya con relación a sucesos secundarios, no es nuestro ánimo censurar la frase que dejamos copiada y con la cual quiso en esta vez el pueblo manifestar su admiración por aquel hecho de armas...

No es nuestro ánimo censurar al general Salazar: además de hombre de «aquella época lejana», parece que fue un jefe inteligente y capaz, y sus memorias en sus 400 páginas tienen mucho de interés. Y, de acuerdo con el periodista contemporáneo que hemos citado, tampoco es nuestro ánimo ridiculizar al pueblo de Salamina. Pero hoy la primera pregunta que se hace a sí mismo el lector frente a estas celebraciones, es si acontecieron o no.

No hay razón para rechazar la evidencia; la respuesta tiene que ser que sí. Extrañas a nuestros ojos y a nuestros gustos, son un aspecto de cómo las cosas se miraban, se sentían en ese entonces, y de cómo ciertos participantes les dieron sentido, aunque sorprenden más que las fiestas similares de los tiempos de la Independencia.

De vez en cuando, entonces, cruzan por las páginas del relato del conflicto militar las sombras de las estructuras políticas y sociales en donde han nacido; se encuentran rasgos de una cultura cívica olvidada.

MEMORIAS Y MEMORIA

Muchos miles tomaron parte directa en este conflicto. Sólo un número muy pequeño logró después escribir memorias de una manera formal, y publicarlas. ¿Una muestra en cualquier sentido representativa, típica? Entre todos ellos, ¿dieron un esbozo más o menos completo del panorama de la guerra?

Hay vacíos: como hemos señalado, hay muy poco sobre la logística cotidiana y sobre la salud. Las pestes y las deficiencias médicas escalofriantes que describe el joven médico estadounidense Dickey tienen limitado eco en las narraciones nacionales. Mirando toda la literatura en su conjunto, me parece que no da el debido énfasis a los horrores y a los estragos de la guerra. «War is Hell» —«la guerra es un infierno»— dijo el general Sherman, una buena autoridad sobre la materia. Sin embargo, lo infernal de la guerra ocupa pocas páginas de sus propias memorias de la guerra civil de los Estado Unidos. El infiernillo de los Mil Días, y lo destructivo de la guerra, tampoco se ve con tanta claridad en las memorias de los combatientes.

Y, como hemos insinuado, hay una relativa debilidad y escasez de literatura conservadora. Los esfuerzos administrativos del gobierno de Bogotá, tanto o más formidables que los de la rebelión, son evidentes en los archivos y en la prensa, en los billetes de emergencia

y en las cuentas de la Tesorería, pero no están en las memorias personales de nadie. Aristides Fernández, una figura de primer orden y de mucho más interés que el monstruo espantaniños de la leyenda liberal, no dejó una sola línea[43]. Políticamente, las memorias publicadas inclinan la balanza fuertemente hacia el lado liberal.

La memoria, entendemos, es más que las memorias[44].

Sobre lo que la memoria iba a ser, y para qué iba a servir, hay una meditación de Miguel Antonio Caro al fin de la guerra:

> Una lucha de tres años que ha arruinado al país y puéstole al borde del abismo, comprueba lo que muchos no veían, aunque la razón lo indicaba, que con emblemas y dictados de viejas enemistades, no puede llegarse a ningún concierto patriótico, a nada grande y fecundo; los aliados por el odio, como dice el poeta:
>
> Se encuentran, se conocen... y se abrazan...
>
> Con el abrazo de furente saña.
>
> En las antiguas comedias españolas aparecen galanes rivales, que de pronto desnudan sus espadas y riñen en siniestro silencio. Así han reñido aquí dos bandos durante tres años, y ahora reina la oscuridad. No sabemos si la militarización de un país donde cada uno de esos bandos cuenta por miles sus generales; si los hábitos contraídos de depredación, de persecución de especulaciones aleatorias; si el desprecio de las leyes morales, mucho más grave y alarmante que el de las leyes positivas, si todo ese cúmulo de males haya de retardar todavía por largo tiempo la marcha regular de la República. No sabemos si, por el contrario, la desgracia haya de ser purificadora para todos, para todos provechoso el escarmiento; si el exceso de mal haya de despertar vigoroso el instinto de conservación, y determinar un movimiento político uniforme salvador. No sabemos hasta qué grado la generación nueva viene ya pervertida por los malos ejemplos y envenenada por el fanatismo sectario, *en mala hora erigido en doctrina*; o si en su mayor parte, atenta a la enseñanza de los hechos, habrá de ser más sabia, más cristiana, y por lo mismo más dichosa que sus padres[45].

Hacia los años veinte, treinta y cuarenta hay cierta evidencia de que la generación nueva a la cual se refiere Caro iba cristalizando sus memorias de la guerra. Parte de esa evidencia son algunos de los libros de memorias que hemos examinado. Probablemente tuvieron más influencia y divulgación que lo que las pequeñas ediciones de ese entonces hacen pensar: el bien conocido libro de Lucas Caballero, por ejemplo, apareció primero por entregas en *El Tiempo*. Otra parte de la evidencia son esos miles de expedientes de participantes que reposan en el Archivo General de la Nación; ellos representan, entre otras cosas, un esfuerzo descomunal de la memoria nacional, bajo el incentivo de la ley y la esperanza de una pequeña pensión. ¿Memoria hegemónica? El orgullo, la solidaridad del veterano con su causa son productos de todos los conflictos humanos. Esos miles de expedientes son otras tantas reafirmaciones de lealtad de partido. Los libros de memorias publicadas ofrecieron modelos de esa lealtad. Cuando uno recuerda lo que va a pasar después, en las décadas del cuarenta y cincuenta, la respuesta a la pregunta de Caro sobre cuál iba a ser «la enseñanza de los hechos», no sería ciertamente la que él hubiera deseado.

NOTAS

1. Este ensayo no pretende ofrecer una bibliografía completa, ni de obras recientes ni de contemporáneas, ni del tema principal de las memorias, pero entre los estudios recientes cualquier listado, por breve que sea, debe incluir a Charles Bergquist, *Café y conflicto en Colombia*, El Áncora Editores, 2a ed., Bogotá, 1999; Jorge Villegas y José Yunis, *La guerra de los Mil Días*, Carlos Valencia Editores, Bogotá, 1979; Carlos Eduardo Jaramillo, *Los guerrilleros del novecientos*, CEREC, Bogotá, 1991 (con extensa bibliografía), y su *Tulio Varón. El guerrillero de «El Paraíso»*,Ediciones de la Contraloría General del Tolima, Bogotá, 1986; Aída Martínez Carreño, *La guerra de los Mil Días. Testimonios de sus protagonistas*, Editorial Planeta, Bogotá, 1999. Menos asociada con la guerra en la mente de los lectores, pero muy valiosa para su contexto, es la serie de obras sobre Miguel Antonio Caro de Carlos Valderrama A., publicados por el Instituto Caro y Cuervo; las que más tratan de la guerra y sus antecedentes son: *Un capítulo de las relaciones entre el Estado y la Iglesia en Colombia. Miguel Antonio Caro y Ezequiel Moreno Díaz*, Bogotá, 1986; *Miguel Antonio Caro y la Regeneración*, Bogotá, 1997; y las series tercera y cuarta de su edición de los *Escritos políticos*, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá,1991,1993. Otra atmósfera se respira en el aporte novedoso a la política de los años noventa de Mario Aguilera Peña, *Insurgencia urbana en Bogotá. Motín, conspiración y guerra civil, 1893-95*, Colcultura, Bogotá, 1997.

2. Eduardo Rodríguez Piñeres, *Diez años de política liberal, 1892-1902*, Editorial Incunables, Bogotá, 1985, es la versión elocuente de un liberal pacifista, participante. La serie de libros alrededor de Carlos Martínez Silva son también muy informativos: sus propias *Revistas Políticas* publicadas en el *Repertorio Colombiano*, 2 vol., Bogotá, 1934, y las obras de Luis Martínez Delgado, *A propósito de Carlos Martínez Silva*, Editorial Marconi, Bogotá, 1930, e *Historia de un cambio de gobierno*, Bogotá, 1958 (y cf. J.I. Sanclemente Villalón, *El 31 de Julio. La otra historia de un cambio de gobierno*, Academia de Historia Leonardo Tascón, Buga, 1990). El libro de Joaquín Tamayo *La revolución de 1899*, Editorial Cromos, Bogotá, 1938, tiene el valor de ser el primer intento de escribir una historia neutral del conflicto, y no carece de interés como muestra de las actitudes de su época.

3. Repetimos, este ensayo no ofrece una reseña exhaustiva. Por razones de espacio y de los temas escogidos, no examina, por ejemplo, el conjunto de relatos sobre la guerra en el Tolima,

que han sido tan bien abordados por Carlos Eduardo Jaramillo, ni la relativamente desconocida versión misionera de los eventos en los Llanos, *Liberaladas de una revolución*, por el Fr. P. Fabo, Pamplona (España),1914.

4. Un ejemplo: las *Memorias de un revolucionario del general Aurelio Mazuera y Mazuera*, Bogotá, 1937, una compilación de entrevistas con el general hechas por Luis Reyes Rojas, no desprovisto de interés pero a veces muy poco convincente: es, por ejemplo, imposible creer en la perfecta contabilidad de campaña del protagonista.

5. Cuervo, Ángel, *Cómo se evapora un ejército*, Bogotá, editorial Cromos, 1953.

6. Los liberales escriben más que los conservadores, los vencidos más que los vencedores. Jefes conservadores, como Manuel Casabianca y Próspero Pinzón, murieron antes de que terminara la guerra y no dejaron memorias; el relato más ambicioso de un militar conservador de alto rango quizá sea *Memorias de la guerra, 1899-1902*, del general Víctor M. Salazar, Editorial ABC, Bogotá, 1943. Sobre Pinzón contamos con la biografía de Cayo Leonidas Peñuela, *El doctor y general Próspero Pinzón*, Bogotá, 1941, y sobre Casabianca el estudio reciente de Luis Henrique Gómez Casabianca, *El general Manuel Casabianca*, Bogotá, 1999. Hubo rivalidades personales entre los jefes conservadores, además de la división entre nacionalistas e históricos, pero o fueron menos viscerales o hubo más estructura y jerarquía para contenerlas. Después de la guerra hubo bastante polémica entre los conservadores alrededor de su propia conducta en el actual departamento de Santander. Véase, por vía de ejemplo, *Rectificaciones. Réplica de Ramón González Valencia al folleto publicado por el general Vicente Villamizar con el título Para la historia*, Bogotá, 1904, y Max Grillo, *Emociones de la guerra*, s.l, s.f. p.127, con su versión de las rivalidades entre «39 generales» conservadores.

7. Citado por Durán, Justo L., *La revolución del 99*, Cúcuta, 1920, pp. 189-190. Vargas Santos escribe: «Jamás he aspirado a pasar por caudillo ni gran capitán, y menos ahora cuando por ley natural estoy mandado a archivar. Muy a mi pesar me resolví a dar a luz el trabajo hecho no precisamente para defenderme del cargo de calumniador, sino para que se vea que no es oro todo lo que relumbra en la egregia persona del Gral. Uribe...». El mencionado panfleto de Vargas Santos fue publicado en Bogotá en 1904.

Sobre el general Durán, véase Eduardo Gaitán Durán, *Justo L. Durán. Su tierra, su época y su vida*, Bucaramanga, 1987. El general fue asesinado en febrero de 1924.

El general había publicado primero su versión de la guerra en artículos en *El Bien Social* y en *El Promotor*, coleccionados en un folleto de 1904, *Narración histórica del general Justo L. Durán*, Imprenta Liberty, Cúcuta. Su libro de 1920 es mucho más completo.

8. Lucas Caballero, *Memorias de la guerra de los Mil Días*, Bogotá, 1939, 2a ed., Colcultura, 1980.

9. Max Grillo, *Emociones de la guerra*, Casa Editorial Santafé, Bogotá, 1934. El libro empieza con la pretensión de ser una novela, pero abandona pronto la intención, que no recuerda sino muy de vez en cuando; es en su esencia un libro de memorias.

10. Sabas S. Socarrás, *Recuerdos de la guerra de los Mil Días*, Bogotá, 1977 (publicado por entregas, *El Tiempo*, 1930; 1a ed. Santa Marta, 1946); Bernardo Rodríguez, *Mis campañas, 1885-1902*, Tipografía Renacimiento, Bucaramanga, 1934; Ramón Lamus G., *Sinceridades. Recuento histórico de la guerra de 1899 a 1902 y porvenir del Partido Liberal*, Imprenta Eléctrica, Bogotá, 1911.

11. Belisario Porras, *Memorias de las campañas del Istmo. 1900,* tomo I (único publicado), Imprenta Nacional, Panamá, 1922. Sobre Porras, véase Manuel Octavio Sisnett, *Belisario Porras o la vocación de la nacionalidad*, 2ª ed., Ciudad de Panamá, 1972. La campaña de Benjamín

Herrera es recordada por las memorias de Lucas Caballero. Con todo, se puede decir que tras la pérdida de Panamá, Colombia también iba a perder una gran parte de la historia de la guerra. A causa de la separación física, el territorio panameño no entraría con plenitud en la memoria ni en la historiografía nacional de Colombia. Lo mismo se puede decir, *a contrario sensu,* de la historia panameña en general.

12. *Op. cit.*, p. I, nota 1. Y p. X. Otro veredicto aún más fuerte: «...los campamentos se convirtieron en pugilato de ambiciones desenfrenadas, de odios mezquinos, de emulaciones soeces; se echó a un lado y se escarneció al mérito para suplantarlo con la vulgaridad bestial del primer machete ensoberbecido; y, por último, se puso más empeño en aniquilar al copartidario que en vencer el enemigo». Aún más sensacional que sus diferencias con Emililano Herrera fue la disputa del autor con Benjamín Herrera, que culminó en un ataque físico perpetrado por este último, el llamado «incidente del pisa-papel»: Herrera, «en un arranque toma un pisa-papel que tenía sobre el escritorio y lo lanza a la cara de Porras, que cae con la cara sangrante y rotos los espejuelos». Sisnett, *op. cit.*, pp. 127-137. En su archivo, Uribe Uribe guardaba para sus propios fines una versión del ataque, en la cual se escribe que Herrera se lanzó sobre Porras y lo mordió en la oreja. Herrera en seguida lo puso preso.

13. Para más datos sobre la ayuda externa, véase Carlos Eduardo Jaramillo, *Los guerrilleros del novecientos*, CEREC, «Los amigos de fuera», pp. 279-305.

14. La Regeneración vivía aislada en el entorno de los países vecinos, y los liberales belicistas trabajaban para formar una especie de «internacional» liberal en su contra. Como lo expresa Porras, tomando sus deseos por realidades: «...la conciencia de los gobiernos liberales de la América no aceptaba, ni podía aceptar que horizontes en los que antes se habían respirado auras de libertad, constituyeran, bajo el régimen absolutista del más atrasado de los gobiernos conservadores, la negación de toda idea que encarnase una tendencia noble, un ideal generoso, un impulso civilizador. [Un] Gobierno en semejantes condiciones no sólo no tenía derecho de perdurar, sino que debía estar irremisiblemente condenado a desaparecer al menor esfuerzo de la indignación popular». pp. II-III.

Entre los liberales colombianos que trabajaban para la causa en el exterior figuraban el caucano Modesto Garcés, quien pasó tres años en Nicaragua; y el poeta bumangués Alirio Díaz Guerra, autor de *Diez años en Venezuela* (Caracas, 1933), un relato sobre sus gestiones en la vecina república durante el gobierno del presidente Crespo, de quien llegó a ser uno de los secretarios privados. Su libro es un exquisito *period piece* del liberalismo romántico. Por falta de discreción en sus conspiraciones en pro de un levantamiento liberal en su país natal, Díaz Guerra tuvo que pasar de Caracas a Nueva York, donde siguió actuando como agente del liberalismo colombiano.

15. Sobre Alfaro y sus conexiones centroamericanas, véase Malcolm Deas (editor), *Eloy Alfaro, narraciones históricas*, 2a ed., Quito, 1992, especialmente la introducción.

16. Porras. *op. cit.*, p. IX.

17. *Ibid..*, p. 32.

18. *Ibid.,* p. 37.

19. *Ibid.*, p. 19.

20. *Ibid.,* pp. 81 *et seq.*

21. Véase la nota Nº 14.

22. *Ibid.*, p. VII. Lo citado fue escrito por Porras en su introducción, veinte años después de los acontecimientos, y no fue testigo directo de lo que pasó en esa frontera ni en Venezuela. La participación colombiana en la expedición de Castro no fue tan destacada como él pretende.

23. *Ibid.*, p.VIII.

24. En la misma guerra de Mosquera *versus* Ospina, cuando le tocó el turno al general Leonardo Canal de tomar a Bogotá, no pudo lograr la rendición del convento de San Agustín.

25. E. Rodríguez Piñeres, *Diez años de política liberal*, p.147; cf. la opinión de Max Grillo en *Emociones de la guerra*, p.159: «Es muy difícil que un triunfo tenga efecto definitivo en un país montañoso y sin comunicaciones rápidas como Colombia».

26. La documentación oficial venezolana, con lujo de detalles adicionales, está en el grueso folio de R. Tello Mendoza, comp., *Invasiones de Colombia a Venezuela en 1901, 1902 y 1903*, Caracas, 1903.

27. Nemecio Parada, *Vísperas y comienzos de la revolución de Cipriano Castro*, Monte Ávila Editores, Caracas, 1973. Parada escribe, según su propio texto, 62 años después de los acontecimientos, pero sus memorias son todavía frescas, y su relato no tiene ningún fin político o nacional que lo distorsione.

28. *Ibid.*, pp. 88-89.

29. *Ibid.*, p. 96. Cómo convence eso de «muñecas velludas, manos bien cuidadas», ¡vistas por la ventanilla en la oficina del telégrafo! El único libro sobre esta guerra escrito por un colombiano que se puede comparar con el libro de Parada, por su falta de pretensión y sus méritos de testigo memorioso, es tal vez *Memorias de un coronel recluta*, de Jesús Cock, Editorial Bedout, Medellín, 1946.

30. Sobre este punto, el artículo de Thomas Fischer, «Antes de la separación de Panamá: la guerra de los Mil Días, el contexto internacional y el Canal», Justo L. Durán, *La Revolución del 99*, *op. cit.*, pp. 110-111.

31. Justo Durán, *op. cit.*, pp. 110-111.

32. La fiebre amarilla fue endémica en Cúcuta, en Río hacha y en otros sitios de la costa, y la tropa del interior fue particularmente vulnerable a las epidemias. Para una descripción escalofriante de la mortandad en Barranquilla entre la tropa conservadora, reclutas del Cauca, de Cundinamarca y de Santander, véase H.S.Dickey, *Misadventures of a Tropical Medico*, London, 1929.

33. *Ibid.*, pp. 133-134.

34. Otra limitación que salta a la vista a partir de la lectura de las memorias es el frecuente aislamiento de los jefes, su falta de información fidedigna sobre lo que pasaba en otras partes del país. El ejemplo clásico de las limitaciones tácticas de los ejércitos es sin duda la batalla de Palonegro.

35. Hay un relato bien documentado del encuentro en Víctor Manuel Salazar, *Memorias de la guerra*, Editorial ABC, Bogotá, 1946, cap. XII.

36. *Ibid.*, p. 274. Tampoco el *Bogotá* era un buque muy formidable: con 900 toneladas de desplazamiento y 324 de registro, fue un vapor mercante armado con siete cañones y dos ametralladoras. «Comandábalo Henry H. Marmaduke, de la Escuela Naval de Annápolis, capitán que había figurado con brillo en la guerra de Secesión de los Estados Unidos...». (Si este último detalle es correcto, entonces, en frase de Vargas Santos, ese capitán tan anciano debe haber sido mandado a archivar).

Sobre la odisea de otro buque comprado por el gobierno colombiano, involucrado en la «Revolución Libertadora», la resistencia a Cipriano Castro liderada por Manuel Antonio Matos, y eventualmente rebautizado el *Marroquín*, véase el raro y curioso relato de Captain Willis, *The Cruise of the «Ban Righ», or How I Became a Pirate*, London, 1902.

37. Destruyeron la línea telegráfica en su salida: «A machetazos echáronse por tierra los postes del telégrafo, medida que, no obstante ser necesaria, causó a Peralta disimulado disgusto

por tratarse de la destrucción del único signo de progreso moderno existente en aquellas veredas». *op. cit.*, p. 50.

38. *Op. cit.*, p. 59.

39. Rasgo común de la época. Se ve también en las memorias de los ingleses en la guerra de los Boers, y aun en los monumentos funerarios que ellos dejaron en los campos de batalla. Ni la muerte nivela todo.

40. La modestia no fue una de sus virtudes. Véase *Revolución de 1895. Documentos relativos a la campaña del Gral. Rafael Reyes. Homenaje al Héroe de Enciso en el primer aniversario de su gloriosa jornada*, Bogotá, 15 de marzo de 1896 (sic): Descripción de su entrada, telegramas de felicitación, 65 páginas de poemas, «Obsequio de las señoras de Tunja», «Lista de las coronas obsequiadas al general Reyes», etcétera.

41. Max Grillo, *op. cit.*, p.154.

42. Esta cita y las siguientes de Salazar en *op. cit.*, p.127 y ss.

43. Como don Ventura Ahumada de la dictadura de Bolívar, fue un hombre de autoridad y mando, de principios conservadores, de extracción social relativamente humilde. No le interesaba la riqueza.

44. Alrededor de la noción de memoria se ha construido y se está construyendo mucha teoría. Para una exploración nacional reciente, véase Cristóbal Gnecco y Marta Zambrano, eds., *Memorias hegemónicas, memorias disidentes, el pasado como política de la historia*, ICANH, Bogotá, 2000. Llama la atención que las guerras civiles no merecen una mención. Me parece —permitiéndome por razones de espacio cierta simplificación de sus enfoques— que la mayoría de las contribuciones al libro prefieren especular alrededor de las memorias disidentes, bastante elaboradas, de minorías; sospecho que ellos clasificarían el «bagaje normal» de memorias históricas que tiene en su mente el hombre común como «memoria hegemónica».

Las dificultades de tener un acceso neutral a ese «bagaje común» son obviamente aún más grandes para épocas pasadas. ¿Cuáles ideas sobre la historia, cuáles «memorias históricas», hegemónicas o disidentes, hubiera tenido tal hombre común a mediados del siglo XIX? Una muestra: en su naif y nada pretencioso *Recuerdos históricos de un viejo soldado del Partido Conservador*, Bogotá, 1893, Juan N. Maldonado Meléndez escribe sobre los obreros de su infancia, c.1840: «Tales obreros en sus trabajos, así como en las horas de recreo, se complacían en recordar tanto lo que habían hecho, como lo que habían visto y oído de sus jefes». Hablaban de los temblores, «y era de notarse el entusiasmo con que recordaban las hazañas de los héroes de la Independencia». Entre ellos, según Maldonado, había veteranos compañeros de Ricaurte, de la guerra «en Venezuela, en el Ecuador, en Bolivia, en el Perú y en Tenerife». En la casa hablaban de Piar, el 25 de septiembre y «la muerte de un inglés jefe de los patriotas», el virrey Solís, «el que fue clarín de los españoles y con sus constantes toques atormentaba a los patriotas», «el asesinato del coronel Bolívar por un manco», el asesinato de Zardá, Policarpa Salavarrieta, Santander, la *Patria Boba*, El Santuario. la Legión de Albión; contaban anécdotas del general Maza: «éste tuvo necesidad de unas bestias en Popayán, las cuales pidió al alcalde, y éste no pudo suministrárselas. Irritado, Maza le dijo que si no le daba las bestias le hacía dar cuatro balazos: el alcalde le dijo con mucha energía, que con uno era suficiente y que los tres restantes los reservara para la gran... señora de su madre; a esta respuesta le volvió Maza la espalda».

Dudo que en Colombia las «memorias disidentes» y las «memorias hegemónicas» sean tan fáciles de separar. Esto tiene sus implicaciones, como vamos a argumentar, sobre la memoria de los Mil Días.

45. Miguel Antonio Caro, *Escritos políticos*, cuarta serie, p. 162.

CAPÍTULO 3

TRAS LAS HUELLAS DEL SOLDADO PABLO

HERMES TOVAR PINZÓN

LA GUERRA DE PALONEGRO

El 31 de diciembre de 1998 concluí la lectura de algunas cartas del general Próspero Pinzón sobre la batalla de Palonegro[1] e hice un recuento rápido y suscinto de la matanza más asombrosa de la guerra de los Mil Días y tal vez de la historia de Colombia[2]. Del 11 al 25 de mayo de 1900, en una montaña de los Andes, miles de hombres arremetieron unos contra otros para destruirse. Desde la madrugada hasta la medianoche liberales y conservadores se retiraban a hacer sus inventarios de agonías, e intentaban descansar antes de volver con el alba a buscar, una vez más, el rostro de su propia muerte. Cada día, incluidos dos sábados y dos domingos, liberales y conservadores se despedazaron, en defensa del honor de su partido. Los días que el Creador había reservado para sí no contaban en esta feria de sangre. La pestilencia que se dispersaba por el campo de batalla y a lo largo de las trincheras no alcanzaba a disuadir la vocación infernal de destrucción humana[3]. En los cinco primeros días de lucha nadie se espantaba «de los muertos», no lloraba «por los heridos» ni se abatía ante «el espectro del hambre y de la sed» que los abrumaba[4]. Brazos, cabezas, pedazos de troncos moribundos poblaban de muecas y quejidos el ambiente. Durante 15 días se exterminaron por centenas unos y otros, y lo hacían con tal certeza que el general que triunfó manifestaba 36 horas después de iniciado el desperdicio de vidas humanas «que la victoria será pues del que primero reciba refuerzos»[5]. Fue bajo este principio que Pablo Pinzón abrazó a su madre para despedirse, embarcarse y convertirse en parte esencial de tal estrategia.

A las dos de la tarde del 11 de mayo de 1900 se inició un tiroteo sin importancia para los conservadores, pero como no cesaba el combate, a eso de las once de la noche fue necesario hacer unas descargas de artillería que hicieron retroceder a los liberales con sus «pérdidas considerables» de muertos y heridos, y con sus divisiones despedazadas[6], mien-

tras la banda de música tocaba el Himno Nacional[7]. Entre lamentos, órdenes, armas y lealtades partidistas se cosieron las heridas en medio de la noche para volver a la madrugada del día siguiente a cargar contra los conservadores de Próspero Pinzón[8]. En una confrontación «algo exagerada», los liberales lucharon hasta las once de la noche, cuando volvieron a su círculo de retirada cargando sus muertos y heridos. Confío en que Dios, dijo el general Pinzón, «no nos negará la victoria» mientras reportaba más de cien bajas en sus filas. Pero como compensación a los cadáveres que apilaba, el enemigo estaba destrozado y sin pertrechos[9].

Habían pasado varios días de degüellos humanos en esta «guerra de Palonegro». El 16 de mayo la lucha seguía sin «un minuto de descanso, ni de día ni de noche», según se registró en una carta enviada al gobierno central[10]. Los liberales y conservadores habían perdido su intrepidez y agotado una vez más sus pertrechos. Entre tanto el soldado Pablo Pinzón arribaba a las trincheras con otros improvisados combatientes. El problema de esta batalla de la guerra de los Mil Días era la capacidad de oponer al enemigo la mayor masa humana y la mayor cantidad de hombres que lo pudieran superar. El problema no era de tácticas militares; era más simple: de suma, pues aquel que pudiera matar más y sumarle nuevas vidas a las trincheras, para seguir matando hasta eliminar al otro, ganaría. Y ganaron los godos y el gobierno, quienes supieron resolver este problema aritmético[11]. La batalla en este día, 16 de mayo, había sido «horrorosamente cruenta» con pérdidas humanas extraordinarias de una y otra parte[12], pues los «continuos ataques de la revolución aumentaban los muertos y los heridos»[13]. Al día siguiente los ejércitos de rojos y azules se habían diezmado y «casi disuelto» después de 20 cargas, que dejaron en los campos centenares de vidas y de otras que huían por entre las rendijas de las heridas abiertas en el filo del machete, la espada y la bayoneta, o en la descarga de la fusilería o de las armas de artillería[14]. Un combatiente que llegó a Palonegro, tres días después de iniciada la batalla, afirmó que desde Santanita, «alcanzábamos a percibir el tronar de los fusiles y cañones»[15]. Tal era el pan de cada día en los campos en donde se dirimía el honor de los partidos más auténticos de Colombia.

A la luz de una vela, el general Próspero Pinzón reparaba su ejército después de 80 horas de ayuno. Movilizaba víveres y se alistaba para una carga definitiva contra los liberales. Pensaba que empujando «con violencia» y con el «favor de Dios» obtendría un triunfo definitivo[16]. Maravillosa reflexión que hace suponer que en los días anteriores se luchó con cariño y con la solidaridad del diablo. Apenas una semana después entrarían Dios y la violencia para ayudar a dirimir este ejercicio de exterminio. Hasta ahora los muertos no eran suficientes como para disuadir a los contendientes.

El parte del 18 de mayo, una semana después de iniciada esta destrucción generalizada, sugería que el ejército conservador se sentía más o menos triunfante, pues había fortificado las posiciones arrancadas a los liberales. El primer balance de costos humanos se calculaba en cerca de 1.500 muertos y 2.000 heridos, 180 prisioneros, sin contar los «pertrechos y banderas» que se habían recuperado. Todo esto lo había dejado el enemigo que parecía más un cementerio ambulante que un ejército dispuesto a seguir luchando. Según el general Pinzón, los prisioneros habían informado que los combatientes no eran 8.000 sino 12.000, de los cuales quedaban 4.000 en un ejército «amedrentado». Del lado conservador crecía la moral mientras que sus heridos eran 800, y 400 los muertos. «En una palabra —decía el general Pinzón—, nos resta organizar el triunfo que veo asegurado»[17].

Los liberales no se entregaron: siguieron combatiendo hasta el 25 de mayo, como si tuvieran la convicción de una inmolación general. Los partes de guerra desaparecieron; sólo se conoce una nota, sin fecha, al general Casabianca, ministro de Guerra de la República de Colombia, en donde se decía: «La revolución está completamente vencida, lo que queda ya es de poca importancia»[18]. Es decir, el ejército de 3.000 a 3.500 hombres que huía cansado y vacilante ya no contaba[19]. Era una cosa «de poca importancia», pues iba en «desbandada» hacia Río Negro[20]. El 25 de mayo había marcado el fin del desastre del Partido Liberal arropado de revolucionario. El 26, en la madrugada abandonaron los bosques, las casas, «todo su campamento, dejándolo regado de cadáveres insepultos; muchos heridos entre las casas, armas, dinamita, cohetes en gran cantidad [...] por todas partes la desolación y la muerte»[21]. Las comunicaciones que empezaron a circular no sólo celebraban la victoria sino que daban instrucciones para cerrarle a un ejército liberal, mal herido, su marcha hacia Cúcuta y la frontera con Venezuela. Lo «único que puedo asegurar» es que «no podrán arrimar», le decía el 30 de mayo al general Casabianca[22]. El 29 se había comunicado a las autoridades de Málaga que se hiciera saber «a los habitantes de esa región que el enemigo ha sido derrotado en la batalla de Palonegro y que huyó desbandado a Río Negro»[23]. Al ordenarse la retirada de Palonegro dijo un combatiente, «yo quedé por ahí huyendo enfermo de paludismo, hasta que a poco caí prisionero con otros compañeros y fuimos conducidos al panóptico de Tunja»[24]. Casi en su totalidad, los prisioneros de Palonegro, «fueron pasaportados para sus casas, *bajo su palabra de honor*» de no volver a tomar las armas contra el gobierno[25]. La derrota de los liberales se reportó muy rápido al arzobispo de Bogotá. El general Próspero Pinzón le manifestó el 26 de mayo que, «Después de largo y cruento batallar Dios ha concedido la victoria al ejército defensor de la República Cristiana. Mis votos son que este triunfo sea propicio en bienes para la Iglesia y la Patria»[26]. Dios, la Iglesia y la patria continuaban con su reinado sobre una montaña de calaveras y sobre los nuevos muertos que seguirían alimentando la tozudez de unos y otros, dispuestos a seguirse matando de a poquitos, en la sombra, en los caminos, en los pueblos, en la emboscada, en los juicios sumarios, hasta lograr la paz el 21 de noviembre de 1902.

Mientras el general Pinzón y sus fuerzas recorrían el campo de batalla de Palonegro recogiendo muertos y heridos, el Partido Liberal marchaba con sus 3.500 hombres hacia Río Negro, en donde había tenido «su base de retirada y sus hospitales». Allí había 1.852 heridos, mientras que en el campo de batalla yacían abandonados 576 muertos y 180 heridos. A su vez, los conservadores auxiliaron a sus 50 heridos. Con ellos ascendía a 854 «el número fijo de nuestros heridos»[27]. Es decir que después de 15 días de combates habían muerto 2.476 hombres y quedado heridos 4.882. Una verdadera masacre en una de las batallas más largas de la historia militar. En Palonegro la revolución quedó «terminantemente terminada» y sus restos caminaban después de Río Negro hacia Ocaña[28], para dispersarse luego y prolongar una guerra con ejércitos errabundos y sin dirección unificada. Tal vez estos dos rasgos del ejército liberal, la falta de una región que les sirviera de base de operaciones para reorganizar sus fuerzas, siempre perseguidas, al igual que la ausencia de una dirección militar a nivel nacional, hizo que su ejército fuera un cuerpo desagregado que actuaba a ciegas y sin descanso. Tal desbandada se asume como si el liberalismo hubiera optado por la guerra

de guerrillas, después de Palonegro, cuando no fue así. Lo que se observa es el exterminio sistemático de las fuerzas armadas del Partido Liberal y para ello fueron necesarios 900 días después de Palonegro. En otras palabras: el Partido Liberal, sólo fue una amenaza real para el gobierno conservador durante los primeros 230 días de la llamada guerra de los Mil Días que en realidad duró 1.130 días. Un combatiente caucano afirmó que entre 1899 y 1902, «en la guerra de los *Mil y Pico de Días»*, había servido «en campañas del Huila, Valle y Cauca»[29], en el ejército liberal del centro.

En este exterminio posterior a Palonegro se violó el derecho de gentes y, por supuesto, todos los derechos consagrados en la Constitución de Colombia. Masacres indiscriminadas, remates de heridos, fusilamientos sumarios y ley de fuga que debilitaron las fuerzas insurgentes del Partido Liberal[30]. La paz sirvió para restaurar a la élite liberal en sus mismos escenarios de poder, porque la militancia ya había sido acorralada, exterminada y derrotada. Los de arriba volvieron a usufructuar sus ventajas políticas y económicas, los de abajo se quedaron sellando sus heridas, su dolor y su miseria. La revancha del honor herido se volvería a dirimir entre 1948 y 1958. Es muy significativa la afirmación de estos veteranos que entre 1938 y 1939 manifestaron que una vez pasó la guerra «he seguido siendo fiel a esos principios liberales, sin vacilación ni temores de ninguna naturaleza»[31], o, como afirmó otro, que era casi lo mismo que todos escribían, «he permanecido firme al servicio de la causa liberal»[32]. Algo similar a lo que manifestaban los del otro bando: que seguían siendo fieles «a las ideas conservadoras»[33].

UN GUERRERO ENTRE PAPELES

Al terminar este relato simplificado de Palonegro, la última gran vergüenza nacional de los odios partidistas del siglo XIX en Colombia[34], de súbito fui requerido con esta pregunta: «Y entre tantos papeles ¿no se encontraría algo sobre mi hermano Pablo?»[35]. Se trataba del soldado Pablo Pinzón, que había ido a reforzar la táctica elemental de masificar la matanza de Palonegro. Me pregunté si era posible que alguien después de oír sobre tanta muerte supusiera que la vida podría encontrarse entre «papeles» de Archivo. ¿Será que en las guerras, las familias de los combatientes quedan dependiendo al final de un registro? El interés de un general por describir lo que ocurría en una batalla, y el de unos partidos por ganar la guerra se diluyó entre la ausencia centenaria de un anónimo combatiente. Aprendí entonces que las guerras, a pesar de su crueldad, dejan huellas de esperanza. Que la historia no es el olvido sino la vida y la agonía de quienes han hecho las batallas. Que la historia puede conciliar el silencio con que una época recubre el corazón de los dolientes, y puede develar la nostalgia de quienes ven en el futuro una luz de esperanza a las incertidumbres del presente. Aprendí que los archivos históricos son los últimos refugios del luto y el dolor. Por ende, son los refugios de la paz contra el tormento y el último lugar donde el silencio atrapa el grito. En ellos la vida se concilia con la muerte y son como un consejo tierno que nos mueve a la esperanza.

Hasta este 31 de diciembre de 1998 esta guerra llamada de los Mil Días no había sido algo familiar, sino meros acontecimientos que estaban fuera, por ahí, rondando otros

vecindarios. Es constante que en condiciones de guerra y de violencia social, el conflicto apenas comience a pertenecernos cuando nos afecta directamente, cuando toca las puertas de nuestras habitaciones o cuando nos golpea en las espaldas. Mientras tanto la guerra parece ser de otros, de los que sufren más allá o más acá de las trincheras, de los que se quedan esperando un regreso o dejan a espíritus protectores que vigilen a los que combaten.

En medio del asombro, de una batalla, de un soldado desconocido y del reto de la investigación histórica, siguieron los interrogantes que ampliaban la pregunta. Eran palabras que golpeaban como si se tratara de repetir el campo de batalla que acababa de describirse en donde no se daba ni un minuto de tregua: «Él era mi hermano mayor que fue embarcado en el puerto de Girardot para la «guerra de Palonegro». Opté por precisar que Palonegro era una batalla y que posiblemente se le había reclutado para la batalla de los Obispos o de Peralonso. Pero el fuego era preciso y continuo: «La gente hablaba de la "guerra de Palonegro" y a Pablo lo llevaron a esa guerra». «Mis papás lo despidieron en su terraje con otras gentes que iban hacia el mismo destino. La casa quedaba a la izquierda de la hacienda "Misiones", ahí junto a la quebrada que divide las haciendas de "Misiones" y "Trinidad"», en Mesitas del Colegio. De allí lo despidieron y mi «mamá no quería que se fuera». La contundencia de la afirmación me hizo pensar que en realidad Palonegro había sido no una batalla sino una guerra, pues después de todos los muertos recogidos en 15 batallas sucesivas no era posible prolongar la «revolución liberal» y ahí había terminado la guerra de los Mil Días. El mismo Próspero Pinzón había comunicado, el 17 de mayo, que «después de más de 20 cargas exageradamente violentas nuestro ejército quedó diezmado y casi disuelto; tuvimos cuatro plenas derrotas que tuvimos que contener con esfuerzos inauditos»[36]. Es decir que en un día hubo 20 batallas, con 4 derrotas para los conservadores y con centenares de muertos en este infierno que se llamó Palonegro. ¡Que en 24 horas se vivan 16 victorias apenas empalidecidas por 4 derrotas, es algo mágico, algo que sólo ocurre en Colombia! ¿Y si un sólo día tuvo tantas batallas, tantas victorias y derrotas, ¿no era lógico pensar, como los campesinos de entonces, los que esperaban en la retaguardia de la parcela, que Palonegro era una guerra?

Pero no alcanzaba a legitimar mis propias consideraciones, cuando el relato seguía atropellando:

> Después de terminada la guerra mi mamá iba por ventas, caminos, pueblos y mercados preguntando si alguien había visto al soldado Pablo. Hasta el día en que murió, en 1950, no perdió la esperanza de que alguien le diera razón de su paradero. Tal vez se había ido de peón a una hacienda, se habría instalado en un frente colonizador o habría ido a trabajar a una gran ciudad. ¡Quien podría saber en dónde se metió!

Aquí quedé fulminado, como si acabara de caer en medio del odio de liberales y conservadores. No pude más, sólo intentar llegar al Archivo General de la Nación para tratar de resolver el enigma de una geografía de silencios, de caminos sin viajeros, cuyos paisajes simbolizan el poder dinástico de un siglo de inútiles esperas.

MEDIO SIGLO DE PAZ

La abuela murió el 30 de abril de 1950. Unos años después la familia agradeció que tal cosa hubiera ocurrido antes de que arribaran la Virgen de Fátima, los obispos y el año santo con su prédica de fuego y represalia hacia evangélicos, protestantes, rojos y rebeldes. Esta satisfacción tenía que ver con el inicio de una era de desastres que asoló la vida de líderes y militantes de las ligas campesinas del centro del Tolima, a donde ella se había trasladado hacía más de 35 años con sus once hijos[37].

De la abuela se recuerdan sus ojos pardos, sus faldas largas que caían seguras sobre sus alpargatas negras y sus blusas blancas bordadas en colores que contrastaban con su rostro pálido. Un sombrero blanco cortado por una cinta negra remataba su figura firme. Las arrugas de sus manos transmitían alegría cuando presurosa llevaba a sus nietos hasta las improvisadas plazas de madera donde se celebraban remedos de corridas de toros que la banda de don Pacho ambientaba con pasodobles que soplaban sus improvisados músicos. Las graderías en donde se amontonaban los parroquianos tenían la luz, la forma y el color propios de un cuadro impresionista.

La guerra alteró la vida de la aldea, y el tiempo de la historia familiar cayó en el silencio. La voz baja se metió en las habitaciones para clandestinizar toda conversación que condensaba los últimos rumores sobre un crimen, sobre un asalto, sobre los últimos decretos del estado de sitio o sobre la voluntad de un hacendado de expulsar a reconocidos agregados y arrendatarios de las tierras de su hacienda. Los acontecimientos de la vida diaria iban y venían como presagios fatales que giraban en imágenes mal reconstruidas de la última guerra civil. La guerra de los Mil Días surgía en las tertulias como una sombra no deseada. Quienes habían sobrevivido a las trincheras y a los escuadrones de macheteros dirigidos por generales de ocasión y por anónimos combatientes, hacía medio siglo, percibían el peligro de una reanudación de las pasiones nunca superadas por liberales y conservadores.

La abuela había sobrellevado al menos tres guerras civiles cruentas —1885, 1895 y 1899-1902—, y había logrado morir antes de que otra guerra civil arrastrara a sus hijos, nietos y herederos por los linderos del miedo, la huida y la impotencia. Las historias familiares son como cajas de recuerdos, como testamentos nunca abiertos, como procesos judiciales no resueltos o como depósitos documentales. Un día al abrirse el cajón del tiempo se revelan verdades y los documentos son abismos llenos de preguntas, de trajines y nostalgias. Por ejemplo, el día que se abrió el libro de la memoria familiar, se supo que en la guerra de los Mil Días, la abuela marchó durante 72 horas con las tropas del gobierno intentando recuperar una vaca que robaron los soldados y que ella reclamaba como parte fundamental de su patrimonio. La trataron muy bien y al tercer día, como en la resurrección de Cristo, le devolvieron el buche y el cuero de la res. Algo había recuperado en esta guerra infernal en donde miles de combatientes arrasaban todo como si fuesen una plaga de langostas. En la historia familiar, cada testimonio, cada anécdota tiene una función pedagógica. Y lo vivido es patrimonio moral y herencia que forma. La ironía de estas pequeñas defensas de un bien surgía en el contexto de la nueva guerra de 1950, que empezaba por no respetar a mujeres y niños[38]. La comparación daba saltos en el tiempo para enseñarnos a elaborar conocimientos sobre lo racional e irracional de los desastres. Al menos en la guerra de los Mil Días existían reglas de juego. La nueva confrontación parecía ser distinta. Lo que Charles Bergquist deno-

minó *la guerra de los caballeros de 1899*[39], no tenía, 50 años después, ningún espacio a pesar de que los actores ideológicos eran los mismos pero distintos sus ejércitos, sus directorios políticos, sus sicarios y matones y sus métodos de exterminio.

UN SOLDADO SIN OFICIO

La guerra de los Mil Días terminó en 1902. Miles de combatientes regresaron para integrarse a la vida civil. La paz volvió a reinar en Colombia. La guerra se tradujo en retórica partidista de quienes se dedicaron a alabar a generales y a exculpar a uno y otro partido de sus responsabilidades por el desastre. La matanza había sido para servir a Dios y a la patria, pues uno y otro altar necesitaban, como en el mundo primitivo, de sacrificios humanos. Al final, en Palonegro se decidió la suerte de «la República Cristiana», grito con que cargaban los ejércitos del general Pinzón[40]. Oficiales excluidos del recuerdo de la gesta han dejado sus propias novelas de valor, y han repetido las mentiras sobre su vocación de paz y de servicio a la nación[41]. La historia del sacrificio por Colombia que reclaman hoy los políticos ha sido en esencia la legitimación de los odios y la incapacidad de hacer de la tolerancia un recurso de convivencia y de formación democrática.

Muchos acontecimientos de la vida nacional no nos pertenecen o los sentimos como ajenos. Hay grandes fenómenos que se mezclan en el espíritu para fortalecer la idea de pertenencia a construcciones colectivas que la nación reconoce como herencia imborrable. La guerra de Independencia nos pertenece a todos, al igual que nos pertenece la imaginación y la construcción social que realizaron los pueblos indígenas. La guerra de los Mil Días le pertenece a los partidos políticos y a sus militancias. De hecho, quienes eran excluidos por los partidos en el siglo XIX, como los indígenas del Amazonas y del oriente de Colombia, nada tuvieron que ver con el conflicto. Y otros pueblos, como los guajiros, los caucanos, los panameños y los indios del Tolima, que participaron en el conflicto lo hicieron por conveniencias derivadas de la misma coyuntura de la guerra[42].

A finales del siglo XX, las gestas de los partidos se apartan de nuestras esencias aunque constituyen patrimonios de grupos interesados en preservar la historia de sus pasiones. Al deslindar tales patrimonios los derrotados los rescatan como parte de alegatos sobre la gran tragedia nacional producida por tales conflictos. Estas guerras civiles tienen resonancia por la insensatez y por la ausencia de autocrítica de quienes fundaron una ciudadanía y democracia restringidas, al negar los derechos del otro. Así, la confrontación de 1950, denominada como la *Violencia colombiana*, es el último experimento de la razón conflictiva de liberales y conservadores. Y es esta razón la que está en crisis al despuntar el siglo XXI. Una razón que debe superarse en la crítica de los perdedores y de los negados de siempre[43].

No existen, como contrapartida, historias familiares ni historias del reverso de las guerras del siglo XIX. Es decir, lo que vivían quienes quedaban lejos de las trincheras oteando el regreso de héroes sin sentido. Un buen día de 1900, uno de estos soldados sin regreso quiso incorporarse a los combatientes, como lo habían hecho miles de colombianos asediados por el fanatismo político, por el miedo, por el clientelismo y por el aburrimiento de tener que huir de aquí y de allí para evitar la movilización. Los ocultamientos creaban crisis familiares, desencuentros, asperezas, rápidos desafectos, y fue en uno de estos disgustos cíclicos

que Pablo decidió recoger sus 18 años e irse a la guerra. Se había disgustado con su padre que estaba alterado con los largos seis meses de anidarle un escondite.

Nunca se habló de Pablo en la familia, tal vez porque todos lo esperaron cuando terminó la guerra. O tal vez porque la abuela cerró su corazón a las palabras para que entrara vivo en un grito de alegría. Durante 50 años guardó silencio y Pablo sólo regresó el día que ella lo encontró callado para siempre acompañándola en el fondo de su propia tumba.

La abuela imaginó al soldado Pablo contando sus hazañas y siempre lo esperó vivo, no muerto. La familia no lo olvida. Los Estados, los interesados en la guerra, olvidan y se zafan de sus combatientes, pero en el hogar siempre hay una vela que ilumina y tiembla con la esperanza y el saber. «De pronto algo puede saberse de él», me han interrogado. Ese «saberse» es una referencia discreta a mis estudios, a los libros envejecidos y sin oficio en que se consume mi propia vida, en otra guerra por saber. Y ese saber estaba de pronto entre papeles. Y en verdad sólo los papeles nos pueden ayudar, sobre todo cuando no disponemos de otros testimonios. Ahora tengo sobre mí a un soldado inexperto a quien se le encargó ayudar a decidir la victoria de Palonegro en nombre de «Dios y de la Patria». Junto a este soldado desconocido sólo tengo escritos que posan de laboratorio para una profesión que parece hundirse en la centuria para revelar la fragilidad del oficio de un historiador.

La guerra de los Mil Días se metió de pronto entre mis huesos y cada papel comenzó a tener sentido. Hasta los dibujos de Peregrino Rivera Arce revelaron toda la desolación del desastre que rodea el ambiente de sus figuras. El río, las barcazas, los muertos, los soldados, los heridos visualizaban por primera vez los vacíos de la guerra. Hasta la «cocina de Máxima» surgía como el volumen de una pesadilla vuelta habitación[44]. El Archivo General de la Nación conserva más de 26 mil expedientes de veteranos de la guerra de los Mil Días[45]. Los expedientes son solicitudes para que se los registre en el escalafón militar, de acuerdo con lo establecido en la ley 7ª de 1938. Las solicitudes fueron hechas entre 1938 y 1939, pero también las hay de 1948 a 1952. Con la ilusión de saber algo sobre aquel anónimo combatiente, comencé a mirar los expedientes pero comprendí que era casi imposible tener una huella, pues aunque existe un orden alfabético no había ningún Pinzón Pablo. Este adolescente de 18 años, analfabeta, nostálgico e inexperto, debía ser una de esas calaveras que un día se recogieron en los campos de Palonegro y se amontonaron como un testimonio a la crueldad, mas no como un homenaje a la memoria de unos NN que nunca regresaron a sus hogares. Al observar nuevamente los dibujos de Peregrino Rivera lo reconocí enfermo, o cadáver o muerto a machete en medio de la terrible simplicidad de la forma.

Desde cuando terminó la batalla de Palonegro, el 25 de mayo de 1900, hasta el 30 de abril de 1950, cuando cayó vencida de esperar, la abuela miraba los caminos que regresaban a la hacienda en donde tenían su terraje; marchó hasta las ventas para averiguarle a los compadres si algo sabían del soldado Pablo; fue a los mercados para investigar entre nuevos transeúntes; se metió en los corrillos que hablaban de las últimas batallas, y cuando pasaban desmovilizados preguntaba si el soldado Pablo estaba de regreso. Escarbó en todas las historias de quienes volvían de cualquier combate. Lo supuso vivo en una barca imaginada por el río Magdalena y lo veía llegar con el sol o con las sombras. Como nadie supo darle razón y los años pasaron, optó por buscarlo allí en donde la vida y la muerte se enfrentaban, y por eso desató el gusto por los toros. Tal vez lo veía en la sangre y en la arena, o tal vez en la angustia

de unos toreros sin oficio, pues al fin y al cabo Pablo se había marchado siendo un guerrero sin oficio.

En la historia de Colombia no hay lugar para el recuerdo ni para monumentos a los soldados desconocidos de nuestras guerras civiles. Tal vez el uso del olvido y la negación al duelo de los perdedores ha convertido en tautología la retórica que describe al pueblo como carne de cañón. Aceptar tal simplificación es negar el poder de socialización de los intereses de las élites a través de slogans e ideologías. El 17 de octubre de 1899, en plena algarabía del levantamiento, Faustino Apolinar le dijo a su padrastro: «Ya no atiendo familia ni intereses porque el momento de saber para qué sirvo llegó». Y se marchó diciéndole: «Luche usted por los dos con nuestros intereses, sucesiones y nuestros pequeños, que yo me voy a la campaña a luchar por juntos con los grandes enemigos del liberalismo»[46]. Éste es un ejemplo entre miles de combatientes que dejaron todo para defender la causa de su partido.

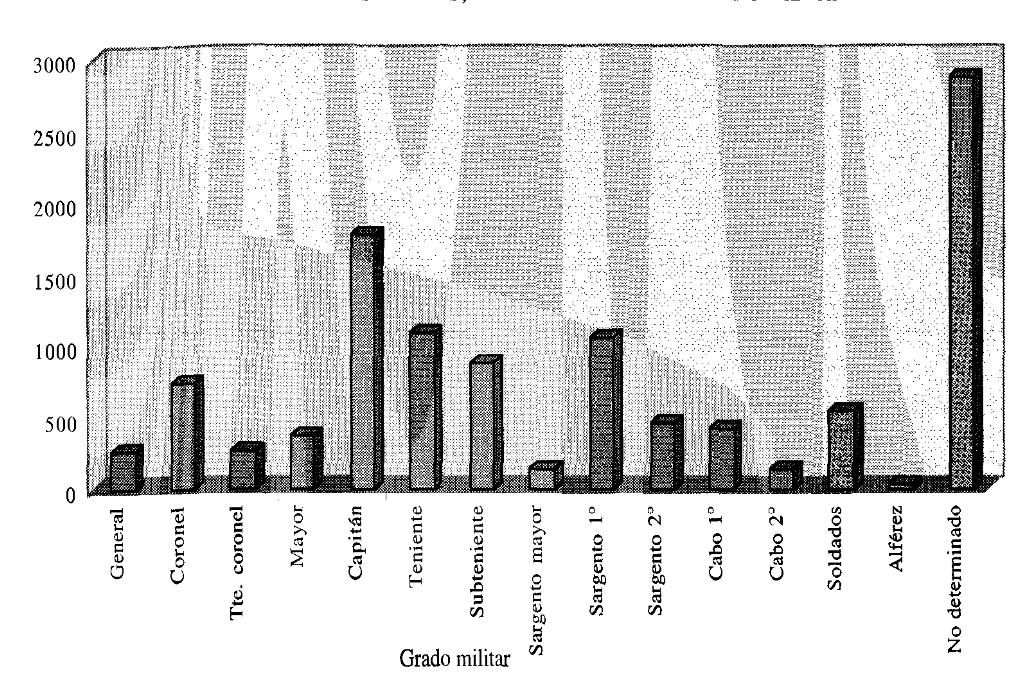
La comunión con la realidad se torna un punto de equilibrio para enseñarnos que en historia siempre luchamos con vacíos cuyo fondo imaginamos sólido y soñamos con cruzar. Pero cuando la nada comienza a rondarnos, oímos los pasos del silencio, de la nostalgia, de la adivinación y de los sueños. Y alabamos la fabulación que en historia significa pasar los límites de lo concreto, como si la materia sólo fuera la apariencia de los acontecimientos y no lo inasible, lo efímero, lo intangible, aquello que es y no es. La fabulación no es elucubración sino la realidad recreada estéticamente, tal como debe ser el discurso historiográfico. El soldado Pablo era una especie de punto negro en donde todo se diluía. Al final opté por comprender que sólo la analogía con otras experiencias podría abrirme un panorama sobre el desastre que rodeó la vida de un joven adolescente de la región andina central de Colombia a fines de 1899 y principios de 1900.

DE LO PERSONAL A LO COLECTIVO

Serían necesarios 5 largos años de investigación rigurosa para lograr sistematizar más de 26 mil expedientes de los veteranos de la guerra de los Mil Días. No obstante la dimensión del reto, se han efectuado dos ejercicios generales. El primero consistió en clasificar 11.065 casos (42,5%) de ex combatientes según el grado militar alcanzado durante la guerra (véase Figura 1). Grado que les fue reconocido o negado por la Comisión del Escalafón de Antiguos Militares creada para atender dichas peticiones[47]. El segundo, en revisar los expedientes de 170 combatientes, es decir el 0,6% del total de la muestra existente. Esta insignificante proporción ofrece, sin embargo, otra imagen de la guerra, aquella que surge de la memoria decantada de estos combatientes y de quienes hablaron 35 ó 50 años después de finalizado el conflicto, ya fuera como actores o porque oyeron de sus padres o parientes lo vivido en la guerra. La petición de inscripción como militar debía ir acompañada del testimonio de tres militares reconocidos que debían responder un cuestionario que diera fe de la participación del solicitante en la guerra. Normalmente se hacía ante un juez o ante el personero, cuando no existía juzgado en el lugar donde declaraban los testigos. Esta información es muy importante cuando los declarantes amplían el interrogatorio y no se limitan a repetirlo. Aparecen a veces contradicciones en uno y otro relato y casi siempre referencias sobre la vida de estos testigos en la guerra.

FIGURA 1

GUERRA DE LOS MIL DÍAS; COMBATIENTES SEGÚN GRADO MILITAR



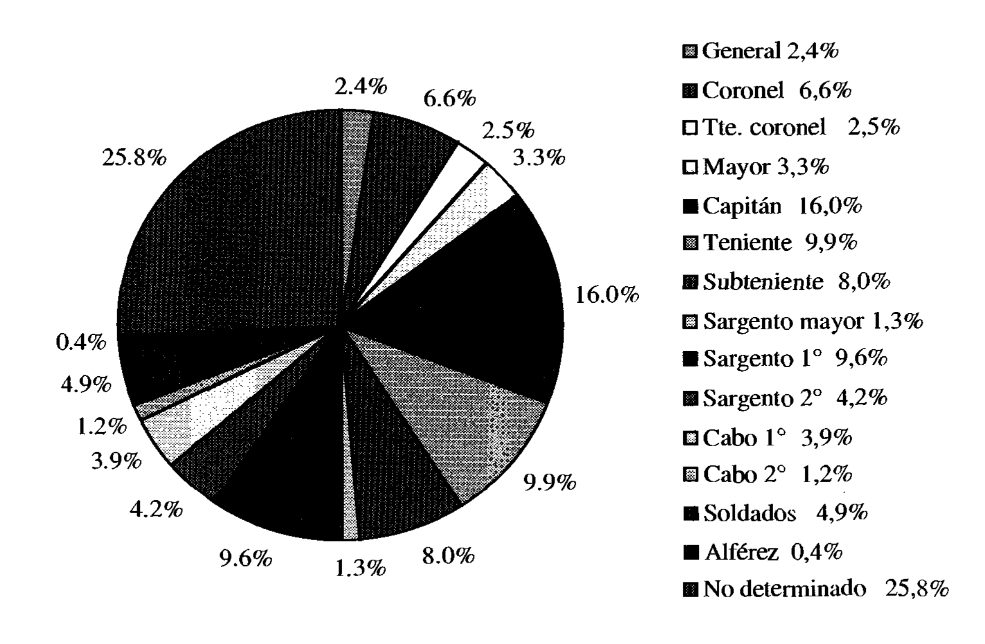
Cuando el combatiente había fallecido, surgían los testimonios de sus familiares, quienes demostraban el parentesco con el fin de que fueran inscritos como militares. Todo este conglomerado de recuerdos va cuajando imágenes diferenciadas de un conflicto que azotó no sólo el territorio nacional sino la vida de miles de familias que arrastraron con estoicismo su convicción de liberales o conservadores, sin recibir retribuciones del Estado. «Hace muchos años vivo en Bogotá, pobre, afligido, ya en el ocaso de mi vida, 76 años de edad; como liberal he cumplido mi deber. Si el gobierno actual con su buena ley de recompensas militares, me favorece, bajaré tranquilo al hoyo, alabando la labor generosa y buena del gobierno actual», dijo un veterano[48]. Otro contó que en el incendio de Puerto Berrío, en 1925, había perdido todos sus haberes, y ahora (1938) vivía en Medellín con su mujer y sus ocho hijos[49], mientras que Manuela Zea decía «Soy sumamente pobre» y por «mi ancianidad y enfermedades no puedo ganarme la vida»[50]. Pero otro generalizó esta realidad y sostuvo que los veteranos «frisamos los 60 años» y «estamos escasos de recursos y llevando una ancianidad de privaciones personales y por ende viendo sufrir a nuestras familias, que muchas veces carecen hasta del pan cotidiano...»[51].

Por eso cuando se promulgaron las leyes y decretos que recompensaban económicamente a estos combatientes, miles de ellos acudieron a registrarse como veteranos, no sólo de la guerra de los Mil Días sino de las guerras de 1876, 1885, 1895 y 1899-1902. Hay relatos de combatientes de 1895 y de la guerra de los Mil Días. Pero al menos hubo un

ciudadano, Ricardo Varón, que sólo presentó una relación de su participación en la guerra de 1885, y fue inscrito como sargento mayor[52].

Con respecto a los grados militares (véase Figura 2) se encontró que el 25,8% de los combatientes no fueron escalafonados, es decir, no se les inscribió como veteranos para los fines económicos propuestos. Razones legales o meramente burocráticas incidieron en ello. Las peticiones debían acompañarse además de la fe de bautismo, de la partida de matrimonio, si el interesado era casado, del acta de defunción, si eran los herederos quienes elevaban la petición, y además debía de escribirse una «breve relación» de su nexo con la guerra. Era importante que allí se dijera bajo qué comandantes actuó, en qué batallas y quién y cuándo le otorgó el ascenso al grado militar que reclamaba. Un soldado fue tan cuidadoso que recordaba aún en 1938, que en el Tolima, Cundinamarca y los Llanos de San Martín había participado en 41 combates al lado de la revolución[53]. Otros fueron contando su campaña dibujada en caminos imaginarios con sus marchas prolongadas que luego detenía un combate, una batalla o un tiroteo. Estas breves relaciones son puntos obstinados de una geografía del conflicto. Ellas dejan escapar lo humano, y mientras el recuerdo camina parece como si estos ejércitos, que brotan de las letras como manchas cansadas, avanzaran por entre paisajes en donde prima la soledad a lo largo de las travesías. El recuerdo sólo se cuelga de la vida, allí en donde estuvo el desfiladero midiéndole el final bajo el estruendo de un fusil o bajo el filo de un machete o una espada. Estos relatos saltan en el espacio de una a otra batalla, y terminan cuando sus actores caen heridos, son hechos prisioneros, se rinden a una enfermedad, huyen en desbandada o retornan al hogar.

FIGURA 2
COMBATIENTES SEGÚN SU GRADO MILITAR



Aquellos que no pudieron satisfacer la documentación requerida o no cumplieron con lo exigido por la ley para ser admitidos en el escalafón militar, fueron rechazados[54]. Otros muchos fueron ascendidos por oficiales o comandantes que no tenían rango de general o no eran autoridad civil y militar. Esto obligó a la Comisión a reiterar que «a través de sus varias providencias ha sostenido que los grados concebidos a oficiales sólo podían provenir cuando menos de jefes con grado de general o también de jefes civiles y militares»[55]. Por ello a la familia de un combatiente que murió en el «asilo de dementes San Rafael de Pasto», se le negó el escalafón de soldado raso que pedían para sí sus hijos porque «los testigos carecen de notoriedad militar reconocida y sus dichos son deficientes»[56]. Otros no presentaron los tres testigos requeridos, o no encontraron la fe de bautismo, o su presunta participación fue objeto de contradicciones en los relatos de los testigos. Hubo quien presentó dos declaraciones, pero uno de los declarantes no tenía «notoriedad militar reconocida», además de que los testigos lo ascendían a coronel sin haber hecho relación de los «grados anteriores»[57].

Aun a los herederos del general Avelino Rosas se les negó la inscripción de su padre en el escalafón militar «por falta de apoderado»[58]. Otros fueron rechazados porque su participación fue esencialmente política y nunca fueron ascendidos oficialmente en el escalafón militar. Tal fue el caso de Zoila Rosa Zamudio, viuda de Corredor, a quien se le negó el grado de coronel porque su intervención en la guerra «no tuvo propiamente carácter militar». El vocal ponente de la Comisión de Escalafón dijo irónicamente que ella «tiene perfecto derecho a que un retrato suyo al óleo y de tamaño natural sea colocado en las oficinas de la Dirección Nacional de su partido, pero no puede aspirar a que se le reconozca un grado militar que no tuvo, ni a que se le abonen actuaciones militares que no realizó»[59]. Otros no pudieron acreditar papeles relativos a sus ascensos pues se habían perdido en medio de la guerra. Un combatiente afirmó que los grados se conferían «sin dejar ninguna constancia escrita porque la guerra no daba tiempo para formar archivos, y si se formaban, en las derrotas se perdían»[60]. Éste fue un argumento válido para los liberales, pues, en general, los conservadores disponían de sus papeles oficiales.

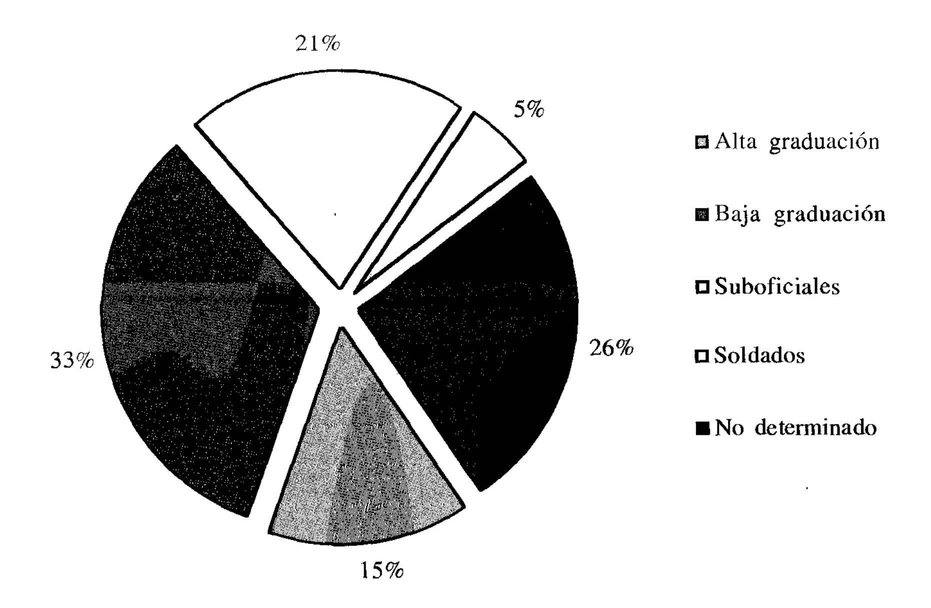
La carencia de la fe de bautismo se sustituyó por una prueba supletoria, consistente en la declaración de tres testigos sobre su edad aproximada. Claro que el mismo Mardoqueo Varón, quien manifestó haber nacido el 22 de julio de 1874 en Piedras, Tolima, sostuvo que dicha población, «lugar donde fui bautizado, la incendiaron en la guerra las fuerzas del general Pompilio Gutiérrez, quemándose entonces los archivos»[61]. Del mismo modo, la fe de bautismo del general Zarama desapareció en Pasto por haber sido quemados los archivos en «una de las revoluciones»[62]. Los generales normalmente presentaron su documentación muy bien sustentada, mientras que los soldados o suboficiales hacían verdaderas maromas para certificar sus grados. Estos testimonios monótonos eran examinados por la Junta de Clasificación que valoraba y avalaba, o rechazaba las peticiones.

De la figura 2 se deduce que el mayor número de militares inscritos corresponde a la oficialidad. Dentro de éstos se destaca el papel que tuvo el cargo de capitán (16%), un grado al que muchos aspiraban, tal vez porque las unidades de mando no permitían oficiales de mayor graduación. Los oficiales de graduación superior, como los coroneles (6,6%) y los

tenientes coroneles (2,5%) eran más importantes que los soldados (4,9%), a pesar de haber sido éstos los que conformaron los cuerpos básicos de las fuerzas en conflicto. Los suboficiales fueron el 20,6%, mientras que los oficiales de baja graduación constituyeron el 33,9% de la muestra y los oficiales de mayor graduación (mayor a general) componían el 14,3% (véase Figura 3). Este mismo gráfico revela los prejuicios que han caracterizado a las fuerzas militares, que han dividido su tropa entre una alta oficialidad, la oficialidad de menor graduación y los suboficiales. Los soldados de hecho no eran militares de carrera, aunque como veteranos podían acceder a un reconocimiento económico de 54 pesos, menos el 15% de descuento.

FIGURA 3

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE COMBATIENTES SEGÚN EL NIVEL DE GRADUACIÓN MILITAR



Pero la inscripción en el escalafón de antiguos militares apenas era un paso. Como la recompensa era el objetivo final de estas peticiones, quienes fueron inscritos en el escalafón militar procedieron a elevar nueva solicitud al Ministerio de Guerra para que se les reconociera lo establecido por la ley. Para ello era necesario presentar una copia de la resolución de la Comisión del Escalafón de Antiguos Militares sobre su grado militar, un certificado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en que constara que no había recibido recompensa del Tesoro Público, un certificado de la Contraloría General de la República en que se manifestara que estaba a paz y salvo con el Tesoro Nacional, constancia del poder dado al abogado para recibir el pago y una hoja de papel sellado en blanco para «la resolución ejecutiva»[63]. Una vez presentados todos estos documentos se dictaba la resolución de recompensa según los valores indicados en el cuadro 1:

CUADRO I

RECOMPENSAS A VETERANOS DE LAS GUERRAS CIVILES, SEGÚN ESCALAFÓN

Grado militar	Recompensa	Líquido
General	$ 4.800,oo	$ 4.080,oo
Coronel	$ 3.600,oo	$ 3.060,oo
Teniente coronel	$ 3.000,oo	$ 2.550,oo
Mayor	$ 2.640,oo	$ 2.244,oo
Capitán	$ 2.280,oo	$ 1.938,oo
Teniente	$ 1.620,oo	$ 1.377,oo
Subteniente	$ 1.380,oo	$ 1.173,oo
Sargento primero	$ 900,oo	$ 765,oo
Sargento segundo	$ 660,oo	$ 561,oo
Soldado	$ 54,oo	$ 45,90

FUENTES: elaborado en base a los expedientes consultados.

El valor total de la recompensa correspondía al salario anual de un oficial del Ejército, o «el sueldo en un año de un soldado», que era de 54 pesos[64]. A ello se le descontaba el 15%, que era destinado a un «fondo especial de auxilio a viudas e hijos de antiguos militares fallecidos antes de la ley 7 de 1938»[65]. De tal manera que quienes fueron rechazados no tuvieron derecho a la recompensa pero en cambio nos dejaron importantes testimonios sobre la guerra misma.

La información repetida y rutinaria de estas peticiones termina por disolver lo individual en el mundo de lo social. Lo reiterativo de unos documentos comunes constituye una especie de puntillismo que introduce luz en el cuadro de la historia. Más allá de la vida personal de cada combatiente se esconde el fantasma de una sociedad atada a las verdades de la masa documental. Las partidas de bautismo, matrimonio y defunción, y las constancias de vinculación a un batallón, son esferas genéricas en donde los seres humanos han circunscrito su destino. Cualquier investigador con poca experiencia estaría tentado a dejar esta documentación o a usarla como dato aislado para ilustrar historias personales y no como parte de fenómenos colectivos que comienzan a revelarse a medida que la reiteración toma cuerpo en lo cuantitativo. Absorbidos en ambientes sociales, estos expedientes precisan y recrean las estructuras de una época. El soldado Pablo cayó en este vendaval colectivo, así no tengamos ninguna relación, ninguna petición, ninguna queja de su destino incierto ni ningún dibujo de su agonía joven.

Por ejemplo, las partidas de bautismo y los resúmenes que indican el lugar de nacimiento, el estado civil, la estructura familiar, la profesión y el lugar de residencia, son elementos que pueden acercarnos a una sociología de la guerra de los Mil Días. Una vez se

hayan sistematizado los 26 mil casos, podremos tener cuadros más precisos sobre la edad de los combatientes, sobre las regiones más conflictivas, sobre qué actividad realizaban estos voluntarios o conscriptos en octubre de 1899, y sobre todo qué sentimiento los llevó a despedazarse unos a otros.

En el momento de iniciarse la guerra, la edad de los combatientes oscilaba entre 14 y 54 años. El 17,5% de los veteranos de la muestra (143 casos) no supieron su edad, mientras que los niños (grupo de 10-14) componían el 2,80%, una proporción similar a la de hombres mayores de 50 años. Es decir que la guerra fue responsabilidad de la población de 15 a 49 años (el 77,0%). Para ser más exactos, fueron los jóvenes de 15 a 29 años quienes cargaron con la responsabilidad de ir a los frentes. Ellos fueron el 53,9% de las gentes movilizadas. Las personas mayores de 30 años (grupo 30-44) apenas constituían el 22,4%. En esta muestra, el 20,3% de los combatientes no alcanzaban los 20 años en el momento de estallar el conflicto. La pirámide de edades nos revela que la guerra involucró a los adolescentes, y en general a la población masculina económicamente activa, e indirectamente a la población dependiente, como la conformada por viejos, mujeres y niños. Hubo participación directa de las mujeres, que fueron incorporadas a los ejércitos como espías, combatientes y auxiliares, en una proporción similar a la de los jóvenes menores de 15 años[66]. Sin embargo, se habla de caravanas de mujeres voluntarias que acompañaban a la tropa en sus desplazamientos[67]. Los testimonios de las mismas veteranas se centran en sus oficios. Manuela Zea, que fue capitán, «proveía a las fuerzas con armas, municiones y vestuarios», y con alimentos «y remedios para los enfermos», tal como lo hizo en Santander de Quilichao. En el combate de Pie de Chinche repartía «municiones y recogía heridos», por lo cual se la ascendió a subteniente. Pero su actividad principal era el espionaje y la comunicación, roles que fueron muy comunes entre las mujeres de la guerra. Estos servicios le valieron posteriormente a Manuela el ascenso a capitán[68]. En la campaña de Cesáreo Pulido por Cundinamarca, los Llanos Orientales y el Tolima, hay referencias sobre la incorporación de mujeres a pesar de ser casi todos los ejércitos liberales, una fuerza errabunda[69]. Sin embargo, en la marcha de Sumapaz a Garzón, las mujeres se volvieron una carga, «pues aun cuando de ordinario son útiles, sucede con frecuencia en nuestros ejércitos de ambos bandos contendores, que dan motivo de desmoralización, enfermedades y riñas en la tropa, y hasta de indecoroso mal ejemplo por parte de muchos jefes, amén de ser causa de frecuentes desastres»[70].

RELATOS DE CAMPAÑA

Si sólo usáramos los relatos que los combatientes hacen de sus hazañas, tendríamos al menos unas 10 mil o 20 mil páginas, y no sabríamos qué hacer con ellas. Pero a más de la originalidad de la descripción, la ingenuidad que ofrecen muchas de ellas, lo escueto de los recuerdos o el exhibicionismo del valor mediante el uso de la retórica, podremos sacar algunas conclusiones que cambian visiones convencionales de la guerra; o al menos nos dejan otra imagen de este desastre de la nación colombiana. Más allá de ser un elogio a la victoria o la constatación de una vinculación a uno de los partidos en contienda, los relatos de los veteranos son pequeñas piezas, memoria de la guerra, con los cuales es posible tejer los escenarios del conflicto, los motivos de la movilización y las actitudes de los combatientes. Son notas

para una gran sinfonía. Y la composición e interpretación les corresponde a los historiadores. Con la pequeña muestra aquí seleccionada, reconstruiremos los ambientes que obligaron al soldado Pablo a esconderse y sabremos por qué muchos jóvenes como él nunca regresaron, una vez fueron envueltos por la piel de la contienda en su macabra destrucción. Será posible entonces comprender la ansiedad y la perturbación de los sentidos de la abuela que miraba el río, escuchaba el rumor de los corrillos, palpaba el aire que cortaban los desmovilizados, olía la sangre de los toros y rumiaba los huesos del fracaso.

LA GEOGRAFÍA DE LA GUERRA

El primer problema explícito en estos relatos es el prejuicio en torno a los escenarios de la guerra. Se ha supuesto que ella tuvo como eje central la región de Santander[71], aunque otros la han extendido a Cundinamarca y Tolima, en donde se volvió una confrontación irregular casi que como resultado de la derrota de Palonegro[72]. Incluso las memorias y estudios sobre la guerra de los Mil Días han buscado destacar la importancia regional del conflicto, dejando de lado la visión nacional de la contienda[73]. La fragmentación regional que muestra la historiografía sobre la guerra, en lugar de mostrar el cuadro global de la matanza y sus implicaciones sociales y económicas, lo que ha hecho es subestimar el modo como las regiones afrontaron los mismos ideales que llevaron a la dirección del Partido Liberal a su fracaso militar en Santander. Si los partidos eran entidades nacionales, es lógico suponer que el Partido Liberal organizó una insurrección nacional. Los testimonios de quienes han escrito memorias y elogios ponen de manifiesto la incapacidad demostrada por héroes fracasados como Uribe Uribe, Vargas Santos, Durán y Benjamín Herrera de organizar un solo ejército contra el ejército del gobierno apoyado por los conservadores. El surgimiento de líderes regionales y su papel en el contexto de la revolución general se ha opacado y se ha desvirtuado. La región sólo adquiere relevancia si en ella actúan los miembros de la Dirección Liberal. Por eso el interés en Santander y Panamá, que contrasta con lo ocurrido en el Magdalena, en la costa o en el sur, en donde los políticos ilustres apenas tuvieron tiempo para huir de sus perseguidores[74]. Es este sentido de exclusión social y política lo que la historiografía no ha valorado para convertir una guerra nacional en un fenómeno regional. Historiografía interesada por los generales más que por los soldados y por las gentes que sufrían la guerra.

De otro lado, la literatura convencional sobre la guerra ha caído en la tentación de describir los movimientos de los ejércitos y las anécdotas de los combates, especialmente los de Bucaramanga, Peralonso y Palonegro que, además, sirven de ejes explicativos al conflicto. Otros autores extienden estas descripciones a ciertos hechos de armas ocurridos en Panamá. Casi todo lo demás se vuelve anónimo, vacuo e intrascendente. Sin embargo, miles de militantes mantuvieron la dignidad de los insurrectos en otras regiones de Colombia. Por ejemplo, mientras múltiples batallones se concentraban en Santander, otros ejércitos más pequeños lo hacían en el Tolima, en Cundinamarca, en el Cauca y en la costa caribe[75]. Así, en un solo día, el 14 de mayo de 1900, mientras en Palonegro se despedazaban compañías enteras de combatientes, dos mil hombres se movían de Güepsa a Suaita, y en su marcha desentablaban el puente del Vado Real[76]. Fuerzas revolucionarias se tomaban Mahates[77],

400 hombres amenazaban Colombia en el Huila[78] y en «La Margarita», entre Purificación y Natagaima acampaban otros 400 combatientes, sin contar los 200 rebeldes que en dirección a la Vega de los Padres habían pasado el día anterior por Venadillo[79]. Los telégrafos no cesaban de enviar sus claves con anuncios de desastres, movimientos y ataques de guerrillas. Así, el general Marcelino Arango escribía desde Manizales a los generales Gómez y Restrepo que «restos revolucionarios del Tolima han sido acosados por todas partes», y agregaba que al saberse la desgraciada suerte de la «guerrilla de Rosas» «lillcn jncnst du auvi; sajcsbocoa usxds eovontiejneie usciene, hn yslillndi llsuo uno»[80]. Con seguridad no era esperanto ni un insulto propio de Charlie Brown, sino un mensaje en clave de los muchos que mascaban los telégrafos. El gobierno vigilaba y castigaba. Y abastecía de vestuarios, víveres y pertrechos a sus hombres. No se limitaba a atender lo que ocurría en Palonegro, sino que movilizaba tropas a un lado y otro del territorio nacional. Despaché 100 reclutas por vapor para reforzar «nuestras fuerzas legítimas en la costa», informó Julián M. Pérez desde Remedios[81], posiblemente como respuesta a la «situación delicada» en la región, pues en Bolívar y en Magdalena abundaban las guerrillas, y para su persecución activa y enérgica «en este último departamento» operaban más de mil hombres contra el titulado general Miranda[82]. Entre tanto, Moisés Gómez, con 80 soldados, se aprestaba a perseguir por la vía de Bituima una partida de 150 hombres que estaban en Amainda[83]. Y los hombres se enrolaban y se alteraban los negocios.

La guerra fue así en cada uno de los 1.130 días. Y lo fue mucho más en aquellos meses en que la política represiva del gobierno de Marroquín, después del golpe de Estado de 31 de julio de 1900, hizo de la guerra sucia una forma de pacificar el país[84]. El impacto de la «represión extrema», como instrumento para ganar la paz, se ha estudiado en Bogotá pero no en otras ciudades ni zonas rurales de Colombia[85]. En general, la guerra de los Mil Días es un campo novedoso para la economía, la política, la sociología y, por supuesto, para la historia misma. Y la información histórica que reposa en el Archivo General de la Nación es un pozo de incalculables reservas. Los solos 26.000 expedientes de combatientes son una muestra parcial de testimonios de un conflicto que también dejó cartas, comunicados, informes y debates[86]. Esto sin pensar en periódicos, escritos literarios, dibujos, mapas y papeles de archivos regionales. La crítica historiográfica tendrá que construirse desde estos testimonios que esconden rostros perdidos de soldados sin regreso.

Más que una imagen centralizada de la guerra, lo que surge de los breves relatos de campaña son cuadros dispersos a lo largo del territorio nacional de una lucha que carecía de unidad de mando. Desde la Guajira hasta Nariño, desde Chocó al Casanare, desde Panamá al Cauca, la sociedad se vio involucrada en políticas de reclutamiento y sobre todo sufrió el impacto económico y social propios de este tipo de confrontaciones armadas. «La crisis monetaria toca o tocó ya en lo increíble» y el alza «de los víveres» es alarmante, sostenían los antioqueños en aquellos mismos días de Palonegro y de agitación en todos los lugares de la República[87].

La apropiación de recursos y ganados y los efectos sicológicos de los asaltos y de la toma de pueblos y ciudades fueron comunes. El 13 de mayo de 1900 el general Federico Tovar telegrafió al ministro de Guerra que «la población de Caldas, inmediata a Piedras, fue

incendiada por el guerrillero Sandalio Delgado, mayordomo y agente de Guillermo Vila, director del Partido Radical del Tolima»[88]. A su vez, los comandantes de Soatá decían que nuestro campamento está «exento de pánico», mientras pedían refuerzos urgentes que evitaran «un desastre de fatales e incalculables consecuencias» para la localidad[89]. En otro lugar Juan B. Pinzón le informaba al ministro de Guerra que las guerrillas inmediatas a la población de Agualarga atacaron anoche «mi campo creyendo yo estaría ahí» y se llevaron «diez cargas de sacos en donde llevaron unas dos cargas de café, se llevaron cien pesos que tenían mis hijos para peones, una montura de su uso, amarraron a unos sirvientes, dejaron encerrados a uno de mis hijos que permanecía atendiendo a los trabajos»[90]. La guerra estaba viva en todos los rincones de Colombia y por eso llegó hasta el terraje de Domingo Pinzón para envolver en su vendaval al soldado Pablo, en estos días de mayo de 1900.

Los relatos de campaña de estos combatientes son exposiciones breves de lo que otros tradujeron en libros. Y casi siempre son un mapa imaginario que reproduce un lugar de origen, el día que se marchó a la guerra, las acciones en que participó y su desvinculación del conflicto. El cuadro 2 sintetiza la procedencia de estos combatientes.

CUADRO 2

PROCEDENCIA DE LOS COMBATIENTES SEGÚN REGIONES EN EL MOMENTO DE ESTALLAR LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS (1899-1902)

Cundinamarca	41	31,10
Santander	21	15,90
Tolima	20	15,20
Cauca-Valle y Nariño	18	13,60
Antioquia	15	11,40
Boyacá	10	7,60
Costa atlántica	5	3,80
Chocó	2	1,50
Total	**132**	**100,00**

La presencia de cundinamarqueses debe estar relacionada con el hecho de haber sido Bogotá el centro administrativo de la Comisión de Escalafón de Antiguos Militares. También a haberse prolongado la guerra en su territorio de una forma intensa durante los tres años. Pero más allá de las inconsistencias propias de una muestra histórica, el cuadro trasluce el signo de la movilización y del entusiasmo por las dos cosas que ataban al país a lo largo y ancho de su territorio: de un lado, los partidos y la política y del otro la Iglesia y la religión. La red poderosa de sentimientos liberales y conservadores se movilizaba para luchar en defensa de uno y otro partido. La imagen de Santander como si fuera un embudo hacia donde confluía el destino del Partido Liberal no parece ser completamente cierta. Y la histo-

riografía que privilegia héroes ilustres se olvidó del silencio de combatientes anónimos que ahora recobran su voz en estos cortos relatos que esconden su miedo en frases de valor.

Los relatos de campaña definen una geografía dispersa del conflicto y revelan las lagunas de la élite por aglutinar el fervor y la acción de múltiples ciudadanos que en pueblos y aldeas iban inventando columnas de lo que creían era la fuerza de la restauración. A las nueve de la mañana y «en el Tren de la Sabana [...] salí de Bogotá con Eustacio Pinzón, primo hermano mío y varios amigos y copartidarios». El tren corrió hasta Madrid, «donde nos desmontamos», para continuar por pueblos y haciendas y en la tarde estar en la hacienda "La Platea» de los Quinteros. Allí se «sacaron unas armas que estaban enterradas [...] nos organizamos militarmente» y se formó el Batallón Primero de Bogotá. Armados regresan a la hacienda «La Pradera», en donde se «dio el grito de rebelión» que comenzó a caminar por Pacho, Ubaté, Simijaca, Chiquinquirá y Santander. Una bocanada de entusiasmo que recibía energías a lo largo del camino mientras las fuerzas del gobierno perseguían y estos revolucionarios improvisados se metían en las goteras de Bucaramanga, en donde pasó «a caballo el general Uribe» y ordenó la retirada a Tona. A Río Negro llegaron desorientados[91]. De la guerra habían aprendido a huir y a combatir forzados por el enemigo. A su vez, de Antioquia salieron refuerzos conservadores que combatieron en Peralonso, se reorganizaron en Málaga, triunfaron en Palonegro y regresaron por Salazar, Arboledas, Cachirí, Matanza y Río Negro para entrar «a Bogotá [...] con el general Pinzón, el 5 de septiembre de 1900». Sabiendo del triunfo y la derrota regresaron estos combatientes a Medellín en la Navidad de 1900[92].

En estos mismos días, otros revolucionarios se habían levantado en Cundinamarca y pasaron por la boca del Totare en número de 300. «Ibáñez pasó por Piedras» con otros 300 «reuniendo 600 y un sinnúmero de guerrilla que se le han agregado», informaba angustiado el general Federico Tovar desde El Espinal a la vez que pedía rifles y municiones para armar mil hombres que tenía «listos en el Sur»[93]. La guerra hería múltiples trincheras en los Andes y en las llanuras de Colombia. Los relatos y los testimonios develan la ausencia de una imagen táctica y estratégica de la Dirección Liberal que nunca actuó sobre el mapa de Colombia, sino sobre la geografía de sus propias vanidades.

LOS CAMINOS DEL DESASTRE

No es extraño entonces que el fracaso fuera un denominador común en las correrías de estos revolucionarios. De Cali un liberal se dirigió a la vereda El Papayal (Palmira) a unirse a las fuerzas de Clodomiro Castillo, y después de 15 días de espera y seis horas de combate con fuerzas del gobierno, la derrota fue «dolorosa» para «las fuerzas liberales» y la dispersión «fue pavorosa»[94]. Las rutas que los combatientes trazan cuando sacan las imágenes del baúl de su memoria, visualizan planos que diseñan los variados caminos de la guerra. Desde el 18 de octubre de 1899 y hasta el fin trágico de sus días, estos revolucionarios estuvieron activos en campañas rápidas y a veces interminables. Juan de la Cruz Varón marchó desde el Líbano con el general Carrera a San Luis, en donde sufrió una aplastante derrota. Este soldado retornó a su aldea del Líbano para incorporarse nuevamente «a las fuerzas que organizaba el general Cristino Parra» y marchar por la vía de San Pedro para atacar

Santana (hoy Falan). Aquí fueron nuevamente derrotados y por tercera vez el soldado retornó al Líbano para abandonar la guerra por razones de enfermedad. Pero recuperada su salud volvió a la contienda incorporándose a las fuerzas del general Misael Arango para ir «a Guaduas a combate». Al tener que retirarse una vez más, marchó hacia Ambalema y luego hacia la hacienda de «Santo Domingo», en donde cayó enfermo[95]. Otros narraron que vivían en Zipaquirá y que de allí habían salido con varios compañeros para enrolarse en una fuerza conocida con quienes combatían a lo largo de la ruta que culminaba en Casanare, después de una derrota[96], cuando se vieron precisados a dispersarse a sus lugares de origen[97]. Hubo quienes se dirigieron hacia Santander y dibujaron un largo recorrido que los llevó a Bucaramanga, Cúcuta, Pamplona, Terán, Palonegro y Ocaña, para terminar en Bogotá[98], o antes de retornar a su hogar caer prisioneros[99]. A los diez días de pelea en Palonegro «caí prisionero, me pasaron a Bucaramanga y luego al Panóptico de Tunja, donde me tuvieron cuatro meses hasta que me pasaportaron y libertaron», recordó un combatiente[100].

Otros dibujaron un mapa por Boyacá y Cundinamarca y terminaron derrotados en San Miguel, al fracasar la llamada campaña del Guavio[101]. Focos de reclutamiento y movilización fueron al Líbano e Ibagué, de donde muchos jóvenes marcharon para unirse a los ejércitos del norte y del centro del Tolima[102]. Pero casi de todos los pueblos de Colombia la gente se movilizó ya fuera para quedarse en la región o para incorporarse a columnas regulares de combatientes que iban a reforzar alguna división que se aprestaba a un gran combate. En algunos pueblos la actividad insurreccional fue notable, como en Viotá, El Carmen[103], Facatativá, Lorica o Caloto. Pero en general casi todos los pueblos se movilizaron para apoyar el ejército restaurador o a los ejércitos del gobierno.

Fue una de estas innumerables rutas que siguió el soldado Pablo cuando salió de Mesitas del Colegio para embarcarse en Girardot. Sólo que apenas tenemos la escritura perdida de sus pasos por los caminos que descendían a ahogarse en el río Magdalena. Entre tanto, en estos días de Palonegro, tres vapores subían por el río, agotado por el intenso verano. El 13 de mayo el general Monsalve esperaba en Girardot la orden del ministro de Guerra para que el vapor *Venezuela*, que iba para Barranquilla, bajara a Honda «antes de que el río se seque». Tal vez los movilizados que acompañaron al soldado Pablo salieron en los buques *Julia* o *General Tovar*, que habían arribado sin novedad en dicho día al puerto de Girardot con su carga de municiones y noticias sobre la presencia de rebeldes en Guataquí y que «a causa de la sequedad del río están los chorros casi innavegables...»[104]. Fue este río abrumado y sediento el que se llevó al soldado Pablo al desastre de Palonegro.

DEL RECLUTAMIENTO FORZOSO A LA MOVILIZACIÓN UTÓPICA

La otra imagen que nos ofrecen los combatientes tiene que ver con la conscripción, y sobre todo con el prejuicio nacido de la retórica política de que las gentes eran arrancadas de sus hogares para ser llevadas a los frentes de batalla. Entre la conscripción y la incorporación voluntaria hay una gama de actitudes que no dejan lugar a dudas sobre el poder ideológico de los partidos. La política era una especie de religión. Las ideas liberales y conservadoras operaban como libro sagrado capaz de condicionar la vida de quienes veían en ellas un

evangelio irrenunciable. Un veterano manifestó en 1938: «Hoy estoy ciego, sin el brazo derecho ni la mano izquierda, con el pecho despedazado, pero si el Partido Liberal me lo exigiera, volvería a darle lo poco que me queda»[105]. Si tal convicción no hubiera existido es indudable que los altos niveles de deserción habrían estado presentes en las múltiples campañas regionales. Como lo manifestó un general del gobierno refiriéndose a los insurrectos de Antioquia, «aquellas gentes se distinguían por su amor a la revolución, y la fidelidad que le guardaban asombraba nuestro ánimo»[106]. Una verdad que no impidió la existencia de quienes ingresaron buscando un beneficio de la guerra: «Viendo yo que no se me ascendía ni se hacía caso de mi servicio resolví retirarme a la vida tranquila al lado de mi familia...»[107]. Esto fue lo que escribió un soldado del Valle del Cauca que combatió a órdenes del general Clodomiro Castillo.

Hubo durante la guerra de los Mil Días al menos seis patrones de movilización de gentes y militantes:

1. Los que se incorporaron voluntariamente a la revolución.
2. Los que se incorporaron a las fuerzas de gobierno.
3. Los que organizaron a sus trabajadores y peones en sus haciendas para convertirlos en combatientes.
4. Los que promovieron guerrillas para apoyar unidades mayores de combate.
5. Los que habiendo actuado como activistas urbanos, desarrollaban antes de la guerra acciones de propaganda, y almacenaban armamento.
6. Quienes actuaron en la clandestinidad apoyando a los combatientes con refugios e información.

Pero también estuvieron aquellos que por temor o por influencia familiar intentaron huir de los frentes de batalla. A medida que la guerra se extendía y surgía el entusiasmo por todas partes, los reclutamientos y las movilizaciones cobijaban a nuevos jóvenes y adolescentes. Lo curioso de las guerras es la pasión y la alegría con que los hombres y las sociedades se preparan para la masacre. Los nazis, los falangistas, los revolucionarios mexicanos, las resistencias europeas, los cruzados, en fin, todos iban cantando, sabían que iban a morir por la gloria de un partido, por un dios, por un santo, por un mesías, por un símbolo, por una causa social o por una nación. Todos se mataban como entre 1899 y 1902 se mataron liberales y conservadores en Colombia por defender el derecho a disentir, a tener representación política y a opinar libremente, y los otros por defender lo establecido, la institucionalidad que se había vuelto excluyente e intolerable. Se mataron también por una pírrica gloria partidista, que mostró toda su vergüenza, impotencia y temor cuando regalaron a Panamá. Liberales y conservadores pelearon por unos intereses económicos personales o colectivos, pero nunca fueron capaces de reconvertir toda esa iconografía política en imágenes y símbolos de defensa y construcción de la nación.

CONCLUSIONES

No sé si formaré parte de la tercera generación que intenta buscar vivo a un soldado de la guerra de los Mil Días. En tal misión, comprendí que el color negro que vestía la abuela a finales de la década de 1940 era el luto de un duelo que la posguerra no se propuso cicatri-

zar. Que la montaña que colonizó en el Tolima era la frontera entre la realidad y el sueño que un día se tragó al soldado Pablo. Que su entusiasmo por las corridas de toros y por los mercados era el encuentro con los duendes de la guerra que flotaban en el rumor de los corrillos y en el temor de los toreros. La batalla vital que la hería estaba entre la luz y las sombras de un rostro perdido en el vacío.

En el terreno del sentido de la historia, esta anécdota familiar podría no tener importancia si ella no se inscribe en un contexto social. ¿Pero acaso la biografía personal o familiar puede verse como una isla en el vacío? Hay ejemplos clásicos en la antropología y en la economía sobre los valores y las relaciones sociales en el seno de una familia o de una empresa. No siempre la historia es el entramado de componentes culturales que involucran a grupos o clases sino que puede ser la absurda o sabia soledad de un individuo que ha perdido la gravedad de su medio. Si tuviéramos muchas experiencias del dolor seco de miles de dolientes posiblemente podríamos mirar las ataduras del recuerdo y cómo se arrastra la impaciencia que un día se erige en ira, protesta y reivindicación, o sencillamente claudica en la nostalgia y la muerte. Si masificáramos la tristeza bordearíamos la crueldad de una cultura que estimula la guerra sin saber de la solidaridad y del duelo. Las inscripciones sobre las tumbas de los griegos nos han dejado un universo que no sólo refleja los sentimientos de una madre, esposa o hermana adolorida, sino la imagen de la muerte, el sentido de la vida, el valor de la política y el amor familiar[108]. Una historia de batallones de muertos no puede ser una simple muestra estadística de reclutados por regiones, unas pirámides de edades, unos cuadros de tiempos de servicio y un número de acciones de guerra; su esencia está más allá de las trincheras, entre los cuartos que cosen historias personales mientras esperan una desmovilización. La guerra está viva entre los que aguardan cien años la ilusión de ver regresar desde el fondo de la historia las cenizas perdidas de seres para quienes solo hubo muy poco tiempo para el amor y el afecto.

Si las guerras se pudieran estudiar no en medio del humo, el estruendo, la refriega y la agonía sino en los hogares en donde queda el vacio, el rezo, la ilusión del retorno y el miedo a la muerte, comprenderíamos mejor la paz. Al seguir con más intensidad los estragos que causa un reclutamiento y los conflictos derivados de estas aventuras macabras de la política se podría entender mejor el sentido de la guerra. Con seguridad que entre los ojos que giran buscando hijos entre las montañas, o que imaginan una tumba, lo que más duele en su mirada es la sangre terrosa de los héroes. ¿Cuántas madres llevarán un luto riguroso en medio de la fiesta del retorno?

En la historia de Colombia, cada familia busca en medio del olvido a un combatiente que ha perdido su sonrisa. El ejercicio de los métodos que da cuenta de la composición social de los combatientes de Palonegro nada valen y de nada sirven si con ellos, no es posible responder a quien pregunta por la vida que quedó después de los estragos de aquella matanza de liberales y conservadores. Los combatientes no pueden quedar flotando en la esperanza de un retorno incierto. Por eso la paz de 1902 dejó todas las heridas abiertas que comenzaron a sangrar con más fuerza después de 1950 y aún no cesa.

La gran importancia de estos expedientes de veteranos que guarda el Archivo General de la Nación es que miden el valor, la ambición, el miedo y la frustración de miles de

combatientes que volvieron y de otros cuyas familias recibieron un recuerdo o la certeza de su muerte. Cuando el general Alvarado cayó con la sien atravesada por una bala, otro combatiente rescató «el anteojo y el sombrero» para «traerlo a su esposa, a la población de San Cayetano, donde ella vivía»[109]. De un tiro de fusil fue herido el general Tulio Varón, y «luego fue herido con armas corto-punzantes [machete] y arrastrado el cadáver por las calles de esta ciudad, hasta la plaza principal, hoy llamada Plaza de Bolívar»[110]. La noticia de este acontecimiento que circuló y se consolidó en la memoria de los ibaguereños fue más directa: el 21 de septiembre de 1901, Tulio Varón fue herido y «ultimado a machetazos por sus adversarios»[111]. Su familia recibió las recompensas morales y luego las económicas del Estado. No ocurrió lo mismo con el soldado Pablo, que se esfumó entre la guerra para abrirle la memoria a una historia familiar cierta y no a la incierta tumba de un soldado desconocido.

NOTAS

1. Archivo General de la Nación (Bogotá), colección Bernardo J. Caicedo, *Papeles del general Próspero Pinzón*, cajas III y IV.

2. Algunas de las obras más importantes sobre la guerra de los Mil Días son las de Charles Bergquist *Café y conflicto en Colombia (1886-1910). La guerra de los Mil Días, sus antecedentes y consecuencias,* Banco de la República-El Áncora Editores, Bogotá, 1999, y Carlos Eduardo Jaramillo, *Los guerrilleros del novecientos,* Fondo Editorial Cerec, Bogotá, 1991. Un relato que ofrece una visión general de la guerra es el libro de Víctor M. Salazar, *Memorias de la guerra (1899-1902),* Editorial ABC, Bogotá, 1943.

3. Henrique Arboleda, *Palonegro,* Imprenta del Departamento, Bucaramanga, 1953, p. 57. Los aires que cruzaron el campamento de los conservadores, iban «cargados de vapores mefíticos, producto de los cadáveres insepultos, en descomposición», mientras que del oriente los vientos levantaban «bocanadas de horror de entre la inmundicie de los restos de los ganados, cueros, cabezas, menudos; de las bestias muertas y de los cadáveres descubiertos por las aguas». Y era apenas el día sexto del combate. Lucas Caballero, *Memoria de la guerra de los Mil Días,* Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá, 1980, p. 48.

4. *Ibid.,* p. 13.

5. A.G.N. (Bogotá), colección Bernardo J. Caicedo, *Papeles del general Próspero Pinzón,* caja IV, legajo IV, documento 29, «Carta al general Casabianca, Palonegro mayo 16 de 1900».

6. A.G.N. (Bogotá), colección Bernardo J. Caicedo, *Papeles del general Próspero Pinzón,* caja IV, legajo IV, documento 25: «Telegrama al general Casabianca, Palonegro, 12 de mayo de 1900».

7. Henrique Arboleda, *op. cit.,* p. 19.

8. Cayo Leonidas Peñuela, *El doctor y general Próspero Pinzón,* Editorial Centro S.A., Bogotá, 1941.

9. A.G.N. (Bogotá), colección Bernardo J. Caicedo, *Papeles del general Próspero Pinzón,* caja IV, legajo IV, documento citado.

10. A.G.N. (Bogotá), colección Bernardo J. Caicedo, *Papeles... cit.*, caja IV, legajo IV, documento 29.

11. Sobre la batalla de Palonegro puede verse Enrique Arboleda C., *Palonegro,* Imprenta del Departamento, Bucaramanga, 1953, y Joaquín Tamayo, *La revolución de 1899,* Biblioteca Banco Popular, Bogotá, 1975.

12. A.G.N. (Bogotá), colección Bernardo J. Caicedo, *Papeles... cit.*, caja IV, legajo IV, documento, 29.

13. Henrique Arboleda, *op. cit.*, p. 56.

14. A.G.N. (Bogotá), colección Bernardo J. Caicedo, *Papeles... cit.*, caja IV, legajo IV, documento 30.

15. A.G.N. (Bogotá), Ministerio de Defensa, *Veteranos guerra de los Mil Días*, caja 722, carpeta 149, «Expediente Zárate Angulo, José Exequías de J.», f.7v.-8r.

16. A.G.N. (Bogotá), Colección Bernardo J. Caicedo, *Papeles... cit.*, caja IV, legajo IV, documento 30.

17. A.G.N. (Bogotá), colección Bernardo J. Caicedo, *Papeles... cit.*, caja IV, legajo IV, documento 31.

18. A.G.N. (Bogotá), Colección Bernardo J. Caicedo, *Papeles... cit.*, caja IV, legajo IV, documento 36.

19. A.G.N. (Bogotá), Colección Bernardo J. Caicedo, *Papeles... cit.*, caja IV, legajo IV, documento 79: «Comunicación al General Casabianca, 30 de mayo de 1900».

20. A.G.N. (Bogotá), Colección Bernardo J. Caicedo, *Papeles... cit.*, caja IV, legajo IV, documentos 57 y 65.

21. Henrique Arboleda, *Palonegro... op. cit.*, p. 64.

22. A.G.N. (Bogotá), colección Bernardo J. Caicedo, *Papeles... cit.*, caja IV, legajo IV, doc. 79: «Bucaramanga, 30 de V de 1900, carta al general Casabianca».

23. A.G.N. (Bogotá), colección Bernardo J. Caicedo, *Papeles... cit.*, caja IV, legajo IV, doc. 57: «Bucaramanga, mayo 29 de 1900, carta a Pedro Jesús Duarte». Véase también documento 65.

24. A.G.N. (Bogotá), Ministerio de Defensa, *Veteranos guerra de los Mil Días,* caja 207, carpeta 197, ff.17, «Expediente Delgado Pompilio», f.15r.

25. Henrique Arboleda, *Palonegro... op. cit.*, p. 65.

26. A.G.N. (Bogotá), colección Bernardo J. Caicedo, *Papeles... cit.*, caja IV, legajo IV, documento, 33.

27. A.G.N. (Bogotá), colección Bernardo J. Caicedo, *Papeles... cit.*, caja IV, legajo IV, documento 40.

28. A.G.N. (Bogotá), colección Bernardo J. Caicedo, *Papeles... cit.*, caja IV, legajo IV, documento 79.

29. A.G.N. (Bogotá), Ministerio de Defensa, *Veteranos guerra de los Mil Días,* caja 683, carpeta 262, ff.14, «Expediente Varona O. Manuel J.», f.10r.

30. Véase, por ejemplo, la comunicación que varias personalidades enviaron al presidente Marroquín en 1902 en Tulio Arbeláez, *Episodios de la guerra de 1899 a 1903. Campañas del general Cesáreo Pulido por su primer ayudante,* Imprenta Nacional, Bogotá 1936, segunda edición, pp. 51-66.

31. A.G.N. (Bogotá), Ministerio de Defensa, *Veteranos guerra de los Mil Días,* caja 683, carpeta 256, ff.16, «Expediente Varón S., Juan Crisóstomo», f.2r.

32. A.G.N. (Bogotá), Ministerio de Defensa, *Veteranos guerra de los Mil Días,* caja 683, carpeta 259, ff.14, «Expediente Varón U., Solón», f.5r.

33. A.G.N. (Bogotá), Ministerio de Defensa, *Veteranos guerra de los Mil Días,* caja 721, carpeta 118, ff.11, «Expediente Zapata, Ángel María», f.1v.

34. Helen Delpar, *Red Against Blue. The Liberal Party in Colombian Politics, 1863-1899,* The University of Alabama Press, Alabama, 1981.

35. Todas las preguntas y afirmaciones sobre el soldado Pablo Pinzón que se citan en este texto han surgido de conversaciones temporales mantenidas con su hermana Consuelo Pinzón, entre el 31 de diciembre de 1998 y el 31 de enero de 2000. La delicada situación de Colombia, en la actualidad, ha impedido que se consulten los archivos parroquiales de Mesitas del Colegio y Garagoa.

36. A.G.N. (Bogotá), colección Bernardo J. Caicedo, *Papeles del general Próspero Pinzón,* caja IV, legajo IV, documento 30: «Telegrama de Próspero Pinzón, 17 de mayo de 1900».

37. Sobre la Violencia en Colombia véase Gonzalo Sánchez y Donny Meertens, *Bandoleros, gamonales y campesinos. El caso de la Violencia en Colombia,* El Áncora Editores, Bogotá 1983; varios, *Once ensayos sobre la Violencia,* Fondo editorial Cerec-Centro Gaitán, Bogotá 1985.

38. Carlos E. Jaramillo, *Los guerrilleros... op. cit.*, pp. 60-79.

39. Charles Bergquist, *Café y conflicto... op. cit.*, pp. 206-240.

40. Henrique Arboleda, *Palonegro... op. cit.*, pp. 20 y 27.

41. Véanse, por ejemplo, las obras citadas de Lucas Caballero, Joaquín Tamayo y Víctor M. Salazar.

42. Carlos E. Jaramillo, *Los guerrilleros... op. cit.*, pp. 80-100.

43. Francisco Leal Buitrago (ed.), *Tras las huellas de la crisis política,* Fescol, Iepri (UN), Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1996; Miguel Eduardo Cárdena (coordinador), *Modernidad y sociedad política en Colombia,* Fescol, Iepri (UN), Ediciones Foro Nacional, Bogotá, 1993.

44. *Álbum de dibujos de Peregrino Rivera Arce. Recuerdos de campaña,* Bucaramanga, 4 de enero de 1900 (presentación de Beatriz González, *Artistas en tiempos de guerra: Peregrino Rivera Arce),* edición facsimilar, Museo Nacional, Bogotá, 1999.

45. A.G.N. (Bogotá), Ministerio de Defensa, *Expedientes veteranos guerra de los Mil Días,* cajas 1 a 730, con 18.988 expedientes. Además está la *Relación alfabética de las hojas de vida y expedientes de los veteranos de la guerra de los Mil Días- anexos»,* carpetas de la A a la Z, y comprende los expedientes que van del 18.989 al 26.032. En total hacen 26.032 expedientes.

46. A.G.N. (Bogotá), Ministerio de Defensa, *Veteranos guerra de los Mil Días,* caja 622, carpeta 620, «Expediente Santos Mantilla, Faustino Apolinar», ff.13v.-14r.

47. Véase, por ejemplo, A.G.N. (Bogotá), Ministerio de Defensa, *Veteranos guerra de los Mil Días,* caja 683, carpeta 252, ff. 13, «Expediente Varón R., Patricio», f. 1r.

48. A.G.N. (Bogotá), Ministerio de Defensa, *Veteranos guerra de los Mil Días,* caja 683, carpeta 247, ff.34, «Expediente Varón M., Ricardo», f. 14r.

49. A.G.N. (Bogotá), Ministerio de Defensa, *Veteranos guerra de los Mil Días,* caja 721, carpeta 121, ff.12 «Expediente Zapata Cándido», f.1v. y 3 r.

50. A.G.N. (Bogotá), Ministerio de Defensa, *Veteranos guerra de los Mil Días,* caja 723, carpeta 167, ff.12, «Expediente Zea, Manuela», f. 2v.

51. A.G.N. (Bogotá), Ministerio de Defensa, *Veteranos guerra de los Mil Días,* caja 721, carpeta 127, ff.22, «Expediente Zapata Ferro, Juan Nepomuceno», f.12r.

52. A.G.N. (Bogotá), Ministerio de Defensa, *Veteranos guerra de los Mil Días,* caja 683, carpeta 247, ff.34, «Expediente Varón M., Ricardo», ff.11r.-14v.

53. A.G.N. (Bogotá), Ministerio de Defensa, *Veteranos guerra de los Mil Días,* caja 683, carpeta 254, folios 21 «Expediente Varón Rubio, Francisco», f. 5v.

54. En general, al pedir la inscripción en «el Nuevo Escalafón de Antiguos Militares» debían acompañar un memorial dirigido a la Comisión del Nuevo Escalafón Militar, tres declaraciones, una certificación sobre la idoneidad de los declarantes, una memoria de campaña, una hoja de vida y un sello en blanco para la actuación, Cf. como ejemplo A.G.N. (Bogotá), Ministerio de Defensa, *Veteranos guerra de los Mil Días,* caja 720, carpeta 100, fs. 7, «Expediente Zamora Trujillo, José María», f. 1r.

55. A.G.N. (Bogotá), Ministerio de Defensa, *Veteranos guerra de los Mil Días,* caja 727, carpeta 6ª, ff.16, «Expediente Arteaga Valencia, Santiago», f. 15r.

56. A.G.N. (Bogotá), Ministerio de Defensa, *Veteranos guerra de los Mil Días,* caja 720, carpeta 105, fs. 11, «Expediente Zamudio, Leonidas», ff. 2r.v.

57. A.G.N. (Bogotá), Ministerio de Defensa, *Veteranos guerra de los Mil Días,* caja 722, carpeta 149, ff.15, «Expediente Zárate Angulo, José Exequías de J.», f. 15r.

58. A.G.N. (Bogotá), Ministerio de Defensa, *Veteranos guerra de los Mil días,* caja 590, carpeta 1.673, ff. 10, «Expediente Rosas, Avelino», f. 10r.

59. A.G.N. (Bogotá), Mindefensa, *Veteranos guerra de los Mil Días,* caja 721, carpeta 116, «Zamudio, Zoila Rosa, vda. de Corredor», f. 17r.

60. A.G.N. (Bogotá) Mindefensa, *Veteranos guerra de los Mil Días,* caja 683, carpeta 250, fs. 31 «Expediente de Varón Perilla, Mardoqueo»., f. 7v.

61. A.G.N. (Bogotá), Mindefensa, *Veteranos guerra de los Mil Días,* caja 683, carpeta 250, fs. 31 «Expediente Varón Perilla, Mardoqueo», f. 4r.

62. A.G.N. (Bogotá), Mindefensa, *Veteranos guerra de los Mil Días,* caja 722, carpeta 147, ff. 37, «Expediente Zarama G., Floresmiro», f. 6r.

63. A.G.N. (Bogotá), Ministerio de Defensa, *Veteranos guerra de los Mil Días,* caja 683, carpeta 255, ff. 24, «Expediente Varón S., Cristóbal», ff. 4r. a 5r. y carpeta 254, ff. 21, «Expediente Varón Rubio, Francisco», ff. 13r. a 15r.

64. A.G.N. (Bogotá), Ministerio de Defensa, *Veteranos guerra de los Mil Días,* caja 590, carpeta 1660, ff.18, «Expediente Roncancio, Luis», f. 13r.

65. A.G.N. (Bogotá), Ministerio de Defensa, *Veteranos guerra de los Mil Días,* caja 727, carpeta 2, ff.57, «Expediente Aldana Gori, Ricardo», f. 46r.

66. Véase la Figura 3.

67. Carlos E. Jaramillo, *Guerrilleros... op. cit.* pp. 60-79.

68. A.G.N. (Bogotá), Ministerio de Defensa, *Veteranos guerra de los Mil Días,* caja 723, carpeta 167, fs.12, «Expediente Zea, Manuela», f. 2r. y v.

69. Tulio Arbeláez, *Episodios de la guerra de 1899 a 1903. Campañas del general Cesáreo Pulido, por su primer ayudante general,* Imprenta Nacional, Bogotá, 1930.

70. Tulio Arbeláez, *op. cit,.* p. 75.

71. Visiones restringidas a la región de Santander las dan Jorge Villegas y José Yunis, *La guerra de los Mil Días,* Carlos Valencia Editores, Bogotá, 1978; Aída Martínez C., *La guerra de*

los Mil Días: Testimonios de sus protagonistas, Planeta Colombiana Editorial, Bogotá, 1999, y Carlos Eduardo Jaramillo C. «La guerra de los Mil Días» en *Gran enciclopedia de Colombia* (tomo 2), Historia, Círculo de Lectores, Bogotá, 1991, pp. 467-482.

72. Quienes han articulado estas tres regiones son C. Bergquist, *Café... op. cit.* y Carlos E. Jaramillo, *Guerrilleros... op. cit.*

73. *La guerra en el Tolima (1899-1903). Apuntes, documentos y relaciones de la campaña recopilados por* El Comercio *de Bogotá,* Imprenta de Vapor, administrador y corredor Belisario Cuervo Ángel, Bogotá, 1904, Tulio Arbeláez, *Episodios...op. cit.*; Benjamín Latorre, *Recuerdos de campaña (1900-1902),* Editorial «San Juan Eudes», Usaquén, 1938.

74. Sobre la guerra en el Tolima y Cundinamarca puede verse Gonzalo París Lozano, *Guerrilleros del Tolima,* Casa Editorial y Talleres Gráficos Arturo Zapata, Manizales, 1937; Tulio Arbeláez, *Episodios...op. cit;* Benjamín Latorre, *Recuerdos de campaña (1900-1902),* Editorial San Juan Eudes, Usaquén, 1938; sobre la costa puede verse Juan Lázaro Robles, *Recuerdos de la guerra de los Mil Días en las provincias de Padilla y Valledupar y en la Guajira,* Tipografía Escofet, Santa Marta, 1946.

75. Juan Lázaro Robles, *Recuerdos de la guerra de los Mil Días en las provincias de Padilla y Valledupar y en la Guajira,* Tipografía Escofet, Santa Marta, 1946; Benjamín Latorre, *Recuerdos de campaña (1900-1902),* Editorial San Juan Eudes, Usaquén, 1938.

76. A.G.N. (Bogotá), Ministerio de Defensa, *Correspondencia Militar guerra de los Mil Días, y órdenes generales,* t. 9, f. 34r.

77. *Ibid.,* t. 40, f. 3r.

78. *Ibid.,* t. 40, f. 30r.

79. *Ibid.,* t. 40, f. 33r.

80. *Ibid.,* t. 40, f. 87r.

81. *Ibid.,* t. 40, f. 98r.

82. *Ibid.,* t. 40, ff. 8r. 9r. y 12r.

83. *Ibid.,* t. 40, f. 131r.

84. El golpe ha querido ser legitimado por el mismo José Manuel Marroquín: «Relación del movimiento del 31 de julio de 1900» en *Escritos históricos,* Biblioteca Banco Popular, Bogotá, 1982, pp. 215-225.

85. Adolfo León Gómez, *Secretos del Panóptico* (Folletines de «Sur América» tomo 1), Imprenta de M. Rivas & C., Bogotá, 1905.

86. Véase, por ejemplo, A.G.N. (Bogotá), Ministerio de Defensa Nacional, *Correspondencia militar, guerra de los Mil Días y órdenes generales (1880-1956)* constituído por 395 tomos.

87. A.G.N. (Bogotá), Ministerio de Defensa, *Correspondencia Militar guerra de los Mil Días y órdenes generales,* T. 40, ff. 63r. y 76r.

88. *Ibid.,* t. 40, ff.165r.

89. *Ibid.,* t. 40, ff. 105r. y 106r.

90. *Ibid.,* t. 40, f. 7r.

91. A.G.N. (Bogotá), Ministerio de Defensa, *Veteranos guerra de los Mil Días,* caja 516, carpeta 970, ff. 27, «Expediente Alfredo A. Pinzón» f. 8r.